CÉSAR A. HERRERA

De Hartmont a Trujillo

ESTUDIO PARA LA HISTORIA DE LA DEUDA PÚBLICA



COLECCIÓN
BIBLIÓFILOS – BANRESERVAS
VOLUMEN VI

De Hartmont a Trujillo

ESTUDIO PARA LA HISTORIA
DE LA DEUDA PÚBLICA

CÉSAR A. HERRERA

De Hartmont a Trujillo

ESTUDIO PARA LA HISTORIA DE LA DEUDA PÚBLICA

BanReservas | SOCIEDAD DOMINICANA DE BIBLIÓFILOS

Santo Domingo, República Dominicana
2009



SOCIEDAD DOMINICANA
DE BIBLIÓFILOS

CONSEJO DIRECTIVO

Mariano Mella, Presidente
Dennis R. Simó Torres, Vicepresidente
Antonio Morel, Tesorero
Juan de la Rosa, Vice Tesorero
Miguel Decamps Jiménez, Secretario
Sócrates Olivo Álvarez, Vice Secretario

VOCALES

Eugenio Pérez Montás • Julio Ortega Tous • Eleanor Grimaldi Silié
Raymundo González • José Alfredo Rizek

Narciso Román, Comisario de Cuentas

ASESORES

Emilio Cordero Michel • Mu-Kien Sang Ben • Edwin Espinal
José Alcántara Almanzar • Andrés L. Mateo • Manuel Mora Serrano
Eduardo Fernández Pichardo • Virtudes Uribe • Amadeo Julián
Guillermo Piña Contreras • María Filomena González
Tomás Fernández W. • Marino Incháustegui

EX-PRESIDENTES

Enrique Apolinar Henríquez +
Gustavo Tavares Espaillat • Frank Moya Pons • Juan Tomás Tavares K.
Bernardo Vega • José Chez Checo • Juan Daniel Balcácer

Jesús R. Navarro Zerpa, Director Ejecutivo



BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Daniel Toribio
Administrador General
Miembro ex oficio

CONSEJO DE DIRECTORES

Lic. Vicente Bengoa Albizu
Secretario de Estado de Hacienda
Presidente ex oficio

Lic. Mícalo E. Bermúdez
Miembro
Vicepresidente

Dra. Andreína Amaro Reyes
Secretaria General

VOCALES

Sr. Luis Manuel Bonetti Mesa
Lic. Domingo Dauhajre Selman
Lic. Luis A. Encarnación Pimentel
Ing. Manuel Enrique Tavárez Mirabal
Lic. Luis Mejía Oviedo
Lic. Mariano Mella

SUPLENTES DE VOCALES

Lic. Danilo Díaz
Lic. Héctor Herrera Cabral
Ing. Ramón de la Rocha Pimentel
Dr. Julio E. Báez Báez
Lic. Estela Fernández de Abreu
Lic. Ada N. Wiscovitch C.

Esta publicación, sin valor comercial,
es un producto cultural de la conjunción de esfuerzos
del Banco de Reservas de la República Dominicana
y la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Inc.

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Orión Mejía
Director General de Comunicaciones y Mercadeo de Banreservas
Coordinador

Luis O. Brea Franco
Gerente de Cultura de Banreservas
Miembro

Juan Salvador Tavárez Delgado
Gerente de Relaciones Públicas de Banreservas
Miembro

Emilio Cordero Michel
Asesor de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos
Miembro

Raymundo González
Asesor de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos
Miembro

María Filomena González
Asesora de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos
Miembro

Jesús Navarro Zerpa
Director Ejecutivo de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos
Secretario

Los editores han decidido respetar los criterios gramaticales utilizados por el autor
en la edición que ha servido de base para la realización de esta publicación.

De Hartmont a Trujillo

ISBN: Tapa dura 978-9945-457-08-7 • Tapa blanda 978-9945-457-07-0
Primera edición: Impresora Dominicana Ciudad Trujillo, República Dominicana -1953-
Segunda edición:
BANRESERVAS-BIBLIÓFILOS, 2009

Coordinadores
Luis O. Brea Franco, por Banreservas; y
Jesús Navarro Zerpa, por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos

Diseño y arte final: Ninón León de Saleme
Corrección de pruebas e índice onomástico: Claudia Hernández de Valle-Arizpe
Impresión: Alfa & Omega
Santo Domingo, República Dominicana
Mayo 2009

Contenido

Presentación 15
DANIEL TORIBIO
Administrador General del Banco de Reservas de la República Dominicana

Exordio 19
MARIANO MELLA
Presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos

Prólogo 21
BERNARDO VEGA

Bibliografía 25

CAPÍTULO I
De la Independencia a los "Seis Años" 27
La ruta tortuosa 27
Administración de Cabral. Gestiones de Libessart. Empréstito Erlanger 30
Cuarta Administración Báez 32
Empréstito Hartmont 33
Empréstito con Jay Cooke & Co. 44
Derrocamiento de Báez 45

CAPÍTULO II
El forcejeo incesante 47
Administración del general González 47
Misión de don Tomás Garrido 48
Heureaux remueve el asunto Hartmont 52
Contratación de Meriño en París 53
Eugenio G. de Marchena, Agente Fiscal 54
El doctor Ramón Emeterio Betances, Agente Fiscal 56
Segunda misión de Marchena 57

Empréstito Wilson 60
El Comptoir D'Escompte, de París 61

CAPÍTULO III
Ulises Heureaux o el descalabro 65
Solución del caso Hartmont. Empréstito Westendorp 65
Primeros incidentes con Westendorp 72
Segundo empréstito con Westendorp 73

CAPÍTULO IV
El apogeo del desastre 81
The Santo Domingo Improvement Co. 81
Una nueva consolidación. Los "French American Reclamation Consols" 90
The San Domingo Finance Co. of N. Y. 91
Comisión de Pedro A. Lluberes. Gestiones Grieser 92
Ley de Conversión de 1897 94
Negociaciones con F. H. Morris 102

CAPÍTULO V
Se remachan las cadenas 105
Período de las Investigaciones 105
Contrato del 18 de abril de 1900 108
Misión de Rafael Abreu Licairac 113
Misión del doctor Henríquez y Carvajal. Contratos de 1901 115
Caída del gobierno de Jimenes. Misión del ministro Powell.
Protocolo del 1903 128
Revolución del 23 de marzo. Revolución de La Unión 130

CAPÍTULO VI
En las garras de Roosevelt 133
Presidencia de Morales Languasco. Laudo Arbitral de 1904 133
La Convención de 1905. Misión Dillingham 137
El *Modus Vivendi* 144

CAPÍTULO VII
Gobierno del general Ramón Cáceres 147
El Plan de Ajuste 147
Convención de 1907 154

CAPÍTULO VIII
De lleno en el caos 167
Muerte del presidente Cáceres. Régimen de los Victoria.
Problemas con el gobierno de los Estados Unidos 167
Empréstito de $1,500,000. Renuncia de Nouel 171
Gobierno provisional de Bordas Valdez. El experto financiero 174
Caída de Bordas Valdez. Presidencia provisional del doctor Báez.
Triunfo de Jimenes 181
Controversia sobre el experto financiero 183

CAPÍTULO IX
Intervención militar norteamericana 191
Caída de Jimenes. Desembarco de fuerzas norteamericanas. El doctor Francisco Henríquez y Carvajal, presidente de la República. Proclama de Knapp 191
La Comisión Dominicana de Reclamaciones de 1917 193
Los empréstitos del gobierno militar 198
Gobierno del contralmirante Robinson. Nuevos empréstitos 199

CAPÍTULO X
La Tercera República 203
Gobierno del general Horacio Vásquez. Nuevos empréstitos 203
La Convención Dominico-Americana de 1924 205
Los empréstitos de 1926 y 1928 206

CAPÍTULO XI
Era de Trujillo 211
La Era de Trujillo. Graves crisis financieras 211
Ley de Emergencia de 1932 213
Reajuste de la deuda externa 215
Tratado Trujillo-Hull 218

CAPÍTULO XII
La solemne reivindicación 231
Cancelación total de la deuda pública 231
Consideraciones finales 237

DOCUMENTOS
Empréstito Erlanger & Co. 245
Tratado de Empréstito Hartmont 248
Tratado Adicional con Hartmont 251
Cancelación del Contrato Hartmont 252
Empréstito con Jay Cooke & Co. 253
Contrato de José Ml. Glass 255
Contrato de Empréstito de Meriño 260
Contrato Adicional de Meriño 262
Instrucciones a Marchena 264
Informe de Eugenio G. de Marchena 267
Informes del Dr. Regidor y Jurado al General Marchena 280
Primer Empréstito con Westendorp 287
Arreglo del caso Hartmont 296
Transferencia de los derechos de Westendorp a la San Domingo Improvement Co. 300
Dictamen de los jurisconsultos sobre transferencia a la Improvement 307
Informe de la Comisión de Hacienda al Congreso sobre transferencia a Improvement 318
Ley aprobatoria de la transferencia de los derechos de Westendorp a la Improvement 319
Primera Ley de Conversión bajo el régimen de la Improvement 323

Contrato Secreto para distribución Empréstito 327
Segunda Emisión Debentures 328
Decreto de emisión de bonos por la suma de £500,000 332
Decreto del Congreso aprobando decreto del Poder Ejecutivo
del 6 de agosto 1897 334
Ley sobre consolidación de la deuda externa y flotante de la República 336
Convenio Adicional entre el Ministro de Hacienda y el Vicepresidente
de la San Domingo Finance Co. 340
Resolución del Poder Ejecutivo sobre firma de Bonos 342
Borrador del Pliego de Reparto de la Conversión de 1897 343
Convenio para la Conversión de los Bonos 344
Contrato del 18 de abril de 1900 entre el Gobierno
y la San Domingo Improvement Co. 345
Contrato celebrado por el Dr. Henríquez como Agente Fiscal,
y la San Domingo Improvement y sus compañías aliadas 352
Convenio celebrado por el Dr. Henríquez como Agente Fiscal
y los acreedores europeos 358
Protocolo de un Convenio entre la República Dominicana
y los Estados Unidos de América 367
Informe de la Comisión de Hacienda del Congreso sobre
el empréstito de $20,000,000 de 1907 370
Convenio definitivo con la San Domingo Improvement y compañías aliadas..... 399

A la memoria de mis padres
Fabio F. Herrera
y Ana María Cabral

Presentación

Es un verdadero honor para el Banco de Reservas de la República Dominicana compartir con la Sociedad Dominicana de Bibliófilos la publicación de la valiosa obra *De Harmont a Trujillo: Estudio para la historia de la deuda pública*, de la autoría del historiador dominicano don César A. Herrera, en la Colección Bibliófilos-Banreservas, con prólogo del economista e historiador Bernardo Vega.

Tal como se resalta en el título el libro es un preciso estudio histórico de la deuda externa dominicana, desde los primeros años de la República hasta el momento en que el gobierno del entonces presidente Trujillo anuncia, el 17 de julio de 1947, la liquidación del remanente de la deuda pública, ascendente a US$9,401,855.55, en un solo pago.

El autor relata en doce concisos capítulos las diversas estaciones del vía crucis financiero de la República, en los que el tratamiento dispensado a la deuda por el gobierno de Trujillo ocupa los dos últimos. Un elemento adicional de gran valor historiográfico de la obra es que incluye en la segunda parte los documentos relativos a la deuda dominicana desde el 1867, cuando se contrata el empréstito Erlanger.

En los últimos dos capítulos se expone la posición del gobierno dominicano que debe enfrentar, desde el 1930 hasta el 1940, una virtual cesación de pagos del país en un clima de crisis financiera internacional y emprender una vía de negociación de un nuevo tratado que

sustituyera los efectos onerosos de las fatídicas convenciones de 1905 y 1907, recogidas y ratificadas en la convención de 1924, dejando al país como un estado soberano muy menoscabado.

En la convención de 1924 se mantiene la existencia de la Receptoría General de Aduanas, a cargo de un funcionario nombrado por el presidente de los Estados Unidos, quien actuaba como protector de los tenedores de los bonos de la deuda dominicana.

Este funcionario financiero, para cumplir con semejante cometido, actuaba como receptor de los ingresos fiscales generados por los impuestos de aduana, los que se destinaban en una alta proporción al pago del servicio de la deuda, y se entregaba al gobierno dominicano un pequeño remanente para cubrir las necesidades administrativas y de inversión.

El nuevo tratado, negociado con las autoridades norteamericanas y con los directivos del Consejo de Protección de los Tenedores de Bonos Extranjeros, Inc., se conoce en la historia con el título de *Tratado Trujillo-Hull*. Fue firmado en Washington, el 24 de septiembre de 1940, por el secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull y Rafael Trujillo Molina, quien actuaba en esa ocasión en calidad de Embajador Extraordinario en Misión Especial.

Como instrumento para viabilizar la operatividad del tratado, se contempla, según el artículo II del comunicado de prensa que anuncia lo acordado, que ambos gobiernos, *designarán un Banco con establecimiento en la República Dominicana, como único depositario de rentas y fondos públicos de cualquier naturaleza del gobierno dominicano*.

Este es el germen del que nace nuestra institución, el Banco de Reservas de la República Dominicana, fundado el 24 de octubre de 1941.

El convenio pone a disposición del gobierno dominicano la administración de las recaudaciones aduaneras, y se definen los términos del cumplimiento de los compromisos del país relacionados con el pago de la deuda y los detalles de su cancelación.

El autor de esta valiosa obra, don César A. Herrera, nace en Baní en 1910. Estudia la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Santo Domingo, y se dedica posteriormente al periodismo, actividad en la que llega a ocupar los cargos de director del diario El Caribe, y editorialista del Listín Diario, a la par que cultiva sus investigaciones en el campo de los estudios históricos.

Fue funcionario del Estado, y ocupó diversos cargos, desde Síndico de Baní a Cónsul General en Sevilla, España; de Director de la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República hasta Director de la Biblioteca Nacional.

Entre los libros e investigaciones de su autoría destacan, además de la obra que hoy editamos, *La Batalla de Las Carreras. Sus antecedentes históricos y consecuencias trascendentales* (primera edición 1949); *Las Finanzas de la República Dominicana* (primera edición 1955); *Poesía de Salomé Ureña en su función social y patriótica*; *La reinstalación de la Universidad Santo Tomás de Aquino*. Después de su muerte acaecida en 1988, se publican *Divulgaciones Históricas*, una antología de artículos periodísticos que él mismo seleccionó, y *Cuadros Históricos Dominicanos*, editado por el Archivo General de la Nación.

César Herrera Cabral fue miembro de diversas academias e institutos de investigación dominicanos y extranjeros.

En mi calidad de Administrador General de Banreservas me complace la publicación de este enjundioso estudio que se encontraba agotado desde hace años, lo que nos permite ofrecer a las jóvenes generaciones un indispensable instrumento para conocer aspectos importantes de la evolución económica de nuestra nación.

Daniel Toribio
Administrador General

Exordio

La Sociedad Dominicana de Bibliófilos se complace en publicar junto con el Banco de Reservas de la República Dominicana, *De Harmont a Trujillo: estudio para la historia de la deuda pública*, del destacado historiador César A. Herrera, obra que en su época fue de carácter sin par en este tipo de tema en la bibliografía dominicana.

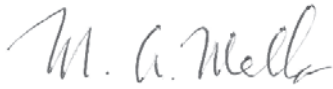
El presente libro es el N° 6 de la Colección Bibliófilos-Banreservas, siendo apenas la segunda edición de esta importantísima publicación, que trata sobre la deuda externa dominicana desde la Independencia en 1844 hasta su repago en 1947. La primera edición se remonta a 1953 en plena era trujillista, por lo que tuvo que esperar 56 años para una nueva edición.

Le expresamos nuestra gratitud al señor Fabio Herrera, hijo del autor, quien amablemente concedió el permiso para la presente reedición que usted disfruta ahora en sus manos, y por ayudarnos con la nota biográfica sobre su padre.

Reconocemos a nuestro amigo, el señor Bernardo Vega, quien fue presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, por la realización del prólogo a esta segunda edición, en la que aporta datos interesantes sobre hechos que no podían ser abiertamente expuestos durante el gobierno del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Por

ejemplo, el doctor Vega dice en el siguiente extracto del prólogo: "Sobre el control de las aduanas por parte de los dominicanos en 1941 y el repago de la deuda externa en 1947 hay un asunto que por razones del carácter dictatorial del momento nunca fue citado durante ese período y fue el hecho de que el gobierno dominicano lo que realmente hizo fue copiar lo que previamente había hecho el de Haití en el manejo del mismo asunto…"

Es nuestro deseo que este libro sea conocido por una nueva generación de personas interesadas en el tema, de manera que le sirva para abundar en un tema que no deja de tener vigencia en nuestro país.



Mariano Mella
Presidente

Prólogo a la segunda edición

Aunque durante la Era de Trujillo se publicaron más de 100 artículos laudatorios sobre el manejo, desde 1931, de la deuda externa dominicana hasta su pago final por parte de Trujillo en 1947, el único libro publicado durante ese período sobre ese tema fue *De Hartmont a Trujillo*, de César A. Herrera Cabral, que vio la luz en 1953.

Don César era, ante todo, un historiador. Ya en 1949 había sacado *Cuadros históricos dominicanos* y el año siguiente *Batalla de Las Carreras. Sus antecedentes históricos y consecuencias trascendentales*. Dos años después del libro en manos del lector, escribiría *Finanzas de la República Dominicana* (dos volúmenes) dentro de la Colección Trujillo editada con motivo de los 25 años de su régimen. En esa obra de 570 páginas resume en 200 la historia de la deuda pública y trata temas adicionales como la historia de la circulación monetaria y de las instituciones bancarias. En 1957 publicó *Cordell Hull. Paladín de la democracia y del panamericanismo*, un folleto de 32 páginas. En cuanto a literatura, en 1951 escribió *Poesía de Salomé Ureña en su función social y patriótica*, otro folleto de 30 páginas.

Siendo funcionario público de la Era, resalta lo poco que escribió halagando al régimen dictatorial.

El lector podrá pensar que *De Hartmont a Trujillo,* de 456 páginas, es otra de esas empalagosas obras típicas de la tiranía, que exalta con elogios excesivos la decisión de Trujillo de pagar en su totalidad la deuda externa del país, comparando ese hecho con las tristemente célebres operaciones fraudulentas de finales del siglo XIX. Herrera Cabral aprovechó el título de la obra para lograr la bendición oficial para su publicación en la editora oficial, pero en realidad tan sólo dedicó 28 de sus 456 páginas a citar lo sucedido con la deuda externa durante la dictadura.

Las primeras 200 páginas narran las vicisitudes financieras del país desde nuestra propia independencia en 1844 hasta la caída del régimen de Horacio Vásquez. Después de las 28 cortas páginas sobre lo acontecido durante la dictadura de Trujillo, siguen 210 de documentos de carácter financiero que apoyan lo descrito previamente sobre el historial de nuestras finanzas hasta 1930. Así vemos cómo Herrera Cabral logró sacar su libro, dedicando apenas un 6% de sus páginas al período de Trujillo.

Sobre el control de las aduanas por parte de los dominicanos en 1941 y el pago de la deuda externa en 1947 hay un asunto que por razones del carácter dictatorial del momento nunca fue citado durante ese período, y fue el hecho de que el gobierno dominicano lo que realmente hizo fue copiar lo que previamente había hecho el de Haití en el manejo del mismo asunto. El control, tanto de las aduanas haitianas como de las dominicanas, estuvo en manos de la Receptoría norteamericana. El gobierno haitiano logró que el Banque Nationale d'Haití, un banco estatal, adquiriese la sucursal del First National City Bank de Puerto Príncipe y luego, a finales de la década de los años treinta, negoció con los norteamericanos para que funcionarios nombrados por el gobierno de Washington operasen desde el Banque Nationale separando allí de las recaudaciones lo necesario para pagar la deuda externa, lo que hacía innecesario que ese cobro se efectuase desde las aduanas mismas.

El Acuerdo Trujillo Hull (Hull-Trujillo, según lo registran los documentos oficiales norteamericanos) logró el mismo propósito un par de años después.

En cuanto al pago de la totalidad de la deuda externa en 1947, resulta ser que la bonanza de la posguerra proveyó suficientes recursos financieros tanto al gobierno de Haití como al dominicano como para pagar de un solo golpe la totalidad de esas deudas. Al asumir Dumarsais Estimé el poder en Haití, a mediados de 1946, surgió un ambiente de libertad de prensa y con varios partidos políticos de izquierda actuando abiertamente, incluyendo el PSP, creándose un movimiento nacionalista que exigía pagar la totalidad de la deuda externa.

Mientras eso ocurría en el otro lado de la isla, en la República Dominicana se había decidido crear El Banco Central, para cuyo propósito se contrataron dos reconocidos técnicos, Henry Wallich y Robert Triffin. Cuando en 1939 se había iniciado la Segunda Guerra Mundial, los únicos países sin sistemas monetarios propios eran Nicaragua, Cuba, Paraguay, Honduras, Haití y República Dominicana. Panamá había adoptado el dólar. Nicaragua estableció su Banco Central en 1941 y en ese mismo año Cuba solicitó y obtuvo una misión técnica de la Reserva Federal Norteamericana con miras a establecer su banco central. Técnicos de esa misma institución ayudaron a crear en 1944 el Banco Central de Paraguay. Consecuentemente, al terminar la Segunda Guerra Mundial, tan sólo Cuba, Honduras, Haití y República Dominicana no contaban con bancos centrales. El de Honduras se crearía en 1945 y el de Cuba en 1949.

Wallich y Triffin recomendaron crear primero el Banco Central y como la emisión de pesos significaría recoger los dólares que circulaban en el país, así como los saldos de los dólares en los bancos, eso permitiría pagar la totalidad de la deuda externa con los dólares que el Banco Central recibiría a cambio de emitir sus

pesos. Sin embargo, Trujillo no quería que los haitianos pagasen su deuda externa antes que los dominicanos, por lo que optó por pagarla con los dólares existentes, a través de un endeudamiento interno y antes de que se crease la moneda nacional.

El 21 de julio de 1947, tanto Haití como República Dominicana pagaron su deuda externa. Por supuesto, nada salió de lo que ocurría en Haití en la prensa dominicana. Trujillo recibió grandes elogios por su acción. Estimé, un presidente democrático, nunca fue considerado como el gran redentor de la economía de su país.

Caída ya la dictadura, César A. Herrera continuó su labor de historiador. En 1975 publicó *Reinstalación de la Universidad de Santo Tomás de Aquino en 1815*. En 1987 reeditó su obra *Finanzas de la República Dominicana*. Dos años después publicaría *Divulgaciones históricas* y en 1995 aparecieron tres libros más: *Junta de procuradores 1518-1545*, *Proceso contra Alvarado de Castro 1532* y *Tratado de límites con franceses 1772*.

Don César murió en 1988. Bien ha hecho la Sociedad Dominicana de Bibliófilos en reeditar esta obra agotada durante muchos años. Que no se engañe el lector con el título. Tiene que ver mucho más con Hartmont que con Trujillo.

Bernardo Vega

Santo Domingo
Mayo 2008

Bibliografía

Abreu Licairac, Rafael. *Opiniones emitidas en el Congreso Nacional, acerca de los contratos celebrados por el Poder Ejecutivo con los acreedores de la Deuda Exterior de la República*. Imprenta "García Hermanos". Santo Domingo, 1901.

Abreu Licairac, Rafael. *La Cuestión Palpitante*. Imprenta "Listín Diario", Santo Domingo, 1906.

Balaguer, Dr. Joaquín. *El Tratado Trujillo-Hull y la liberación Financiera de la República Dominicana*, Bogotá, Colombia, 1941.

Banco Nacional de Santo Domingo. *Information Regarding the 1918 Bond Issue of the Republic of Santo Domingo*.

Brache hijo, Elías. *Rectificaciones hechas por el Ministro de Hacienda y Comercio de la República Dominicana, Lic. Elías Brache hijo, al informe que produjo en la Cámara de Representantes, el Diputado Ignacio Coradín el 16 de febrero de 1902*. Santo Domingo. "Colección de Leyes y Decretos de la República Dominicana".

Franco y Franco, Tulio. *La Situation Internationale de la Republique Dominicaine a partir de 1907*. París, 1923.

García, José Gabriel. *Compendio de la Historia de Santo Domingo*. Santo Domingo, 1894.

Henríquez, Lic. Enrique. *Sutilezas o inexactitudes de don Hipólito Billini* (Amable Razonador). Tipografía Nacional, Santo Domingo, 1901.

Hollander, Jacob H. *Report on the Debt of Santo Domingo*. 1905.

Knight, Melvin M. *Los Americanos en Santo Domingo*, (Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo). Imprenta "Listín Diario", Ciudad Trujillo, 1939.

Marín, Pedro M. *Demostración de la situación Financiera de la República. Su estado actual y su porvenir*. Imprenta "Flor del Ozama", Santo Domingo, 1907.

Mitchell, Frank J. R. *Refutaciones al folleto titulado 'Contrato de Empréstito'*. Imprenta "La Cuna de América", Santo Domingo, 1913.

Mitchell, Frank J. R. *La Verdad del Empréstito*. Imprenta "La Cuna de América", Santo Domingo, 1913.

Mitchell, Frank J. R. *Opiniones Jurídicas sobre el empréstito de $1,500,000*. Imprenta "La Cuna de América", Santo Domingo, 1913.

Mota, Fabio A. *Un Estadista de América", "Editora Montalvo*, Ciudad Trujillo, 1945.

Nanita, Abelardo R. *Trujillo* (5ª Edición). "Impresora Dominicana", Ciudad Trujillo, 1951.
Pérez Licairac, Horacio. *Aspectos de la Liberación Financiera de la República*. Imprenta "Arte y Cine", Ciudad Trujillo, 1946.
Peña Batlle, Manuel A. *Historia de la Deuda Pública Dominicana*. Boletín del Archivo General de la Nación, Ciudad Trujillo.
Pichardo, Bernardo. *Resumen de Historia Patria*. Buenos Aires, 1947.
Rosa, Antonio de la. *Las Finanzas de Santo Domingo y el Control Americano*. Revista General de Derecho Internacional Público, París, 1911-14.
Sánchez y Sánchez, Carlos. *Curso de Derecho Internacional Público Americano*. (Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo), "Editora Montalvo", 1943.
Troncoso de la Concha, Manuel de Jesús. *La Génesis de la Convención Domínico-Americana*. Editorial "El Diario", Santiago, República Dominicana, 1946.
Troncoso Sánchez, Js. Mª. *Notas para la Historia de las Finanzas de la República Dominicana*. Boletín del Archivo General de la Nación, N° 8, 1938.
Tansill, Charles C. *The United States and Santo Domingo, 1798-1873*. Baltimore, U.S., 1938.
Trujillo Molina, Rafael L. *Reajuste de la Deuda Externa*. Editorial "El Diario", Santiago, R.D., 1937. *The Foreing Relation of United States*.

MANUSCRITOS

Colecciones de documentos correspondientes a las secciones de Hacienda y Comercio; Relaciones Exteriores;

Congreso Nacional y Legación Dominicana en Washington, existentes en el Archivo General de la Nación.

CAPÍTULO I

De la Independencia a los "Seis Años"

LA RUTA TORTUOSA

Pocos pueblos de América han atravesado una etapa tan sombría de vicisitudes de todo género, como la República Dominicana, antes de alcanzar un grado de verdadera estabilidad política y social. El desastre tiene en la historia nacional raíces muy profundas y lejanas. Los infortunios que gravitaron tan pesadamente sobre la vida colonial a consecuencia de las agresiones de piratas y filibusteros; lucha permanente con los usurpadores de La Tortuga y de la parte occidental de la isla; devastaciones de 1605 y 1606; despoblación y miseria; y guerrear constante contra los franceses de Saint Domingue, se acentuaron de manera marcada cuando se firmó el Tratado de Basilea entre España y Francia, en 1795, por una de cuyas estipulaciones la Metrópoli cedió su colonia primogénita de América a los franceses. El éxodo de las familias ilustres que daban tono a la vida colonial, fomentadoras de cierto tipo de riquezas sedentarias y de una tradición social y política afincada en el hondón hispánico, creó un vacío tremendo que las clases inferiores no pudieron colmar. La invasión haitiana después del fugaz relámpago que encendió Núñez de Cáceres en el momento más inoperante, vino a poner un manto de sombras tenebrosas sobre una colectividad desmedrada por la miseria, el desamparo, la ignorancia,

y un cúmulo de calamidades que angustian todavía el ánimo de los que bucean en ese fondo desolado. La miseria y el caos no dan jamás los sazonados frutos de la civilización. El bienestar general que es donde se asienta de manera vigorosa el florecimiento de la cultura, junto a los más avanzados tipos de organización política, estuvo ausente del país hasta los últimos años.

Lo que no fue capaz de realizar el francés Louis Ferrand, ni Sánchez Ramírez después, ni los Capitanes Generales de la España Boba, posteriormente, mucho menos realizarían los invasores haitianos para favorecer un resurgimiento total del pueblo dominicano. Por el contrario, su conducta política estuvo orientada a la extinción de todos los valores nacionales.

En 1844 se realiza el milagro de la Independencia. Milagro de la historia, porque en ese momento la desproporción de fuerzas y recursos era abrumadora en contra de nuestra patria. Y al otro día del grito del Conde surgieron amenazadores los problemas económicos que han conmovido la estructura del Estado dominicano durante más de un siglo, los que provocaron males tan profundos, que sólo una extraordinaria revolución nacional ha conseguido que desaparezcan totalmente sus efectos desastrosos. Sin recursos el gobierno; más pobres aún los millares de dominicanos a quienes tocó en suerte vivir los años iniciales de nuestra vida independiente; sin crédito y desconocidos, la guerra contra Haití se libró únicamente con el pecho hirviente de coraje, como una verdadera empresa heroica, sin que hubiera asomos de una organización estatal digna de ese nombre.

¿De dónde se sacaban los recursos necesarios para cubrir los gastos de la guerra y de la incipiente organización burocrática? La mayor fuente de negocios en esos tiempos era el corte y exportación de maderas, y las cosechas de tabaco cibaeño, amén de una menguada producción cafetalera y otros productos de menor importancia. Fue necesario emitir papel moneda con la garantía

del Estado. La primera emisión de ese tipo se autorizó en agosto de 1844, por ciento cincuenta mil pesos, bajo el pretexto de recoger los billetes haitianos. Ese paso inició la ruta del desastre, por el abuso que se hizo del sistema. De ahí en adelante, no fue tan sólo el interés de la patria lo que obligó a repetidas emisiones que se depreciaban inmediatamente, sino el interés de los políticos, que iniciado ya el galope vertiginoso del personalismo, se antepuso a los supremos intereses de la nación.

Simultáneamente con las emisiones de papel moneda, se puso en vigor otro expediente que resultó más lesivo aún: los empréstitos. La primera tentativa de contratar un empréstito internacional se produce el 15 de mayo de 1851, cuando el Congreso Nacional autorizó al presidente Báez, a la sazón desempeñando la primera de sus cinco administraciones, a concertar uno por la suma de dos millones de pesos. Ese plan fracasó.

Sin embargo, los políticos dominicanos no se desalentaban y año tras año continuaban emitiendo cuantiosas cantidades de billetes, de valor fiduciario muy aleatorio, y tratando de colocar jugosos empréstitos en el extranjero. Ningún plan se ponía en marcha para la rehabilitación nacional. Las pasiones políticas de un caudillismo semibárbaro absorbían totalmente las funciones del gobierno.

El año 1857, cuando desempeñaba el general Buenaventura Báez su segundo período de gobierno, fue fecundo en desastres económicos y acontecimientos revolucionarios. El Senado Consultor decretó una emisión de papel moneda por seis millones de pesos, dos de los cuales servirían para retirar los billetes circulantes en estado deplorable. Como consideró el Poder Ejecutivo insuficientes esas cifras, obtuvo del Senado carta blanca para resolver en consecuencia. La consecuencia fue una emisión adicional de catorce millones de pesos en billetes, que causó la ruina de comerciantes y

agricultores en el Cibao, ocupados por ese tiempo en recoger una de las más ricas cosechas de tabaco, y se vieron forzados a cambiar su producto por un papel moneda sin valor.

La reacción contra medida tan antieconómica fue la revolución iniciada en Santiago el 7 de julio de 1857 por comerciantes y políticos, que derrocó a Báez, viniendo Santana nuevamente al poder para el período preanexionista.

El tremendo desbarajuste no tuvo compás de espera ni durante el período de la Anexión a España. Restaurada la soberanía nacional, los elementos civiles que orientaron la guerra, de manera más o menos hábil, fueron arrollados por los capitanes victoriosos. Y hasta Buenaventura Báez, que oteaba en lontananza los acontecimientos, disfrazado de mariscal de campo español, aprovechó el tumulto para ocupar el poder, amparado en su batallador y leal partido. A poco lo derrocó el general José María Cabral, que asumió el mando y fue proclamado Protector de la República. En este gobierno se inician las negociaciones con los Estados Unidos.

ADMINISTRACIÓN DE CABRAL. GESTIONES DE LIBESSART. EMPRÉSTITO ERLANCER & CO. (1867)

Recién instalado en el poder el general José María Cabral, cobraron nuevos bríos los empeños por contratar empréstitos en el exterior. Un grupo singular le ofreció al gobierno desde París un cuantioso préstamo de diez millones de francos. Se trataba del señor Liger de Libessart, Cónsul General de Bolivia en París, quien en unión del duque de Aguaviva, Encargado de Negocios de Mónaco y San Marino ante el gobierno francés, y de los señores Emilio Berlé y Georges de Bolonay, banqueros de París, habían ofrecido con fecha 10 de enero de 1866, al presidente Báez, esa operación crediticia, que reiteraron al nuevo gobierno.

José Gabriel García, Ministro de Relaciones Exteriores, le manifestó a Libessart que debían someter de nuevo sus proposiciones porque

> como no han aparecido las proposiciones originales, que sin duda fueron extraídas de los archivos por el ex-Presidente Báez antes de su salida del territorio de la República, ni han podido recogerse tampoco antecedentes sobre las bases del empréstito, el que suscribe pasa por la pena de no poder manifestar al señor Liger de Libessart la resolución definitiva del gobierno dominicano, ni remitirle tampoco otras bases análogas a las que fueron sometidas a la consideración del Ministerio anterior.[1]

En contestación a esta carta de García, el activo cónsul de Bolivia solicitó con fecha 14 de diciembre, que se designara al duque de Aguaviva Ministro Plenipotenciario de la República Dominicana en Francia y a él, cónsul general.

Desentendido de esas ofertas, el gobierno del general José María Cabral otorgó amplios poderes al señor Jacobo Pereira, en fecha 13 de noviembre de 1866, para gestionar un cuantioso empréstito en Europa –cuatrocientas mil libras esterlinas–, cuyas negociaciones quedaron concluidas definitivamente el 14 de septiembre de 1867 con los señores Emilio Erlanger & Co., banqueros de París, por la suma indicada, o diez millones de francos, de acuerdo con las estipulaciones del decreto del Congreso Nacional, de fecha 5 de abril de 1867, que fijaba esa alternativa. Jacobo Pereira negoció primeramente en Londres, donde fracasó, y después en París, donde Segismundo Rotschild gestionaba también por cuenta del gobierno dominicano. El emisario especial dominicano se mantuvo durante nueve meses en sus desesperadas gestiones. A su retorno al país, su pingüe contrato fue sometido a la consideración del Congreso Nacional, que designó para su estudio una Comisión Especial formada por los señores Telésforo Objío, Epifanio Marques, Juan Bautista Zafra, Ramón Mella y Carlos Nouel. Esta comisión invitó como asesores a los ciudadanos Tomás Bobadilla, Carlos Piet,

[1]Oficio No. 212, Libro 21, Copiador de Oficios de Relaciones Exteriores, pág. 3882. A. G. N.

Luis Durocher y Emiliano Tejera. A sus deliberaciones también fue invitado Jacobo Pereira, para ilustrar con sus informaciones el conocimiento del asunto.

Estos ciudadanos fijaron su criterio en forma elevada mediante un informe minucioso que analizaba todos los términos del contrato y sus consecuencias sobre la desmedrada economía nacional, hasta lograr que fuera rechazado el empréstito por el Congreso Nacional, cuando fue debatido.

CUARTA ADMINISTRACIÓN DE BÁEZ

Cabral fue derrocado por el partido baecista en una revolución corta pero fulminante, con el apoyo del gobierno haitiano de Silvain Salnave, refaccionado por la casa bancaria de J. A. Jesurum & Zoon, de Curacao.

Esta cuarta administración ejecutiva de Buenaventura Báez, conocida también como el período de "los seis años", es sumamente interesante para el historiador. Dos acontecimientos capitales la caracterizan: las negociaciones para anexar la República Dominicana a los Estados Unidos y la contratación del Empréstito Hartmont. Para combatir esta proyectada anexión se libró una guerra épica entre baecistas y los elementos liberales que conducían Cabral y Luperón. Asimismo, un grupo de intelectuales y políticos lanzados voluntariamente al ostracismo, mantuvieron la protesta en pie, llevando el eco de sus voces airadas hasta el seno mismo del Senado norteamericano.

Como Abraham Jesurum era hombre minucioso, tan pronto como quedó instalado el nuevo gobierno de su amigo el general Báez, presentó las cuentas pormenorizadas de los subsidios con que auxilió el movimiento que restauró a Báez en el poder triunfalmente. El baecismo tituló esa revolución que derribó al gobierno de Cabral como "La Regeneradora". La primera cuenta importante

que reconoció bajo esta denominación fue la de la Casa Jesurum, por un total de $37,145.80. Fue reconocida como deuda del Estado dominicano por decreto fechado en 30 de abril de 1868.

Esto fue el principio de nuevos y jugosos negocios. Abraham Jesurum, director de aquella casa bancaria curazoleña con ramificaciones en diversas partes del mundo, sirvió varias veces como cónsul dominicano en aquella isla, y durante esos aciagos "seis años" recibió como honor especial por sus servicios el título de General del Ejército Dominicano. Para utilizar su influencia y habilidad en el manejo de los asuntos financieros, Báez lo comisionó para gestionar un empréstito importante, primero en los Estados Unidos y en Europa después. Jesurum no logró efectuar la ansiada operación, pero sus gestiones realizadas en unión del coronel Adolphe Mendes, enviado especial de Báez en Europa, abrieron el camino por donde debía llegar Edward H. Hartmont para llevar a efecto la más colosal estafa de que ha sido víctima el Estado dominicano.

EMPRÉSTITO HARTMONT (1869)

El Empréstito Hartmont fue el primer grueso eslabón de la cadena de desaciertos que impidieron la evolución normal y progresiva de la República Dominicana. Sus efectos desastrosos se perciben claramente en el transcurso de sesenta años. En interés de aclarar varios puntos, para la mejor interpretación de los fenómenos políticos y financieros de nuestra historia, daremos una ojeada al proceso que nos interesa.

Aun cuando Antonio de la Rosa, en su estudio de las finanzas dominicanas,[2] manifiesta que el gobierno de los Estados Unidos se interesó en la incorporación de esta tierra a su sistema político para

[2]Antonio de la Rosa, "Las Finanzas de Santo Domingo y el control americano". Revista General de Derecho Internacional Público, París, 1911-14.

frustrar los efectos de la negociación Hartmont, el proceso histórico es diferente: De la Rosa dice:

> El Gobierno (el dominicano) ratificó este contrato de empréstito y éste comenzó a ejecutarse. El primer pago fue hecho, pero bien pronto el Gobierno de los Estados Unidos se preocupó. Le parecía que el Artículo 9 del contrato implicaba un cierto ataque a la doctrina de Monroe: porque, si por una causa u otra, el Estado dominicano resultaba insolvente, los tenedores de títulos, súbditos de Su Majestad Británica, podían prevalerse de la hipoteca que les había sido convencionalmente suscrita, y provocar así una toma de posesión parcial o total, temporal o definitiva, del territorio dominicano. De este modo, el señor Babcock, secretario particular del General Grant, Presidente de los Estados Unidos, y los señores Ingalls y Sackets fueron enviados en misión secreta a Santo Domingo. Regresaron con una convención, que permaneció oculta durante algún tiempo, en virtud de la cual la península de Samaná era cedida al Gobierno federal por un período de cien años por la cantidad de 100,000 dólares por año. Para impedir que la célebre doctrina sufriera ningún atentado el gobierno de Washington no dudó entonces en poner en jaque la autonomía de la República.

Pero la maniobra norteamericana tiene antecedentes muy importantes, anteriores a las negociaciones con Hartmont. El 14 de enero de 1866, el secretario de Estado norteamericano, William H. Seward, llegó a Santo Domingo, procedente de Saint Thomas, en visita de cortesía. Gobernaba Báez a la sazón, y uno de sus primeros empeños fue obtener el reconocimiento de su régimen por el gobierno norteamericano. Estas negociaciones no pudieron ultimarse, porque en mayo de ese mismo año Báez fue derrocado, asumiendo la presidencia el general José María Cabral.

Inmediatamente el gobierno norteamericano designó un nuevo Agente Comercial en Santo Domingo (estos agentes ejercían funciones consulares y diplomáticas), escogiendo a J. Somners Smith, quien se apresuró a entrar en contacto con las autoridades del gobierno tan pronto como pisó tierra dominicana. Alentado por

la cordial conducta del nuevo representante de la gran potencia, el gobierno dominicano presentó el 8 de noviembre de 1866, una solicitud por un empréstito de un millón de pesos. Esta instancia fue elevada por el ministro de Relaciones Exteriores, don José Gabriel García, al ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Mr. Seward. En ella le

> suplicaba inquirir de su gobierno, si en atención al estado deplorable a que ha quedado reducida la República con motivo de la lucha desigual que durante dos años sostuvo con la Monarquía Española, estaría dispuesto a proporcionarle un millón de pesos en calidad de empréstito, bajo condiciones justas, equitativas y razonables.[3]

Mr. Seward contestó a García el 6 de diciembre, participándole que sometería al presidente Johnson las proposiciones del gobierno dominicano. El agente comercial Smith fue autorizado a negociar con García.

Para aprovechar esta circunstancia el secretario Seward envió a Santo Domingo a su hijo Frederick W. Seward con instrucciones fechadas el 17 de diciembre de 1866,

> para concluir una convención con la República Dominicana por la cesión y arriendo de territorio de la República a Estados Unidos.[4]

Este emisario llegó a Santo Domingo el 19 de enero de 1867, a bordo del vapor Gettysburg, acompañado del vicealmirante David D. Porter, quien en años anteriores había tenido actuaciones diplomáticas en este país, en su calidad de teniente de marina.

Después de una serie de negociaciones con el gobierno de Cabral, que al principio se mostró renuente a conceder privilegios sobre Samaná, se plantearon las bases para un acuerdo, que se terminaría

[3]Oficio No. 253, Libro 21, Copiador de Relaciones Exteriores. A. G. N.

[4]Charles C. Tansill, "The United States and Santo Domingo, 1798-1873". Baltimore. 1938.

de negociar en Washington, por intermedio de don Pablo Pujol, investido con el carácter de Enviado Especial del presidente Cabral. Esta negociación, sobre la cual han dado diversas interpretaciones los historiadores nacionales, no pudo ultimarse porque el presidente Cabral fue derrocado en 1868, como ya va dicho, por la poderosa revolución del baecismo calificada por ese partido como "La Regeneradora". Báez ascendió a la presidencia de la República por cuarta vez. Regresó al país en marzo de 1868, y en una de sus primeras entrevistas con el agente norteamericano Smith le manifestó, según informó éste a su gobierno, que la Constitución podía ser enmendada para vender a Estados Unidos una porción del territorio dominicano.

Al iniciar Báez su período el 2 de mayo de 1868, uno de sus primeros pasos fue designar al coronel Joseph W. Fabens, aventurero norteamericano, ligado a una serie de negociaciones turbias en Santo Domingo, como Enviado Especial ante el gobierno de Estados Unidos para inquirir a qué altura se encontraban las negociaciones que Pujol había sostenido en Washington por cuenta del gobierno de Cabral, alegando

> que en los archivos oficiales de Santo Domingo no se había hallado ninguna referencia.[5]

Ya el 8 de marzo de ese mismo año, Félix María Del Monte, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, había participado a Smith que

> el Gobierno estaba listo para aceptar las proposiciones hechas por el Hon. F. W. Seward, para la compra de la península y bahía de Samaná.[6]

En julio del mismo año, el agente Smith sostuvo una entrevista con el presidente Báez, en la cual éste le participó que si el gobierno norteamericano le daba

[5]Copiador de oficios de Relaciones Exteriores No. 22 - A. G. N.
[6]Tansill, obra citada.

> "ayuda moral y material" podía tomar posesión de Samaná "mientras el asunto del dinero se tomaría en consideración más tarde". "Pero en caso –agregó– de que el Gobierno americano rehusara alguna asistencia, entonces sería hecha una proposición similar a Inglaterra, Francia o España.[7]

Finalmente, por solicitud del presidente Báez, J. Somners Smith envió a uno de sus hijos a los Estados Unidos, como correo especial en misión secreta, para someter al Departamento de Estado las proposiciones de anexión de la República Dominicana a aquel país. Esto está sucediendo un año antes de firmarse el contrato con Hartmont, como veremos más adelante.

Es muy interesante señalar que el presidente Johnson, en su cuarto mensaje anual al Congreso de los Estados Unidos del 9 de diciembre de 1868, trató no sólo de la anexión de la República Dominicana, sino también de la de Haití, con lo cual se totalizaría la isla bajo el poder de aquella gran nación.[8] El Presidente Salnave gestionaba por su parte, emulando a su socio dominicano, el arrendamiento de una porción del territorio de su patria. El peligro que corrió esta tierra en ese momento histórico fue el más grave confrontado en sus últimos cien años.

El secretario de Estado Seward era el tipo perfecto del imperialista yanqui. Mientras intentaba capturar dos presas en la isla de Santo Domingo daba cima a las negociaciones de compra de Alaska a Rusia, en marzo de 1867, y sometía proposiciones por las Islas Vírgenes a Dinamarca en octubre del mismo año. La heroica resolución de los que combatieron tan encarnizadamente durante seis años al régimen de Báez, frustró tan tenaces empeños por borrar del mapa político de América la nacionalidad dominicana.

[7]Tansill, obra citada.
[8]Véase J. D. Richardson, "Messages and Papers of the Presidents", tomo VI, pág. 689.

Las negociaciones que condujeron a la famosa contrata de empréstito con Edward H. Hartmont, se iniciaron poco después de ponerse en marcha el proyecto de anexión a Estados Unidos.

El 21 de junio de 1868, recién iniciado el cuarto período de Báez, y conjuntamente con las negociaciones secretas que tenían efecto con los Estados Unidos, el Consejo de Secretarios de Estado otorgó poderes al coronel Adolphe Mendes, Encargado de Negocios de la República Dominicana en Francia, para que pudiera negociar en París, Londres u otras ciudades de Europa un empréstito por 420,000 libras esterlinas. En la misma fecha, el secretario de Estado dominicano, don Manuel María Gautier, se dirigió a Mendes recomendándole negociar con Hartmont, y firmar títulos sobre las primeras entregas del empréstito. En este empeño se juntaron Mendes y Jesurum, que desde los Estados Unidos se había trasladado a Europa por recomendaciones de Báez. Uno y otro se afanaron con Edward Hartmont, sin resultados positivos. Mendes, en una comunicación del 1° de octubre de 1868, le informa a Gautier de sus impresiones y le dice francamente

> que no había tardado en adquirir la convicción de que el dicho Hartmont no era otra cosa sino un corredor de negocios.[9]

Hartmont decidió trabajar directamente con los funcionarios dominicanos y salió hacia Santo Domingo, a fines del año 1868. El coronel Mendes, que no deseaba perder tan buena oportunidad de ganar una jugosa comisión, siguió sus negociaciones con otras casas bancarias. Finalmente, concertó un contrato con la casa francesa Werderman & Malhado, garantizado con una concesión para explotar los fosfatos de la isla Alto Velo. El señor Malhado, actuando también por propia iniciativa, se trasladó a Santo Domingo, donde llegó el 5 de enero de 1869, y no es dudoso que se tropezara aquí con el sin rival aventurero de Mr. Hartmont.

[9]Exp. 9, Legajo 9, Sección de Relaciones Exteriores, A. G. N.

La casa Werderman & Malhado intentaba además lograr una concesión para acuñar moneda para circulación en la República Dominicana, por un total de un millón de pesos en monedas de níquel, lo que Manuel María Gautier calificó de *pretensión bien original*.

El histórico e infausto contrato del empréstito fue firmado el 1° de mayo de 1869 por Ricardo Curiel, en su calidad de ministro de Hacienda de la República y por Edward H. Hartmont, en "representación" de la casa Hartmont & Cía., de Londres, bajo cuya firma disfrazaba sus fraudulentas operaciones el activo corredor de negocios. Don Manuel M. Gautier se lo comunicó a Mendes, en París, pocos días después, mediante una comunicación que se inicia así:

> Participo a V. que el Gobierno después de seis meses de luchas y discusiones con el señor Edward Hartmont firmó por último, el día 1° de ese mes, con dicho señor, un Tratado para el empréstito de cuatrocientas veinte mil libras esterlinas. (Véase en apéndice documental).

El contrato contenía 19 artículos. El primero estipulaba la cuantía en cuatrocientas veinte mil libras esterlinas. El artículo 2do. establecía la forma en que el gobierno dominicano debía pagar esa suma. Como sus consignaciones revelan la más absoluta falta de escrúpulos en sus contratantes, lo reproducimos para dar una idea de la gran estafa. Dice:

> Art. 2do. Para interés y amortización de esta deuda, el Gobierno dominicano se obliga a pagar a los contratistas del empréstito una suma de cincuenta y ocho mil novecientas libras esterlinas al año, pagadera por mitad cada seis meses, el 15 de diciembre y junio de cada año, a lo más tarde, por espacio de veinte y cinco años consecutivos. El primero de éstos se efectuará el 15 de junio o de diciembre, siguiente a la emisión del empréstito.

En una palabra, el gobierno se obligaba a reembolsar a los inversionistas un millón cuatrocientas setenta y dos mil quinientas libras (£1,472,500) por £420,000 nominales.

Mediante el artículo 9° del contrato se estipulaba

> el pago regular de las sumas necesarias para el servicio de los intereses y de la amortización, está garantizado por todo el activo del Estado de Santo Domingo, sus aduanas, proventos, y dominios. Por el presente –continúa el tratado–, se acuerda a los portadores de títulos de este empréstito, primera hipoteca sobre los objetos antes dichos, no teniendo el Estado de Santo Domingo ninguna otra deuda contraída.

La soberanía nacional quedaba en poder de los prestamistas. El oneroso proceso de tan turbias negociaciones, a lo largo del tiempo, culminaría en 1916 con una dominación exótica, en nombre de acreedores extranjeros, cuyo origen era el empréstito Hartmont.

Por el artículo 10° se afectaban, como garantía inmediata, las recaudaciones de las aduanas de Santo Domingo y de Puerto Plata, y por el artículo 11 se autorizaba a los prestamistas a designar empleados en ambas aduanas para "contrafirmar" los recibos expedidos por los receptores y

> colectar los derechos hasta la concurrencia de la suma necesaria para el pago de los intereses y de la amortización del empréstito, y enviarlos al consulado británico en la ciudad de Santo Domingo, quien los remitirá mensualmente a Londres.

El artículo 14 era también extraordinario para ampliar las garantías excepcionales ofrecidas al prestamista inglés. Dice así:

> Como garantía suplementaria, el Gobierno dominicano otorga a los empresarios de este empréstito primera hipoteca sobre las minas de carbón y los bosques pertenecientes al Estado en la península de Samaná, al E. del Grande Estero, así como sobre los derechos que ingrese al Tesoro por la explotación del guano o guanitos de la isla de Alto Velo. Estas explotaciones se han concedido a los señores Hartmont & Co. por medio de tratados especiales, y una cláusula de esos tratados dice: que todos los derechos o proventos debidos al gobierno dominicano, en razón de esas explotaciones, se pagarán directamente a los accionistas del empréstito, para que se imputen en pago de los intereses y amortización del empréstito.

La comisión a devengar por los señores Hartmont & Co., quedó fijada por un contrato adicional de la misma fecha en

> una suma de cien mil libras esterlinas, como compensación de sus desembolsos y riesgos, y en calidad de comisión.

Sin pérdida de tiempo, el tenaz aventurero regresó inmediatamente a Londres, amparado, además, con la calidad de cónsul general de la República Dominicana, que le otorgó el presidente Báez para investirlo de una condición oficial que le permitiera un mejor ambiente para el logro de sus proyectos. Antes de salir, el señor Hartmont hizo entrega al gobierno de libranzas contra la casa Smith, Payne & Smith, de Londres, a 60 días, por una suma total de £38,093, que fueron canjeadas con elevados descuentos.

Mientras se desarrollaba este cúmulo de acontecimientos en Santo Domingo, se avanzaban las negociaciones con los Estados Unidos para la anexión, y el coronel Adolphe Mendes, encargado de negocios dominicano en París, sometía a la consideración del gobierno nuevos proyectos de empréstitos, que eran alentados mientras se esperaban las subsiguientes remesas de Hartmont, las que no llegaron en la fecha convenida.

Interesado el presidente Ulises S. Grant en terminar con éxito las negociaciones de anexión de la República Dominicana, comisionó al general Orville E. Babcock, para que se trasladara a Santo Domingo nuevamente con el propósito de concluir el tratado de anexión, que debía firmar, en caso favorable, el señor Raymond H. Perry, nuevo agente comercial de los Estados Unidos, en nombre de su gobierno.

Mr. Babcock llegó en noviembre de 1869 acompañado por los generales Delos B. Sackett y Rufus Ingalls. Tan imponente trío era suficiente para coronar con éxito cualquier misión en esta tierra por aquellos tiempos de desvalimiento nacional. En lo que a Hartmont se refiere, las negociaciones exigían la cancelación del empréstito.

Báez informó que el 31 de diciembre de 1869 era la fecha máxima para que Hartmont entregara la suma restante, y que el gobierno no tenía esperanzas de recibirla.

El 29 de noviembre de 1869 don Manuel María Gautier, en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, y Mr. Raymond H. Perry, Agente Comercial de los Estados Unidos, firmaron como apoderados de sus respectivos gobiernos el tratado de anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos, y un contrato de arrendamiento de la bahía y península de Samaná, como solución alternativa, en caso de que el primero fuera rechazado por el Senado norteamericano.

Mientras tanto, la conducta observada por el gobierno dominicano frente al caso Hartmont fue de una torpeza inaudita, ya que era lógico suponer que este *financista*, amparado en sus convenios legales, estaría flotando su empréstito con la banca inglesa. En febrero de 1870 Hartmont retornó a Santo Domingo, trayendo "ofertas" de próximas "remesas".

Sin preocuparse por las insinuaciones de su cónsul en Londres, Báez le manifestó que el tratado de anexión a Estados Unidos sería ratificado en marzo de ese año, y por lo tanto el tratado de empréstito del 1° de mayo de 1869 sería oportunamente rescindido.

Ante esa perspectiva, Hartmont resolvió aguardar el desarrollo de los acontecimientos. Como hábil y oportunista negociador que era, estableció contactos con Joseph W. Fabens, quien fungía de ministro dominicano en Washington. Al fracasar el primer intento de aprobación del tratado en el Congreso norteamericano, Hartmont se trasladó al Norte para observar de cerca la marcha del problema. Poco después siguió hacia Londres, en donde se concretó a concluir fríamente una vasta estafa, que aniquiló la vida financiera del Estado dominicano durante más de medio siglo, con sus terribles consecuencias para la vida general del país.

Interesado el presidente Báez en limpiar de escollos su ruta, impulsó al Senado dominicano a tomar una medida radical frente al prestamista inglés. Por una resolución del Senado fue cancelado el contrato de empréstito, en 20 de julio de 1870, y todos sus derechos adicionales. Esta histórica reunión del Senado Consultor fue celebrada en la residencia del presidente Báez, en la cual el senador don Javier Angulo Guridi, al motivar su voto, según consta en el acta, dijo:

> que el país debía felicitarse de que dicho contrato no se hubiese llevado a efecto, pues si las graves circunstancias en que se hallaba el gobierno cuando lo estipuló, pudieron hacerlo aceptable entonces, hoy que tenían las cosas muy diferente aspecto, no había necesidad de imponer a la nación las onerosas condiciones de un contrato tan calamitoso.

Mientras Báez y Ulises S. Grant forcejeaban con la oposición que en sus respectivos países se había levantado contra los planes anexionistas de ambos, Hartmont aprovechó la coyuntura para continuar adelante con sus operaciones fraudulentas, ya que actuaba en Londres con una doble calidad: como contratante del empréstito con facultad para traspasar sus derechos y obligaciones a cualquier corporación, y como cónsul general dominicano encargado de todas las negociaciones en representación genuina y legítima del gobierno nacional, lo que le permitía envolver en sus maniobras a varias casas importantes.

Sin el conocimiento del gobierno dominicano, Hartmont autorizó a la casa de Peter, Lawson & Son, de Londres, a emitir el empréstito por una cantidad de £757,700 nominales, a fin de que las deducciones produjeran la suma que aspiraba recibir el gobierno dominicano, en abierta violación de los términos del cancelado contrato del 1º de mayo de 1869, que fijaba el monto de la emisión en £420,000. Esta casa autorizó en fecha 3 de enero de 1870 a Spofford, Tileston & Co., de Nueva York, para ejercer las funciones de agentes recaudadores en las aduanas de Santo

Domingo y Puerto Plata, en cumplimiento del artículo 10 del contrato. Esta gestión no pudo tener efecto, y no desencadenó una investigación en tiempo oportuno por las maniobras realizadas por Hartmont, para mantener el crédito del empréstito y alentar a los inversionistas a comprar nuevos bonos. Hartmont no pudo hallar mejor expediente para ello que atender al servicio de los intereses y amortización, con puntualidad cronométrica. Del producto de la venta de los bonos destinaba la porción necesaria para este servicio. Este sistema lo mantuvo en práctica hasta el primero de julio de 1872, es decir hasta dos años después de haber sido anulado por el Senado dominicano.[10]

El castillo de naipes creado por Hartmont sobre una situación ficticia del crédito dominicano se vino abajo estrepitosamente, cuando el encargado de negocios de la República en Francia, coronel Adolfo Mendes, se trasladó a Londres, y en fecha 30 de septiembre de 1872, anunció al público el fraude que se había estado cometiendo.

El escándalo fue sensacional y sumió a la República en el más absoluto descrédito. La solución de este problema acarrearía al país sufrimientos infinitos años más tarde. Pocos acontecimientos han sido tan funestos para el país como la desdichada operación Hartmont-Báez, de 1869. Más adelante, y en su oportunidad, daremos los pormenores acerca de las negociaciones realizadas para cancelar esta onerosa cuenta.

EMPRÉSTITO CON JAY COOKE & CO., DE NUEVA YORK (1870)

La necesidad urgente de dinero que a diario confrontaba el gobierno de Báez le hacía mantener una búsqueda incesante de

[10]V. "Memorial de la Junta de Poseedores de Bonos Extranjeros", etc. Doc. 4, Legajo 124, Sección de Relaciones Exteriores, A. G. N.

prestamistas dispuestos a facilitarlo, pasando por alto lo oneroso de las condiciones. Combatido tenazmente por Cabral y Luperón en una acción guerrera que puede considerarse por sus resultados como de liberación e independencia nacional, el gobierno de Báez necesitaba arbitrarse recursos para combatir a sus enemigos.

El contrato de arrendamiento de la península y bahía de Samaná, firmado conjuntamente con el tratado de anexión a Estados Unidos, estipulaba una suma anual de $150,000 como beneficio del Estado dominicano. La primera entrega fue recibida en efectivo y armamentos; pero inmediatamente el gobierno de Báez gestionó un empréstito, poniendo en garantía la totalidad de la próxima entrega. Esta negociación se llevó a efecto con Jay Cooke & Co., de Nueva York, y sólo pudo concertarse por la suma de $50,000 al 10% anual, pagaderos semestralmente. El acuerdo se firmó el 26 de julio de 1870 por el coronel Joseph W. Fabens, en su calidad de Agente Fiscal de la República Dominicana.[11]

DERROCAMIENTO DE BÁEZ

Como consecuencia inmediata del gran escándalo producido en todos los centros financieros de Europa al conocerse la atrevida estafa de Hartmont, la República Dominicana fue señalada como símbolo de la bancarrota y quedaron cerradas todas las puertas para negociaciones honestas.

Ante la imposibilidad de conjurar ese desastre el gobierno de Báez desconoció la legalidad de las gestiones de su antiguo cónsul en Londres, amparándose en el decreto de la cancelación del contrato de fecha 20 de julio de 1870. Sin embargo, los ingleses organizaron un "Comité de Tenedores de Bonos de Santo Domingo" para reclamar el pago de las inversiones de sus súbditos. Esas

[11]Exp. 10, Leg. 22, Sección de Relaciones Exteriores, A. G. N.

gestiones marcaron el paso en espera de que se consumara el proyecto de anexión a Estados Unidos, pues la suma consignada en el tratado como precio del crimen político estaba especializada para el pago de la deuda pública. El propio Hartmont estuvo directamente interesado en la anexión y se encontraba en Estados Unidos cuando el Senado la rechazó. Nada menos que el coronel Fabens, aventurero pintoresco y pícaro profesional, que desempeñaba las funciones de ministro dominicano y agente de confianza de Báez en Washington, recibió mil libras de manos de Hartmont en pago de diferentes servicios, según declaró éste al Comité investigador del Parlamento inglés, en 1875.

Al fin, los propios generales del baecismo dieron el golpe de gracia a aquella situación caótica. El general Ignacio María González, gobernador civil y militar de Puerto Plata, inició allí, el 25 de noviembre de 1873, un movimiento armado que culminó con el derrocamiento del caudillo del partido rojo. González asumió el poder, constitucionalmente, el 6 de abril de 1874 y heredó una situación económica espantosa. No sólo el Estado se había empobrecido y desacreditado hasta la última expresión, sino que el comercio estaba arruinado, la agricultura abandonada por los seis años de contiendas fratricidas con reclutamientos forzosos, y la sociedad estaba dividida por la sangre que a torrentes se había derramado por todo el país.

CAPÍTULO II

El forcejeo incesante

ADMINISTRACIÓN DEL GENERAL GONZÁLEZ

Sin pérdidas de tiempo, dictó un decreto en fecha 5 de octubre de 1874, autorizando al ministro de Hacienda y Comercio para contratar en Europa un nuevo empréstito por valor de tres millones de pesos. Las instrucciones dadas por el gobierno al señor J. M. Glass con este propósito, son dignas de conocerse. Dicen así:

Instrucciones dadas al Sr. José Manuel Glass como plenipotenciario de la República, para la contratación de uno o más empréstitos.

Art. 1° El Señor Glass podrá contratar, con una o más Compañías o individuos, uno o más empréstitos hasta concurrencia de *Tres millones de pesos efectivos*, sobre el crédito de la Nación, afectando al pago la parte necesaria para cubrir anualmente la Cuota de intereses y amortización que sea estipulada, sobre las rentas de las Aduanas de la República y muy especialmente la de Puerto Plata; la parte afectada será sobre el valor efectivo que percibe el fisco y será pagada por el Comercio al Agente de los prestamistas.

Art. 2° Podrá estipularse que el empréstito o los empréstitos serán satisfechos a la República en sumas parciales por meses o trimestres: Será muy esencial obtener un primer pago de quinientos mil pesos por lo menos al firmar el contrato. Hecho el primer pago empezarán los prestamistas a cobrar la cuota que se asigne en una o más aduanas.

Art. 3° Si el Señor Glass obtiene un empréstito por lo menos de *un millón efectivo*, pagadero por sumas parciales que no bajen de $50,000 mensuales, u otro análogo, afectando al pago en la Aduana de Puerto Plata la parte necesaria a cubrir los intereses y amortización y siendo

> el máximum de estos 18% durante veinte anualidades, podrá terminarlo definitivamente y sin reserva de ratificación.
> Art. 4° Se concede al Señor Dn José Manuel Glass como indemnización de todo gasto y sin que se incluya en los que son de costumbre en las operaciones de esta naturaleza un cinco por ciento sobre las sumas líquidas de los empréstitos que realice.
> Art. 5° Si el Señor Glass no obtuviese un empréstito de la naturaleza del señalado en el Art. 3° y debiese aceptar combinaciones de otro género sus contratas deberán quedar sujetas a ratificación.
> Dadas en Santo Domingo &a. a los seis días del mes de octubre de mil ochocientos setenta y cuatro.—El Ministro de Justicia &a. Encargado de la Hacda.[12]

Don José Manuel Glass renunció a su poltrona del Ministerio de Hacienda para trasladarse a Europa con el propósito de cristalizar ese proyecto. Contrataba en París cómodamente el cuantioso préstamo con el Banco General de Cambio y Comisión, cuando llegó allí un enviado del Consejo de Tenedores de Bonos Hartmont, enviado desde Londres, amenazando con embargar los fondos del empréstito si antes no se concluía un acuerdo con ese Consejo. Como era natural, todos los proyectos se esfumaron de las manos de Glass, quedándole, como cosa inútil, sólo un contrato por quince millones de francos, firmado *ad-referéndum* en París, el 12 de marzo de 1875, que fue rechazado por el gobierno de González, por oneroso e improductivo. Este contrato se consideró aún más lesivo que el de Hartmont. Don José Manuel Glass regresó al país con las manos vacías, después de luchas tan infructuosas.

MISIÓN DE DON PEDRO TOMÁS GARRIDO

El general González no estaba dispuesto a abandonar sus propósitos de efectuar el ansiado empréstito. Al efecto, preparó un decreto, con carácter secreto, que ordenaba la amortización de los bonos de Hartmont. El carácter secreto de este decreto, fechado el

[12]Libro No. 27, págs. 11-12, Ministerio de Hacienda. A. G. N.

7 de marzo de 1875, era para evitar el alza de los Bonos en la Bolsa de Londres, y el ministro de Hacienda pudiera

con el menor gravamen posible para los intereses de la Nación amortizar los referidos bonos. Este decreto dice así:

Ygnacio María González
Presidente de la República
y por la voluntad de los Pueblos, encargado del Poder Supremo de la Nación.

Considerando: Que según el informe que me ha presentado el Ministro de Relaciones Exteriores, nuestro Comisionado especial en Europa para la contratación del empréstito votado por la Soberana Convención Nacional, ha tropezado con grandes inconvenientes resultivos de la tenaz oposición de los tenedores de los bonos del llamado empréstito Hartmont.

Considerando: Que el Parlamento inglés ha nombrado una Comisión con el objeto de que investigue las causas porque ciertos Estados del Sur-América no pagan los dividendos e intereses de empréstitos contratados en Ynglaterra, y que opiniones autorizadas de Europa y América juzgan que dicha Comisión por su veredicto declarará: que si bien el Estado de Santo Domingo no recibió sino una parte insignificante del empréstito Hartmont, no por eso es menos responsable de los actos de sus Agentes.

Considerando: Que tanto la honra y crédito nacional como la imperiosa necesidad de obtener recursos con que impulsar el progreso del Estado, aconsejan remover este obstáculo, redimiendo los bonos del llamado empréstito Hartmont en la forma más adecuada y que menos sacrificios imponga a la Nación.

Considerando: Que la publicidad de esta resolución sería de grave perjuicio para los intereses públicos, porque alertando a los tenedores de los bonos elevarían sus pretensiones produciendo alza en las cotizaciones de la Bolsa de Londres.

En virtud de las facultades de que me hallo investido, he venido en decretar y

DECRETO:

Art. 1° Queda autorizado el Ministro de Hacienda para que por los medios que crea oportunos y con el menor gravamen posible para los intereses de la Nación, proceda a la amortización de los bonos del llamado empréstito Hartmont.

> Art. 2º Esta amortización no entraña la idea de que el Gobierno Dominicano reconoce la legalidad del llamado empréstito Hartmont.
> Art. 3º Las disposiciones del presente Decreto permanecerán secretas, mientras las negociaciones para la amortización de los bonos no hayan sido ultimadas de todo lo que se dará cuenta oportunamente al Cuerpo Legislativo.
> Art. 4º El presente Decreto será ejecutado a diligencia del Ministro de Hacienda y Comercio, derogando toda Ley, Decreto o disposición que le sea contraria.
> Dado, firmado de mi mano y sellado en Santo Domingo, Capital de la República, a los 7 días del mes de Marzo de 1875, 32º de la Yndependencia y 12º de la Restauración.
>
> (firmado) *Ygnacio M. González.*
>
> Refrendado:
> El Ministro de Hacienda y Comercio, (fdo.) *Francisco X. Amiama.*
> Es copia conforme al original. –El oficial Mayor del Ministerio de Hacienda y Comercio.–
>
> (fdo.) *J. Machado C.*
>
> Aprobado:
> El Ministro Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Comercio.– *Francisco X. Amiama.*[13]

Cuando Pedro Tomás Garrido llegaba a Francia, arribaba a Santo Domingo un nuevo aventurero a caza de fortuna: George O. Glavis, quien se titulaba Agente del Banco Anglo-Austríaco, de Londres, y que le pareció tal vez al presidente González como un enviado del cielo.

Las proposiciones de George O. Glavis eran distintas. Solicitó y obtuvo una concesión para el establecimiento de un Banco Nacional que financiaría el empréstito. Firmó todos los contratos y expidió libranzas a favor del gobierno dominicano contra banqueros de Alemania, por un total de cien mil pesos.

Cuando el enviado Garrido recibió en Francia la noticia de estas negociaciones, junto con las libranzas de Glavis, sufrió el mayor

[13]Doc. 5, Exp. 4, Leg. 27, 1875, Relaciones Exteriores. A. G. N.

chasco de su vida. En una comunicación fechada en París el 30 de agosto de 1875 le dice textualmente al gobierno:

> Los banqueros de París, a la primera noticia del convenio O. Glavis telegrafiaron a todas las principales casas comerciales de Europa, y muy presto se impusieron de que dicho señor era un *Caballero de Industria*.

y que nuestro Gobierno había sido puesto en ridículo

> al entrar en tratos con semejante persona.[14]

No obstante esa cruda información, el gobierno dominicano urgía a su enviado en París negociar un empréstito con cualquier banquero. Garrido contestó en septiembre de 1875, diciendo:

> Respecto a la orden que me trasmite V. E. de gestionar nueva contratación de empréstito, debo, además de lo expuesto en mis últimos despachos, añadir que hoy por hoy sería ridículo tocar a las puertas de los banqueros.[15]

Garrido regresó a Santo Domingo en 1875, tan avergonzado como derrotado.

Simultáneamente con esos acontecimientos tan lamentables, en desmedro del crédito y el buen nombre del país, el Parlamento británico designó un Comité Especial para efectuar una minuciosa investigación en torno a la estafa de Hartmont. Cuando Sir Henry James, Procurador General del Reino, sometió una moción al Parlamento británico solicitando se nombrase una comisión encargada de investigar las negociaciones de diversos empréstitos con países americanos que habían culminado en pérdidas desastrosas para los inversionistas ingleses, incluyó a la República Dominicana entre

[14]Doc. 39, Exp. 4, Legajo 27, Sección de Relaciones Exteriores, año 1875. A. G. N. (Ver, también, en Colección de Leyes y Decretos, Contrate O. Glavis).

[15]Doc. 41, Exp. 4, Leg. 27, Sección de Relaciones Exteriores, año 1875. A. G. N.

los países en bancarrota. La Comisión Parlamentaria realizó sus investigaciones sobre el empréstito Hartmont en abril de 1875 y el veredicto contra la República Dominicana fue completamente desfavorable, por lo que en esos momentos toda gestión de empréstito parecía como inútil. Durante varios años ninguna nueva negociación prosperó.

HEUREAUX REMUEVE EL ASUNTO HARTMONT
INCIDENTES EN EL CONGRESO

A fines del año 1883 el cónsul de Estados Unidos, Mr. Astwood, presentó al presidente Heureaux proposiciones para un empréstito que tomaría a su cargo la casa Thurber, de Nueva York. La ardiente campaña electoral que se preparaba y se llevó al cabo durante esas negociaciones impidió que se cristalizaran. Sin embargo, para allanar el camino en el Congreso y en la opinión pública fue puesto el asunto Hartmont sobre el tapete, por el ministro de Hacienda y Comercio, en la memoria presentada sobre sus actividades correspondientes al año 1883. Al tratar el asunto Hartmont en esa memoria dice así:

> No es dudoso que de parte de los tenedores de los títulos del dicho empréstito haya tendencia a reconocer la justicia que asiste al gobierno de la República y puedan estipularse convenciones para un arreglo definitivo que tenga únicamente por base de acreencia de las £50,000 y que, con tal arreglo, los intereses así de nuestro país como de los tenedores de bonos queden armonizados y abra campo para nuevas operaciones fiscales que vengan en auxilio del crédito público, y que permitan al gobierno dar ensanche al fomento y a las industrias de la nación por medio directo o indirecto.[16]

Los diputados Fidelio Despradel, por la provincia de La Vega, José Eugenio Santelices, por Santiago y José María Recio, por Azua, protestaron de que se trajera al examen del Congreso un tema tan

[16]Gaceta Oficial, No. 511, mayo 17 de 1884.

nefasto. En la sesión del 13 de junio de 1884, fue presentado un proyecto de Resolución cuyo dispositivo decía:

> Artículo Único: Que se participe al Poder Ejecutivo que el Congreso se abstiene por el momento, de resolver determinadamente las cuestiones provenientes del llamado Empréstito Hartmont, dejando a su cuidado la investigación y aclaración de este asunto y la iniciativa o aceptación de convenios que en el círculo de sus atribuciones crea más adecuado celebrar, y más equitativo, justo y provechoso para el Estado, sometiéndolas en su oportunidad al Poder Legislativo para que en uso de las facultades que le acuerda la Constitución, les dé su aprobación o desaprobación.[17]

Despradel, Santelices y Recio protestaron enérgicamente y abandonaron la sala de sesiones, después de un tremendo alboroto que estuvo a punto de culminar en una batalla campal en el mismo recinto de las leyes. Este incidente produjo una gran reacción de protesta contra las negociaciones que iban a iniciarse al amparo de esta Resolución del Congreso. Pocos meses después asumió la presidencia el general Francisco Gregorio Billini.

DECRETO DEL 8 DE OCTUBRE DE 1884 CONTRATACIÓN DE MERIÑO EN PARÍS

En fecha 25 de septiembre, el presidente Billini, recién instalado en el solio presidencial solicitó del Congreso la autorización necesaria para formar en el país una compañía de crédito que suministrara al Estado la suma de ochocientos mil pesos en efectivo ($800,000), reconociéndosele un millón de pesos. Este préstamo sería amortizable en 23 años o antes, devengando interés de 12% anual.

El Congreso dictó un decreto autorizando la creación de la referida compañía, en fecha 8 de octubre. Los ochocientos mil pesos que trataba de percibir el gobierno serían distribuidos en la forma siguiente:

[17]Gaceta Oficial, No. 539, del 20 de septiembre de 1884.

> Quinientos Mil pesos ($500,000) para amortizar las deudas de todas las Compañías de Crédito y demás compromisos que por efectivo se hayan contraído. Doscientos mil pesos ($200,000) que ingresarán en el Tesoro para atender a los gastos públicos, mientras se recauden las rentas que se satisfacen a plazo y para algunos otros de indispensable necesidad en el ramo de fomento, y Cien Mil pesos ($100,000) destinados a la inmigración por familias, ya sea celebrando contratos al efecto, ya estableciendo agencias y formando juntas para ese fin.[18]

El gobierno no pudo obtener en Santo Domingo la suma pretendida. Pero utilizaría un delegado eminente para gestionar en Europa. En 1885 viajaba hacia Roma el insigne sacerdote doctor Fernando Arturo de Meriño, donde sería consagrado como Arzobispo de Santo Domingo. Billini lo invistió con el carácter de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, y con esa calidad contrató un empréstito en París, el 25 de junio de 1885, por la suma de un millón de pesos, con el doctor Henri Joseph Celestin Dinsart, a un tipo de 12% de interés anual. Este interesante contrato se encuentra en el Archivo General de la Nación. Por un contrato adicional firmado el día siguiente se concedía al prestamista una comisión de doscientos mil pesos, de acuerdo con las estipulaciones del Decreto del 8 de octubre de 1884. El texto del contrato firmado por Meriño revela que Mr. Dinsart no era más que un corredor, interesado en negociar con pingües ganancias su contrato a cualquier consorcio financiero. Por eso no dio los resultados apetecidos.

EUGENIO GENEROSO DE MARCHENA, AGENTE FISCAL

Un nuevo enviado especial iba a entrar en escena. Su condición de gran señor y experto en los achaques financieros de su tierra, le abrieron las puertas por donde un día se obtuvo nuevo crédito y dinero que no sirvió tampoco para empresas de utilidad pública,

[18]Gaceta Oficial, No. 533, del 18 de octubre de 1884.

sino para el cómodo disfrute de los políticos de oficio que rodeaban al general Ulises Heureaux, caudillo de turno en el poder.

Eugenio Generoso de Marchena, hábil negociador que pagaría más tarde con su vida el prestigio ganado por su nombre, fue el emisario que logró romper la resistencia de los tenedores de bonos Hartmont, aunque se tomó tres años en ello e hizo concesiones sustanciales a los acreedores ingleses. En 1885 fue enviado con carácter secreto a sondear a los acreedores ingleses. Tuvo la suerte de contratar los servicios de Antonio María Regidor y Jurado, abogado español con su bufete abierto en Londres. De Marchena y Regidor y Jurado firmaron un convenio el 7 de agosto de 1885 que habría de servir de base al segundo para iniciar tenaces esfuerzos con los banqueros británicos, y el Comité de Tenedores de Bonos, para concluir más tarde una transacción de arreglo sobre el zarandeado empréstito de 1869, y remover el poderoso obstáculo en el camino de las nuevas negociaciones que iba a emprender De Marchena hasta concluir en firme una operación de gran importancia.

El 17 de septiembre de 1885 se reunió en Londres el Comité de Tenedores de Bonos Extranjeros, para conocer las proposiciones de De Marchena, sometidas por mediación de su apoderado especial. El agente fiscal dominicano propuso la emisión de nuevos bonos para recoger los de Hartmont, por una suma ascendente a £261,561 y fracciones.[19] Pero el señor Francés Benock, presidente del Comité, propuso una emisión de bonos por £250,000 a diversos tipos de interés, además de otros bonos que representasen el 10% de los cupones vencidos de la deuda Hartmont, con un interés de 2% anual, lo que aumentaba enormemente el monto de la suma que se trataba de reconocer. Rechazadas estas contraofertas por Regidor y Jurado, se celebró nueva reunión el 22 de septiembre de

[19]Doc. 15, Exp. 4, Legajo I, Sección de Hacienda y Comercio. A. G. N.

1885, donde la proposición principal inglesa fue la de canjear bonos antiguos por una nueva emisión, a razón de £50 cada uno de £100, con una escala progresiva de tipos de interés anual.

Estas proposiciones, que no producían nuevos ingresos a los políticos dominicanos, fueron rechazadas.

EL DOCTOR RAMÓN EMETERIO BETANCES, AGENTE FISCAL

El ilustre puertorriqueño, combatiente ardoroso por la independencia de su patria nativa, que a su paso por Santo Domingo había dejado una huella de simpatía por su sapiencia y carácter, fue también utilizado para gestionar un empréstito, considerando el gobierno dominicano que sus relaciones en Francia le permitirían concluir fructuosamente cualquier negociación.

En noviembre de 1885, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano informaba al barón Emmanuel de Almeda, ministro dominicano en París, que el doctor Ramón Emeterio Betances había sido designado como Agente Fiscal de la República para contratar un empréstito de un millón de pesos mexicanos, o sea, cinco millones de francos, de cuya suma se autorizaba al doctor Betances a entregar 200,000 pesos al prestamista como prima del negocio.

Al doctor Betances no le dieron tiempo para madurar sus gestiones, y el 14 de enero de 1886 se nombraba nuevamente a Eugenio Generoso De Marchena, como Agente Fiscal de la República en Europa, con amplias instrucciones. En la comunicación dirigida por el ministro de Hacienda al doctor Betances, relevándolo de sus funciones, le decía:

> Habiendo madurado el gobierno un pensamiento económico que venía elaborando desde su instalación, y no ofreciéndole entera conveniencia la negociación que encomendó a Ud. según resolución e instrucciones del 19 de noviembre ppdo. por ser sumamente limitada y onerosa ha resuelto en esta fecha enviar a Europa al Sr. Eugenio Generoso de Marchena, con el carácter

> de Agente Fiscal de la República, para que ponga en ejecución el pensamiento citado, llenando de ese modo las necesidades y conveniencias del país.[20]

SEGUNDA MISIÓN DE MARCHENA

De Marchena quedó autorizado para gestionar la instalación de un Banco Nacional,

> mejorando las bases del que se había concedido al Sr. Paul Blondot.

Asimismo, se le autorizaba a

> levantar un empréstito que como mínimum no baje de cinco millones de pesos (5,000,000) en su valor nominal o de emisión: pero procurando que la conversión en metálico produzca a lo menos la cantidad de tres millones quinientos mil pesos (3,500,000), o sea el tipo de 70% cuando no fuere posible obtener una colocación más ventajosa para los bonos que se emitan.

Por el artículo 5° de sus "Instrucciones" se le autorizaba al reconocimiento con el Comité de Tenedores de Bonos Hartmont, de las £38,095 que recibió el Tesoro dominicano y sus intereses capitalizados al 12% anual. Sin embargo, el artículo 6° de dichas "Instrucciones" estipulaba categóricamente que

> en ningún caso se aceptará el compromiso de una transacción con los tenedores de bonos de la deuda expresada si no se consigue conjuntamente la constitución del Banco o la realización del empréstito.

La elocuencia de estos números revela cuál era "el pensamiento económico" que había "madurado" en el cerebro de aquellos políticos. Con semejante equipo de pensadores y financistas, el Estado dominicano no podía sino seguir vertiginosamente hacia el más tremendo caos, con su secuela de miseria económica, social y espiritual, de tan rudo impacto en la vida general del país hasta los postreros años.

[20]Copiador de oficios de Hacienda y Comercio, No. 73, pág. 67, A. G. N.

En el informe sobre sus activas negociaciones De Marchena dice:

> Conociendo la imposibilidad de lograr ninguna operación de crédito que pudiese encontrar algún obstáculo en su falta de cotización en la bolsa de Londres, creí inútil perder tiempo en gestiones que lejos de dar provecho habrían puesto más de manifiesto nuestra desacreditada situación económica, y desde luego me fijé en la necesidad de ponerme en relaciones con el Comité de los Tenedores de Bonos de Santo Domingo, y el "Consejo de los Tenedores de Bonos Extranjeros", que son las dos corporaciones que en representación de los acreedores del empréstito Hartmont, se opone a toda negociación o empresa pública que requiera capital europeo para esta antilla haciendo valer para ello la acusación de que estamos en defecto y apoyándose para este fin, en la fuerza que les dan las reglas establecidas por la mencionada Bolsa, o sea por el London General Stock Exchange.[21]

Uno de los pasos preliminares de De Marchena para entrar de lleno en el meollo del asunto, fue tomar a su servicio nuevamente al doctor Antonio María Regidor y Jurado, quien ya conocía el problema financiero dominicano. Abandonando todas las proposiciones de su gestión anterior, De Marchena entregó a su asesor el siguiente plan para que lo sometiera a los ingleses:

1° Cesión de la República a favor de los tenedores de bonos de las £38,095 que se recibieron en 1869, más sus intereses compuestos al 12% anual hasta el 30 de abril de 1866.

2° Amortización de los bonos antiguos emitidos por Mr. Edward H. Hartmont con nuevos bonos que serían emitidos por el gobierno dominicano en la extensión que le permitiera el monto de las dichas £38,095 y sus intereses compuestos, llevando cupones pagaderos cada seis meses a los tipos que siguen: 3% para los primeros dos años; 4% el cuarto y quinto años, y del sexto en adelante 5%.

[21]Informe de De Marchena, anexo O. de la Memoria del Ministro de Hacienda de 1888.

3° Anticipación de £200,000 en clase de préstamos con 6% de interés anual.[22]

Esta proposición dominicana, según De Marchena,

> causó muy mal efecto, dando ella lugar a que el público inglés dudase de la seriedad del Gobierno dominicano y temiese una sorpresa.

El Comité británico, después de ponderar todas estas proposiciones las rechazó, sometiendo a la consideración del Agente Fiscal contraproposiciones que fueron rechazadas a su vez por éste.

Finalmente, la Junta General de Tenedores de Bonos, en sesión celebrada el 22 de marzo de 1886, concluyó con De Marchena un proyecto de tratado ad-referéndum, como solución definitiva, pero fue desestimado por el Consejo de Secretarios de Estado dominicano, en ejercicio del Poder Ejecutivo, el 12 de enero de 1888, alegando, según carta del secretario Gautier, interino de Hacienda, al señor Charles O'Leary, secretario del Consejo de Tenedores de Bonos extranjeros,

> que el convenio mencionado y de que se trata, si llegara a ponerse en ejecución, en vez de aliviar la situación económica de la República, que era el fin que perseguía el Gobierno y persigue, no haría sino agravarla, trayéndole compromisos que no siendo de fácil o posible ejecución por no estar combinados con otras operaciones de crédito inmediato que debieran servir de auxilio para llevarlos, vendrían tales compromisos a hacer irremisiblemente más pesadas las cargas del Estado, inutilizando su crédito y comprometiendo su honra.[23]

La cifra a pagar por los *bonos Hartmont*, en el convenio repudiado, podía alcanzar hasta £357,150.

De Marchena regresó antes de finalizar el año 1886 para volver a la carga poco después con renovados bríos.

[22]De Marchena, Informe citado.
[23]Oficio No. 441, Copiador de oficios de Hacienda y Comercio, 1888. A. G. N.

EMPRÉSTITO WILSON

H. C. Astwood, cónsul de los Estados Unidos en Santo Domingo, conoció bien pronto la psicología de los gobernantes dominicanos de su tiempo y decidió sacar partido de ello, por encima y al margen de sus funciones consulares. Sus primeros empeños fueron los de obtener una concesión para crear un "Banco Nacional", con capital norteamericano, forma singular que utilizaban los aventureros de las finanzas que azotaron esta tierra, para iniciar sus turbias negociaciones.

Meses más tarde, el 8 de junio de 1887, firmaba en Nueva York, en unión de R. R. Boscowitz, ex ministro de Hacienda, y con poderes especiales del gobierno dominicano, un contrato de empréstito con Arthur P. Wilson, de Nueva York, para entregar al gobierno dominicano $1,250,000, por los cuales el gobierno emitiría bonos por tres millones, pagaderos en 21 años.

Esta suma sería dedicada al pago de la deuda nacional y su inversión controlada por los prestamistas.

Una de las estipulaciones de ese contrato decía:

> Todos los derechos de importación y exportación y todos los impuestos y todos los derechos de tonelaje (excepto los derechos de tonelaje para Santo Domingo), serán dados en fianza por el gobierno dominicano para asegurar el pago del capital y de los intereses de dicha obligación.

Además, como gracia especial se le concedía a Arthur P. Wilson el derecho de fundar un banco en Santo Domingo, de manera exclusiva, por 50 años. El banco podría emitir billetes de curso obligatorio por una suma igual a su capital.

Este contrato fue rechazado por el gobierno dominicano, aun cuando Wilson envió a Santo Domingo a Mr. W. F. Spragné, como su delegado especial, interesado como estaba en asegurar su negociación.

Resultaron infructuosas todas las actividades de este emisario, unidas a las gestiones de Mr. Astwood, después de una serie de

secretos incidentes, que constituyen uno de los episodios más pintorescos de la historia de la deuda pública dominicana.

EL COMPTOIR D'ESCOMPTE, DE PARÍS

En la ininterrumpida marcha de tantas negociaciones frustradas, nuevos prestamistas potenciales aparecían para que se reanudaran las gestiones crediticias. El Comptoir D'Escompte, de París, iba a ser objeto del asedio de los corredores de empréstitos.

Mauricio Raschowitz, activo tratante financiero, inició negociaciones con esta casa bancaria para conseguir dinero a la República. Como era natural, el gobierno dominicano le otorgó poderes para negociar en la esperanza de que sus gestiones redundaran en algo positivo. Sin embargo, la presencia del Comité de Tenedores de Bonos de Santo Domingo se cernía amenazante sobre toda empresa de esta índole. Sus advertencias de embargar cualquier suma negociada, si antes no se llegaba a un acuerdo con ellos respecto a la deuda Hartmont, paralizaba de inmediato toda operación, por ventajosa que fuera para los nuevos prestamistas.

Ante las perspectivas de que pudieran fracasar las negociaciones iniciadas por Raschowitz por falta de una autoridad nacional competente en Europa, urgió al gobierno a enviar entonces a París a su ministro de Hacienda, señor Julio Julia Julia. Este nuevo negociador salió en octubre de 1887 con instrucciones de que a su paso por Estados Unidos intentase, porque nada en ello se perdía, alentar a los inversionistas norteamericanos, y de manera especial a Mr. Arthur P. Wilson.

Es interesante ver que pocos días más tarde, el 6 de noviembre de 1887, Eugenio Generoso De Marchena, el más experto de los negociadores dominicanos de su tiempo, seguía, rumbo a Europa, los pasos del ministro de Hacienda.

Mientras ambos navegaban en pos del vellocino, viajaba hacia Santo Domingo un delegado del Comptoir D'Escompte, para activar y ultimar todas las negociaciones emprendidas por Raschowitz. Este

emisario, nombrado Mr. Lob Levyt, no tuvo que perder mucho tiempo para convencer a sus clientes de la bondad de las proposiciones de su casa, y el 3 de enero de 1888 firmaba de manera secreta, en Santo Domingo, los preliminares de la jugosa negociación.

Al día siguiente, el ministro Gautier, encargado de la cartera de Hacienda, trasmitió instrucciones a Julia y a De Marchena, para que como agentes fiscales de la República en París, ultimaran estas negociaciones con el Comptoir D'Escompte.

Para amparar de legalidad de todos estos arreglos, que se venían ejecutando secretamente, sin conocimiento del pueblo, el Congreso Nacional dictó un decreto el 27 de marzo de 1888, autorizando al Poder Ejecutivo a negociar un empréstito por 15,000,000 de francos o 3,000,000 de pesos mexicanos. Este decreto se hizo del dominio público en la Gaceta Oficial N° 730 del 18 de agosto de 1888, cuando ya habían culminado exitosamente todas estas gestiones, aunque con otros prestamistas.

Todos los esfuerzos de los delegados dominicanos, especialmente de De Marchena, para concretar con el Comptoir la proyectada operación, se vinieron abajo, cuando más seguros creían su resultado.

En esta baraúnda lamentable de acontecimientos, aparece en escena otro caballero interesado en la suerte de las finanzas dominicanas. Se trataba del barón Enmanuel de Almeda, ministro de la República Dominicana en Francia, que intervenía en ese preciso momento para intentar tomar en sus manos el hilo de los negocios que manejaba De Marchena. El barón de Almeda, en su período de servicios diplomáticos a la República Dominicana, llegó a adquirir tal autoridad, que muchas veces regañó al gobierno por tomar decisiones relativas a nombramientos diplomáticos en Europa sin haberle consultado.[24]

[24]Herrera, César A. *Cuadros históricos dominicanos*, 1949.

El presidente Heureaux, acuciado por Almeda, resolvió cancelar los poderes otorgados a De Marchena, y concedérselos a Isidoro Mendel, Presidente de la Cámara de Comercio, y del Banco Comercial de Santo Domingo, quien se encontraba en París gestionando por su cuenta la adquisición de dinero y la creación de uno de los entonces llamados "Bancos Nacionales". Las denominaciones que ostentaba Isidoro Mendel, disfrazaban una serie de negociaciones turbias con el gobierno pero le daba un carácter de personaje importante en un campo financiero inexistente.

Pero como Eugenio Generoso de Marchena era tenaz, solicitó nuevos poderes, y Ulises Heureaux se los extendió, concediéndole únicamente cuatro días de plazo, después de la fecha en que los recibiera, para cristalizar las operaciones que había indicado tenía listas para concluir. Simultáneamente se le comunicó esta resolución al barón de Almeda, para que transcurridos los cuatro días fatales, dejara como negociador único al señor Isidoro Mendel, cancelando en firme los poderes de Marchena.[25]

Gratísima sorpresa sería para el presidente Heureaux y sus consocios, recibir de Marchena información cablegráfica de haber firmado en Bruselas un contrato definitivo, que certificaba en otro cable el ministro dominicano en aquel país, Mr. León Debat.

Inmediatamente, para evitar confusiones, Heureaux cablegrafió al barón de Almeda, quien intentaba suspender a Marchena, diciéndole:

> Concedida prórroga Marchena hasta el 21. Aténgase instrucciones despacho 16 de junio, nada con Comptoir. Garantizado nuevo contrato Marchena, según aviso de él, quedan sus poderes únicos vigentes, *Heureaux*.[26]

[25]V. Libro 33 de los copiadores de oficios de Rel. Ext, A. G. N.
[26]Libro 33 de los copiadores de oficios de Rel. Ext. Pág. 485. A. G. N.

CAPÍTULO III

Ulises Heureaux o el descalabro

SOLUCIÓN DEL CASO HARTMONT
EMPRÉSTITO WESTENDORP

Este éxito de Eugenio Generoso de Marchena, que obligó al presidente Heureaux a decir "nada con Comptoir", merece un examen más detallado, para el conocimiento general de este problema histórico.

Westendorp iba a remachar la cadena que se inició en 1869 con la negociación Hartmont, liquidando de manera onerosa esta deuda infame por uno de los numerosos tratados colaterales que constituyen el acervo de documentos del Empréstito Westendorp.

Sin duda alguna, quien penetra con ánimo sereno en el fondo sombrío de las negociaciones financieras dominicanas en el siglo XIX, se abisma al contemplar tanta imprevisión unas veces, y otras, la absoluta falta de honradez que caracteriza tan turbias maniobras. La operación con Westendorp fue de consecuencias incalculables, porque la República no pudo desligarse de sus ataduras hasta el 1947, cuando el presidente Trujillo, en una acción sin precedentes, canceló la deuda cuyos orígenes se remontaban al tenebroso período que estudiamos.

Ulises Heureaux en el mensaje especial presentado al Congreso Nacional de octubre de 1888, dando cuenta de todas estas negociaciones dice:

El 14 de junio fueron por fin firmados los preliminares de la negociación con el Conde Tadeo de Okzsa, ya conocido de antemano en nuestro país, pues como lo sabéis, ha sido el principal empresario de nuestras líneas telegráficas y del establecimiento del cable submarino. El Conde de Okzsa, como se lo permitía el contrato preliminar, lo traspasó a los señores Westendorp & Co., banqueros de Amsterdam que se sustituyeron el contrato primitivo.

Después de una serie de contratos que se imponían por las circunstancias del momento y también para mejorar y darle facilidades de ejecución a la operación principal, todos los cuales forman un expediente que se os acompaña con la relación necesaria y las explicaciones correspondientes del ciudadano Ministro de Hacienda, vino a redondearse la operación o a sintetizarse de la manera siguiente:

El gobierno dominicano emite un empréstito por £770,000 nominales con interés de 6% anual, redimible, capital e intereses, en el curso de treinta años, con una anualidad de £55,645, o sean más o menos, 350,000 mexicanos, que representan menos del 24% de las rentas aduaneras de la República.

La emisión ha sido ofrecida al público al 83%, pero fue convenida con los señores Westendorp & Co. a 78% acordándole a estos banqueros el 3% a fin de que quedara en 75%, siendo de cuenta de ellos todos los gastos de emisión.

Es entendido que la comisión no ha sido estipulada sino sobre las £475,480 ofrecidas al público, habiéndose rebajado antes £294,520 que el gobierno se reservó, a saber:

£123,660 que representan 6,183 obligaciones de £20 cada una, destinadas a cubrir parte de la deuda interior.

£142,860 que representan 7,143 obligaciones de £20 cada una, para cubrir a los tenedores de bonos de Inglaterra el 20% de los bonos de 1869.

£28,000 que representan 280 obligaciones de £100 cada una, para el pago de un parte de la comisión convenida con el Conde Okzsa".

Y continúa más adelante el mensaje del Presidente Heureaux, al referirse a Hartmont, diciendo: "En cuanto a la deuda Hartmont, era tiempo ya de quitar a la nación ese estorbo para su vida económica, ese borrón que sin culpa suya, es verdad, caía sobre su crédito y que le tenía ligadas las manos. Mi opinión a este respecto es demasiado conocida. Tiempo hacía que yo venía considerando este asunto bajo un punto distinto del vulgo, cualquiera que sea el móvil se haya atribuido a mis propósitos honrados y al empeño por el crédito del país.

Cualesquiera que hayan sido las apreciaciones que se hayan hecho sobre la deuda mencionada, y acaso yo mismo haya podido equivocarme alguna vez, es la verdad que la República recibió la cantidad de 38,095 libras esterlinas, por las cuales reconoció 50,000 libras que se comprometió a pagar con un 10% anual de intereses en caso de no verificarse el empréstito, con otros proventos de la nación.

Ese fue el compromiso de un Gobierno legítimo que desconoció después el empréstito de 1869, cuando no se cumplieron las demás condiciones al tiempo determinado; desconocimiento que no podía borrar, ni de hecho, ni de derecho, el compromiso de su previsión.

Si los acreedores de Londres, esto es, los tenedores de bonos de 1869, en vez de querer afirmar la validez del empréstito, se hubieran presentado reclamando las £50,000, con sus intereses, no creo que ningún Gobierno serio, que estime la honra de su país, se habría atrevido a negar la deuda; y entonces esa acreencia y su reclamación hubieran tenido, sin duda, una protección internacional que no tuvo el empréstito, porque siempre se consideró que la República había estado en su derecho rechazándolo; y con honradez, nunca desconoció lo que realmente debía.

El tiempo y las circunstancias de nuestro desenvolvimiento progresista ha venido por fin a poner término a un asunto tan enojoso, en el cual, examinando con imparcialidad y espíritu de acierto, se ha de ver que la República ha salido airosa; airosa por su honra del pasado, airosa por los beneficios que afirmando tal honra le deja para el porvenir.

Cuando los tenedores de bonos de Londres abandonando el reclamo del reconocimiento del empréstito que sin acumular intereses han reducido al 20% se hubieran ceñido a exigir el pago de las £50,000 reconocidas desde 1869 al 10% de interés anual, y *hubieran establecido su cuenta capitalizando intereses anualmente durante 19 años, habrían podido llevar su cuenta al guarismo* de £305,800, de modo que entregándoles hoy por saldo de cuenta en obligaciones a la par del nuevo empréstito que se han emitido a 78% y ofrecidas al público a 83½%%, la cantidad de £142,860, rebajada la diferencia del tipo de emisión, no vendría a representar ni el 40% de lo que en buena regla se les adeudaba; pudiendo afirmarse como una verdad evidente que la deuda real, esto es, la deuda incuestionable, las £50,000 con 19 años de intereses al 10% anual del empréstito de 1869, se ha arreglado con menos del 40%.

Me he detenido adrede en la exposición de estos guarismos, porque creo necesario que el país vea, y vosotros como sus Representantes,

> hasta dónde ha sido la pulcritud del Gobierno en esta operación, y porque he juzgado preciso traer el asunto a vuestra vista y presentarlo bajo todas sus fases, pues así lo exige a mandatarios fieles, si ya no fuere el deber, el reconocimiento a la confianza de su mandante.
> El otro apartado de £28,000 en obligaciones de a £100 fue un medio para facilitar el pago a cuenta de la comisión convenida con el Conde Tadeo de Okzsa, como tendréis ocasión de examinarlo en el expediente.
> Las £475,480 ofrecidas al público y convenidas con los señores Westendorp & Co., a 75% producen £356,610, de las cuales se recibieron al firmar el contrato £31,525, y han de haberse ya recibido las que corresponden al efectivo para la redención de la deuda interior, que alcanzará a un millón de pesos, y también lo que corresponde a los gastos de comisión y otros hechos en Europa. El 1° de noviembre se recibirán £10,000. El 1° de diciembre otras £10,000, y el 15 de Enero de 1889 el saldo de todo el empréstito. Hecho el desglose de todos los gastos y primas resultará que el Gobierno tocará neto:
>
> En efectivo £298,500
> En títulos..... £123,160
> £442,160[27]

El principal intermediario y colaborador de De Marchena para llegar a resultados concretos fue el conde Tadeo de Okzsa, con quien firmó en París el 14 de junio de 1888, el documento básico del empréstito. Este conde de Okzsa, se obligaba por este contrato, a facilitar el empréstito. Como era sencillamente un hábil negociador transfirió poco después sus derechos y obligaciones a la casa Westendorp & Co., de Holanda, después de asegurar por otro contrato sus comisiones con el gobierno dominicano. De Marchena firmó en Bruselas, el 14 de julio de 1888, el primer contrato con los banqueros Westendorp. Nuevamente De Marchena y Okzsa firmaron en Londres otro contrato el 27 de julio, relacionado con el arreglo de los bonos Hartmont, y en el cual obtenía otra tajada el famoso conde.

[27]Gaceta Oficial No. 739, octubre, 1888.

Esa "serie de contratos que se imponían por las circunstancias del momento", según Heureaux, ligaron la República a su más ingente compromiso internacional. El instrumento definitivo con Westendorp, donde quedaron fijadas las condiciones finales para la ejecución de tan complicadas negociaciones, fue firmado por De Marchena en Amsterdam, el 16 de agosto de 1888.

Como era indispensable, el asunto Hartmont fue en el curso de todas estas contrataciones objeto de especial cuidado, para que no se repitieran los fracasos anteriores.

El acuerdo definitivo con los acreedores ingleses fue firmado en Londres el 28 de julio de 1888, por Eugenio Generoso de Marchena como Agente Fiscal de la República Dominicana y E. P. Boswine, Presidente del Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros, de Londres. Este acto cerraba un capítulo ominoso, pero abría nuevas rutas al desastre, que el pueblo dominicano padecería durante largos años con resignación fatalista.

El Art. 1° de este convenio estipulaba en su párrafo segundo que de los bonos de Westendorp se dedicarían 7,143 obligaciones de £20 cada uno, para recoger bonos de £100 del 1869. Es decir, que la deuda Hartmont ascendente según los cálculos de los organismos de Londres a £714,300 se convertía a razón de £5 por £1. La tarea de convertir estas obligaciones, de acuerdo con el pacto, se puso a cargo de la casa británica The Capital and Counties Bank Limited.

La conversión de los bonos Hartmont quedó oficialmente cerrada el 28 de agosto de 1889, según lo estipulaba el Art 5° del contrato. Los prestamistas ingleses recibieron £142,810 en 7,143 bonos de £20 cada uno. Al cerrarse definitivamente esta operación, se comprobó que Hartmont había emitido bonos por un total de £757,700.[28]

[28]V. Doc. 37, Exp. 3, Leg. 23, de la Sección de Hacienda. A. G. N.

La ley dictada por el Congreso Nacional el 26 de octubre de 1888, y promulgada por el presidente Heureaux en la misma fecha, decía en su artículo 3° lo siguiente:

> El empréstito de £770,000 nominales, con interés al 6% anual, redimible capital e intereses en 30 años o antes si hubiere lugar con una anualidad de £55,645, que ha sido emitido en Londres, Amsterdam, Bruselas y Hamburgo por el intermedio principal de los señores Westendorp & Co. de Amsterdam, y para cuyo pago se han afectado las rentas aduaneras de la República, queda reconocida como deuda de la nación.[29]

La República tendría que pagar hasta el año 1918 £55,645 anuales, lo que haría ascender el total de las amortizaciones a £1,669,350. Si se toma en cuenta que cada bono de £100 produciría únicamente £75, la operación era sencillamente desastrosa.

El instrumento definitivo firmado por De Marchena en Amsterdam el 16 de agosto de 1888, estipulaba en su artículo 5° lo siguiente:

> Se creará en Santo Domingo el 1° de Noviembre de 1888, una Caja General de Recaudación de Aduanas, que será encargada de efectuar el ingreso de los derechos de importación y de exportación percibidos en todos los puertos de la República actualmente abiertos al comercio exterior, o que puedan serlo en lo adelante. Esta Caja General de Recaudación será administrada por delegados nombrados por los señores Westendorp & Co. o los que representen sus derechos, durante toda la duración de este contrato y hasta la extinción del empréstito.[30]

Esta famosa oficina (La Regie) mediatizadora de la soberanía nacional, era en el fondo, lo que fue después la Receptoría General de Aduanas, dentro del régimen convencional de 1907. Al instalarse formalmente, su primer director fue el barón de Farensbach, de activas vinculaciones más tarde con la diplomacia dominicana.

[29]Colección de Leyes, Tomo X, pág. 469-70.
[30]Colección de Leyes, Tomo X.

Para dirimir cualquier disputa que surgiera entre el gobierno dominicano y la casa prestamista, el artículo 17 del contrato designaba como árbitro, sin apelación, al gobierno de Holanda.

Esta operación financiera, conocida con el nombre de "Westendorp" fue objeto de diversas críticas. El ministro de Hacienda y Comercio, Julio J. Julia, presentó un informe al Consejo de Secretarios de Estado, reunido el 30 de agosto de 1888, para conocer la documentación relacionada con esta negociación, sometiendo sus puntos de vista opuestos a ella.

Julia decía en uno de sus párrafos:

> Por sus múltiples artículos y adiciones y por los incidentes y repliegues ocultando u oscureciendo la realidad, parece más bien un documento jurídico que un contrato comercial en que debe ante todo brillar la claridad y liquidar las operaciones, constando o limitando todas las sumas que una parte pagará por cuenta de la otra.[31]

Como era de esperarse, este informe de Julia no fue tomado en cuenta y el contrato fue sancionado y entró a poco en plena vigencia.

Como una de las consignaciones del contrato con Westendorp establecía que la deuda interior debía ser recogida con una parte de estos bonos, el gobierno procedió a convocar una asamblea de sus acreedores nacionales. Sucedía que el gobierno del general Heureaux, en su afán de obtener dinero a todo trance, había logrado que se crearan en las poblaciones donde existían aduanas productivas, o donde el comercio tuviera gran importancia, como en Santiago, compañías de préstamos que, a cambio de concesiones y negociaciones de todo género, avanzaban dinero en grandes cantidades al gobierno.

El monto de las acreencias de estas compañías es verdaderamente difícil de establecer para esa fecha, por la maraña de operaciones secretas y turbias que se realizaban. El 24 de octubre de

[31]Doc. 14, Exp. 7, Leg. 27, de la Sección de Hacienda. A. G. N.

1888 se reunieron en Santo Domingo, atendiendo a la invitación del gobierno, los representantes de las compañías de Santo Domingo, Puerto Plata, Samaná, Montecristi, Santiago y Azua, con el ministro de Hacienda, para conocer los balances, y establecer la forma de canjear los bonos de Westendorp por sus acreencias. De ahí surgió la llamada "deuda consolidada sin interés", que eran bonos otorgados por el gobierno a sus acreedores, por el 50% del total de cada uno.

La historia de estas compañías, muy especialmente la de Puerto Plata, que dirigía don Cosme Batlle, conocido banquero particular del presidente Heureaux, es cosa digna de emprender en estudio aparte.

PRIMEROS INCIDENTES CON WESTENDORP

Los incidentes relacionados con la ejecución del empréstito Westendorp surgieron inmediatamente. El 17 de diciembre de 1888, comunicaba el ministro de Hacienda a estos banqueros que el gobierno había protestado directamente ante el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda

> porque el Presidente del Tribunal de la jurisdicción de Amsterdam se ha arrogado la facultad de ejercer actos de jurisdicción, contra la soberanía de la República Dominicana, permitiendo el embargo en terceras manos de sumas que provienen de un empréstito, y que en todo tiempo deben respetarse sin estar sujetas a oposición aun tratándose de un acreedor legal.[32]

El acreedor que embargaba las remesas del empréstito era Mauricio Raschowitz, quien había gestionado la frustrada negociación con el Comptoir, de París. A este corredor se le reconocieron y pagaron, para poder levantar este embargo, £5,000 por comisión de sus negociaciones anteriores por cuenta del Estado dominicano. El desastre financiero no tenía pausas.

[32]Oficio No. 1140, Libro 89, Sec. de Hacienda y Comercio, A. G. N.

La famosa Caja de Recaudación fue el principal motivo de los dolores de cabeza del gobierno. Instalada la oficina central de este organismo en la ciudad de Santo Domingo, sus funcionarios desbordaron los marcos legales, manteniendo un pugilato constante con los funcionarios dominicanos, como se evidencia por la copiosa correspondencia que se conserva en el Archivo General de la Nación.

El sistema de recaudación de esta Caja; su unilateral criterio sobre las estipulaciones del contrato y sus violaciones continuas a todo lo pactado, fueron preparando el terreno para una ruptura completa entre el gobierno dominicano y los banqueros de Amsterdam.

SEGUNDO EMPRÉSTITO CON WESTENDORP

Prácticamente el primer empréstito de Westendorp no había producido los frutos que esperaban los políticos dominicanos, pues las liquidaciones y amortizaciones se convirtieron en un verdadero caos, y llegó un momento en que el gobierno no sabía a ciencia cierta las sumas recibidas, ni los bonos entregados a terceros por su cuenta.

La única solución entrevista por el cerebro de Ulises Heureaux fue contratar un segundo empréstito con esta misma compañía, a pesar de sus disputas constantes con los directores de la Caja de Recaudación. Entre éstos, un habilísimo negociador, el doctor Cornelio Juan Den Tex Bondt, serviría de puente para una nueva operación. Den Tex Bondt, que laboró primero en la oficina local de Puerto Plata antes de ser director de la Caja, sugirió la conveniencia de construir el ferrocarril de Puerto Plata a Santo Domingo, construyéndose primero el tramo de Puerto Plata a Santiago, y con este proyecto se levantarían los fondos de un nuevo empréstito. Ahí podrían también cebarse los políticos interesados e inescrupulosos.

Viajó a Europa para plantear a Westendorp esta nueva operación. Como de costumbre, al madurar la negociación se envió un funcionario dominicano para ultimar todos los acuerdos. Esta vez saldría como Agente Fiscal de la República en Europa, don

Manuel María Gautier, vicepresidente de la República, y político de larga historia. Como ministro de Relaciones Exteriores de Báez en el período de los seis años, fue cerebro en las negociaciones con Hartmont, y de la anexión del país a los Estados Unidos.

Por una ley del 14 de mayo de 1890, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a contratar la construcción del tramo de ferrocarril de Puerto Plata a Santiago. En esa misma fecha se firmó contrato entre el gobierno, representado por su ministro de Hacienda, señor Juan Francisco Sánchez, y C. J. Den Tex Bondt, representante de Westendorp, para emitir bonos por £800,000 al 6% anual, pagaderos en 50 años.

En ese mismo mes partió para Europa don Manuel María Gautier, quien obtuvo pleno éxito en sus gestiones, obviando las dificultades que se le presentaron a causa de las disputas del gobierno con los recaudadores de la Caja.

La cuantía del empréstito fue elevada a £900,000 por decreto del 8 de septiembre de 1890. El Estado dominicano caía de lleno en la bancarrota, gracias a la incompetencia y venalidad de sus dirigentes.

El vicepresidente Gautier en informe minucioso presentado al ministro de Hacienda, con el frío realismo que le caracterizaba, hace el relato de las peripecias de esta negociación. Para conocimiento perfecto de los lectores insertamos íntegramente esta comunicación inédita, que dice así:

Oficial
APROBADO
14

Santo Domingo, Dic. 16 de 1890.

Ciudadano Ministro:
Después de haber recibido en París la muy atenta comunicación de V. de fecha 16 de Septiembre acompañándome los Decretos y Resoluciones del Congreso Nacional que permitían el aumento de

la emisión del empréstito para el ferrocarril central a la cantidad nominal de £900,000, conforme fue indicado al Gobierno en mi informe del 11 de Agosto último, me apresuré a confirmar a los Señores Westendorp & Co., la notificación que ya les había hecho luego que recibí el telegrama del Ciudadano Presidente de la República que me anunciaba la Sanción del Congreso Nacional a las mencionadas disposiciones.

Desde ese momento se hicieron más activas las diligencias y pasos para la emisión, pero, como notaba en los Señores Westendorp & Co. cierta tendencia al aplazamiento de ella, a causa de algunas dificultades que se les presentaron en el mercado de Londres, creí conveniente llamarles la atención sobre el particular a fin de poder terminar de una vez cuál debía ser la fecha de emisión, a la cual respondieron ellos el 3 de Octubre a una carta que les dirigí el día 1ro. del mismo mes, que esperaban poder terminar los preparativos para la emisión en el curso de la semana que se aproximaba; de manera que ellos no dudaban que la emisión podría todavía hacerse el 22 del mismo mes o el 29 lo más tarde.

No me detendré a entrar en detalles sobre todas las diligencias que tuve que practicar y de los viajes que hice hacer al Señor Mendel, que llevaba mi representación ya a Londres, ya a Amsterdam, ni de las múltiples conferencias que tuve en París con los Agentes del empréstito para llegar a una solución definitiva; pero, me bastará afirmarle, como V. lo comprenderá muy bien, que no tuvimos un momento de reposo y sin que pasara un día que no lo consagráramos a aquella negociación.

No obstante, y contra mi previsión y sin poderlo remediar, la emisión no pudo fijarse como lo habían prometido los Señores Westendorp & Co. para el 29 de Octubre, y fue transferida para el 11 de Noviembre solamente por la cantidad de £575,000 dejando el resto para una segunda emisión conforme se había convenido de antemano con los dichos Westendorp & Co.; V. encontrará adjunto marcado con la letra A el prospecto que se publicó en Bruselas el 31 de Octubre bajo mi firma.

Todo presagiaba el mejor éxito, contándose desde luego con que la segunda emisión del resto de las £900,000 habría de hacerse en Londres a principio del año 1891 para lo cual se contaba y aún se está contando con algunas casas serias de aquella localidad. Y es aquí ocasión de manifestar a V. y al Gobierno que el sistema adoptado por los Señores Westendorp & Co. de dividir el empréstito en dos

emisiones ha tenido por objeto asegurarle un éxito cierto; y como la mayor parte de su producido está destinado a los trabajos del ferrocarril central y los fondos no se habrán de necesitar sino a medida que avancen los trabajos, y luego los Señores Westendorp & Co. tienen el compromiso de tomar el empréstito *firme*, la negociación habrá de adquirir a pesar de los tropiezos que se tuvieron posteriormente, mayor prestigio, sobre todo, desde el momento que se dé comienzo a los trabajos.

Fijada como ya he dicho a V. anteriormente la emisión para el 11 de Noviembre, el telégrafo principió muy temprano a transmitirnos los detalles del resultado y nos halagamos con que las cifras de las suscripciones en Hamburgo, Amsterdam, Bruselas, Amberes y en Suiza bastaban suficientemente para poder afirmar un brillante resultado; pero desgraciadamente en la mañana del 12 el telégrafo anunció la situación en que se hallaba la casa Baring Brothers de Londres, la segunda en importancia en el universo, viéndose forzada a entrar en liquidación por no poder hacer frente a sus compromisos, que en el momento se decía que eran de diez millones de libras esterlinas y que luego se calculó pasaban de quince millones.

Un acontecimiento tan grave e inesperado debía traer en pos una crisis europea y ya puede comprenderse el estupor y la desconfianza que se apoderó de todos los ánimos y en todos los mercados, y bien que la Banca de Inglaterra tomara a su cargo la liquidación más tarde, para evitar un conflicto universal; de momento el mal que a nuestra negociación hiciera lo llegué a creer irremediable y aún podía afirmarse que en aquel día nuestro empréstito había hecho un verdadero *fiasco*. La causa era demasiado evidente: la mayor parte de los que se habían suscrito la víspera a nuestro empréstito se retiraron al siguiente día y los Señores Westendorp & Co. llegaron a telegrafiar casi perdiendo toda esperanza de llegar a un resultado medianamente satisfactorio; y fue en esos momentos de angustia que se decidieron su principal a pasar a París a entenderse conmigo con el objeto de estudiar y adoptar una combinación que pudiera salvarnos, así a ellos como al Gobierno, del desastre de aquella amenazante crisis.

Para el Gobierno no había, examinándolo estrictamente, otro camino que exigirle a los dichos Westendorp & Co. el cumplimiento de sus obligaciones, puesto que ellos habían contraído el compromiso de tomar a firme el empréstito, cuando no lo llenaran buscar los medios de exigirlo; pero cualquiera que hubiera sido el que se adoptara, en presencia de la crisis de Londres que era un caso de *fuerza mayor*

inesperado, no habríamos hecho otra cosa que causar tal vez una desgracia irreparable a los mismos Señores Westendorp & Co. en la cual nos hubiéramos visto envueltos indefectiblemente sin contar con que el crédito del país se hubiera resentido habiéndonos sido muy difícilmente entonces volverlo a su estado actual por muchos años; y más que todo eso, no habría podido llevarse a cabo la obra del ferrocarril de Puerto Plata a Santiago que es objeto de esperanzas para aquellas poblaciones y aun para las demás empresas semejantes que se proyectan que habrán de ser las que den desenvolvimiento a nuestro progreso y prestigio a nuestra nacionalidad y a nuestra civilización.

En presencia de todas estas consideraciones y después de largas conferencias y discusiones, llegamos a convenir, como única solución posible que el Gobierno autorizaría la Caja de Recaudación de Aduana a convertir la garantía de £30,000 en especies de £38,960 de obligaciones al tipo de emisión, sea de 77%, y que además la deuda interior se pagaría en obligaciones de la emisión al mismo tipo de 77%, ésto es que el Gobierno aparecería suscribiéndose a la suma de £140,260 nominales que vendrían a representar las £108,000 destinadas al pago de la deuda interior.

Una vez de acuerdo, lo cual no podía de mi parte, no obstante la latitud de mis poderes, ser aceptado sino *ad referéndum*, cruzamos la correspondencia marcada con las letras B, C y D que se acompañan. Las formas adoptadas en mis respuestas fueron convenidas tal como se hallan, para separar lo que concernía al depósito de las £30,000 de lo que correspondía a la deuda interior, y también con el ánimo de dar aliento al Sindicato que debía ayudar a los Señores Westendorp & Co. a llenar la suscripción del empréstito y asegurar la obra del ferrocarril.

Todo lo dicho como V. verá no pudo arreglarse sino el 14 del mes pasado, un día antes de mi salida de París, habiéndoseme hecho la promesa de que por el vapor alemán que debía salir para Puerto Plata en aquellos mismos días, saldrían los Ingenieros y parte del material destinados a la obra del ferrocarril.

El Señor Den Tex Bondt, representante de los Señores Westendorp & Co. vino junto conmigo en el vapor trasatlántico Ville de Bordeaux hasta Saint Thomas, siguiendo desde allí a Puerto Plata para recibir a los referidos Ingenieros y luego trasladarse aquí con los fondos necesarios para cubrir la suma efectiva que debe entregarse a la Contaduría General de Hacienda conforme al contrato. Debo

> advertir a V. que de esa cantidad dejé dispuesto reservar £5,000 destinadas a pagar, primero, una parte de los numerosos gastos que V. supondré he tenido que hacer; segundo, una factura de efectos encargados por el Ciudadano Presidente de la República al Señor Mendel para adorno del Palacio de Gobierno y un trimestre para las pensiones de los estudiantes dominicanos que se hallan por cuenta del Estado en París. De todo lo cual le presentaré la cuenta oportunamente.
>
> Comprendiendo que mi ausencia de París dejaba un vacío para la Representación del Gobierno en asuntos fiscales, me pareció conveniente autorizar al Señor I. Mendel, que lo es ya del Gobierno cerca del "Banco Nacional" cuyos servicios en todas mis gestiones han sido de verdadera importancia, a llenar las funciones de Agente Fiscal de la República durante mi ausencia y mientras daba cuenta de ello al Gobierno.
>
> Tengo el honor de acompañarle copias de dicha autorización marcada con la letra E y copia de la nota que dirigí al Señor Barón de Almeda, Ministro Plenipotenciario de la República, informándole de este acto a fin de que pudiera atestiguarlo, marcada con la letra F.
>
> Me prometo que el Gobierno aprobará cuanto he hecho en beneficio de la misión que se me confiara para cuyo buen desempeño no he omitido esfuerzo alguno.
>
> Tengo la honra de saludar a V. con la más elevada consideración.
>
> (Fdo.) *M. M. Gautier*,
> Vicepresidente de la República Dominicana.[33]

La segunda operación Westendorp quedó definitivamente sancionada por resolución del Congreso Nacional del 8 de septiembre de 1890, y por cuyo medio se autorizaba además el aumento a £900,000 de la cuantía del empréstito. La República, por obra y gracia de sus gobernantes, daba un nuevo paso hacia el abismo. Este empréstito constituyó un fraude mayor que el de Hartmont. Nunca se supo ni se sabrá jamás cuánto recibió el gobierno dominicano. Los trabajos del Ferrocarril de Puerto Plata a Santiago tuvieron que

[33]No. 14. Expediente 7, Legajo 27 de de la Sección de Hacienda. Archivo General de la Nación.

ser financiados con nuevos préstamos, y las liquidaciones finales del "segundo Westendorp" nunca fueron presentadas al gobierno dominicano.

El año de 1891 fue de gran incertidumbre. La Casa Westendorp, comprometida en negociaciones tan fraudulentas con el gobierno dominicano, vacilaba en sus cimientos, acosada por los millares de europeos que habían invertido sus ahorros en bonos dominicanos. El gobierno nacional se veía reducido a la impotencia, por la paralización casi total de los negocios, con la consiguiente merma de los ingresos fiscales.

Si el servicio del empréstito de 1888 no se cumplía regularmente, mucho menos se atenderían las obligaciones contraídas por el segundo. Además, los funcionarios europeos de la Caja de Recaudación, a gran distancia de la vigilancia directa de Westendorp, no cumplían con la obligación de hacer en tiempo oportuno las remesas de sus recaudaciones.

Den Tex Bondt, interesado en mantener en pie este productivo aparato administrativo, al comprobar la precaria situación del gobierno, propuso a éste un acuerdo que en el fondo era una modificación sustancial a los dos contratos de empréstito, en cuanto a las garantías se referían.

El 10 de diciembre de 1891, la Caja de Recaudación, por intermedio de su director, y el gobierno dominicano, por órgano de su ministro de Hacienda, firmaron un convenio por cuyo medio se reducía a un 35% la cuantía de la porción de ingresos aduaneros que recibiría la Regie para el servicio de los empréstitos, y el gobierno el restante 65%. Cuando Westendorp tuvo conocimiento de este convenio lo rechazó airadamente, alegando que vulneraba las estipulaciones de los contratos. Notificado el ministro de Hacienda, general Juan Francisco Sánchez, por el director de la Caja, que Westendorp rechazaba y anulaba esta Convención, el funcionario

dominicano respondió el 9 de marzo de 1892, que el gobierno la seguiría considerando válida.

Además, el ministro Sánchez, por comunicación del 14 de junio de ese mismo año al Agente Fiscal del gobierno en Europa, señor Isidoro Mendel, le comunicaba que:

> el *modus vivendi* en que se llevan los asuntos de la Regie con la Hacienda es y será el que creó el arreglo de fecha 10 de diciembre contra el cual vuelven a protestar los señores Westendorp & Co., negando al Director General, Sr. Den Tex Bondt, calidad para celebrar dicho acuerdo. Los señores Westendorp & Co., persisten en interpretar el convenio referido como un atentado contra el contrato de empréstito de 1888 cuando, por el contrario, no es otra cosa con tanta mayor razón cuanto que esa fue la base que se previó al fijar la cuota de £55,000 anuales, que se suponían inferiores al 30% de las entradas.[34]

Westendorp no perdió tiempo en informar a sus millares de clientes por toda Europa, que el gobierno dominicano había dispuesto de las rentas aduaneras, punto básico para el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los empréstitos de 1888 y 1890, violando así las estipulaciones de ambos contratos. Pero antes de quebrar ruidosamente, hizo una transferencia de todos sus derechos a un consorcio de "banqueros" norteamericanos. Entonces apareció la Improvement, de tan infausta memoria para el pueblo dominicano.

[34]Of. No. 272, del 14 de junio de 1892, Libro copiador de oficios de la Secretaría de Estado de Hacienda. A. G. N.

CAPÍTULO IV

El apogeo del desastre

THE SAN DOMINGO IMPROVEMENT CO.

En el proceso de la historia de la deuda pública dominicana, la aparición de esta compañía norteamericana señala el punto culminante del desastre. La falta de honestidad de los dirigentes de esta compañía, corría pareja con la del presidente Ulises Heureaux, y el grupo de sus inescrupulosos corifeos. Las diversas operaciones concertadas por esta compañía con el gobierno dominicano permitieron acumular una deuda enorme para esos tiempos, gracias a una serie de conversiones y consolidaciones que aumentaban en progresión escandalosa el monto original de la deuda internacional. Es oportuno indicar aquí, que ningún investigador histórico podrá jamás clarificar de manera absoluta esas operaciones, porque tanto la Improvement como el presidente Heureaux y sus amigos actuaban en la sombra, secretamente, sin que hayan quedado en los archivos oficiales, rastros de las negociaciones que condujeron a tan vergonzosas estafas contra el pueblo dominicano, que vino sufriendo esos efectos desastrosos, hasta que se inicia la brillante política económica del presidente Trujillo, que culmina con la liberación financiera dominicana, después de tantas caídas inenarrables.

La San Domingo Improvement estaba dirigida entonces por Smith M. Weed, como presidente, y Geo S. Bixby, como secretario.

Ambos notificaron con fecha dos de agosto de 1892, a los señores Juan Francisco Sánchez, Ministro de Hacienda y Comercio, y a Teófilo Cordero Bidó, Ministro de Fomento y Obras Públicas, que los derechos de Westendorp & Co., de acuerdo con las estipulaciones de los contratos de 1888 y 1890, le habían sido transferidos, e igualmente los "derechos y obligaciones" del Dr. C. J. Den Tex Bondt, para la construcción del Ferrocarril de Puerto Plata a Santiago. La conmoción producida en el seno del gobierno dominicano por esta noticia fue extraordinaria. Los políticos criollos preferían continuar lidiando a los prestamistas europeos, antes que entrar en la órbita de la banca estadunidense. En 18 de agosto de 1892, el ministro Sánchez contestó a la Improvement, manifestándole:

> Creo oportuno, repito, y conveniente manifestar a Uds. que el gobierno dominicano considera nulo y de ningún valor y efecto el traspaso hecho por los señores Westendorp & Co. al grupo de capitalistas que se ha constituido con el nombre de San Domingo Improvement de New York. (Véase in extenso en apéndice documental).

Asimismo notificó Sánchez directamente a Westendorp el rechazo del gobierno dominicano para el pretendido traspaso.

Ya en julio del mismo año, antes de conocerse oficialmente la operación de Westendorp con la Improvement, Juan Francisco Sánchez se dirigía a Isidoro Mendel, en París, diciéndole:

> Creo como Ud. que el pensamiento del grupo de capitalistas americanos tenga que obedecer a un cálculo de política en que el Gobno. americano tenga ocultamente puesta su mano. Pero sea esto verdad o no lo sea, yo creo que ni el instrumento definitivo del empréstito de 1888 ni ningún otro documento autoriza a los señores Westendorp & Co., a transferir sus derechos traspasando la negociación con todas sus condiciones.[35]

[35]Oficio No. 327, Libro No. 102 del Ministerio de Hacienda y Comercio, A. G. N.

Con la mayor actividad trató el gobierno dominicano de anular los efectos de este traspaso, y en fecha 29 de agosto de 1892, dictó la siguiente resolución, por cuyo medio suspendía las facultades de percibir las rentas aduaneras a la Caja de Recaudación, y disponía que los valores correspondientes fueran entregados a los representantes consulares holandeses. Dice así:

Mes de septiembre, 1892.

N° 401
Al Director Gral.
de la Caja de
Recaudación.
Ciudad.

Señor Director:
El Gobno. ha resuelto en fecha 29
de agosto ppdo. lo sigte:

—Considerando: que los Sres. Westendorp Co. contratistas de los Empréstitos Dominicanos 6%, 1888 y 1890, en virtud de un traspaso que han anunciado al Gob. haber efectuado en favor de un grupo de capitalistas americanos q. se han constituido bajo el nombre de "The San Domingo Improvement Company of N. York", se han despojado de su calidad de Recaudadores de las Rentas Aduaneras de la Reppca. desde el 1° de Stbre. próximo, fha. en que anuncian debe comenzar la gestión de la referida Compañía Nte. Americana en sustitución de la que, por los citados contratos, tienen los Señores Westendorp Co., derecho de ejercer *directamente por medio de sus encargados*.

Considerando: que el Gobo. Dominicano por acto de fha. 28 del corrte. mes y apoyado en las razones expuestas por el Ciud° Ministro de Hacda. y Com° en oficio de esa misma fcha. y que corre inscrito en la Gaceta Oficial N° 940, desconoció el traspaso anunciado por los Sres. Westendorp & Co., declarando nulo y sin ningún valor ni efecto.

Considerando, que mientras q. los Sres. Westendorp & Co., no deshagan el traspaso en referencia y declaren q. asumen de nuevo el carácter q. les dan los contratos de Empréstitos, 1888 y 1890, sería tan improcedente el ejercicio de la Regie o Caja de Recaudación, de percibir las rentas pertenecientes a la amortización de los citados empréstitos como incompatible el de la San Domingo Company q. ha sido desconocida por el Gob° Dominicano en sus facultades anunciadas para comenzar el 1° de Stbre. próximo venidero:

> Considerando: q. es deber del Gobierno garantizar los intereses de los suscriptores de los empréstitos dominicanos, 1888 y 1890, cuyo servicio está asegurado según convenio en ejecución, firmado el 10 de Dbre. 1891 con el Director Gral. de la Caja de Recaudación, con un 35% de todas las entradas aduaneras de la Repca.
>
> —Se ha resuelto—
>
> Art 1°—El 35% de las entradas aduaneras, destinado al servicio de los empréstitos dominicanos, 1888 y 1890 q. recauda la Caja Gral. de Regie, mientras q. subsista la discusión q. se ha levantado entre el Gob° de la Repca. y los Sres. Westendorp & Co., con motivo del traspaso intentado por estos Sres. de los derechos y obligaciones contenidas en los contratos firmados para aquellas negociaciones, serán entregadas al Cónsul ó Cónsules de S. M. el Rey de Holanda o a las personas que ellos designen, quienes guardarán dicho depósito hasta que otra cosa se resuelva en contrario.
> Art° 2° Los empleados de Hacienda encargados de liquidar el referido 35% harán entrega del efectivo ó de los pagarés q. por tal concepto reciban al Cónsul holandés de su localidad ó la persona que fuese designada por el Cónsul Gral. Neerlandés de esta Capital, desde el 1° de Stbre. próximo, quedando personalmente responsables de dichas sumas si otra cosa hicieren.
> Lo que comunico &&.
> El Mtro. de Hacda, (fdo.) *Sánchez*.[36]

Durante algunos meses se debatió este asunto entre la Improvement y el gobierno dominicano. Mientras tanto el cónsul holandés continuó durante cinco meses percibiendo los fondos de las rentas aduaneras, de acuerdo con la decisión unilateral del gobierno dominicano. Emisarios de la Improvement, encabezados por el presidente de esa compañía, llegaron a Santo Domingo para tratar directamente con los funcionarios dominicanos. No fue mucho el esfuerzo realizado por los negociadores norteamericanos, para obtener sus objetivos. Las promesas de la Improvement tentaron a Heureaux, y el Estado dominicano fue víctima de una operación

[36]Libro copiador 102, Secretaría de Hacienda y Comercio.

financiera, más onerosa que todas, y que culminaría con su descrédito y bancarrota total.

Ulises Heureaux, que había rechazado en principio la transferencia de los intereses de Westendorp a esta compañía, no quería tomar sobre sí la responsabilidad de la decisión final aceptándola. Con su característica habilidad, designó una comisión de abogados notables para someter a su consideración y estudio los documentos relativos a las dos negociaciones con Westendorp, a fin de que emitieran su opinión acerca de la legalidad del traspaso efectuado por los banqueros holandeses al consorcio norteamericano, de acuerdo con las estipulaciones de los contratos de 1888 y 1890.

Los juristas escogidos por Heureaux fueron Manuel de Jesús Galván, Pedro Tomás Garrido, Genaro Pérez y Augusto Franco Bidó. Heureaux los designó el 12 de enero de 1893 y ocho días después rendían un dictamen favorable a la debatida transferencia.

En cuanto a la transferencia del contrato de C. J. Den Tex Bondt para la construcción del Ferrocarril de Puerto Plata a Santiago, la opinión de estos juristas fue, que al gobierno le tocaba decidir si le convenía o no la transferencia.

Como todas esas negociaciones estaban urgidas de rapidez, el gobierno y la Improvement firmaron el 28 de ese mes de enero, los contratos aprobatorios de la tan discutida transferencia.

El Poder Ejecutivo sometió estos arreglos a la aprobación del Congreso Nacional, y en sesión celebrada el 15 de marzo de 1893, el diputado Juan Estrella leyó el informe de la Comisión de Hacienda, en el cual se apoyaba la solicitud de aprobación a sus actuaciones elevada por el Poder Ejecutivo, alabando

> la forma luminosa en que ha sido resuelta por nuestros ilustrados jurisconsultos, los licenciados Galván, Pérez, Garrido y Bidó.[37]

[37]V. Gaceta Oficial No. 970, del 25 de marzo de 1893.

la determinación de la calidad legal de Westendorp a transferir sus derechos.

La aprobación final del contrato de aceptación de la transferencia de Westendorp, y sus nuevas regulaciones, fue dictada en fecha 25 de marzo de 1893, y promulgada por el presidente Heureaux al día siguiente. (Véase en apéndice documental).

El artículo 40 de este famoso contrato con la Improvement establecía una nueva emisión de bonos, por la suma de $1,250,000, oro norteamericanos, para cubrir la deuda interior de la República, que ascendía a 659.000 pesos mexicanos. Por un contrato adicional entre la compañía y el ministro de Hacienda, firmado el 28 de enero, se estipuló todo lo relacionado con esa emisión de bonos, llamados "debentures" y se indicó a los acreedores que iban a beneficiarse con esos pagos. Eran los principales amigos y prestamistas de Ulises Heureaux. El detalle era como sigue:

J. de Lemos	20,000	mexicanos
J. B. Vicini	150,000	"
" "	49,000	"
Pedro A. Lluberes	220,000	"
Cosme Batlle	220,000	"
	659,000	"

Para demostrar la técnica con que Heureaux y su grupo procedían en asuntos de arreglos financieros, conviene indicar que los contratos firmados por el gobierno con la Improvement el 28 de enero de 1893, una semana después de rendir su dictamen la comisión de juristas, fueron cuatro: 1° El contrato principal aceptando el traspaso de los derechos y obligaciones de Westendorp. 2° Para la continuación de los trabajos del Ferrocarril Central desde Bajabonico a Santiago. 3° Para la explotación a destajo de ese ferrocarril durante 50 años. 4° Para determinar la forma de emisión

del millón doscientos cincuenta mil pesos destinados para pagar a cuatro privilegiados de la deuda interior.

En ese histórico 23 de marzo de 1893, el Congreso Nacional dictó la primera ley de conversión dentro de la larga serie de onerosos acuerdos con la Improvement. Fue una operación tan funesta y fraudulenta como la de Hartmont y los dos empréstitos Westendorp. (Véase en apéndice documental). Esta operación fue la primera grave resultante del cambio recién autorizado. La conversión no era necesaria sino para crear la confusión, además de producir nuevos ingresos al mandatario bancarrotero y sus amigos.

Esta ley establecía que los bonos al 6% de los empréstitos de 1888 y 1890 serían canjeados por estas obligaciones oro al 4%. Las cifras originales de esos dos empréstitos en conjunto arrojaban un total de £1,650,000, y sin tomar en cuenta las sumas cobradas por Westendorp por intermedio de la Caja de Recaudación, ni las grandes cantidades retenidas del segundo empréstito que no fueron cubiertas jamás, ni los fraudes cometidos en la construcción del ferrocarril de Puerto Plata a Santiago, que sólo se terminó, deficientemente, hasta Bajabonico, el gobierno dominicano se obligó a emitir £2,035,000 bajo la denominación de "Bonos oro consolidados de la República Dominicana" o "Consolidated Gold Bonds of the Dominican Republic". La funesta operación debía cancelar todas las emisiones anteriores y la San Domingo Improvement Co. obtendría uno de sus más pingües beneficios en sus operaciones con el gobierno dominicano. *Los banqueros* yanquis no aportarían un solo centavo, pero sus ganancias resultarían inmensas. (Véase en apéndice documental).

Pero parece que esas aprobaciones del Congreso el 23 de marzo no fueron suficientes. Dos días después se aprobaba un nuevo contrato de empréstito, firmado por Pedro A. Lluberes, Ministro de Interior y Policía, encargado de la cartera de Hacienda, y el doctor

C. J. Den Tex Bondt en representación de la Improvement, a cuyo servicio se encontraba ahora este tenaz aventurero.

La Improvement facilitaba al gobierno dominicano la suma de $255,500 en plata corriente en la siguiente forma, de acuerdo con el artículo 4° de ese contrato:

> Sesenta y cinco mil pesos, o sean noventa y siete mil quinientos pesos mejicanos, en giros a noventa días vista, cuya cantidad destina el Gobierno dominicano al pago del armamento que tiene encargado al extranjero; setenta y ocho mil pesos mejicanos en efectivo y al contado, destinados para cubrir gastos extraordinarios de guerra, ya efectuados y pendientes de pago: ochenta mil pesos mejicanos, que se pagarán por octavas partes mensualmente, esto es, diez mil pesos el día primero de cada mes, principiando el día primero de Abril próximo venidero, los cuales se destinan por el Gobierno dominicano, para los gastos extraordinarios de guerra.[38]

El gobierno se comprometió a pagar por este préstamo un interés de 2% mensual, desde el primero de abril de 1893, sin tomar en cuenta los plazos fijados para recibir ese dinero.

Pero estas operaciones pequeñas no eran suficientes. Las resecas fauces del lilisismo necesitaban nuevos ingresos. El año 1894 iba a señalar nuevas operaciones ruinosas. Sin embargo, de todos esos problemas angustiosos, los jerarcas de aquella situación política tan funesta al país, celebraban carnavales grotescos, y los bautizos de cualquier hijo de vecina por uno de aquellos omnipotentes ministros, era una ruidosa manifestación de despilfarro, pues el "padrino" se entretenía en arrojar a las multitudes, puñados de monedas de oro fraccionarias, procedentes sin duda de esas transacciones ominosas que llevaron al país a su más completa ruina.

El 28 de abril de 1894, el Congreso Nacional dictó una ley sancionando el contrato intervenido entre la San Domingo Improvement Co., representada por su presidente Smith M. Weed, y el

[38]Colección de Leyes, Tomo XIII, pp. 69-72.

gobierno dominicano, representado por su ministro de Hacienda y Comercio, señor Modesto Rivas, para elevar la emisión de *debentures* a $2,500,000. El interesante artículo segundo de ese contrato dice:

> La referida emisión de los Debentures oro, 4% creada por la ley del 23 de Marzo de 1893, ascendente a la suma nominal de $1,250,000, se elevará para los efectos del presente convenio, a la cifra de $2,500,000 para el pago de la deuda interior, y para habilitar al Gobierno a dejar su presupuesto libre de ningún otro cargo, que no sea el de las atenciones ordinarias consignadas en el mismo. En tal virtud la San Domingo Improvement Company of New York, conviene en tomar "firme" la suma de $1,250,000 de debentures adicionales, y tanto éstos, como los primitivamente emitidos, serán garantizados con la especial garantía de que se hace mención en el Art. 3°, y con los fondos generales de la renta de la República. El Gobierno creará inmediatamente tales Debentures y los entregará en seguida a la Compañía conjuntamente con el cupón de Septiembre de 1894. El interés sobre los dichos Debentures será pagado semestralmente el 1° de marzo y el 1° de septiembre de cada año, en moneda de oro americano, cuyo interés con el fondo de amortización será pagado a la referida Compañía puntualmente por la Caja de Recaudación.[39]

Siguiendo su conocida táctica financiera, el presidente Heureaux hizo inmediatamente una contratación secreta con la Improvement firmada por los mismos funcionarios. El móvil de este acuerdo privado era determinar las personas que iban a beneficiarse con los pagos a cuenta de la titulada deuda interior.

Eran como sigue:

Cosme Batlle, en moneda mexicana			$500,000
Jacobo de Lemos	"	"	102,689
Juan Bta. Vicini	"	"	152,706
Eugenio Abreu & Co.	"	"	11,490
			$766,885

[39]Colección de Leyes, Tomo XIII, pp. 249-54.

La falta de escrúpulos de los funcionarios encargados de los asuntos financieros del Estado queda en evidencia por la redacción del artículo primero de este contrato secreto que empieza así:

> Los Debentures en oro adicionales se harán en la forma que la Compañía establezca, etc. (Véase in extenso en apéndice documental).

UNA NUEVA CONSOLIDACIÓN
LOS "FRENCH AMERICAN RECLAMATION CONSOLS"

Una nueva operación vino a incrementar la deuda pública. Tan onerosa como las anteriores, esta contratación venía a dar un nuevo nombre a las emisiones de bonos dominicanos, realizando a la vez una segunda consolidación, válvula de escape predilecta de la Improvement, para realizar en connivencia con los funcionarios nacionales, nuevos fraudes en perjuicio del Estado y del pueblo dominicano.

El 3 de mayo de 1895, el general Pedro A. Lluberes, Ministro de Hacienda y Comercio, firmaba dos contratos con Smith M. Weed, presidente de la San Domingo Improvement Co. Por uno de ellos, de carácter público, sancionado por el Congreso Nacional en fecha 17 de mayo de 1895, se convenía la emisión de nuevos bonos por una suma de $1,750,000 elevando el total de los *Debentures* a $4,250,000. El artículo 2° de este contrato estipulaba que estos bonos no se venderían "a menos" de un 50% de su valor nominal. El pueblo dominicano, ante tales iniquidades, le aplicó a estos bonos el mote de "Las desventuras".

El otro contrato, de carácter secreto, establecía la consolidación de las dos emisiones anteriores de *debentures*, junto con ésta, bajo el nombre de "French American Reclamation Consols" al 4% anual. En violación del contrato público, el artículo 2° de este contrato secreto establecía que la Compañía recibiría estos bonos a un 40% de su valor nominal. Dice así:

> Para la cancelación del saldo que adeuda el gobierno a la San Domingo Improvement Co. of New York, siendo el déficit de $300,000 oro,

> la dicha Compañía se compromete a aceptar los "French American Reclamation Consols" al tipo de 40% de su valor nominal, quedando ellos debidamente entregados por el gobierno a la Compañía mencionada. (Véase apéndice documental).

El 14 de mayo de 1895, el ministro de Fomento y Obras Públicas, señor Teófilo Cordero y Bidó firmaba con el presidente de la Improvement otro contrato absurdo. Por ese instrumento se convenía la reconstrucción o corrección de la línea del ferrocarril de Puerto Plata a Bajabonico, ejecutada por Den Tex Bondt, y para cuya realización recibió este aventurero £540,000 del empréstito de 1890, de acuerdo con el contrato firmado por él y el general Alejandro Woss y Gil, Ministro de Fomento y Obras Públicas, el 14 de mayo de 1890. Es decir, que se volvería a realizar un trabajo para el cual se emitió principalmente el segundo empréstito Westendorp, y cuya suma total fue reconocida como deuda por el gobierno dominicano, y convertida y consolidada con la emisión de £2,035,000 de los Dominican Gold Bonds del 23 de marzo de 1893. La construcción de este ferrocarril fue uno de los medios para cometer los mayores fraudes, tanto por los contratistas extranjeros, como por los funcionarios del gobierno dominicano.

Es muy importante señalar que el artículo primero de este contrato establecía

> que la Compañía estaba obligada a abandonar el sistema de *Cremalleire* y a quitarlo por su cuenta.

Bajo el gobierno del presidente Trujillo, que ha borrado tantas cosas turbias de nuestro pasado, fue cuando desapareció el sistema de Cremallera. Sin embargo, el erario dominicano pagó cuantiosas sumas por esos contratos incumplidos.

THE SAN DOMINGO FINANCE CO. OF NEW YORK

La Improvement había realizado demasiados avances en su labor de penetración en la República Dominicana, y en un momento dado

todos los recursos del Estado estaban bajo su control. El tremendo embrollo creado con la deuda extranjera no permitía en 1897, que esa compañía presentara el cuerpo en nuevas operaciones de crédito con el gobierno dominicano, pues los tenedores de bonos en Europa, sospechando una connivencia culpable entre la Improvement y Heureaux, se aprestaban a la defensa de sus intereses, creando comités nacionales encargados de manejar los asuntos con la Improvement y el gobierno dominicano.

Para disfrazar en parte sus operaciones, la Improvement creó varias compañías subsidiarias, dirigidas por los mismos aventureros, y que se conocen en el argot de la historia de la deuda pública dominicana, como *compañías aliadas de la Improvement*. Uno de los nuevos brazos del pulpo se denominó "San Domingo Finance Co.", constituida bajo las leyes del estado de Nueva Jersey, como su progenitora, y como la San Domingo Railways Co., su hermana.

El presidente Heureaux dictó un decreto en fecha 6 de agosto de 1897, ordenando una emisión de bonos por £500,000 al 4% de interés anual, para cubrir los gastos de construcción del ferrocarril de Santiago a Moca, contratado el 24 de mayo de 1894, y para correcciones y cambio de la cremallera en la línea de Bajabonico a Puerto Plata.

La naturaleza de estos contratos constituía una verdadera estafa al Estado dominicano, gracias a la incompetencia financiera del presidente Heureaux y sus favoritos. Estudiándolos con detenimiento se concluye que el nefasto régimen lilisiano actuaba a sabiendas con absoluta mala fe, a cambio de las granjerías que cada una de estas contrataciones le proporcionaba.

COMISIÓN DE PEDRO A. LLUBERES. GESTIONES GRIESER

En 1896, el ministro de Interior y Policía, don Pedro A. Lluberes, viajaría a Europa para negociar un nuevo gran empréstito. Este

emisario era uno de los políticos más prominentes del régimen de Heureaux, y estaba ya vinculado a muchas de las negociaciones crediticias de su protector y jefe. Lluberes tenía encargado de contratar un empréstito de dos millones de pesos, con obligación de dar preferencia "a los agentes legales de la San Domingo Improvement Co." Como de costumbre, se ofrecerían en garantía las rentas aduaneras, y varios impuestos especializados para el pago de otras deudas.

En las instrucciones trasmitidas a Lluberes por el ministro de Hacienda don Modesto Rivas, se establecía que los dos millones de pesos serían colocados a un 70% de su valor nominal. Ni en los archivos, ni en las publicaciones oficiales, ni en ninguna obra sobre la historia de la deuda pública dominicana se consigna información detallada acerca de la misión Lluberes en 1896 y sus resultados. Lo que sí es seguro que no obtuvo éxito en obtener los dos millones pretendidos.

La bravía obstinación de Heureaux para conseguir dinero no tenía límites. En octubre de 1896, el ministro de Hacienda Rivas trasmitía instrucciones a H. R. A. Grieser para gestionar un empréstito de £240,000 o £300,000 con Alexander A. Baird y sus asociados de Glasgow, Inglaterra.

Por esta operación se autorizaba a Baird a prolongar el ferrocarril de La Vega hasta Moca, garantizándosele un beneficio de 4% sobre la inversión calculada en £80,000. El interés sobre el empréstito sería de 6% anual, aumentable al 8% en caso de que los prestamistas pidieran este tipo. Además, se les concedería una regalía adicional de 8% de una sola vez. Pero lo más interesante de estas instrucciones está en el párrafo (I) que dice así:

> Si los señores Alexander A. Baird y sus asociados prefieren elevar el referido empréstito a £300,000 admitiendo como socios capitalistas a los señores General Ulises Heureaux y don Juan B. Vicini por £150,000 que representa la mitad del empréstito, bajo las mismas condiciones generales de garantía, intereses y prima establecidos

> anteriormente, y sin que los mencionados señores tengan ninguna intervención en la administración ni en el cobro de las rentas destinadas al pago del empréstito, ni tampoco podrán figurar en el contrato oficial que H. R. A. Grieser celebre con el señor Alexander A. Baird y sus asociados, en ese concepto, queda autorizado el señor Grieser a elevar dichos empréstitos a £300,000.[40]

Por medio de esta maniobra fraudulenta Lilís quería convertirse en acreedor del Estado dominicano. Sin duda alguna muchas de las turbias e indescifrables negociaciones que concertó con la Improvement son de idéntica naturaleza.

LEY DE CONVERSIÓN DE 1897

Todo este gran desastre financiero culmina con la ley del 9 de agosto de 1897, que dispuso la consolidación y conversión total de la Deuda Pública. Puede decirse que ha sido el fraude más colosal de que ha sido objeto la República. Trataremos de dar una visión general de esta operación ominosa.

El agente fiscal de la República Dominicana en Europa, para esa época Mr. Isidoro Mendel, de nacionalidad francesa, pero de origen hebreo, conocía perfectamente la capacidad económica del Estado y del pueblo dominicanos, pues había vivido varios años en este país, dedicado a diversas actividades comerciales, entre ellas el pingüe negocio de préstamos al gobierno de Heureaux. No fue partidario de que el gobierno aceptara la transferencia de los derechos de Westendorp a la Improvement. En 1897 sometió al gobierno dominicano un plan para la consolidación de la deuda, y que había sido preparado con el concurso de los comités de portadores europeos de los bonos dominicanos. Este plan fue sometido al estudio de los funcionarios de la Improvement. El vicepresidente de esta compañía, Mr. Charles W. Wells, que había llegado a Santo Domingo

[40]Libro 112, copiadores de la Sec. de Hacienda y Comercio, pp. 158-61.

en marzo de 1897 estudió el Plan Mendel y lo rechazó, porque en su mente había surgido un *Plan Improvement*. En abril 15 de 1897 se dirigió al ministro de Hacienda, sometiendo a estudio su propio plan, que por el texto de la carta de remisión se comprueba que ya había sido discutido con algunas autoridades dominicanas.

Como la penuria del gobierno dominicano lo había llevado al borde de la catástrofe, lo primero que hizo la Improvement fue autorizar a la Caja General de Recaudación, a entregar determinada suma al gobierno para cubrir el déficit mensual en su presupuesto, a fin de sostenerlo en pie mientras daban cima a negociación tan fraudulenta.

En el mismo mes de abril quedaron concluidas las contrataciones entre el gobierno y la Improvement, pero nuevamente saldría la San Domingo Finance Co. a dar la cara, mientras la compañía matriz quedaba en la sombra.

En esta operación monstruosa el móvil de Ulises Heureaux y sus socios políticos era la obtención de una nueva gruesa suma de dinero, y el de la Improvement, agarrotar definitivamente al gobierno, y frustrar los empeños de los inversionistas europeos otorgándoles bonos de nueva denominación por los antiguos, y a la vez acaparar una gran cantidad de ellos por comisiones y operaciones desastrosas que el gobierno no controlaba ni tenía interés en ello.

Aunque los contratos quedaron listos en abril, la ley de conversión vino a ser votada por el Congreso Nacional el 9 de agosto de 1897. (Véase en apéndice documental). Esta ley consta de doce artículos. El artículo 1° enuncia los propósitos de la conversión e indica que la San Domingo Finance Co. tomaría a su cargo esta tarea. El artículo 2° fija la cuantía de la emisión en £4,256,750 y las nuevas denominaciones de la emisión y los intereses que devengaría cada una. El artículo 3° fijaba los plazos máximos para la amortización total de estos bonos que alcanzaría hasta octubre de

1999. El artículo 4° fijaba las garantías para la emisión que eran todas las rentas aduaneras y otros fondos especializados para el pago de diversas acreencias. El Estado dominicano ponía todas sus rentas en manos de la Improvement y sus compañías aliadas. El artículo 5° establecía que la Caja de Recaudación cobraría directamente todas estas rentas para remesar *"la proporción mensual de intereses y amortizaciones mensual"* a la Improvement y sus sucesores. El artículo 6° establecía que los "Consolidated Gold Bonds of the Dominican Republic 4% de 1893" que a su vez provenían de la consolidación de los dos empréstitos con Westendorp, fueran convertidos en bonos de 2¾% denominándose a partir de esa fecha "Obligations Or de Saint Domingue 2¾ pour cent", y que los "French American Reclamation Consols, 1895", originariamente conocidos como *Debentures*, fueran convertidos en bonos al 4%, denominados "Dominican Unified Debt 4% Bonds".

El artículo 7° era el más significativo en esa conversión. Copiado textualmente dice:

> Para el pago y consolidación de la Deuda Flotante del Gobierno, y para el pago de los gastos y comisión que se deriven de la operación de la conversión, el Gobierno queda autorizado a contratar con la San Domingo Finance Co., el remanente de dichos bonos que fueren aplicados a la conversión.

Esta consignación era el objeto principal de operación tan onerosa, pues con el pretexto de unificar la deuda, se emitieron bonos en exceso que se colocaron a precios irrisorios, para Heureaux obtener dinero, aunque se sumiera el país en el más espantoso caos financiero.

El artículo 8° trataba de la Comisión Financiera, cuya creación, en caso de necesidad, quedaba al arbitrio de los gobiernos de Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Esta Comisión sería, después de constituida, una especie de

tutor del Estado dominicano. El artículo 9° le daba nueva fuerza a las estipulaciones de los contratos de 1888 y 1890 con la casa Westendorp & Co., base de referencia en todas las negociaciones de la Improvement con el gobierno dominicano. El artículo 10° declaraba libre de todo impuesto a los bonos de la conversión. El artículo 11° autorizaba a la San Domingo Finance Co. a transferir las obligaciones y derechos en relación con estas operaciones, previo aviso al gobierno dominicano, pero prohibía de manera explícita transferirlos a ningún gobierno extranjero, bajo pena de nulidad.

El artículo 12°, como para dejar una puerta abierta a cualquier operación futura, establecía que el gobierno dominicano se reservaba el derecho, a su voluntad, de amortizar a la par esta deuda, previo aviso anticipado de seis meses a todos los interesados, mediante publicaciones en periódicos de Nueva York, Londres, París y Bruselas.

Es interesante saber que desde el mes de abril de 1897, todos los contratos sobre esta conversión habían sido firmados en espera del momento oportuno para someterlos a la aprobación del Congreso Nacional.

Pero una de las claves de esta negociación desastrosa está en el contrato secreto del 15 de ese mismo mes, firmado por José de Jesús Álvarez, Ministro de Hacienda y Comercio, en representación del gobierno dominicano, y Charles W. Wells, Vicepresidente de la San Domingo Finance Co., en representación de esa compañía. Este contrato determinaba el reparto del excedente que produciría esta emisión y que ascendería a £1,250,000. (Véase en apéndice documental).

La distribución numérica general de esta emisión quedó determinada así en su totalidad: £2,136,750 para canjear los bonos denominados "Dominican Gold Bonds" bajo cuya clasificación se habían refundido los empréstitos con Westendorp de 1888 y

1890; y £850,000 para canjear los "French American Reclamations Consols" donde a su vez se habían fundido todas las operaciones a cargo de la Improvement desde 1893, junto con las reclamaciones francesas por diversas indemnizaciones a sus súbditos. En menos de diez años la deuda había cambiado de nombre seis o siete veces. Todo para disfrazar el tremendo cúmulo de estafas de que era víctima la Hacienda Pública. Ahora se denominarían sus dos grandes ramas: "Obligations Or de Saint Domingue 2¾ pour cent" y "Dominican Unified Debt 4% Bonds".

Sobre el excedente de £1,250,000 la San Domingo Finance se comprometía a cancelar al gobierno francés 750,000 francos adeudados por la indemnización acordada por las reclamaciones de Boimare y Caccavelli en 1895, y asimismo se comprometía a entregar al gobierno un millón de dólares en efectivo tres meses después de entrar en vigor todos los acuerdos.

El artículo 6° de este contrato secreto dice:

> El Gobierno cede a favor de la San Domingo Finance Co. of New York, en bonos unificados, la cantidad de ochocientas diez mil novecientas ochenta libras esterlinas (£810,980) nominales previstas en la ley mencionada. (Véase apéndice documental).

Sin ningún escrúpulo, el gobierno entregaba, calculado al cambio de esa época, $4,054,900 en obligaciones, para recibir $1,150,000. La comisión más onerosa que se ha podido pagar en una operación de esta especie.

Inmediatamente los bonos "Dominican Unified", que era de donde pensaba sacar su tajada el presidente Heureaux, fueron puestos en el mercado financiero bajo el patrocinio de los banqueros ingleses Brown Janson & Co. de Londres. En esa fecha tenía su cuartel general allí Mr. Charles W. Wells, jerarca de la Improvement y la Finance.

La forma como eran manejadas las finanzas dominicanas queda evidenciada en un documento redactado por el funcionario que

intervino en la distribución del producto de las nuevas emisiones, y que hemos leído en el Archivo Nacional, marcado con el N° 10, expediente 5 del legajo N° 47 de la sección de Hacienda y Comercio, y que figura en el apéndice documental de este libro.

Los bonos de 1869 (Hartmont) cancelados satisfactoriamente por uno de los acuerdos contractuales de 1888, firmado por Eugenio Generoso de Marchena con el Comité de Tenedores de Bonos Extranjeros, de Londres, volvían a ser puestos en vigencia para defraudar al erario nacional. Dice en uno de sus párrafos el citado documento:

> Las condiciones de la conversión son duras pero Mendel y yo estamos de acuerdo que es mejor de aceptarlas. London requiere conversión del resto de los Bonos que Generoso de Marchena dejó de recoger bajo las mismas condiciones de su conversión en 88 con intereses acumulados, lo que requiere £50,000 en Bonos.[41]

Convenir en entregar £50,000 en los nuevos bonos para recoger el remanente de Hartmont era una manera de pillar al Estado dominicano. Heureaux y su grupo de seguidores, en connivencia con los funcionarios de la Improvement estaban labrando la ruina total del país, sumiéndolo en el más absoluto caos hacendístico. Todas estas operaciones dieron a la Improvement oportunidad de ir acaparando sin desembolsos de importancia gran cantidad de bonos que más tarde hubo que pagar con una mayor cuantía proporcional al valor con que fueron adquiridos.

En el "pliego de reparto", (véase apéndice) se estipulaba que £600,000 de lo que puede calificarse serie A de acuerdo con la ley del 9 de agosto de 1897, estaban destinados a proporcionar $250,000 al gobierno y el resto "para gastos de la conversión en Bruselas". Es decir, sencillamente, que el gobierno entregaría $3,000,000 para

[41]Doc. 10, Exp. 5, Legajo 47, Ministerio de Hacienda y Comercio, A. G. N.

recibir en efectivo $250,000. Asimismo, de lo que puede designarse como serie B se convinieron en el contrato secreto £560,000 por un millón de pesos. Pero nada de esto recibió el gobierno dominicano, y Ulises Heureaux fue objeto de una colosal estafa que le llevó directamente a una exacerbación de sus delirios trágicos que culminaron el 26 de julio de 1899 con su muerte en la ciudad de Moca. El país tuvo que pagar, hasta con la pérdida temporal de su soberanía, por sus falaces negociaciones financieras.

En enero de 1898, desempeñando don Juan Francisco Sánchez con carácter interino la cartera de Hacienda y Comercio, escribió al agente fiscal Mr. Mendel una comunicación que revela en ese momento la falta de control del gobierno en sus operaciones financieras, sujeto a la intervención de extraños, casi siempre aventureros sin escrúpulos. Al final de su misiva Sánchez le decía:

> Aparte de estos puntos especiales que encargo a Ud. dilucidar y hacer efectivos, creo oportuno encarecer a Ud. una vista general sobre el conjunto de la operación de crédito realizada últimamente y rendir a este Ministerio una cuenta detallada de todas ellas, sin olvidar, como Ud. comprenderá, la que se refiere a la amortización de los Bonos de los empréstitos antiguos que han quedado convertidos y de cuyos valores necesita el gobierno descargarse a la mayor brevedad.

Apremiado el gobierno nacional por sus compromisos internos, sin recibir las sumas que esperaba, se dirigió al Congreso Nacional en marzo de 1898 informando del fracaso de la conversión, y solicitando crear con urgencia un impuesto adicional de un 10% sobre todas las rentas aduaneras, para sobrevivir a la tremenda crisis.

Promulgada esta ley, la Caja General de Recaudación intentó disponer de estos ingresos, especializados por el gobierno para otros compromisos, pero el ministro de Hacienda, don Sebastián E. Valverde le escribió enérgicamente en abril de 1898 acusando

a la San Domingo Finance Co. de haber violado todos sus compromisos, y manifestándole al gobierno

> también le asiste el derecho para reclamar contra la compañía todos los daños y perjuicios que se le irroguen por la falta de cumplimiento de ella a lo pactado con el gobierno.

El resumen de todas estas negociaciones infaustas de 1897 puede concretarse así: por cambiar el nombre a las emisiones de bonos y canjear los antiguos por nuevos, se aumentó la deuda extranjera a la enorme suma de £4,236,750, de los cuales el país recibió únicamente una fracción infinitesimal.

La desesperada situación del gobierno está descrita de manera patética en algunos párrafos del informe presentado al Congreso Nacional en mayo de 1905 por la Comisión Mixta encargada del estudio del Laudo Arbitral, que dice así:

> En vano escribía el General Heureaux al señor Weed, Presidente de la San Domingo Improvement Co. y de la San Domingo Finance Co., y al señor Wells, vicepresidente de ambas compañías, ya en términos amigables, lamentando los perjuicios que sufría y la situación embarazosa en que su falta de cumplimiento le tenía; ya en franca manifestación de protesta y reservando los derechos del gobierno, para hacerlos valer en justicia. En vano, también, les escribía el Ministro de Hacienda haciéndolos responsables de los daños y perjuicios que su falta de cumplimiento a lo pactado le originaban al gobierno y a la Nación. En vano comisionó Don H. Billini para pasar a Europa a pedirle cuenta al Sr. Wells del producto de los bonos, o a recibir dichos bonos, si no habían sido colocados, para que no devengaran intereses; o hacer la reserva de derechos correspondientes, levantando una protesta contra la Compañía. El señor Wells no lo esperó en Europa. Había salido para Nueva York cuando llegó el señor Billini, siendo esto causa de nuevos trastornos y gastos inútiles para el gobierno. En vano apeló entonces el General Heureaux con frases amistosas y atrayentes a exhortarlo para que viniera a tener un entendido aquí. Logró solamente, después de un año de angustiosa situación, que fueran a tener una entrevista en Nassau, donde tuvo que ir el General Heureaux, a pesar de los graves

> trastornos a que según se lo significó lo exponía el ausentarse del país. (Sólo atribuyéndolo al temor de verse compelido a responder aquí de su falta, se puede explicar la negativa del Señor Wells a venir aquí. En Nassau no había ese temor). Nada sacó de esa entrevista el General Heureaux. Sus apuros siguieron en aumento día por día hasta que murió en medio de ellos.[42]

Aunque no hemos podido localizar la correspondencia de Heureaux con los funcionarios de la Improvement y la Finance, ni datos de la conferencia de Nassau, sí hemos comprobado que el bizarro par de aventureros que eran Mr. Weed y Mr. Wells, se encontraba en Santo Domingo en marzo de 1899, y que el gobierno trataba nuevamente con ellos.

NEGOCIACIONES CON F. H. MORRIS (1899)

Un nuevo prestamista inglés iba a presentarse a los ojos del presidente Heureaux como áncora de salvación momentánea. F. H. Morris firmaba el 28 de febrero de 1899, un contrato de empréstito destinado a recoger la emisión de billetes del Banco Nacional, garantizados por el Estado.

Para impulsar esta negociación el presidente Heureaux remitió al Congreso en fecha 12 de abril de 1899, los contratos *ad-referéndum* firmados con Morris, y solicitaba que fueran conocidos y estudiados en "sesión secreta".

Como resultado de esta petición el Congreso dictó una nueva tarifa para los derechos de exportación que producirían cien mil pesos más que con la tarifa vigente al 9 de agosto de 1897. Del producto total de ese derecho, se destinaría un 20% para la cancelación de los billetes, las famosas "papeletas de Lilís". Morris avanzaría el dinero, y percibiría este porcentaje. Para completar esta ley, y con objeto de satisfacer a la opinión pública el presidente Heureaux

[42]Col. Trujillo, Tomo 15, Reconstrucción financiera, pp. 104-105.

dictó un decreto designando una Comisión Nacional encargada del trueque e incineración de los billetes depreciados. Integraban esta Comisión don Emiliano Tejera, don José Martín Leyba y don José Gabriel García.

Es interesante saber que al discutirse esa ley, Heureaux confrontó por primera vez en el Congreso una crítica severa, síntoma evidente de la descomposición de su régimen gracias a tantas torpezas financieras y a tantos fraudes escandalosos que ponían en peligro la seguridad nacional.

En la sesión celebrada el 10 de abril de 1899 el diputado don Isaías Franco criticó al gobierno y a la Improvement, tildando a ésta de verdadera "calamidad". En su primera intervención dijo:

> Es realmente una vergüenza para el Poder Ejecutivo y para el Congreso, la flagrante contradicción que hay entre lo dispuesto el año pasado y los contratos que anteriormente había celebrado con compañías extranjeras: si hoy se notó esa contradicción debió notarse antes. Ahora temo que la ley que nos pide el Poder Ejecutivo, dentro de algunos días venga a estar en oposición con alguna ley anterior: aquí se ha dicho que el Poder Ejecutivo tiene celebrado algunos contratos para conseguir dinero y recoger los billetes en circulación: si esto es cierto ¿Para qué servirá la ley que nos ocupa? a menos que no sea un pretexto para recargar la exportación.[43]

Un requisito previo para la vigencia de estos acuerdos era la aprobación de los mismos por la Improvement y la Finance, a fin de que el gobierno pudiera disponer libremente del 20% que se iba a segregar para cancelación de los billetes. Pero como Morris necesitaba colocar su empréstito en Londres, lo que tenía necesariamente que consumir algún tiempo, todas estas combinaciones vinieron por el suelo cuando el presidente Heureaux cayó abatido a balazos en una calle de Moca, víctima de sus tremendos desaciertos que

[43]G. O. No. 1288, de abril 29 de 1893.

sumieron al país en el caos más espantoso, y que sólo han podido borrarse treinta años después, cuando la República Dominicana se ha recuperado a paso de marcha de sus dolorosas desventuras, gracias a la portentosa acción gubernativa del presidente Trujillo, que con una científica administración de las rentas públicas, ha creado, por primera vez en nuestra historia, una hacienda nacional dotada de vigorosa prosperidad.

CAPÍTULO V

Se remachan las cadenas

PERÍODO DE LAS INVESTIGACIONES

Con la muerte del presidente Heureaux se cierra un capítulo de la historia dominicana y se abre otro. En asuntos de finanzas el caos era absoluto. Los hombres a quienes les tocó asumir las funciones del poder a raíz de la muerte del férreo mandatario, se encontraron con las manos llenas de problemas agobiantes, sin tener la mayoría de ellos, la capacidad y el entusiasmo necesarios para emprender tarea tan pesada como era la de poner en orden la vida institucional del país. Tampoco el país estaba preparado para iniciar una era civil de progreso general. Las ambiciones de tantos caciquillos, relegados a oscuros rincones por la personalidad dominante de Heureaux, no estaban orientadas al servicio de los intereses públicos, sino a la búsqueda de posiciones de fáciles granjerías personalistas. Los pocos hombres de pro que surgieron al palenque de la vida pública en los años 1900 y 1901, fueron ahogados por la marea pavorosa del personalismo que asaltaba las funciones del gobierno tremolando las banderas de los nuevos caudillos.

Horacio Vásquez y Juan Isidro Jimenes iban a ser los símbolos de dos partidos sin ideales, que desgarrarían la patria en un furioso galope de 16 años, y en cuyas filas los viejos *lilisistas* iban a encontrar cómodo espacio para figurar de manera resaltante en el cuadro dantesco de ese pandemónium político.

Como ningún gobierno puede subsistir sin recursos, uno de los primeros empeños del gobierno provisional que siguió al breve período del general Wenceslao Figuereo fue aclarar el estado de los negocios con la Improvement y la Caja de Recaudación. A la caída de Heureaux, la Improvement se había apresurado a entrar en negociaciones con el gobierno de Figuereo. El nuevo vicepresidente de la Improvement, Mr. John T. Abbott, estaba ya en Santo Domingo en agosto de 1899. Como paso preliminar propuso a ese régimen tan precario, la negociación de un contrato que sustituyera y comprendiera a todos los que estaban en vigor en ese momento. Parece que pretendía continuar sus conversiones.

Figuereo sometió esas proposiciones al estudio de una comisión integrada por Emiliano Tejera y Francisco X. Amiama, quienes, con muy buen sentido, dictaminaron que no debía suscribirse convenio alguno referente o los negocios fiscales de la República, sin un arreglo previo de todas las cuentas que debía rendir la San Domingo Improvement Co. Al crecer y avanzar sobre Santo Domingo la revolución que surgió con el golpe del 26 de julio en Moca, John T. Abbott abandonó el país, para regresar cuando la marea de los acontecimientos políticos volviera a su nivel.

Pero en esos meses de incertidumbre desaparecieron gran cantidad de documentos oficiales comprometedores. Tanto el archivo personal del presidente Heureaux, como el de Hacienda y Comercio, fueron saqueados. Max Henríquez Ureña en su obra *Los yanquis en Santo Domingo* dice:

> al desaparecer la administración Heureaux, el mayor desconcierto reinaba en los asuntos oficiales, pues mucha documentación fue destruida al saberse el avance de la revolución que derrocó a Figuereo.

El 9 de noviembre de 1899 don Samuel de Moya, Ministro de Hacienda y Comercio en el gobierno provisional de Horacio

Vásquez, dirigió una importante comunicación al director del llamado Banco Nacional de Santo Domingo, y que no era otra cosa que un puesto de especulación de la Improvement, su propietaria, y por cuyo medio le manifestaba que el gobierno desconocía la validez de un contrato secreto celebrado el 22 de mayo de 1899 entre el ministro de Hacienda de esa época y el referido banco, y el cual expresaba en su artículo 3o. "que el gobierno asume la obligación de redimir los billetes del Banco Nacional, desde el día en que son puestos en circulación".

El ministro Moya en su comunicación decía:

> Contrato tan falto de equidad sería anulable en todo tiempo; pero como ese contrato no ha sido hecho ante ningún notario ni ha sido registrado para justificar la fecha en que fue contraído ni se halla transcrito en el libro de contratos de este Ministerio, ni en el de la Contaduría General, ni publicado en el periódico oficial, ni ha sido autorizado por el Ejecutivo, ni menos aprobado por el Congreso Nacional, que es el único hábil para darle fuerza legal a los contratos en que se comprometen rentas de la nación, ese contrato no tiene valor ninguno para este Ministerio, y desde luego declara al Banco que no aceptará en ningún tiempo el pago de ese interés de 3%, ni ninguna otra obligación consignada en él que no se derive de pactos o leyes que tengan realmente validez y que hayan sido dados o contraídos por quien tenga legítima autoridad para ello.[44]

Pocos días después, el nuevo ministro de Hacienda, señor Francisco Augusto González, manteniendo el esfuerzo por aclarar tantos embrollos, se dirigió por oficio a los presidentes de la San Domingo Improvement y San Domingo Finance Co., pidiéndoles una rendición total de cuentas de todas sus operaciones con el gobierno dominicano. Ni entonces ni nunca esas compañías rendirían sus cuentas al gobierno dominicano.

[44]Of. No. 98, copiador No. 117, del Ministerio de Hacienda, Archivo Nacional.

CONTRATO DEL 18 DE ABRIL DE 1900

Mr. John T. Abbott, vicepresidente de la San Domingo Improvement Company, volvió a Santo Domingo a comienzos del año 1900, para entrar en contacto con los nuevos gobernantes dominicanos, y negociar alguna convención que le permitiera asegurar las ganancias obtenidas bajo el régimen de Heureaux.

Después de largas entrevistas con las autoridades nacionales, Abbott llegó a un acuerdo con la Comisión designada expresamente para negociar con él, y que estaba integrada por Francisco Leonte Vásquez, Álvaro Logroño y Rafael Abreu Licairac, con quienes concertó un acuerdo contractual, que ponía bajo un nuevo régimen toda la deuda pública dominicana. Este contrato (V. en apéndice documental) estudiado con detenimiento, y ponderando el ambiente político general y el estado económico del país en aquella época, no era tan desastroso como lo calificaron sus opositores.

El artículo 1° del contrato hacía una redistribución de las rentas aduaneras hasta 1903, con el objeto de proporcionar un gran alivio al erario público. El gobierno recibiría para sus gastos un 49% de esas entradas. El 43% para el pago de los cupones y "amortizaciones de las obligaciones de la deuda", 3% para los gastos de la Caja de Recaudación y 5% para los apartados especiales ya comprometidos. El 43% señalado para el servicio de la deuda estaba a su vez distribuido en unidades por el artículo 7°.

El artículo 8° en su parte final establecía que antes de terminar en abril de 1903 la semi moratoria, las partes contratantes celebrarían "un nuevo arreglo para el pago de la parte de la deuda flotante interior y exterior que aún se debiere en esa fecha". El artículo 13° fijaba un término de seis meses para el ajuste de cuentas entre las compañías y el gobierno, por convenios especiales, o en caso de disputa, por medio de una junta de tres árbitros. Esta junta de

árbitros sería elegida uno por cada parte y el tercero "designado de común acuerdo por las mismas partes".

Esta junta arbitral no era tan peligrosa como la que años más tarde dictó el famoso Laudo, a la sombra vigilante del Departamento de Estado de Washington.

Sometido este contrato a la consideración del Congreso Nacional, se abrió un amplio debate en la prensa de todo el país, en pro y en contra, que enardeció los ánimos mucho antes de ser debatido en el seno del alto cuerpo legislativo. Las nacientes rivalidades políticas, con Juan Isidro Jimenes y Horacio Vásquez como objetivos de carácter eminentemente personalista, hicieron un despliegue de agresividad que hizo bambolear al gobierno de Jimenes, empeñado en ribetear de democracia su primera administración ejecutiva.

El 18 de abril de 1900 el Congreso discutió y aprobó el contrato por 13 votos contra 9. Pocas veces se ha hecho en las Cámaras dominicanas tanto derroche de oratoria, y la Gaceta Oficial de esa época inserta más de 10 discursos de los congresistas que intervinieron en diversa forma con sus opiniones al esclarecimiento de los puntos principales que contenía esa pieza contractual.

Uno de los aspectos sobre los cuales ejerció mayor presión la oposición al contrato era la rendición de cuentas por la Improvement y sus compañías aliadas. El artículo 13 de ese contrato estipulaba que

> en el término de seis meses, contados desde el día 1º de Abril de 1900, el gobierno y la San Domingo Improvement harán mutuo ajuste de cuentas de todo lo que entre sí tengan pendiente de arreglo y no esté comprendido en el articulado del presente contrato; y en este mismo período todos los asuntos y cuentas pendientes de arreglo entre el gobierno por una parte y ya sea la San Domingo Finance Co. of New York, el Banco Nacional de Santo Domingo, o la Compañía del Ferrocarril Central Dominicano, por otra parte, serán objeto de consideración a fin de llegar a un arreglo pronto, justo y equitativo.

Como la votación arrojó un resultado de 13 a 9, los diputados oposicionistas alegaron entonces que la mayoría obtenida no era suficiente, porque se trataba de una ley, y que por tanto requería una mayoría de las dos terceras partes de los diputados presentes para ser aprobada. El gobierno dictaminó que no se trataba de una ley, sino de una resolución aprobatoria del contrato con plena validez.

En la sesión del 18 de abril se conocieron diversas protestas contra el contrato. Una de ellas firmada por Emiliano Tejera, Federico Henríquez y Carvajal, Apolinar Tejera y otros ciudadanos. Asimismo llegaron comunicaciones de protesta desde Moca y San Francisco de Macorís.

Uno de los más tenaces opositores a esa contratación, el diputado Carlos A. Mota dijo en una de sus intervenciones:

> El convenio del Ejecutivo con la San Domingo Improvement es una anomalía económico-administrativa, porque a él no ha precedido el indispensable arreglo de cuentas que ha de demostrar de modo cierto y positivo el montante de la deuda pública, dato sin el cual no puede hacerse una distribución de las rentas sobre bases sólidas y justas.[45]

Mota recalcó con énfasis, que las estipulaciones del artículo 16 sobre la posposición del pago de los intereses de la deuda pública hasta julio de 1903 era un empréstito disfrazado.

El diputado Pelegrín Castillo en su brillante peroración dijo:

> Cuán profundamente apenada se siente el alma con el triste espectáculo que se ofrece hoy al patriotismo de la desventurada Quisqueya ¡Asistimos a la revelación de una historia desgarradora, a la revelación de ese pasado apocalíptico, que no pasa para nuestra propia República; a la revelación de esa enorme deuda amasada con infamias que tiene encadenado y encadenará ¡Sabe Dios cuánto tiempo, el desarrollo económico de la nación![46]

[45]G. O. No. 1346, del 2 de junio de 1900.
[46]Gaceta Oficial, edición citada.

Castillo, que luchaba por la aprobación del contrato tal como había sido redactado por la Comisión, dijo además, que era una resultante de los desastres del pasado, y que muchos que lo combatían ayudaron a crear las condiciones ominosas en que se debatía el país. Agregó:

> El gobierno, empeñado en la redención del país, celebra el único pacto posible con nuestros acreedores, el único pacto que sin aumentar el desdoro nacional, procura al país facilidades de vida, de desenvolvimiento, mientras otras gestiones logren un resultado efectivo de la completa redención económica de la República.[47]

Juan Francisco Guzmán expresó:

> Rechazo el contrato porque mientras el Congreso no sepa la naturaleza y cuantía de nuestras deudas, con la Improvement, la Finance Co., con la Compañía del Ferrocarril Central Dominicano y con el funesto Banco Nacional, con todos esos abismos abiertos donde se precipitan nuestras fuerzas vitales, considero inaceptable dicha convención y juzgo más patriótico permanecer en el *status quo* actual percibiendo el modesto presupuesto que hasta hoy ha llenado las cargas de nuestra Administración Pública, mientras tendiendo la mirada a otros centros económicos más propicios tal vez a nuestro porvenir, reanudando patrióticos esfuerzos y desarrollando energías lleguemos a obtener de nuestros más fuertes acreedores otro convenio que despeje finalmente nuestro horizonte económico y nos libre de la vergonzosa tutela de la amenazadora Improvement que con este contrato acentuamos más y más todo por obtener una espera de tres años al término de los cuales volverán las necesidades políticas que se invocaron ayer y que se invocan hoy a uncirnos, tal vez para siempre al carro de esa tiranía exótica y terrible, en cuya faz acaso se dibuje en estos momentos una sonrisa trágica y siniestra.[48]

Aprobado y promulgado, el discutido contrato entró en vigencia inmediata, en cuanto a la forma de recaudación y distribución de

[47]Ibídem.
[48]G. O. No. 1374 del 9 de junio de 1909.

las rentas aduaneras. Pero el artículo 4 del mismo estipulaba, como asunto fundamental y de carácter resolutorio, que la compañía americana obtendría el consentimiento de los tenedores de bonos, para la suspensión hasta 1903, del pago de los cupones vencidos recibiendo a cambio certificados que devengarían interés al 4% desde la fecha del vencimiento de los cupones.

La primera protesta extranjera se recibió de Bélgica. El ministro de Relaciones Exteriores de aquel país, Monsieur Favereau, telegrafió en fecha 25 de agosto del 1900 al cónsul de su país en Santo Domingo, manifestándole que los Comités de Tenedores de Bonos en Amberes y Bruselas, poseedores a esa fecha de una cantidad de £1,400,000 del empréstito de 2¾%, rechazaban el contrato, y anulaban todos los mandatos de representación tan indebidamente usados por la Improvement. Al mismo tiempo Favereau informaba que los referidos comités pedían al gobierno dominicano el envío de delegados a Europa para examinar con los representantes oficiales de los tenedores de bonos proposiciones de arreglos equitativos.

Pero en esta negociación sucedió algo pintoresco. Antes de que se recibiera la protesta belga, el gobierno había realizado un nuevo empréstito, tomando como base una de las consignaciones del contrato. Del 43% asignado para el servicio de "amortización de obligaciones de la deuda" se destinaban seis unidades a favor del gobierno para el pago de reclamaciones y gastos de la revolución del 26 de julio. Sin perder tiempo, el gobierno negoció un empréstito con W. Thorman, comerciante alemán residente en Santo Domingo, por $300,000, que recibió en diversas partidas, afectando las referidas seis unidades para su cancelación. Es decir, los políticos tenían urgencia en cobrar sus pitanzas.[49]

[49]Memoria del Ministerio de Hacienda del año 1900.

MISIÓN DE RAFAEL ABREU LICAIRAC

Rafael Abreu Licairac era uno de los hombres más ilustrados y competentes de su tiempo en la República Dominicana. Fino escritor y poseedor del idioma francés a perfección, era candidato ideal para el desempeño de misiones diplomáticas importantes. Ligado al contrato de abril por su directa intervención, fue seleccionado por el gobierno dominicano como Agente Fiscal en Europa, encargado de obtener la aquiescencia de belgas y franceses al combatido contrato.

No conocemos las instrucciones que recibió, pero sí varias comunicaciones suscritas por él desde Europa. El día 6 de agosto de 1900 fue recibido en audiencia confidencial por el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Monsieur Delcassé, exponiéndole en detalle la situación dominicana. El 13 de septiembre fue recibido en Bruselas por Favereau, Ministro de Asuntos Extranjeros, al cual sometió un extenso memorándum acerca de las conveniencias de aceptar el contrato del 18 de abril. En una comunicación dirigida al ministro de Relaciones Exteriores dominicano, fechada el 15 de ese mismo mes, le dice: "que su mayor empeño era cumplir la parte de sus instrucciones que decían: "Prestar su concurso para llevar a término el contrato celebrado con la Improvement".

Abreu Licairac no tuvo éxito en sus propósitos y el contrato continuó siendo rechazado por los belgas y franceses que se le unieron más tarde en la protesta, y el gobierno se apresuró a tomar medidas para que la Improvement no cometiera nuevos desafueros. En fecha 13 de septiembre de 1900, don Álvaro Logroño, Ministro de Hacienda y Comercio interino, dirigió una comunicación al director general de la Caja de Recaudación en Santo Domingo, manifestándole que

> el gobierno cree de su deber y de su decoro declarar que todas las sumas que hayan sido recaudadas desde el 1ro. de abril del presente año, y las que lo sean en lo adelante, deben permanecer en depósito

> en las cajas de la Oficina Central de la Recaudación hasta que quede definitivamente establecido si las condiciones fundamentales del contrato han sido cumplidas de modo que su vigencia pueda ser legalmente declarada.[50]

Logroño se dirigió entonces a Mr. Abbott en 22 y 25 de octubre, exigiéndole la rendición de cuentas, sin considerar el plazo máximo que fijaba el contrato de abril, habida cuenta de que "el gobierno no ha podido ni puede considerar en estado de vigencia y de ejecución legal el mencionado contrato".

El 28 de diciembre continuó Logroño sus actividades dirigiéndose al Congreso Nacional, para informarle de los prospectos del gobierno en relación a la validez del contrato de abril, que había sido rechazada por los principales acreedores europeos.

> El gobierno ha creído prudente, decía Logroño en su comunicación, después de haber oído la opinión de un gran número de abogados y de hombres públicos notables que para el caso fueron consultados, esperar que los mismos tenedores de bonos que niegan su aprobación al contrato de abril y "retiran todo poder a la Improvement" precisaran su acción en la forma que en tal caso corresponde; pues que en el asunto, lo único que directamente necesita saber el gobierno es si es un hecho cierto, indubitable y permanente, que los tenedores de bonos dominicanos en su mayoría repudian el contrato de abril.[51]

Más adelante expresaba que había "llegado el momento de tomar diligentemente algunas medidas, y tratar de hacer aceptar por parte de todos los grupos de acreedores un plan general que resguarde los intereses de todos ellos, en la medida de lo posible" y solicitaba finalmente a nombre del Ejecutivo, "la necesaria autorización para hacer las erogaciones que el caso requiere".

[50]Of. 797, Libro 117, del Ministerio de Hacienda y Comercio.
[51]Labro 117, de Isa Secretaria de Hacienda y Comercio, pp. 343-45.

MISIÓN DEL DOCTOR HENRÍQUEZ Y CARVAJAL
CONTRATOS DE 1901

El doctor Francisco Henríquez y Carvajal era uno de los hombres más prominentes que actuaban en el gabinete del presidente Jimenes. Desempeñaba con altura y patriotismo la cartera de Relaciones Exteriores, y era uno de los que con mayor ahínco trabajaban en la solución de los problemas financieros que agobiaban al Estado dominicano. Patriota integérrimo y ciudadano por encima de las pasiones y los intereses políticos que comenzaban su feroz pelea, fue utilizado para el desempeño de una de las misiones más delicadas que podía encargársele a un dominicano en ese momento: tratar directamente con la Improvement y los acreedores europeos. Para esta escabrosa misión fue designado con la calidad de agente fiscal del gobierno de la República Dominicana en los Estados Unidos y en Europa.

Al iniciarse el año 1901 la situación general continuaba agudizándose. Entonces fue cuando el presidente Jimenes dictó su trascendental resolución ejecutiva, suspendiendo a la Caja General de Recaudación en sus funciones de receptoría de las rentas aduaneras de la República. El 10 de Enero de 1901 Jimenes firmaba esta Resolución que Henríquez y Carvajal calificó más tarde de "heroico acto de autoridad". Esta orden presidencial se apoyaba en que la Improvement "no había demostrado que ha obtenido el consentimiento de la mayoría de los tenedores de bonos dominicanos, de conformidad a lo estipulado en la 4ta. cláusula del contrato sancionado por el Congreso Nacional en fecha 18 de abril del año pasado". La tajante resolución que pudo ser el inicio de tácticas enérgicas para la resolución de tan graves problemas dice así:

JUAN ISIDRO JIMENES,
Presidente Constitucional de la República.

Atendiendo: a que hasta la fecha de hoy la San Domingo Improvement Company of New York, no ha demostrado que ha obtenido el consentimiento de la mayoría de los tenedores de bonos

dominicanos, de conformidad a lo estipulado en la 4ta. cláusula del Contrato sancionado por el Congreso Nacional en fecha 18 de Abril del año pasado.
Atendiendo: a que, por otro lado, los Comités de Amberes y de Bruselas, a nombre de los tenedores de bonos belgas y por conducto de Su Excelencia el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, han hecho conocer al Gobierno dominicano que una mayoría de los mismos tenedores de bonos 2-¾% (4% diferido), lejos de prestar su consentimiento al mencionado contrato, protestan contra su ejecución, apoyando su protesta sobre un valor de £2,025,230.
Atendiendo: a que, a esa protesta se agrega la de los tenedores franceses de bonos dominicanos (4%), representados por la "Asociación Nacional de portadores de bonos" y por un valor de 750,000 dollars, según su declaración.
Atendiendo: a que, según la 7a. cláusula del antedicho contrato, las 43 unidades que se destinan a la amortización de la deuda flotante interior, a la de la misma Improvement Company, al aumento del Presupuesto de Gastos Públicos de la Nación, y al pago de la deuda de la Revolución e indemnizaciones internacionales, no deben ser distribuidas sino cuando la Improvement haya demostrado que ha obtenido el consentimiento de la mayoría de los tenedores de bonos.
Atendiendo: a que, a pesar de ser tan explícita la cláusula 7a. referida, la Caja de Recaudación ha procedido al reparto de las unidades obligadas al pago de las deudas flotantes interior y exterior, sin duda por estar persuadida la Improvement de que podría demostrar la existencia del hecho a que está subordinada la ejecución de la referida cláusula.
Atendiendo: a que, en vista de ello, el Gobierno declaró, desde el día trece de Setiembre último, a la Caja General de Recaudación que los fondos recaudados que no fueran los destinados a los gastos de la Administración Pública, deben permanecer depositados en la misma Caja de Recaudación hasta que pudiere ser declarada la vigencia legal del contrato.
Atendiendo: a que los tenedores de bonos reclaman al Gobierno dominicano que sus intereses sean resguardados.
Oído el parecer del Consejo de Secretarios de Estado,

RESUELVE:

Art. lo. Desde la promulgación de la presente Resolución, los Administradores de Hacienda percibirán directamente todas las entradas

fiscales de la República. Separarán el valor que represente el aumento de los Derechos de exportación que se destina a la amortización de billetes del Banco Nacional, cuyo valor ingresará en la Contaduría General de Hacienda para ser entregado a la Junta Incineradora. Y dividirán el resto de las entradas en dos porciones: una de 54 unidades, sobre las cuales está basada nuestra Ley de Gastos Públicos, y cuya inversión se hará conforme a dicha Ley, y a las Resoluciones o decretos que rijan en el caso; y otra de 46 unidades, que será entregada a la Comisión de que se habla en el artículo siguiente.

Art. 2o. Se instituye una Comisión de Honorables, con el encargo de recibir y conservar en depósito los valores que habrán de servir o para el pago de las deudas flotantes o para el de los intereses de los tenedores de bonos.

Art. 3o. Esta Comisión se compondrá de los señores comerciantes don José Martín Leyba, Cónsul de Holanda; don Francisco Aybar, Cónsul de Bélgica; don Juan Antonio Read, Vice-Cónsul de los Estados Unidos; don Alexis Licairac y don Emiliano Tejera.

Art. 4o. Esta Comisión dispondrá cuanto juzgue conveniente para la organización de su servicio, cargando los gastos que resulten a cuenta de la República.

Art. 5o. Dicha Comisión entregará mensualmente $2,500 a la Caja General de Recaudación para el pago de sus empleados. Abonará también a quien fuere de derecho los valores que correspondan a los diferentes apartados.

Art. 6o. El Ministro de Hacienda y Comercio queda encargado de hacer cumplir exactamente la presente Resolución.

Dada en el Palacio Nacional de Santo Domingo, a los 10 días del mes de Enero de 1901.

J. I. Jimenes.

Refrendada: El Ministro de Hacienda y Comercio. El Brache hijo.[52]

Cinco días después, el ministro de Hacienda y Comercio, don Elías Brache hijo, remitía un pliego de instrucciones al doctor Francisco Henríquez y Carvajal, "para el mejor desempeño de la misión que le lleva a los Estados Unidos de América y Europa".

[52]Gaceta Oficial, Año XXVII, Santo Domingo, 12 de enero de 1901, Núm. 1878, Sección Primera.

Por esos mismos días se produjo la primera intervención directa del gobierno de los Estados Unidos en el embrollo de la Deuda Pública dominicana. Aunque las compañías acreedoras habían tratado en ocasiones anteriores de obtener la protección de su gobierno, éste siempre había rehusado. La Resolución del 10 de enero impulsó al secretario de Estado Hay a intervenir en el asunto. Mr. Hay se dirigió por cable al cónsul general norteamericano Mr. C. L. Maxwell, pidiéndole detalles sobre esta medida del presidente Jimenes, pues el gobierno norteamericano se disponía a actuar para proteger los intereses de sus nacionales.

Esta amenaza apresuró el viaje del doctor Henríquez y Carvajal. Las instrucciones que había recibido le trazaban una pauta a seguir en sus negociaciones con tan diversos acreedores. Este importante documento, que señala el pensamiento del gobierno dominicano en relación con la Improvement y sus fraudulentas operaciones, lo intercalamos íntegro en este mismo texto, fuera de la sección documental, porque es pieza clave de todo el proceso que culmina más tarde con la Convención de 1907.

Dice así:

> 26 de Enero de 1901.
>
> Señor Ministro:
>
> Me complace acompañar a V. el pliego contentivo de las Instrucciones que en lo que concierne a la parte económica, debiera seguir V. para el mejor desempeño de la importante misión que, en honor de sus aptitudes y merecimientos se ha servido confiarle el Gobierno de esta República.
> Observará V. que omito instrucciones para en caso necesario litigar judicialmente en nombre de la República contra la San Domingo Improvement Company of New York y contra la Finance Company. Esto así porque el Poder Ejecutivo estima que para ese fin no son bastantes instrucciones directas de esta Secretaría de Estado, sino que habrá menester V. dé un poder en forma auténtica que lo capacite legalmente para los fines judiciales antedichos. Como a la iniciación de una acción judicial deberán proceder por parte

suya los mayores empeños por solucionar los asuntos que se le han confiado de otro modo que no sea judicialmente, tiene V. tiempo bastante a su disposición para indicar al Gobierno la necesidad de que se le provea del poder auténtico; en cuyo caso le será remitido sin pérdida de tiempo.
Con mis más sinceros deseos de que un éxito cabal corone sus empeños para bien de la República y para satisfacción de sus patrióticos anhelos, le saluda afectuosamente,

El Ministro de Hacienda — *E. Brache hijo.*

INSTRUCCIONES a que deberá sujetarse el Doctor D. Francisco Henríquez y Carvajal, Ministro de Relaciones Exteriores y Agente Fiscal del Gobierno Dominicano, para el mejor desempeño de la misión que le lleva a los EE.UU. de América y de Europa:
1a.—Tratará de ponerse en contacto con Delegados de los Comités de Amberes, Bruselas y aun de la Asociación de Tenedores franceses de Bonos Dominicanos que venga a New York, y de impulsarles, de una vez, a que intenten una acción contra la Improvement, y pidan el embargo de las 32 unidades destinadas al pago de las deudas flotantes y de la Improvement. La acción de los Comités debe ser encaminada a derrocar a la Improvement de su calidad de Trustee en cuanto a los Tenedores de Bonos 2 ¾%, de modo que quede establecido judicialmente que el Gobierno Dominicano pueda pactar directamente con los representantes de esos Tenedores, sin tener en cuenta a la Improvement, a no ser que ésta sea mantenida por los Tenedores de Bonos, y deba figurar en el arreglo general que se lleve a cabo con todos los acreedores.
2a.—Deberá intentar un arreglo general con los Tenedores de Bonos, según el cual el interés anual de nuestra deuda durante cuatro años sea reducido a la mitad, expidiéndose certificados por la otra mitad, los cuales serán capitalizados y gozarán de un interés de 4%, debiendo ser amortizados en el término de diez años, que se contarán a partir de la expiración de los 4 primeros años.
También tratará de obtener que se aplace hasta 1910 el comienzo de la amortización estipulada para los empréstitos actuales.
3a.—Tratará de obtener que los Tenedores de Bonos convengan en que su garantía consista en un tanto por ciento de las entradas aduaneras; asegurándoles que se les conservará la supervigilancia y Control de las Aduanas de la República: pero consintiendo ellos en que todo pago se haga en nuestra Contaduría General de Hacienda,

quitándose a los acreedores toda intervención de los asuntos de la Admon. Pública. El Gobierno Dominicano deberá conservar toda su independencia en cuanto a facultad de legislar sobre asuntos económicos y sólo deberá comprometerse a suministrar la suficiente garantía de pago a sus acreedores, si por algún motivo se viere precisado a introducir modificaciones en la forma o en la cuantía de los impuestos públicos.

4a.—Deberá hacer diligencias en el sentido de averiguar si es posible combinar alguna operación financiera, por medio de la cual pueda convertirse la deuda actual en una nueva deuda que reduzca la primera a un 50 o a un 60% de su montante actual.

5a.—En cuanto a la Improvement, deberá intentar un entendido final con esta Compañía, encaminando a pagarle sus créditos, si los tiene y sus derechos sobre ferrocarril o cualquiera otros que legítimamente invocare, en una forma racional y posible, obligándole un tanto por ciento, o pagándole al contado, mediante un empréstito contratado sobre el mismo tanto por ciento que se destinare a aquel fin.

6a.—Podrá admitir que en el arreglo general que el Gobierno Dominicano intente sean comprendidas todas aquellas personas que tuvieren créditos contra la Improvement, retuvieren en cambio y en prenda Bonos de la República y quisieran pasar a ella sus créditos y su garantía mediante un arreglo con el Gobierno.

7a.—El arreglo general arriba mencionado debe partir de la siguiente base: que el Gobierno Dominicano necesita para su presupuesto de cincuenta y cinco a sesenta por ciento de sus entradas; que la Deuda Extranjera sea garantizada con un treinta por ciento, y distribuyéndose ésta entre los diversos grupos de acreedores, que un cinco por ciento sea destinado a la Deuda Flotante interior, más el excedente que resulte en la Deuda Exterior y un cinco por ciento a la Deuda Pública Interior.

8a.—Llevará una Cuenta pormenorizada de los gastos que su misión comportare para en su día informar al Congreso Nacional de la inversión dada a la suma votada por él según Resolución del día 11 del mes en curso, para dar solución satisfactoria al conflicto suscitado entre el Gobierno, la Improvement y los Tenedores de Bonos de la Deuda Dominicana.

Santo Domingo, Enero 15 de 1900.

El Ministro de Hacienda — *E. Brache hijo*.[53]

[53]Libro copiador 117, Ministerio de Hacienda.

La misión del doctor Henríquez era harto difícil. En primer término la confusión en el estado de la deuda no permitía una clarificación rápida como lo exigían las circunstancias políticas del país. Y, segundo, la oposición al gobierno del presidente Jiménez, no tenía otras miras que dificultarle toda gestión que le diera prestancia a los ojos de la nación.

Como la resolución ejecutiva del 10 de enero quitaba a la Improvement su derecho a recaudar las entradas aduaneras, esta compañía mantenía su actividad en el Departamento de Estado, presentando con caracteres sombríos la situación dominicana. El doctor Henríquez, antes de iniciar en firme sus gestiones, tuvo necesidad de despejar las prevenciones existentes en Washington. Para conseguir este objetivo sostuvo laboriosas entrevistas con el subsecretario de Estado Hill.

Soslayados los problemas que pudieran surgir con el gobierno norteamericano, el doctor Henríquez negoció con la Improvement y firmó el 25 de marzo, un contrato colectivo con los presidentes de las compañías San Domingo Improvement Co., San Domingo Finance Co., The Company of the Central Dominican Railway, la Banque Nationale de Saint Domingue, que formaban en conjunto el fatídico cortejo de la Improvement. Este contrato (Véase documental), es a nuestro juicio lo mejor que pudo conseguirse en ese momento. La Improvement reconocía en primer término la anulación del contrato del 18 de abril. Por el artículo 4o. en su primera parte, la Improvement y sus compañías aliadas renunciaban "a todos los derechos y privilegios que le han sido otorgados en las leyes y contratos anteriores a la fecha de hoy". El punto más espinoso, la rendición de cuentas, quedaba fijado en el artículo 5o. La Improvement y sus compañías aliadas se comprometían a rendir sus cuentas tres meses después de aprobado el contrato por el Congreso Nacional. Sin embargo, la redacción del artículo 6o.

fue objeto de vigorosos ataques tan pronto fue hecho del dominio público. Decía en su parte capital ese artículo: "ambas partes, con el objeto de que tanto la Improvement Company como las demás compañías se retiren del país, convienen en entrar en negociaciones encaminadas a arreglar amistosamente, sobre una base equitativa, todas las cuentas, reclamaciones y diferencias que entre las partes existan". Esa estipulación sobre *bases equitativas* se consideraba una renuncia tácita a los derechos dominicanos, porque el mismo artículo en su parte final establecía que esa frase permitía incluir en las cuentas los gastos "hechos por las compañías en interés de la República y con propósito de asegurar un buen mercado y dar crédito a los bonos de la misma. La proporción de tales gastos que pueda ser imputada al gobierno, será determinada, o por el arreglo amistoso o por el fallo de los árbitros".

El artículo 7° es muy interesante porque establecía la creación del tribunal arbitral, para decidir sobre toda diferencia que pudiera surgir en el curso de las negociaciones futuras decidiendo definitivamente "sobre una base equitativa". En ese fallo, predecía la oposición, no habrá equidad, sino imposición unilateral de todas esas cargas injustas sobre el erario dominicano.

Algo singular en las estipulaciones de este artículo era la composición del Tribunal de Arbitraje. Disponía que un árbitro debía ser nombrado por el gobierno dominicano y otro por el de los Estados Unidos. El tercero quedaba a opción del gobierno dominicano, que estaba obligado a escoger entre el presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos, o un juez del Circuito de Apelación del mismo país. En caso de inconvenientes para llegar a esta selección, el gobierno dominicano estaba entonces obligado a recurrir solo, o en unión del gobierno de los Estados Unidos, ¡ante Su Majestad el Rey de Suecia para que hiciera la tercera designación!

La decisión de este tribunal arbitral sería inapelable. Las duras consignaciones de este contrato regulaban el procedimiento de ejecución y reglamentaban las normas a las cuales tenían que ceñirse las partes.

Si nos situamos en ese momento histórico, con objetividad crítica, sacaremos en conclusión que ese contrato era una solución de emergencia, y que su parte más vulnerable era la del arbitraje. La división política interna no permitía la organización de un frente unido para la defensa de los intereses nacionales. Cualquier arreglo, por ventajoso que fuere, sería siempre objeto del ataque de los políticos inescrupulosos, dándose el caso de que, funcionarios que coadyuvaron en el régimen de Heureaux a producir este desastre, eran los que con mayor arrogancia pregonaban su protesta contra toda negociación con la Improvement.

Hoy, contemplado el problema con 50 años de distancia, y transformado el panorama nacional por una realidad diametralmente opuesta a la que vivieron aquellas generaciones dominicanas, puede considerarse que dejar a una comisión arbitral bajo la influencia norteamericana la decisión final sobre las fraudulentas negociaciones de la Improvement era muy peligroso. Pero en ese momento no había escape posible a la red que el gobierno de Washington había empezado a tender en torno a la soberanía nacional. Esa comisión dictaría un fallo inapelable si no se llegaba a un acuerdo amistoso sobre bases equitativas. Ese fallo inexorable tendría el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, en última instancia.

La vigorosa oposición de que fue objeto ese contrato, señalada en la importante serie de artículos de don Hipólito Billini y de don Francisco X. Amiama, era la expresión de un sentimiento popular exacerbado por el odio más profundo a la Improvement, que en connivencia culpable con Ulises Heureaux había estafado al erario nacional hasta sumirlo en la ruina.

Consideraban los tenaces opositores a esta negociación que ineluctablemente el fallo arbitral favorecería a las compañías norteamericanas, y hasta se llegó a decir en la prensa, que el rey de Suecia, cuando le llegara la hora de designar al tercer árbitro, tendría problemas en averiguar qué cosa era la República Dominicana. El criterio casi unánime de los dominicanos era que la Improvement y sus compañías aliadas debían presentar sus cuentas, para discutirlas y fijar la cuantía de la deuda, antes de entrar en cualquier arreglo convencional. Pero la Improvement no rendiría jamás sus cuentas en detalle, porque eran la historia del fraude más grosero de que ha sido víctima un país americano.

El licenciado F. Leonte Vásquez, cónsul general dominicano en Nueva York, se mostraba en su correspondencia opuesto al contrato pactado por el doctor Henríquez. En marzo de 1901 informaba que la compañía Germán American Investement, había pedido a los tribunales norteamericanos, que pusieran en manos de un Síndico tanto a la Improvement como a la Finance Co. Mr. Wells, funcionario de ambas compañías alegaba que el contrato recién firmado con el gobierno dominicano era una garantía para todos los interesados en estas operaciones.

El doctor Henríquez y Carvajal, tan pronto terminó sus gestiones en los Estados Unidos, siguió rumbo a Europa, donde tendría que negociar nuevos acuerdos con belgas y franceses, ya bastante exasperados por los diversos chascos sufridos en cada negociación anterior.

Después de una laboriosa tarea el doctor Henríquez llega a un acuerdo con los Comités de Tenedores de Bonos dominicanos en Bélgica y Francia, que fue considerado satisfactorio por la mayoría del pueblo dominicano. En esta aceptación había una razón sentimental: los dominicanos consideraban a los inversionistas belgas, principalmente, víctimas de una estafa tan grosera como

la que Hartmont realizó en 1869. Las condiciones obtenidas con estos acreedores fueron mejores que con "los capitalistas yanquis". El 3 de junio de 1901, firmó el doctor Henríquez en Amberes y en París, el contrato que la injerencia norteamericana echaría más tarde por el suelo.

El acuerdo con belgas y franceses estaba acoplado, como era natural, al concertado con las compañías norteamericanas. Ofrecía las consabidas garantías de las rentas aduaneras, el control de las recaudaciones por representantes de los tenedores de bonos y una serie de obligaciones para asegurar el fiel cumplimiento de la contratación (véase en apéndice).

El Congreso sancionó este contrato pero rechazó el de la Improvement en una caldeada atmósfera de agitación pública. El doctor Henríquez y el licenciado Elías Brache hijo, Ministro de Hacienda y Comercio, asistieron a las sesiones del Congreso, para prestar su apoyo a los acuerdos que había sometido el Poder Ejecutivo. En la sesión celebrada el lo. de octubre de 1901, tras acalorados debates, fue rechazado por 17 votos contra 6. Los ministros Henríquez y Carvajal y Brache hijo presentaron sus renuncias, actitud que fue secundada por todos los miembros del gabinete del presidente Jimenes. A petición de este mandatario todos continuaron en sus puestos, con excepción del doctor Henríquez, que se negó a retirar su renuncia, siendo designado para su cargo el señor don Eliseo Grullón.

El gobierno de Jimenes maniobró entonces al compás de la opinión pública y se puso de frente a la Improvement, para presionarla en el sentido de que rindiera las cuentas tan solicitadas en todos los tonos.

El ministro de Hacienda y Comercio, don Elías Brache hijo, dirigió una comunicación al presidente de la Improvement, que dice así:

Santo Domingo, Oct. 19 de 1901.

Sr. Don Smith W. Weed,
Presidente de la San Domingo
Improvement Company of N. York,
New York.

Señor Presidente:

El Congreso Nacional resolvió en su sesión de fecha 30 del mes de Septiembre, (*) retropróximo, rechazar en principio el contrato pactado ad-referéndum en esta ciudad el día 25 de Marzo del corriente año entre Ud. a nombre y en representación de esa respetable Compañía y Doctor Don Francisco Henríquez y Carvajal, Ministro de Relaciones Exteriores en Misión Especial y Agente Fiscal en representación del Gobierno de esta República.
Al comunicar a Ud. esa resolución, me honra notificarle que el Ejecutivo Nacional, inspirándose en el temperamento que ha privado en la Cámara en ocasión de discutir el referido contrato, ha resuelto a su vez, no iniciar ningún otro arreglo sin que esa Compañía haya efectuado una rendición general de cuentas que deje perfectamente establecida su situación respecto del Gobierno Dominicano.
En esa virtud le invito cortésmente a dar cumplimiento a ese acuerdo, en interés de llegar, en el más corto plazo posible, a un arreglo justo y definitivo.
Saludo a Ud. con sentimientos de distinguida consideración,

El Ministro de Hacienda y Comercio,
(Firmado) E. Brache hijo.[54]

A los términos de esta comunicación el vicepresidente de la Improvement, Mr. John T. Abbott, respondió con una extensa comunicación fechada en Nueva York el 14 de noviembre de 1901. Con la misma táctica con que envolvieron en todas sus negociaciones al presidente Heureaux, Abbott trataba de echar toda la culpa de los desastres al gobierno dominicano, y presentaba a su corporación como una víctima propiciatoria. Decía el singular

*Fue el 1ro. de octubre.
[54]Listín Diario No. 3693, 25 de noviembre 1901.

aventurero de las finanzas que "las cuentas no han constituido jamás una dificultad entre las partes". Continuaba defendiéndose hábilmente manifestando que la Improvement no ponía obstáculos a la rendición solicitada y que ya lo hubiera hecho si el contrato de abril no hubiese sido anulado por la resolución ejecutiva del 10 de enero de 1901, y el contrato de marzo de ese mismo año hubiera sido aprobado.

Insistía en que la compañía había sufrido grandes perjuicios con la incautación de las recaudaciones el referido 10 de enero, y que tenía derecho a recibir las indemnizaciones correspondientes.

Del estupendo fraude que su consorcio cometió con la conversión general de 1897, y las graves estafas cometidas por el Banco Nacional en connivencia con Heureaux, Mr. Abbott no hacía ninguna mención.

La situación de hecho creada por el Congreso al negar su aprobación al desdichado contrato, no presagiaba nada satisfactorio para el país. Del estancamiento en las negociaciones con los acreedores americanos, no se saldría sino para caer en nuevos abismos, bajo la más enérgica presión del Departamento de Estado de Washington.

Sin embargo, las cosas en Europa marchaban más o menos bien. Cuando el doctor Henríquez regresó de su misión, en el mes de agosto, quedó interinamente encargado de los asuntos fiscales del país el señor Lucas T. Gibbs, que había sido su colaborador en París. En septiembre de 1901 Gibbs fue designado Agente Fiscal de la República en Europa. Por sus continuas y minuciosas comunicaciones, existentes en el Archivo Nacional, se evidencia que ejerció fielmente sus delicadas funciones.

El Banco de Amberes fue designado para el servicio de la deuda en Bélgica, Holanda y Alemania. El Credit Lyonnais se encargaría del servicio con los acreedores franceses e ingleses. Las finanzas de

ningún país, han recibido jamás un asedio tan formidable, como las del nuestro en aquellos días aciagos, cuando todas las potencias de la tierra lo acosaban en cobro de sumas que jamás sirvieron para el beneficio de la nación.

En uso de los derechos que le confería el artículo 4o. de su contrato, la asociación belga para la defensa de los portadores de bonos, designó como Agente General en Santo Domingo a Mr. Willem Willems, quien ejerció durante algunos años sus funciones.

CAÍDA DEL GOBIERNO DE JIMENES
MISIÓN DEL MINISTRO POWELL. PROTOCOLO DE 1903

La enconada polémica pública que acarreó el contrato con la Improvement preparó la caída del presidente Jimenes. En el fondo de toda esa oposición latía un sentimiento político partidista, que desencadenaría más tarde su alud de fuego sobre todo el país.

Para colmar los problemas del gobierno se presentó en Santo Domingo Mr. William F. Powell, Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos en Haití, y Encargado de Negocios ante el gobierno dominicano. Powell venía de su residencia de Puerto Príncipe con instrucciones del secretario de Estado Hay para intervenir en el affaire de la Improvement y llegar a un acuerdo satisfactorio. Le acompañaba el impenitente Mr. Abbott, vicepresidente de esa compañía.

Pero el 26 de abril de 1902, el general Horacio Vásquez, Vicepresidente de la República y Delegado del gobierno en el Cibao, inició el movimiento revolucionario que puso fin a la primera administración de Juan Isidro Jimenes. Establecido un gobierno provisional bajo la presidencia del general Vásquez, las negociaciones con el ministro Powell continuaron a cargo de don Emiliano Tejera, Ministro de Hacienda y Comercio, y de don Juan Francisco Sánchez, Ministro de Relaciones Exteriores.

El 31 de enero de 1903 estas laboriosas negociaciones culminaron con un acuerdo firmado por Juan Francisco Sánchez y

William Powell, que a la postre resultó más lesivo a los intereses nacionales que los contratos de 1900 y 1901. Aquel enconado grito de guerra "Que rindan las cuentas" que había aturdido al presidente Jimenes, se olvidó entonces a la hora de pactar con el enviado norteamericano. La situación general del problema quedaba modificada radicalmente en prejuicio del pueblo dominicano, que se vería impotente para luchar por la reivindicación de sus derechos, no ya contra banqueros particulares, sino contra el propio gobierno de los Estados Unidos. La Improvement que había mantenido siempre su condición de trustee de los tenedores de bonos extranjeros, había puesto sus reclamaciones en las manos del Departamento de Estado, y por este Protocolo, se reconocía como hecho natural la injerencia ominosa de aquel gobierno en la solución de las diferencias fundamentales que impedían un acuerdo directo entre la compañía y el gobierno dominicano. La oposición al contrato de 1901 argumentaba que la concertación de ese acuerdo sin una previa rendición y examen de todas las cuentas de la compañía, era una renuncia tácita a los derechos de reclamación contra la naturaleza fraudulenta de muchas de esas operaciones que originaron el crecido volumen de esa deuda, especialmente de la conversión del 9 de agosto de 1897 donde la compañía había escamoteado casi un millón de libras esterlinas, sin informar jamás su paradero. Pero el Protocolo de 1903, más que una renuncia, era una entrega absoluta de todos los derechos nacionales, como se evidenció más tarde. El país continuaba avanzando hacia la pérdida de su soberanía.

El artículo lo. de ese convenio establecía que el gobierno dominicano pagaría al de los Estados Unidos (No a la Improvement y sus aliadas) la suma de $4,500,000 por las reclamaciones de la San Domingo Improvement y sus aliadas. Las condiciones de cómo se realizaría ese pago serían fijadas por una comisión de tres árbitros. Es

decir, que el arbitraje era para fijar la forma de pago. Ese dictamen tendría carácter de imposición para el gobierno dominicano.

Este convenio fue objeto inmediato de enconados ataques, pues se consideraba altamente lesivo para los intereses nacionales. El jimenismo, convertido en oposición tomaba la revancha. En todo este naufragio del patriotismo, sólo la patria dominicana sufría las consecuencias desastrosas de una pugna política sin ideales.

REVOLUCIÓN DEL 23 DE MARZO. REVOLUCIÓN DE LA UNIÓN

El 23 de marzo de 1903 un audaz golpe de mano que tuvo como centro principal el recinto de la Fuerza, derribó al gobierno provisional del general Vásquez. Poco después se instalaba un nuevo gobierno bajo la presidencia del general Alejandro Woss y Gil. Asesorado por don Manuel de Jesús Galván, su ministro de Relaciones Exteriores, Woss y Gil se opuso a darle vigencia al Protocolo de Enero, aduciendo que se trataba de la obra de un gobierno de facto, a la cual le faltaba la validación constitucional que sólo el Congreso Nacional podía otorgarle y propuso alternativamente, al enviado americano, que fuera sometido a ese trámite constitucional.

El ministro Powell, que se hallaba en Santo Domingo, suplicó al gobierno con la mayor cortesía, que le informara si rehusaba nombrar sus árbitros y si no reconocía de manera explícita el convenio firmado el 31 de enero de ese año.

Un nuevo movimiento armado vendría a atizar aún más el fuego de las pasiones políticas. El 24 de octubre de 1903 se inicia en Puerto Plata el movimiento revolucionario conocido por "La Unión", dirigido por Carlos F. Morales Languasco, gobernador de aquella provincia, y que pocos días después puso estrecho cerco a la ciudad de Santo Domingo, donde el presidente Woss y Gil resistía, además, el poderoso sitio que le tendía el ministro Powell, quien había participado a este gobernante la ruptura de las relaciones

diplomáticas entre Estados Unidos y la República Dominicana. Para obviar esta grave contingencia el presidente Woss y Gil dictó un decreto en fecha 14 de noviembre, designando a don Manuel de Jesús Galván como árbitro dominicano y dar cima a la ejecución total del Protocolo de enero. El "arbitraje" quedaba en evidencia.

El desamparo absoluto en que se encontraba el gobierno dominicano, cual que hubiese sido en ese momento el presidente, a merced, puede decirse, de las imposiciones yanquis, se revela en el pliego de instrucciones que se le entregaron a Galván. No eran en realidad las instrucciones que recibe un diplomático para tomar como pauta en sus negociaciones, sino más bien un estimulante moral para su patriotismo ante las difíciles circunstancias en que se le encomendaba esa misión. En uno de sus párrafos acusadores esa comunicación decía:

> La suspensión de relaciones a que llegó el gobierno americano en la discusión del asunto que motiva este arbitraje, denota el grande interés y la mucha importancia que el mismo gobierno americano cifra en el éxito del juicio arbitral. Debemos reconocerlo, así, comprendiendo que de esa medida extrema de la suspensión de relaciones, los Estados Unidos no habrían demorado en pasar a vías de hecho funestas para la independencia o para la integridad nacional territorial de la república. Esta consideración apremiante impulsó al Poder Ejecutivo a ceder ante la perentoria exigencia de aceptar la ejecución del Protocolo citado, nombrando inmediatamente nuestro árbitro.[55]

[55]Colección Trujillo, Tomo 15.

CAPÍTULO VI

En las garras de Roosevelt

PRESIDENCIA DE MORALES LANGUASCO
LAUDO ARBITRAL DE 1904

Pocos días después de dictar Woss y Gil el decreto designando a Galván para integrar la Comisión de Arbitraje, firmó también su capitulación. Instalado Morales Languasco como presidente provisional, uno de sus primeros pasos fue gestionar el reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados Unidos. El terrible ministro Powell puso como condición previa al reconocimiento, que el gobierno le presentara una declaración escrita por cuyo medio proclamase definitivamente resueltos, sin derechos a ulteriores reclamaciones, diferentes asuntos de carácter financiero. El presidente Morales accedió a esta exigencia, y sin embargo no fue reconocido, sino algún tiempo después.

Galván contrató como agentes para la defensa de los derechos dominicanos ante la Comisión Arbitral a la oficina de abogados Curtis, Mallet, Prevost & Colt. Estos juristas actuaron con los datos que les suministraba Galván. Éste, sin embargo, según informó más tarde, no recibía los documentos que requería para combatir los alegatos del agente del gobierno norteamericano Mr. John Bassett Moore. La Improvement no tenía representante ante el tribunal. Sus intereses estaban allí muy bien resguardados. La primera sesión

del Tribunal Arbitral se celebró en Washington, fijándose los plazos para la presentación de las defensas y alegatos de las partes.

El 14 de julio de 1904, después de interesantes deliberaciones dictó su fallo la Comisión de Arbitraje, cerrándose así toda esperanza para una negociación más favorable. El Laudo disponía que "los proventos aduaneros y los derechos de puertos y aduanas de Puerto Plata, Sánchez, Samaná y Montecristi", garantizaran el pago de dicha deuda y sus intereses. El gobierno norteamericano quedaba autorizado para establecer un agente financiero en la República con facultades para incautarse de las referidas aduanas en caso de no recibir a tiempo las sumas determinadas, ocupando en primer término la aduana de Puerto Plata. Los intereses sobre la suma total estipulada en $4,500,000 se fijaba al tipo de 4% de interés anual.

La Comisión de Arbitraje traspasó los límites de su jurisdicción, al dictaminar en una forma lesiva para la soberanía de una de las partes, como era la designación de un agente financiero, control de las aduanas, y derecho a intervenirlas en caso necesario. El artículo lo. del protocolo del 31 de enero determinaba de manera categórica que el Tribunal Arbitral fijaría la forma de dicho pago. Esa forma no podía extenderse hasta una intervención abierta.

Actuando con rapidez, el gobierno norteamericano designó como agente financiero en la República a Mr. John T. Abbott, Vicepresidente de la Improvement, poniendo al descubierto la injusta trama urdida contra el país, que se veía ahogado en un mar de reclamaciones absurdas, apoyadas por el más fuerte poder de la tierra. El 29 de agosto de 1904 comunicaba el ministro norteamericano en Santo Domingo, Mr. Thomas C. Dawson, al gobierno dominicano, la designación del conocido líder de la Improvement para este cargo mediatizador.

Melvin M. Knight en su importante obra *Los americanos en Santo Domingo* dice en relación a este nombramiento que "los

comisionados americanos, para el arbitraje de 1904, deliberadamente prepararon el camino para una recaudación parcial, casi, pero no del todo privada, bajo la dirección del vicepresidente de la Improvement Company".

El gobierno nacional, presionado por la opinión pública abiertamente opuesta a la aceptación del laudo, resolvió apelar la sentencia y solicitar su revisión. Juan Francisco Sánchez, Ministro de Relaciones Exteriores, se dirigió al ministro Dawson, haciendo una impugnación casi general de la sentencia, tomando como base las estipulaciones categóricas del Protocolo del 31 de enero, que era la ley a la cual debió ceñirse la Comisión de Arbitraje.

Como era de esperarse, el ministro Dawson respondió comunicando las instrucciones que había recibido de su gobierno. El gobierno de Estados Unidos consideraba que no había lugar a ninguna reclamación sobre el Laudo, sino después de ponerlo en ejecución. Terminaba Dawson su extensa comunicación pidiendo que el agente financiero Abbott fuera puesto en posesión de la aduana de Puerto Plata, puesto que la suma vencida en septiembre no había sido pagada. Las reclamaciones dominicanas tenían, pues, muy negras perspectivas.

El presidente Morales, después de plantear el caso ante el Consejo de Ministros, había resuelto designar una comisión para el estudio del Laudo, compuesta por Emiliano Tejera, Francisco X. Amiama, Manuel de Jesús Aybar y el licenciado Manuel A. Machado. Esta comisión no tuvo tiempo siquiera de estudiar las piezas de tan trascendental negocio, porque bajo la tremenda presión diplomática el gobierno dominicano cedió. La política norteamericana de ese tiempo, dirigida por el impetuoso presidente Teodoro Roosevelt, y caracterizada por una serie de atropellos a los países débiles de la América Latina, no podía dejar lugar a dudas sobre cuál sería la suerte del pueblo dominicano. El 13 de octubre

de 1904, el ministro de Relaciones Exteriores, Sánchez, "asentía a la exigencia de acatar la sentencia del 14 de julio de este año pronunciada en Washington por el Tribunal Arbitral, se reserva, sin embargo, del modo más absoluto y formal, el derecho que le asiste para invalidar, conforme a las reglas del Derecho de Gentes, en el punto controvertido, el expresado laudo".[56]

Como Sánchez no asentía a la entrega de la aduana de Puerto Plata, o cuando menos no trataba ese punto, Dawson volvió a insistir en ello manifestando que suspendía la discusión de estos asuntos hasta que dicha aduana fuera entregada al agente financiero.

El ministro Sánchez puso entonces en conocimiento de Dawson que esa aduana no había sido entregada, porque Mr. Abbott había convenido con el ministro de Hacienda dominicano, entregar $680.00 diarios de su recaudación para atender a los gastos de las provincias de Puerto Plata, Santiago y Moca, y que después de haber sido puesto en práctica ese acuerdo la Improvement había ordenado suspender esas entregas. Y terminaba manifestando de manera categórica que el gobierno había tomado la decisión de retener esa suma y entregar únicamente el exceso que se recaudare, porque de lo contrario se presentaría un grave colapso a la autoridad del gobierno en toda la región del Cibao.

Ante ese agudo problema el ministro norteamericano resolvió poner a su gobierno en autos de la grave crisis financiera del Estado dominicano, y su imposibilidad material de dar cumplimiento fiel al debatido Laudo. Simultáneamente con esas informaciones Mr. Abbott viajaba hacia los Estados Unidos a informar de viva voz los problemas que confrontaba en su misión.

Todo este caos desembocó en un nuevo acuerdo, más oneroso aún para la República Dominicana.

[56]Colección Trujillo, Tomo 15, pág. 66.

LA CONVENCIÓN DE 1905. MISIÓN DILLINGHAM

Al finalizar el año 1904, la situación de la República Dominicana era verdaderamente grave en todos los aspectos. Los gobiernos de Francia, Italia y Alemania amenazaban con desembarcar fuerzas militares en el territorio nacional para el cobro de las acreencias de sus súbditos. Estados Unidos parecía dispuesto a tomarles la delantera. Y mientras todo esto sucedía el pueblo dominicano sólo pensaba en las luchas de partido, como si un inexorable fatalismo lo impulsara a las contiendas fratricidas. La administración del presidente Morales fue verdaderamente grávida en sucesos de gran trascendencia para los destinos de la nación.

Mientras tanto, los países europeos interesados en las finanzas dominicanas, hacían vigorosas representaciones ante el gobierno de Washington, porque consideraban que su intervención en favor de la Improvement había lesionado los legítimos intereses de los suyos. En tal virtud, Washington decidió tomar medidas más importantes, no sólo para defender los intereses que se le habían confiado, sino también, para impedir el estallido de un conflicto con las potencias europeas, por cualquier acción súbita sobre Santo Domingo.

Es interesante señalar que en un breve lapso de días, llegaron a las aguas dominicanas diversos buques de guerra. El Vinetta, alemán; el Giovanni Baussan, italiano; el De Ruyter, holandés; el Tage, francés, y el Atlanta, norteamericano, sin mencionar los que merodeaban en aguas de Montecristi y Puerto Plata.

El 30 de diciembre de 1904, el secretario Hay se dirigió al ministro Dawson, para que informara al gobierno dominicano acerca del desarrollo peligroso de la situación y le pedía enterarse si este gobierno estaba *dispuesto a pedirle a los Estados Unidos que tomaren a su cargo el cobro de los derechos de aduanas y hagan una equitativa*

distribución de las cuotas fijadas entre el gobierno y los diferentes reclamantes.[57]

Después de celebrar Dawson varias entrevistas con el presidente Morales y los ministros Velázquez y Sánchez, informó a su cancillería que el gobierno dominicano estaba dispuesto a solicitar del gobierno de Estados Unidos, que se hiciera cargo de la recaudación de las rentas aduaneras como base para llegar a un acuerdo general sobre la deuda con todos los acreedores, tomando como base una distribución de esas entradas así: 40% de los ingresos anuales para los acreedores; 60% para el gobierno dominicano. Una de las condiciones accesorias que fijaba el gobierno era que Mr. Abbott no fuese designado para dirigir la recaudación. Velázquez trató de insistir para que la recaudación la efectuaran funcionarios dominicanos y norteamericanos en misión conjunta.

El comodoro Albert C. Dillingham era un oficial de la marina estadounidense que conocía algo de los problemas dominicanos, pues había entrado en contacto con ellos desde el año 1904, lidiando nada menos que a los caciques de la Línea Noroeste. Nuevamente fue escogido para una misión de importancia, como era lograr los acuerdos necesarios para poner en manos de los Estados Unidos la recaudación de todos los derechos e impuestos de las aduanas dominicanas. El 5 de enero de 1905 el secretario Hay le comunicó su designación, y le trasmitió amplias instrucciones. El 14 de ese mismo mes llegó a Santo Domingo, y se unió al ministro Dawson para continuar las negociaciones que éste había iniciado con los ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores del gobierno dominicano. El 15 fue recibido por Morales en entrevista privada, pero éste, que se sostenía en falso equilibrio en medio de la pugna de horacistas y jimenistas, propuso que Dillingham

[57]"Foreign Relations" 1905, pág. 298.

asistiera a una recepción formal de carácter público, que sirviera a los ojos del pueblo, para mejorar el prestigio político del gobierno. El 17 de ese mes fue recibido Dillingham con gran solemnidad en el Palacio Nacional, por el presidente Morales acompañado del gobierno en pleno.

Inmediatamente designó Morales como plenipotenciarios para las más amplias negociaciones con los comisionados norteamericanos (Dillingham y Dawson) a Federico Velázquez y Hernández, Ministro de Hacienda y Comercio, y a Juan Francisco Sánchez, Ministro de Relaciones Exteriores.

Durante los días 18 y 19 se completaron todas las negociaciones, el 20 fue firmado el trascendental documento en una atmósfera de alta tensión política, pues la presencia del militar norteamericano era vista como señal de nuevos infortunios.

En el mismo cablegrama que Dillingham informaba del éxito de sus gestiones, pedía el envío inmediato de barcos de guerra a los puertos de Montecristi y Santo Domingo. Los signatarios de esa convención fueron Sánchez, Velázquez, Dawson y Dillingham.

Esa Convención estipulaba que el gobierno norteamericano se haría cargo de todas las recaudaciones en las aduanas, y que también

> se haría cargo del arreglo de todas las obligaciones que tenga el gobierno dominicano, tanto extranjeras como interiores; del arreglo de los pagos y de las condiciones de amortización; de la reconsideración de las reclamaciones conflictivas e irrazonables y de estimar la validez y el monto de todas las reclamaciones pendientes de arreglo.

La suma destinada para los gastos de la administración pública se fijaba en un 45% del producto bruto de las recaudaciones. Las entradas totales se estimaban en $2,000,000.

La inquietud pública creció al conocerse el texto íntegro del Convenio. En Montecristi, provincia que se hallaba sujeta a un régimen político singular desde 1904, por el acuerdo firmado el 13

de junio, que concedía potestad a los generales Desiderio Arias y Demetrio Rodríguez para designar autoridades y funcionarios allí, se creó un foco de rebeldía sin llegar de momento a la protesta armada. Estos generales, no tanto por un criterio patriótico absoluto, sino por conservar los privilegios de semiautonomía de que gozaban, indicaron que no aceptaban allí la intervención de los recaudadores norteamericanos. Dillingham volvió a urgir a su gobierno, para que enviara un barco de guerra a aquella zona a mantener el orden.

El gobierno dominicano se adelantó a darle publicidad al convenio del 20 de enero, aún antes de ser conocido en detalle por el Departamento de Estado de Washington, quien debió aprobarlo previamente. El secretario interino Loomis se lo hizo saber de modo enérgico a Dawson y éste se justificó aclarando que la publicación la hicieron las autoridades dominicanas, empeñadas en calmar la excitación pública, pues en la prensa nacional se hablaba ya de venta de la bahía de Samaná a los Estados Unidos.

Loomis remitió el texto de una nueva convención que contenía algunas modificaciones sobre la primera. En el convenio del 20 de enero se establecía que el gobierno estadounidense garantizaba la integridad del territorio nacional, presumiblemente de una invasión por parte de las potencias europeas. En el segundo convenio se varió la redacción a este párrafo. Y para darle un carácter de pacto internacional público, el artículo 9o. del segundo convenio estipulaba que comenzaría a surtir sus efectos después de su aprobación por el Senado de Estados Unidos y el Congreso de la República Dominicana. Se suprimió la firma de Dillingham para eliminar ese testimonio de fuerza militar en un pacto de esta naturaleza.

El gobierno dominicano advirtió a Dawson que mientras se discutiera en el Senado norteamericano la convención, el Estado dominicano se vería abocado a una catástrofe por la suspensión forzosa de los pagos al personal administrativo y militar, debido a la

paralización de todas las operaciones comerciales por el ambiente de incertidumbre que estaba envolviendo a todo el país.

Como Dawson era hombre práctico envió a buscar inmediatamente a Santiago Michelena, quien por su nacimiento en Puerto Rico era a esa fecha ciudadano de los Estados Unidos y tenía fuertes negocios bancarios en el país. Michelena tenía gran experiencia en los asuntos dominicanos, pues se había visto mezclado en diferentes negociaciones con el general Heureaux, de donde adquirió gran parte de su fortuna.

Michelena, con aprobación de los gobiernos dominicano y norteamericano, se hizo cargo de la recaudación de las rentas en todas las aduanas, con excepción de la de Puerto Plata, que estaba afectada al pago de las reclamaciones de la Improvement. Este singular recaudador entregaría al gobierno $75,000,00 mensuales para sus necesidades. Cobraría una comisión de 2% sobre los $75,000,00 y sus servicios cesarían a la primera voz del ministro norteamericano. El acuerdo con Michelena entró en vigor el 1o. de febrero de 1905.

El ministro Velázquez se encontraba en el Cibao explicando a las autoridades y políticos más representativos el alcance de la convención. En su ausencia llegó la redactada en Washington, para sustituir la que se firmó el día 20 de enero. El secretario de Estado norteamericano urgía por cable que se firmara el nuevo convenio, para someterlo con tiempo a la consideración del Senado. Cuando regresó Velázquez trató con tenacidad de que se mantuviera la cláusula de garantía general para la República Dominicana, que había sido ahora eliminada. Mientras se discutía ese punto se recibió noticia de que F. Leonte Vásquez, cónsul general en Nueva York, le había escrito al vicepresidente general Cáceres informándole que se había enterado en fuentes oficiales que el arreglo que se negociaba era el primer paso para la anexión total del país a Estados Unidos. El estremecimiento que produjo

esta noticia forzó al gobierno de los Estados Unidos a introducir, al final del segundo párrafo la frase: "obligándose a respetar la completa integridad de la República Dominicana".

Obviada en parte esa dificultad la convención fue firmada, *ad-referéndum*, el día 7 de febrero de 1905, a las cuatro de la tarde. Signaron esta vez Juan Francisco Sánchez, Ministro de Relaciones Exteriores, Federico Velázquez y Hernández, Ministro de Hacienda y Comercio, y Thomas C. Dawson, plenipotenciario de los Estados Unidos.

En la memoria que presentó Velázquez al presidente Morales el 27 de febrero, publicada en la Gaceta Oficial No 1584 del 11 de marzo de 1905 dice: "Vivimos en un perpetuo estado de anarquía y de revolución, y necesitamos de un freno fuerte que domeñe nuestros mal guiados instintos, dándonos tiempo para que se desarrollen en nosotros otros hábitos, habilitándonos para hacernos dignos de vivir en una patria próspera y civilizada, enaltecida y regenerada por nuestros propios esfuerzos. Es lo que he creído ver en la Convención que respeta la integridad de nuestro territorio, que nos releva de la vergüenza de una bancarrota y que nos impone el gobierno civil. Es lo que he visto en ella, repito, al presentarse Mr. Dillingham como enviado de los Estados Unidos ante nuestro gobierno, ofreciendo para mí, el dilema que siempre conllevan los deseos que el fuerte le manifiesta al débil: por la razón o por la fuerza. En mi concepto, la necesidad de aceptarla se hacía ineludible desde el momento en que nos era remitida por los Estados Unidos de *motu proprio* sin anuencia de negociación de nuestro gobierno, dando bien claramente hoy a entender sus razones al exigir de nosotros de nuevo las enmiendas que ha sufrido la anterior Convención".[58]

[58]Gaceta Oficial No. 1584, marzo, 1905.

Esta declaración del ministro de Hacienda evidencia el desvalimiento del gobierno dominicano en el curso de negociaciones tan delicadas en que estaban en juego la integridad del territorio y la soberanía nacional.

El monto de la Deuda Pública para esa fecha según los datos que ofrece la referida Memoria es como sigue:

Deuda Pública Extranjera	$27,005,448.81
" Interior Flotante	5,890,222.23
	$32,896,078.04

Terminadas definitivamente todas esas negociaciones, el único asunto de más urgente atención era la actitud del general Desiderio Arias en Montecristi, que por su condición de jimenista trataba de crear al gobierno de Morales los mayores entorpecimientos.

Para solucionar ese problema llegó allí, a bordo del crucero Newark, el almirante Charles D. Sigsbee, comandante de la escuadra del Caribe. Desiderio Arias quería hacer valer la potestad que se le otorgara de pagar sus fuerzas militares con las entradas de la aduana de Montecristi. El impenitente guerrillero quería a todo trance mantenerse fuera del alcance de las leyes nacionales, convirtiendo la Línea Noroeste en un feudo para su más cómodo disfrute. Sigsbee invocó los derechos que le concedía el Laudo para apoderarse de la aduana de Montecristi, en nombre del agente financiero, que ocupaba ya Puerto Plata.

Sigsbee designó como colector de las rentas aduaneras en ese puerto al teniente comandante Leiper, de la marina de guerra de su país. La mutilación de la soberanía nacional seguía consumándose.

El 15 de febrero de 1905 sometió el presidente Teodoro Roosevelt, al senado de su país, el protocolo firmado en Santo Domingo ocho días antes. En su mensaje hablaba extensamente de

la Doctrina de Monroe, y de la necesidad que tenía el gobierno norteamericano de evitar la intervención de potencias europeas al territorio dominicano. Aseguraba que su gobierno no tenía el propósito de tomar ninguna parte del territorio dominicano, y que no era su objetivo tomar como pretexto la Doctrina de Monroe, para el engrandecimiento territorial de los Estados Unidos, a costa de los vecinos del sur.

Estos postulados rooseveltianos fueron enérgicamente combatidos, tanto en el Senado y la prensa de Estados Unidos, como por los estadistas de Hispanoamérica, a quienes les interesaba una justa solución de los problemas que afectaban un país de la comunidad de naciones americanas. Este planteamiento *sui géneris* del mandatario yanqui, para justificar su deliberada intervención en Santo Domingo, se conoce en la historia de la política internacional estadounidense como *Corolarios de Roosevelt a la Doctrina de Monroe*.

El Senado norteamericano debatió ampliamente este protocolo, y cuando clausuró el 18 de marzo sus sesiones, aún no había sido aprobado.

EL *MODUS VIVENDI*

El asedio y la angustia no habían terminado. Nuevos problemas vendrían a conturbar a los hombres del gobierno dominicano, arrojándolos de lleno en la vorágine absorbente de la política intervencionista de los Estados Unidos. La confusión más absoluta reinaba en las esferas oficiales, mientras los acreedores europeos presionaban vivamente, intentando ocupar algunas de las aduanas más productivas. El gobierno, por su parte, las arrendaba a algunos prestamistas, y otras (Puerto Plata y Montecristi) estaban en poder de colectores norteamericanos.

Buscando una solución de emergencia al problema creado, el ministro de Hacienda, Velázquez, sostuvo una larga conferencia

con Dawson, el 24 de marzo, proponiéndole que el gobierno dominicano se haría cargo de todas las aduanas, que retendría para sí el 45% de las rentas, y que el 55% destinado al pago de las acreencias, sería puesto en manos del propio ministro hasta que el Senado norteamericano aprobara o rechazara definitivamente el convenio del 7 de febrero.

Dawson, antes de transmitir estas proposiciones a Washington, que le fueron también ratificadas por el propio presidente Morales, se puso en contacto con los representantes de Italia, Bélgica, Francia y España, a fin de obtener sus puntos de vista. Éstos opinaron que un ciudadano norteamericano tendría que actuar como receptor general de las aduanas para hacer viable este proyecto. El 25 de marzo Dawson cablegrafió a su gobierno esta proposición.

El presidente Roosevelt, que estaba manejando personalmente los asuntos dominicanos, aprobó el plan de que un representante estadounidense se hiciera cargo de las recaudaciones, hasta que el Senado, en ese momento en receso, decidiera sobre la Convención definitivamente. Ordenó que el secretario de la Guerra escogiera el candidato para estas funciones. La suma proporcional destinada al pago de las reclamaciones de la deuda, sería depositada en un banco de Nueva York. Si la convención fuera finalmente rechazada esos valores se devolverían al gobierno dominicano. Si fuera aprobada, sería distribuida entre los acreedores en proporción a sus reclamaciones.

Para completar esta negociación el presidente Morales dictó una resolución ejecutiva que era, en esencia, lo estipulado en la convención no sancionada. El gobierno dominicano designaría un receptor de los derechos e impuestos en todas las aduanas de la República, y cuyo candidato le sería sometido por el presidente de los Estados Unidos. El artículo 5o. de esa resolución estipulaba que todos los pagos sobre las deudas de la República quedaban

suspendidos. Los valores destinados a ese fin serían depositados en un banco de Nueva York. A esta forma de solucionar el problema creado por el Senado norteamericano se le llamó el *Modus Vivendi*. El primer colector de las rentas aduaneras fue el coronel George R. Colton, quien había servido siete años como colector de aduanas en Manila, Filipinas. El banco escogido como depositario de los fondos fue el National City Bank of New York. El *Modus Vivendi* duró 28 meses.

La intervención de Dawson en los asuntos dominicanos había triunfado de manera decisiva. De él dijo el diputado Gavino Alfredo Morales, miembro disidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en 1907, que:

> Dawson, ese hombre habilísimo para la diplomacia anexionista, no ha podido tampoco sustraerse al estilo despectivo con que el yankee trata al dominicano, como a todo el de raza española, y se presenta en pantuflas al Palacio de Gobierno, como si estuviera en una de las habitaciones de su quinta de recreo. A veces se le olvida la corbata, y en ocasiones lleva remangada una de las piernas del pantalón, y siempre sus maneras y sus prendas de vestir están en abierta oposición con las reglas y formas que exige la diplomacia.[59]

[59]Col. Trujillo, Tomo 15, pp. 196-197.

CAPÍTULO VII

Gobierno del general Ramón Cáceres

EL PLAN DE AJUSTE

El *Modus Vivendi* calmó bastante las inquietudes de los acreedores europeos, al enterarse de que el receptor general de las Aduanas, Mr. Colton, depositaba mensualmente en el National City Bank of New York algo más de $100,000.00. Este método de recaudación, que sustrajo las aduanas de la rapacería de los políticos de oficio, dio, indudablemente, muy buenos resultados al Estado dominicano, pero al precio de una mutilación de sus derechos soberanos.

Solucionado en parte el problema, aunque de manera provisional, era urgente poner en claro a cuánto ascendía en ese momento el total de la deuda pública dominicana. Los funcionarios dominicanos de la Secretaría de Hacienda manifestaban de manera reiterada que no tenían los datos comprobatorios que les permitieran establecerlo.

El propio presidente Teodoro Roosevelt, interesado en conocer también el monto de la deuda, envió a Santo Domingo, en abril de 1905, al doctor Jacobo H. Hollander, como su agente confidencial, para que hiciera una investigación minuciosa incluyendo las cuentas de la Improvement. Hollander era profesor de la Universidad de Baltimore, y estaba considerado como un técnico en la materia.

Su intervención en los asuntos financieros dominicanos fue muy importante.

En un extracto del informe de Hollander, publicado en "Las Novedades", de Nueva York, y reproducido por el "Listín Diario" el 19 de febrero de 1906, la cifra tope de la deuda era de $40,269,404.83, distribuida así:

Deuda en bonos.....	$ 17,670,312.75
Deudas liquidadas	" 9,595,530.40
Deuda flotante	" 1,553,507.79
Reclamaciones declaradas	" 7,450,053.89
Reclamaciones sin declarar	" 4,000,000.00
	$40,269,404.83

Hollander informaba que esta cifra se había formado en un verdadero carnaval financiero. El redactor de "Las Novedades" manifestaba que la deuda dominicana se podía dividir en períodos geológicos: primario, secundario y terciario.

> El secundario, escribía, comprende desde 1887 hasta 1897, que es el ciclo de las emisiones de bonos; década de préstamos a corto plazo en condiciones de lo más extravagante, los cuales fueron subsecuentemente fundidos y refundidos, vueltos a fundir y a refundir.

Como esa inmensa suma ganaba intereses crecidísimos, era posible que los $100,000 mensuales que Colton enviaba a Nueva York no alcanzaran a cubrirlos, mucho menos para amortizar al cuantioso capital adeudado. Se imponía, pues, un ajuste general de la deuda, no ya por el examen de las cuentas, sino por reajustes verdaderamente al ojo, casi por decisión unilateral del gobierno dominicano. Para llegar a eso, se necesitaba el apoyo del gobierno estadounidense.

El secretario de Estado norteamericano, Mr. Elihu Root, hombre eminente y de gran sentido práctico, había tenido una

entrevista con el ministro dominicano en Washington, don Emilio C. Joubert, el día 29 de marzo de 1906, en la cual trató este asunto. Joubert escribió al ministro de Relaciones Exteriores dominicano informándole de su entrevista y le decía:

> Mr. Root piensa que pudiéndose reducir todas las deudas a $20,000,000, según opinión del Dr. Hollander y calculándose en $1,200,000 el 55% destinado a amortización se podría resolver que durante 4, 5 ó más años solamente se paguen los intereses que, a 4% anual serían $800,000 y que los $400,000 se destinen a la construcción de ferrocarriles.[60]

Desde los primeros días de ese mismo año, el general Ramón Cáceres, Vicepresidente de la República, había sustituido a Morales, después de una rápida sucesión de acontecimientos políticos, que culminaron con la renuncia y extrañamiento de aquel mandatario.

El 9 de junio de 1906 salió para los Estados Unidos el señor Federico Velázquez y Hernández, ministro de Hacienda del presidente Cáceres, a negociar un acuerdo más amplio con el gobierno norteamericano, que sustituyera las convenciones de 1903, pendientes de resolución final en el Senado de los Estados Unidos.

Velázquez contrató los servicios del doctor Hollander para que actuara junto a él como asesor financiero. Ya Hollander había entregado su informe especial al presidente Roosevelt, y era en ese momento el mejor enterado de los problemas financieros dominicanos. Por ausencia del secretario de Estado Mr. Elihu Root, quien viajaba por diversos países de la América del Sur, inició las negociaciones con Velázquez el subsecretario Robert L. Bacon. A esas reuniones en el Departamento de Estado asistían Hollander y el ministro plenipotenciario dominicano Emilio C. Joubert.

[60]Pieza No. 111, Legajo 162, de la Secretaría de E. de RR. EE. Archivo Nacional.

El plan del gobierno dominicano era la reducción de la deuda en una proporción que significara un alivio importante a las cargas del Estado. El contrato firmado por el doctor Henríquez y Carvajal con los acreedores franco-belgas en junio de 1901, presentaba una magnífica oportunidad para la ansiada reducción sustancial de la deuda, sugerida por Mr. Root.

El artículo 17 de ese contrato le daba una opción al gobierno dominicano por 20 años, para poder comprar la totalidad o parte de los bonos en poder de esos acreedores a un tipo de 50% sobre su valor nominal. Para financiar esta operación la banca de Nueva York abrió sus puertas, contando con la garantía del gobierno norteamericano, que controlaría todas las rentas aduaneras de acuerdo con la nueva convención que negociaba Velázquez. Los demás acreedores verían reducidos los montos de sus reclamaciones mediante un Plan de Ajuste que sería elaborado al efecto. Inmediatamente Hollander viajó a Europa y concertó con los comités y grupos interesados la reducción al 50% ya establecido desde 1901.

El Plan de Ajuste definitivamente terminado en Washington el 11 de septiembre de 1906, fue el paso principal para llegar a los acuerdos y contratos decisivos en esa histórica negociación. Las deudas quedaban reducidas a un promedio de $17,000,000. La nómina de ese Plan de Ajuste evidencia la seriedad del problema dominicano. La variada gama de acreedores hace un poco de luz en el tremendo caos, y revela la difícil tarea que es poner en claro algunas de esas cuentas, que son el producto del fraude y de negociaciones sin nombre. “Dédalo pavoroso”, dijo la Comisión de Hacienda del Congreso al informar sobre la convención de 1907. Para la mejor interpretación del problema la incluimos a renglón seguido.

PLAN DE AJUSTE

y arreglo condicional llevado a efecto por el Gobierno de la República con los acreedores extranjeros y tenedores de reclamaciones y deudas interiores.

1.—*Bonos Franco Belgas* (exclusive los bonos entregables por la San Domingo Improvement Co., según el Laudo de julio 14 de 1904).

Consistentes en:

(a) *Obligations or de Saint Domingue* 2¾%, 1897, cuyo montante no excederá de £2,723,406;

(b) *Dominican Unified Scrip*, 4%, 1897, cuyo montante no excederá de £327,120 pagaderos al cincuenta (50) por ciento de su valor nominal (según contrato de septiembre 23 de 1901, párrafo 17) y de los intereses devengados; disponiéndose que $50,000 (menos los pagos ya abonados) serán aceptados en saldo de intereses devengados hasta octubre de 1901, según contrato de septiembre 23 de 1901 (párrafo 18).

2.— *San Domingo Improvement Co. Laudo Arbitral*. Pagadero al noventa (90) por ciento del capital neto y de los intereses; debiendo la compañía hacer todas las entregas y cumplir todas las obligaciones impuestas por el Protocolo y el Laudo.

3.—*Reclamaciones de Salas*. Pagaderas al cincuenta (50) por ciento del capital neto y del interés simple al 3 (tres) por ciento.

4.—*Reclamación de Bancalari*, contrato número 58 de 1904. Pagaderos al cincuenta (50) por ciento de capital neto sin interés.

5.—*Protocolo Italiano*. Pagadero al cincuenta (50) por ciento del capital neto, sin interés.

6.—*Protocolo Bancalari*. Pagadero al cincuenta (50) por ciento del capital neto, sin interés.

7.—*Protocolo Hispano-Alemán*. Pagadero al cincuenta (50) por ciento de capital neto, sin interés.

8.—*Reclamación de Ros*. Pagadera al cincuenta (50) por ciento del capital neto, sin interés.

9.—*Deuda antigua extranjera*. Pagadera al cincuenta (50) por ciento del capital neto, sin interés.

10.—*Deuda Flotante interior, Tenedores de Títulos*. Pagadera al cincuenta (50) por ciento del capital neto, sin interés.

11.—*Deuda Flotante interior, Sucesores de Vicini*. Pagadera al cincuenta (50) por ciento del capital neto, sin interés.

12.—*Contratos de Hacienda*. (Referidos en la memoria del Ministro de Hacienda de febrero de 1906). Pagaderos al cincuenta (50) por ciento del capital neto, sin interés.

13.—*Reclamación Sucesores Vicini, Contrato de Julio,* 1903. Pagadera al cuarenta (40) por ciento del capital neto, sin interés.

14.—*Vales de la Contaduría General de Hacienda* con fechas fijas, cuyo montante no excederá de $468,316. Pagaderos al cuarenta (40) por ciento del capital neto, sin interés.

15.—*Reclamación A. Font y Cía.* Ajustándose.

16.—*Reclamación West India Public Works*. Pagadera al treinta (30) por ciento del capital neto, sin interés.

17.—*Billetes del Banco Nacional,* cuyo montante no excederá de $1,574,647 valor nominal, (575,624 de 40 centavos y 999,023 de 20 centavos) pagaderos al veinte (20) por ciento del valor nominal.

18.—*Deuda Diferida* consistente en:

(a) *Deuda Diferida inscrita,* cuyo montante no excederá de $550,683.41.

(b) *Deuda Diferida no inscrita,* cuyo montante no excederá de $398,362.04.

(c) *Deuda Privilegiada de la Revolución*, cuyo montante no excederá de $79,812.12. Pagadera al diez (10) por ciento del capital neto, sin interés.

19.—*Vales de la Contaduría*, sin fechas fijas, consistentes en:

(a) Vales de la Contaduría cuyo montante no excederá de $1,011,684.16

(b) *Vales expedidos por la Administración de Hacienda,* cuyo montante no excederá de $25,867.10; pagaderos al diez (10) por ciento del capital neto, sin interés.

20.—*Deuda Flotante y Reclamaciones Adjudicadas,* cuyo montante no excederá de $2,000,000. Pagaderas al diez (10) por ciento del capital neto, sin interés.

NOTA: En vista de la Resolución del Congreso de fecha 19 de Junio de 1906, respecto al Protocolo Italiano, el Poder Ejecutivo está entendiéndose con los acreedores, conforme a los términos de la Resolución.

12 de septiembre de 1906.[61]

[61]Colección Trujillo, Tomo 15, pp. 160-162.

Para que los acreedores aceptaran las reducciones contenidas en el Plan de Ajuste era necesario pagar en plazo breve, contratando un empréstito suficiente para esos pagos. Velázquez, asesorado siempre por el doctor Hollander, planteó las bases de la gran operación con la casa bancaria de Kuhn, Loeb & Co., de Nueva York, que puso como condición indispensable que fuera garantizado por el gobierno norteamericano mediante un acuerdo directo con el gobierno dominicano. El 11 de septiembre de 1906 firmó Velázquez *ad referéndum* un contrato de empréstito por $20,000,000 con esa casa bancaria y otro contrato con la Morton Trust Company, para que esta corporación hiciera el servicio de la Agencia Fiscal de la República. Estos contratos no tendrían ningún valor si el gobierno dominicano ulteriormente no llegaba a concluir una convención con el gobierno de los Estados Unidos, por cuyo instrumento se pusiera a cargo de colectores de ese país, la recaudación de todas las rentas aduaneras de la República Dominicana. Estos funcionarios quedarían sujetos únicamente a responsabilidad ante aquel gobierno.

El *Modus Vivendi* que no tenía un valor contractual absoluto, porque había sido creado por resolución unilateral del gobierno dominicano, daría paso al instrumento más decisivo en la historia financiera y política de la República Dominicana en el siglo XX, porque creaba, según el análisis jurídico de Peña Batlle, la "servidumbre internacional", o, según otros, un protectorado *sui géneris*. El hecho histórico evidente es que todo ese cúmulo de contrataciones, con su ápice en la Convención de 1907, culminó más tarde con la intervención armada del país por las fuerzas norteamericanas.

El éxito del Plan de Ajuste era básico para la concertación del acuerdo principal y para la validez del contrato del empréstito de $20,000,000, que permitiría solventar inmediatamente todas las reclamaciones contra el gobierno dominicano. Algunos acreedores consideraban afectados sus derechos por las violentas reducciones,

especialmente los nativos, que eran poseedores en su mayoría de las reclamaciones reducidas a un 10% de su valor nominal. La irritación era mayor porque a la Improvement se le pagaría con un 90% sobre las estipulaciones del Protocolo de 1903 y del Laudo Arbitral, y los Sucesores Vicini, amparados por el gobierno italiano, no sufrirían gran cosa en el monto de su deuda, considerada el producto de negociaciones culpables con el gobierno de Heureaux. No obstante esas protestas, el gobierno norteamericano ejercía gran presión, y en fecha 12 de noviembre, el ministro Joubert escribía desde Washington informando al secretario de Relaciones Exteriores, don Emiliano Tejera, que el secretario Root había resuelto

> no ocuparse en los asuntos particulares de una nueva Convención mientras no tenga la seguridad de que el Gobierno dominicano ha llegado a un arreglo definitivo y formal con sus acreedores.[62]

Para darle carácter contractual al Plan de Ajuste, en lo que se refiere a los acreedores nacionales, Velásquez los reunió en fecha 4 de diciembre de 1906, presentándoles el documento que consignaba las reducciones, y que fue firmado en señal de adhesión a dicho Plan, por casi la totalidad de los interesados. Este importante documento se conserva en el Archivo General de la Nación, en el Legajo 94 de los documentos del Ministerio de Hacienda y Comercio.

CONVENCIÓN DE 1907

Para imprimir mayor velocidad a estas negociaciones el presidente Cáceres designó el 6 de febrero de 1907, como plenipotenciarios extraordinarios para negociar con el plenipotenciario de Estados Unidos, a los señores Emiliano Tejera, Ministro de Relaciones Exteriores, y Federico Velázquez y Hernández, Ministro

[62]Doc. 159, Leg. 161, Sección RR. EE. Archivo Nacional.

de Hacienda y Comercio. Es altamente significativo que la convención se firmó dos días después de estas designaciones. El 8 de febrero, Tejera, Velázquez y el ministro Dawson remachaban con su firma el más grueso eslabón de la cadena que se inició el 1° de mayo de 1869, con el contrato Hartmont. Las necesidades internas y las graves exigencias de Estados Unidos crearon este instrumento internacional, conocido generalmente como Convención de 1907.

El texto de esta convención ha sido objeto de interesantes y variados estudios, tanto por escritores e internacionalistas dominicanos como del extranjero.

En este instrumento internacional quedaba sancionado el Plan de Ajuste, por cuyo medio se operaba la gran reducción en la cuantía de la deuda pública, y se incluían las especificaciones del empréstito de los $20,000,000, fijándose el tipo de interés, los pagos a los acreedores, la cancelación de las "concesiones onerosas", y se disponía, que se destinaba

> el sobrante total que aún quede, a la construcción de ciertos ferrocarriles y puentes y otras obras públicas necesarias al desarrollo industrial del país.

Las ideas del secretario Root quedaban así consignadas en la redacción del acuerdo. Esta especificación dio lugar a que se designara a un ciudadano estadounidense para el desempeño de las funciones de Director General de Obras Públicas, para controlar las inversiones, y que todos los gastos sobre estos fondos tuvieran que ser aprobados por aquel gobierno.

El artículo 3° de la convención ha sido considerado como el más lesivo de todos. Disponía que la República Dominicana no podría aumentar su deuda pública

> sino mediante un acuerdo previo entre el Gobierno dominicano y los Estados Unidos.

Una interpretación arbitraria del gobierno norteamericano sobre el aumento de la deuda pública, fue el pretexto más tarde para la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos en nuestro país. Asimismo establecía ese artículo funesto que el gobierno dominicano no podría modificar los derechos de importación, sino mediante acuerdo con el gobierno norteamericano. Esta consignación resultó sumamente lesiva para el desarrollo del comercio y la industria nacionales. Si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido un sincero interés en mejorar las condiciones generales del pueblo dominicano, como intentaba aparentar, en sus continuas intervenciones en los asuntos domésticos de este país, concomitantemente con la convención, hubiera celebrado un tratado de comercio con la República Dominicana, para incrementar el desarrollo de su naciente economía. Estados Unidos cuando abandonó a Cuba le abrió a aquel país las puertas de su gran mercado consumidor por medio de un tratado de comercio que permitió el desarrollo industrial y comercial de aquel país hasta límites insuperables. El tratamiento para la República Dominicana fue bien distinto, y puede decirse que con intención negativa, como se demuestra por la violación del Tratado de Reciprocidad Comercial firmado el 4 de junio de 1891, que dio lugar a que fuera declarado nulo y sin efecto por el gobierno dominicano. El licenciado Francisco J. Peynado, en su *Informe sobre la situación económica y financiera de la República Dominicana*, presentado en 1922 a la Comisión Senatorial norteamericana que realizó investigaciones en Santo Domingo, puntualizó con gran agudeza este aspecto de la vida económica dominicana y dijo:

> "Esa necesidad de igual tratamiento que a Cuba es imperiosa para la República Dominicana; es vida o muerte".

La Convención fue sometida al Senado norteamericano y aprobada en tiempo récord. El 25 de febrero de 1907 recibió la sanción legislativa de aquel país. En la República Dominicana fue

objeto de grandes debates en la prensa, y en el seno del Congreso, que le impartió su aprobación el 3 de mayo, en medio de la mayor aprehensión popular, pues el gobierno puso en juego todos sus recursos para sacarla a flote.

El presidente Cáceres, en su mensaje especial del 5 de abril sometiendo al Congreso la Convención junto con los contratos firmados con Kuhn, Loeb & Co. y con la Morton Trust Co., hacía una minuciosa disección del problema general de las finanzas y señalaba las ventajas del acuerdo.

Y no se olvidó de señalar los peligros que corría el país con su permanente desorden político y administrativo. Decía Cáceres de manera categórica:

> La órbita siempre creciente de nuestros desaciertos llegó a ponerse en el radio de acción de la poderosa órbita de los intereses de la gran potencia americana, y si insistimos en continuar en esa vía de peligros intencionales, seremos absorbidos y despedazados. La vuelta al orden, al cumplimiento de los compromisos contraídos, a la vida de pueblo civilizado, se impone con imposición irresistible. O procedemos en lo adelante como civilizados, o desapareceremos.[63]

Como el texto de la Convención aprobado el 3 de mayo por el Congreso Nacional contenía algunas modificaciones sobre el texto original, consideradas no sustanciales, se procedió a un intercambio de notas aclaratorias entre el ministro dominicano en Washington, señor Emilio Joubert, y el secretario de Estado Mr. Elihu Root, con lo cual se obvió cualquier demora. El 19 de junio el presidente Cáceres proclamó su ratificación, y el presidente Roosevelt lo hizo el 22. Las ratificaciones fueron canjeadas en Washington el 8 de julio de 1907. El 25 de ese mismo mes dictó el presidente Roosevelt un reglamento general por el cual

[63]Colección Trujillo, Tomo 15, p. 180.

debía regirse la Receptoría General de Aduanas creada por la Convención. Inmediatamente designó como receptor general a Mr. William E. Pulliam, con efectividad el 1° de agosto de ese mismo año.

Los contratos con los banqueros de Nueva York para el empréstito de los $20,000,000, y para el servicio de la Agencia Fiscal, concertados por Velázquez en septiembre de 1906, fueron objeto de grandes modificaciones en el Congreso, lo que dio lugar a que los referidos banqueros no otorgaran su asentimiento a los cambios introducidos, cayendo por el suelo esas contrataciones. Mientras se llegaba a un nuevo acuerdo fue necesario continuar bajo el régimen del *Modus Vivendi*, es decir, que la Receptoría continuaría depositando en el National City Bank of New York el 55% de todas las recaudaciones. Durante varios meses la República estuvo sujeta a dos regímenes financieros.

El ministro Velázquez volvió en julio a los Estados Unidos, con el propósito de limar los recelos creados por la naturaleza de las modificaciones que el Congreso había introducido a los contratos

> pero, dice el citado funcionario, los banqueros negáronse en absoluto a aceptar las modificaciones del Congreso y no se mostraron en modo alguno dispuestos a negociar sino ante plenos poderes que garantizaran la estabilidad de los contratos siendo infructuosa mi estada en New York.[64]

Tan pronto regresó Velázquez con las manos vacías, el presidente Cáceres convocó extraordinariamente al Congreso Nacional en fecha 29 de agosto para pedirle amplios poderes para negociar. El 16 de septiembre el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo a

> emitir y vender bonos de la República, hasta un total que no exceda de Veinte millones de pesos oro de los Estados Unidos de América,

[64]Memoria de Hacienda y Comercio del año 1907.

a un 5% de interés anual, amortizable en 50 años. Con ese respaldo legal, de carácter pleno, viajaría nuevamente hacia los Estados Unidos el principal arquitecto de la Convención y sus contratos secundarios: Federico Velázquez y Hernández, Ministro de Hacienda y Comercio. Este funcionario llegó a Nueva York en octubre de 1907, y regresó a Santo Domingo en febrero de 1908. Los acuerdos pactados por él no se ciñen, a nuestro juicio, al espíritu de las negociaciones básicas de la Convención. Los contratos ajustados por Velázquez en esos cuatro meses largos, fueron soluciones de emergencia, que no necesitarían nueva aprobación del Congreso. Los banqueros impusieron su voluntad, sobre todo en lo que se refiere a la negociación global de los $20,000,000 con los cuales se calculó cancelar en el más breve plazo el monto total de la Deuda Ajustada. Justificando en parte la naturaleza de esas contrataciones, Velázquez dice en su *Memoria de Hacienda* ya citada que:

> Las circunstancias externas que no habían previsto los opositores a los primeros contratos, y contra las cuales no estábamos apercibidos, en la forma de la crisis financiera acaecida últimamente en el mercado americano, que afectó las transacciones mundiales, impusieron el prudente criterio de no lanzar un empréstito dominicano en una plaza en pánico.

Tras laboriosas negociaciones realizó una serie de contratos importantes, que son el corolario de la Convención de 1907. Celebró dos con la Morton Trust Co. de Nueva York el 27 de enero de 1908, instituyéndola por uno de ellos como Agentes Fiscales de la República, y por el segundo, como Depositarios de los Fondos del Empréstito. En esa misma fecha concluyó con Kuhn, Loeb & Co. de Nueva York un contrato de muy distinta naturaleza al concertado en septiembre de 1906, que fue discutido y modificado por el Congreso en forma tan radical. El 13 de enero concluyó un acuerdo con la San Domingo Improvement Company (V. estos tres contratos en apéndice documental) que resultaba contrario a

todos los pronunciamientos del Congreso Nacional desde 1901, que exigían de modo inexorable la rendición de cuentas por esta compañía, que todo el país consideraba culpable, junto con Heureaux, de los desastres financieros del Estado Dominicano. Contrató también con la Compañía del Ferrocarril de Samaná a Santiago.

El anulado contrato de 1906 con Kuhn Loeb estaba planeado para que esa compañía adquiriera todos los bonos dominicanos del empréstito al 5%, con cuyo producto, la Morton Trust Company en su calidad de Agente Fiscal pagaría la deuda ajustada, quedando Kuhn Loeb como única acreedora del Estado Dominicano, amparada en las sólidas garantías consignadas en la Convención, que era el punto de referencia fundamental en todas esas negociaciones. La parte final del artículo 5° del contrato de 1906 decía:

> Los banqueros comprarán, no habiendo faltado la República a ninguna de las previsiones de este Convenio, los bonos del cinco por ciento por el montante nominal de Veinte Millones de dollars ($20,000,000) en oro acuñado en los Estados Unidos.[65]

Velázquez negociaba a toda presión, hostigado por circunstancias políticas y financieras superiores a las fuerzas del gobierno dominicano en ese momento. Todo fue confuso y penoso. Aprobada la Convención, era urgente ultimar todo lo relacionado con el problema de las deudas que se iban a cancelar. Por eso el cuadro cambia del 1906 al 1908. Los contratos financieros de aquel año eran más lógicos y realistas. Los de 1908 eran casi Improvementianos. En su memoria del 1907, describe Velásquez de un modo vívido las peripecias de su negociación en los Estados Unidos. Dice así:

> Preciso fue entonces luchar tesoneramente, hasta contra el clima y sus efectos para obligar a los acreedores a ceñirse al Plan de Ajuste dentro del nuevo plan de Conversión ofreciéndoles pagar, con

[65]"Convenio entre la República de Santo Domingo y la Kuhn, Loeb, Co." (S.D.) ¿1906?

un interés de 5% a partir del 19 de Agosto de 1907, hasta el 1° de Febrero de 1908, 20% en efectivo y 80% en Bonos del Cinco por Ciento de la República, garantizados por la Convención Domínico-Americana. Sobre esa base realicé la Conversión de la Deuda, celebrando dos contratos con la Morton Trust Company, uno para investirla de la calidad de Agencia Fiscal, y el otro como Depositaria, de acuerdo con las provisiones del Decreto del Congreso Nacional del 16 de Septiembre de 1907. Para lo relativo al pago en efectivo del 20% e intereses devengados desde Agosto a Febrero, se trasladaron a la Morton Trust Company las sumas depositadas en el National City Bank de New York. La República, por la presente operación, emite Bonos oro de Cinco por Ciento con Fondo de Amortización, garantizados por los derechos de Aduana; hasta la cantidad de 820,000,000 moneda de oro de los Estados Unidos del tipo actual de peso y pureza, a vencer el 19 de Febrero de 1958 y devengando intereses desde el 19 de Febrero de 1908, para ser redimibles por el Fondo de Amortización el 19 de Febrero de 1918 o después de esa fecha, a 1021/2% y requiriendo el pago por lo menos de 1% anual para dicho Fondo de Amortización; emitidos en denominaciones de $50, $100, $500 y $1,000. Para los efectos del pago de 80% los bonos serán recibidos al 981/2% de su valor nominal. Aceptada por la casi totalidad de los acreedores la Oferta de Arreglo, la operación está efectuándose sin inconvenientes, pagándose el 20% en efectivo por la Morton Trust Company, en el exterior, y en esta ciudad por su Agente el Sr. S. Michelena y librándose por el 80% certificados provisionales que serán canjeados por los Bonos definitivos tan pronto éstos hayan sido grabados y firmados.

Consecuencia de la negociación realizada, son los arreglos intervenidos con la San Domingo Improvement Company y demás Compañías aliadas y con la del Ferrocarril de Samaná y Santiago. Los contratos que celebré con aquellas y ésta han sido publicados oportunamente en la "Gaceta Oficial" y figuran en los Anexos de esta Memoria.

Por virtud del arreglo con la San Domingo Improvement Company y Compañías aliadas, desde el 1° de Febrero del año en curso está la República en posesión del Ferrocarril Central Dominicano, con todas las propiedades anexas a él, que estaba en manos de las expresadas Compañías desde su construcción, sin que el Gobierno pudiera lograr nunca la dación de las cuentas de la parte de la renta que le correspondía al Estado. Y no solamente ha sido entregado

> a la República el Ferrocarril libre de toda deuda, sino todos los valores en poder de dichas Compañías, pertenecientes a la República. La cifra de $4,312,242.76 es la suma que paga la República a las Compañías por el traspaso de todos los derechos e intereses que ellas poseían en el Banco Nacional en el Ferrocarril Central Dominicano, de todas sus extensiones y de todos los derechos e intereses de dichas Compañías en el Ferrocarril; por la entrega de los antiguos Bonos, hasta el montante de £830,654 referidas en el Laudo Arbitral, y en completo arreglo de todas las deudas y reclamaciones contra la República de cualquier denominación, poseídas y representadas por las Compañías o una cualquiera de ellas. De esa suma corresponden $2,149,197.81 a los antiguos Bonos que han de entregar, y $2,163,044.95 por concepto del Ferrocarril Central, del Banco y de otras deudas o reclamaciones que dichas Compañías poseían o representaban. Ambas sumas se pagan de conformidad con la Oferta de Arreglo: 20% en efectivo y 80% en bonos del 5% o en certificados provisionales canjeables por dichos bonos. De la suma de $2,163,044.95, correspondiente al Ferrocarril Central, Banco Nacional y otras deudas y reclamaciones, se han pagado $432,608.99 en efectivo y de la parte de los bonos, que es $1,730,435.96, solamente la mitad, es decir, $865,217.98, quedando una suma igual de $865,217.98, más $2,149,197.81, o sean $3,014,415.79, en garantía, hasta el exacto cumplimiento de las obligaciones a cargo de dicho Contrato, de la San Domingo Improvement Co. y Compañías aliadas.[66]

La suma depositada hasta esa fecha en el National City Bank of New York procedente del *Modus Vivendi*, ascendía a $3,932,577.44 y fue íntegramente transferida a la Morton Trust para el pago del 20% que recibirían en efectivo los acreedores acogidos al Plan de Ajuste. El 80%, como se indica, lo recibirían en Bonos. La Kuhn Loeb sólo actuaría como intermediaria en el canje de los antiguos por los nuevos.

Hemos dicho que el convenio con esta casa bancaria era *sui generis* porque en ninguna de sus estipulaciones establecía que esa

[66]Memoria de Hacienda, 1907, Ministro: Federico Velázquez y Hernández.

compañía haría desembolsos como prestamista. La Kuhn Loeb actuaría más bien como oficina de control de la emisión para la plena garantía de los que iban a recibir en bonos el 80% de sus acreencias ajustadas. El artículo 4to. del nuevo y definitivo contrato decía:

> Los banqueros (la Kuhn Loeb) prestarán sus servicios y ejercerán sus mejores esfuerzos para promover y llevar a cabo de acuerdo con este convenio el ajuste y arreglo de la Deuda Ajustada, y ayudar y proteger los intereses de la República para efectuar dicho arreglo y ajuste, y una cotización oficial para los bonos del Cinco por Ciento en las Bolsas de las varias ciudades de Europa en que dichos bonos sean pagaderos. Cuando el plan esté en estado de ejecución, la República entregará, o hará entregar, a los Banqueros, en Bonos del Cinco por Ciento, el dos y medio por ciento del valor total nominal de los bonos del Cinco por Ciento que por el Artículo Tercero la República debe entregar a la Morton Trust Company. De estos Bonos del Cinco por Ciento así entregados, a los Banqueros, los Banqueros:
> (a) entregarán a la Morton Trust Company bonos a la par por la cantidad de 1% del valor nominal de los Bonos del Cinco por Ciento que deben ser entregados a dicha Trust Company, de acuerdo con el Artículo Tercero, para el arreglo de la Deuda Ajustada para ser aplicados por dicha Trust Company, por orden de la República, al pago, a los Comités u otros representantes que actúen por los tenedores de la Deuda Ajustada, de 1% del valor nominal de los Bonos del Cinco por Ciento entregados en saldo de la Deuda ajustada a dichos Comités u otros representantes o a los tenedores de la Deuda Ajustada, representados por dichos Comités u otros representantes, pero los Banqueros no serán responsables por la aplicación de tales bonos por dicha Trust Company.
> (b) retendrán por sus servicios y gastos bonos a la par por una cantidad igual al medio por ciento del valor nominal de los Bonos del Cinco por Ciento que deben ser entregados a dicha Trust Company, en virtud del Artículo Tercero, para el saldo de la Deuda Ajustada.
> (c) entregarán a la Morton Trust Company por sus servicios como Depositaria según el Plan de Ajuste, y por la ejecución del Plan, bonos a la par equivalentes a la cantidad de medio por ciento del valor nominal de los Bonos del Cinco por Ciento que deben ser entregados a dicha Trust Company conforme al Artículo Tercero, para el saldo de la Deuda Ajustada.

> (d) pagarán, en tanto cuanto el producido del balance de los Bonos del Cinco por Ciento disponible sea suficiente para este objeto, el costo de anuncios, de entrega y distribución de los Bonos del Cinco por Ciento, y de entrega de los antiguos bonos y reclamaciones devueltos, y de aseguros y todos otros gastos en que pueda incurrirse por los Banqueros o por la Morton Trust Co. en conexión con el arreglo de la Deuda Ajustada, incluso los gastos de otros banqueros o agentes en Europa, empleados por los Banqueros o por la Morton Trust Company en relación con dicho arreglo.
> Tanto como sea necesario para hacer en efectivo los pagos referidos en la subdivisión (d) de este artículo, los Banqueros comprarán los Bonos del Cinco por Ciento disponibles al 96% de su valor nominal.[67]

Sin embargo, realizada la emisión de bonos, todo marchaba normalmente, con excepción de la protesta presentada por algunos reclamantes contra las reducciones del Plan de Ajuste, al cual consideraban lesivos para sus intereses. Entre ellos los acreedores más importantes, los Sucesores de J. B. Vicini, poseedores de contratos ascendentes a la suma de $1,870,806.16.

Por iniciativa del Poder Ejecutivo el Congreso Nacional dictó un decreto el 28 de mayo de 1909, que fijaba como plazo máximo el 1° de enero de 1910 para la rendición de cuentas a la Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio, de toda acreencia contra la República, que tuviera su origen en una fecha anterior al 1° de julio de 1904. El artículo 2° de esa ley decía:

> Se considerará como no existente toda acreencia contra la República, de las mencionadas en el artículo anterior, que no hubiere sido presentada para su examen y arreglo antes del 1° de enero de 1910.

El artículo 3° disponía que las deudas ajustadas pero no cobradas serían liquidadas después de esa fecha y depositados sus valores en poder del agente fiscal, a disposición de los interesados, sin ganar

[67]Colección Trujillo, Tomo 15, pp. 362-63.

intereses. El artículo 4° declaraba de utilidad pública la adquisición por el Estado de todas las empresas de Muelle y Enramada en poder de particulares. Esta Ley dio lugar a varios procedimientos judiciales.

El Secretario de Estado de Hacienda en su memoria de ese año hace interesantes explicaciones sobre ese problema. Dice así:

> Mantenida por acreedores y concesionarios, reacios a dicho arreglo, esa misma situación en el curso del año que acaba de terminar, fue preciso, en cumplimiento de la ley del 28 de mayo de 1909, proceder de acuerdo con sus términos, separando de los fondos en poder de la Guaranty Trust Company, de New York, las cantidades correspondientes al ajuste de sus acreencias, y sometiendo al recurso de expropiación por causa de utilidad pública las tres concesiones conocidas bajo los nombres de: Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama; Muelle y Enramada de Samaná, y Muelle y Enramada de Barahona; concesiones no redimidas aún por pretender sus respectivos concesionarios, contra todo principio de equidad, y sobre la base de un precio de reducción exagerado, arreglos más beneficiosos que los alcanzados por las ya redimidas, dificultando de esta suerte todo entendido amigable y toda conciliación de mutuos intereses.
>
> El valor nominal de las acreencias no ajustadas asciende a la suma de $2,650,917.75; y el correspondiente al ajuste de ellas a la de $1,125,200.73, suma ordenada separar de los fondos en poder de la Guaranty Trust Company, de New York, para ser entregada a razón de un 80% en bonos y un 20% en efectivo, a los acreedores, si fuere reclamado por ellos dentro de los términos legales.
>
> Estas acreencias pertenecen:

A *Sucesores de J. B. Vicini:*		
Por deuda flotante interior....	$1,620,713.84	$810,356.92
Por contrato julio 1903.....	250,092.32	100,036.92
A los Sucesores Viñamata, & Huttlinger:		
Por concepto del protocolo Hispano-alemán, parte en vales de la Contaduría.....	92,034.00	46,017.00
A los tenedores de Billetes de Banco:		
Su máximum.....	584,163.00	116,832.60

A los Tenedores de Títulos de la Deuda Flotante interior.....	67,700.00	33,850.00
A los acreedores por concepto del Protocolo Italiano.....	36,214.59.....	18,107.29
	$2,650,917.75	$1,125,200.73[68]

Los Sucesores Vicini no se acogieron a los términos de esta ley, y la Empresa del Ozama fue sometida al Tribunal de la Instancia para fines de expropiación.

[68]Memoria de Hacienda y Comercio, 1907.

CAPÍTULO VIII

De lleno en el caos

MUERTE DEL PRESIDENTE CÁCERES
RÉGIMEN DE LOS VICTORIA
PROBLEMAS CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

El 19 de noviembre de 1911 cayó muerto a balazos el presidente Cáceres, víctima de una conjura política. En ese tiempo el país se desenvolvía con mayor comodidad económica, como en ningún momento de la historia nacional. La Convención y sus tratados subsidiarios estaban en la plenitud de sus funciones, y el país veía en esos instrumentos mediatizadores "*la obra de la necesidad*". El desastre financiero que legaron Báez y Heureaux al Estado, como fruto de sus desaciertos y malversaciones, había culminado con una camisa de fuerza que impedía la proliferación monstruosa de la deuda pública. La muerte de Cáceres no tiene una conexión directa con los asuntos financieros, que él había manejado, asesorado, o dirigido, por sus ministros de Relaciones Exteriores y Hacienda y Comercio. Ese luctuoso acontecimiento fue el fruto de las pasiones políticas desbordadas, y de la ambición de muchos, y la ignorancia de los más.

Con la muerte del presidente Cáceres volvieron los problemas políticos y financieros a entorpecer el desarrollo del progreso general del país. La guerra civil envolvería todo el territorio nacional,

con su terrible secuela de miseria, violencias y desastres de todo género.

El hombre fuerte del gobierno de Cáceres, general Alfredo María Victoria, trataría entonces de entronizar en el poder un nuevo régimen, auspiciando con el imperio de su sable, la selección de su tío el senador Eladio Victoria para la presidencia de la República. La revolución que se levantó contra este gobierno es la más tremenda lucha civil que se ha librado en la República Dominicana. Durante casi un año, un pueblo digno de mejor suerte, derrochó diariamente su heroísmo en una contienda tan estéril como valiente. Ese período sangriento ha sido calificado por muchos escritores, como el del romanticismo heroico del pueblo dominicano. La situación interna del gobierno de los Victoria, se complicó con diversos incidentes con Haití. Los diversos grupos revolucionarios del Norte y del Sur tenían una cómoda base de operaciones y aprovisionamiento en el país vecino, lo cual llevó a ambos países al borde de una guerra. El gobierno norteamericano por intermedio de sus legaciones en Santo Domingo y Port-au-Prince, hizo toda la presión necesaria para evitar el choque internacional, cuyas consecuencias estaba resueltamente dispuesto a correr el gobierno dominicano, según se evidencia en la correspondencia oficial de esa época. Pero todo eso sería el pretexto para una intervención abierta del gobierno de los Estados Unidos que no vio con simpatías al gobierno de Victoria desde su iniciación, y se empeñó en derribarlo.

El 3 de julio y el 14 de agosto, el ministro norteamericano, Mr. William W. Russell escribió a su gobierno informándole de la situación caótica del país, y opinaba que ni la revolución ni el gobierno estaban en condiciones de obtener un triunfo decisivo. Consideraba Russell en sus comunicaciones que el gobierno realizaba enormes gastos con el único propósito de enriquecer a los

jefes militares, mientras los salarios de los empleados públicos y de las tropas no se cubrían.[69]

El 14 de septiembre de 1912, el secretario de Estado norteamericano interino, Mr. Alvey A. Adee, dirigió a Russell un cable que dice así:

> ¿Qué sugiere Ud. además como remedio definitivo para la deplorable situación actual de la República Dominicana y su restablecimiento de acuerdo con lo que este Gobierno ha esperado de su programa político bajo la Convención?[70]

El ministro Russell, que se distinguió siempre por su animosidad contra la República Dominicana, contestó por cable a su gobierno en la siguiente forma:

> En contestación a la suya de septiembre 14, creo que nuestro gobierno debería dar inmediatamente los primeros pasos para ocupar todas las aduanas fronterizas, las cuales estaban y están abandonadas porque el Gobierno dominicano no ha sido capaz de mantener el orden y la ley. Esto dejaría a las tropas en libertad de servir en cualquier otra parte, con lo que la revolución probablemente fracasaría.
> Tal resultado, sin embargo, conduciría a la supremacía completa de la administración Victoria, la cual es sumamente impopular y muy perjudicial para el país. Aun algunos de los oficiales del Gabinete de Victoria han insinuado que la intervención efectiva de nuestro gobierno sería conveniente para el país, y en general, los dominicanos sensatos piensan que tenían razón de esperar que bajo la convención, las condiciones existentes no debían haberse producido. Entrar en relación con los actuales cabecillas de la revolución es absolutamente inútil y su triunfo sería desastroso. Solamente un completo control por nuestro gobierno aseguraría definitivamente el orden y la justicia, pero cualquier grado de control sería provechoso. Con seguridad, sin nuestro control, una u otra administración sería igual. Una vez que hayan sido desembarcadas fuerzas para la protección de las aduanas de acuerdo con nuestros derechos según la convención, podríamos trazar un programa político beneficioso al país. Los principales males que hay que remediar son: la absoluta

[69]"Foreign Relations", 1912.
[70]"Foreign Relations", 1913, p. 365.

> subordinación de los tribunales; el reclutamiento forzado del ejército; los encarcelamientos en masa sin vista de juicio; la malversación de los fondos públicos.[71]

Frente a estas recomendaciones de Russell, el presidente de los Estados Unidos, Mr. William H. Taft, designó una comisión especial para estudiar directamente la situación dominicana, y recomendar las medidas que era necesario adoptar para conjurar los graves problemas nacionales. La comisión estaba integrada por el general Frank Mc Intyre, Jefe de la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento de Guerra, y por William T. S. Doyle, Jefe de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en el Departamento de Estado.

Es oportuno hacer notar que, tan pronto como el señor Eladio Victoria fue electo presidente, el Departamento de Estado de Washington, que tenía sus manos metidas en la política dominicana desde 1902, de una manera abierta, hizo severas objeciones a la intervención del general Alfredo María Victoria en los asuntos políticos, y manifestó sin rodeos, al ministro plenipotenciario dominicano, licenciado Francisco J. Peynado, su repudiación al régimen político de "*los Victoria*". Peynado presentó en tiempo oportuno sus indicaciones al gobierno dominicano, y transcribió en extenso memorándum sus conversaciones con los funcionarios del Departamento de Estado francamente hostiles al *victorismo* en el poder. Los comisionados norteamericanos tuvieron como pretexto los graves problemas fronterizos de 1912, para inmiscuirse plenamente en el terreno político y precipitar la caída del gobierno, que no pudo ser vencido por la más enconada guerra civil que se ha fomentado en esta tierra. En un cambio de notas con el gobierno dominicano, Mc Intyre y Doyle, asesorados por el ministro Russell, presentaron varias exigencias ominosas, entre ellas, la renuncia del

[71]"Foreign Relations", 1912, p. 366. Trad. de Clementina V. Álvarez.

general Alfredo María Victoria de la cartera de Guerra y Marina, y la de su hermano Alejandro del importante puesto militar que desempeñaba como Comandante de Armas. Este episodio político tiene que ser objeto de un estudio aparte.

El presidente Victoria, asediado por tan severas exigencias, resignó el mando el 26 de noviembre de 1912, y en fecha 28 del mismo mes fue elegido como presidente de la República el arzobispo Monseñor doctor Adolfo Alejandro Nouel, para continuar de manera desdichada la serie de fracasos con que el país veía alejarse sus esperanzas de paz y de sosiego público. Monseñor Nouel prestó su juramento constitucional el 1° de diciembre.

EMPRÉSTITO DE $L,500,000. RENUNCIA DE NOUEL

Es indudable que el afán de lucro de los políticos dominicanos del pasado fue causa eficiente de todos los desórdenes, y de la bancarrota de la hacienda pública. La anarquía social causada por tantas convulsiones; la miseria colectiva creada por el abandono de todo propósito de producción honrada, y el menosprecio a los valores de la cultura en un clima de violencia sin freno, condujeron siempre a los dominicanos a considerar que la política, y muy especialmente las revoluciones, eran el único medio lógico para vivir con holgura, aunque la vida se jugara diariamente en esos trágicos delirios que agotaron la vitalidad del pueblo dominicano.

A la caída de Victoria, después de un año de horrores, se habían acumulado deudas diversas, además de las consabidas reclamaciones por daños y perjuicios, con que siempre se ha disfrazado el propósito de favorecer a los patrocinadores de todo movimiento triunfante.

Monseñor Nouel confrontó una situación caótica al otro día de prestar su juramento, y se vio asediado, tanto por los buscadores de posiciones ventajosas, como por la jauría hambrienta que impulsaba al mitrado al campo más ardiente de la política. Las

reclamaciones de todo género llovían sobre el Ejecutivo. Sólo había un medio para apaciguar a los rastreadores de las piltrafas de la lucha: pagar las deudas y reclamaciones para calmar las pasiones todavía desbordadas.

El 14 de diciembre de 1912, o sea dos semanas después de llegar Nouel al solio presidencial, el Congreso Nacional dictaba una ley autorizando la contratación de un empréstito de $1,500,000, "a un tipo no mayor de 7% anual".

El artículo 4° de esa ley determinaba que esos fondos serían destinados para el pago de: "a) sueldos atrasados; b) gastos de guerra; c) subsidios que acuerde el Congreso Nacional a los que directamente han sufrido daños en la última guerra civil". Para la cancelación de este empréstito se estipulaban $30,000.00 mensuales, que la Receptoría apartaría de las sumas que correspondían al gobierno de las rentas aduaneras. La contratación de este empréstito dio lugar a enconada lucha entre diversas entidades bancarias interesadas en obtenerla.

El Banco Nacional de Santo Domingo, propiedad de capitalistas de Nueva York, aspiraba tesoneramente a realizar el empréstito, pero su mayor empeño era obtener el contrato para actuar como depositarios de los fondos del gobierno que Santiago Michelena desempeñaba con gran lucro. El Royal Bank of Canada, que tenía sucursal abierta en Santo Domingo, gestionaba también la colocación del empréstito. Pero como los apremios del gobierno eran urgentes, Michelena avanzaba la suma de $2,500 diarios hasta que fueran terminadas las negociaciones.

El 18 de diciembre, el secretario de Estado norteamericano Mr. Knox, cablegrafió a Russell la aprobación de su gobierno para que los banqueros avanzaran al gobierno dominicano una suma no mayor de $300,000. Pocos días después, el secretario Knox transcribía por cable a Russell el texto íntegro del proyecto de contrato sometido

a su consideración por el National City Bank of New York, con recomendaciones de entregarlo a Michelena, que lo sometería a su vez a la consideración del gobierno dominicano.[72]

Este banco se comprometía a cubrir el empréstito, adquiriendo los bonos emitidos por el gobierno dominicano, a un tipo de 96½% por cada cien dollars. El gobierno dominicano aceptó todos los términos del contrato propuesto, pero aumentó a 97½% el tipo de adquisición fijado por los banqueros.

Entonces, Samuel Jarvis, principal propietario del Banco Nacional de Santo Domingo, presentó al Departamento de Estado severas objeciones al contrato del National City. Pero la respuesta de Knox cerró a Jarvis la posibilidad de anular la contratación de la banca rival. Con tenacidad infructuosa su organización siguió luchando y el Sr. Frank J. R. Mitchell, presidente del Banco Nacional de Santo Domingo, publicó varios folletos examinando y criticando la operación que se les había negado a ellos.

El contrato definitivo del empréstito fue firmado el 22 de febrero de 1913, por el secretario de Estado de Hacienda y Comercio en representación del gobierno, y por Santiago Michelena, en representación del National City Bank of New York. Con un cambio de notas contentivas de la "autorización" concedida por el gobierno norteamericano, de acuerdo con las estipulaciones de la convención de 1907, que prohibía el aumento de la deuda pública sin la autorización de la gran potencia, quedó definitivamente concluido este negocio.

El arzobispo-presidente, Monseñor Nouel, navegaba en un mar de pasiones y ambiciones voraces que conturbaban su espíritu. La agresividad política del horacismo, ansioso del poder, y la perspectiva del empréstito, habían agitado la vida nacional en forma amenazadora, y el mitrado prefirió renunciar a su elevada

[72]"Foreign Relations", 1913, pp. 459-60.

investidura política, después de cuatro meses de impotente gestión de gobierno. Con fecha 30 de marzo de 1913 presentó su dimisión, y el país se preparó para nuevas desventuras.

GOBIERNO PROVISIONAL DE BORDAS VALDEZ
LA INJERENCIA NORTEAMERICANA SE ACENTÚA
EL EXPERTO FINANCIERO

En abril de 1913 fue electo presidente de la República el senador general José Bordas Valdez. Este nuevo mandatario iba a sufrir una de las más violentas presiones ejercidas contra gobernante dominicano alguno por el gobierno de los Estados Unidos. Bajo los peores augurios inició su gestión de gobierno el general Bordas Valdez, y a poco se encendió la guerra civil. El gobierno norteamericano, empeñado en el más estricto control de la política dominicana, envió una nueva comisión, con instrucciones de observar las elecciones para la constituyente que se celebraron en diciembre de 1913. De la vecina isla de Puerto Rico llegaron 28 inspectores comandados por Walter St. Elmo, para auxiliar a la flamante comisión en su empeño de fiscalizar un proceso electoral dominicano.

No obstante esta abierta intromisión, sintomática de la falta de apoyo a su administración, Bordas Valdez inició gestiones pertinentes a la contratación de un empréstito por la suma de $1,500,000, tomando el precedente de Monseñor Nouel, de atraso en el pago de sueldos y reclamaciones contra el Estado. El gobierno estadounidense se mostró renuente a prestar su asentimiento a esta operación, por la experiencia obtenida en la negociación anterior, que fue escandalosamente repartida con cuentas amañadas por políticos profesionales en connivencia con reclamantes de toda especie. La inversión de todo empréstito nuevo, tendría que ser controlada y manejada por un funcionario de los Estados Unidos.

El 26 de enero de 1914, el Departamento de Estado cablegrafió al ministro Sullivan en Santo Domingo, para que interpusiera su

influencia a fin de que "ambas Cámaras del Congreso Dominicano" cooperaran con el gobierno en la adopción de un plan *salvador,* que consistía en la negociación de bonos dominicanos en poder de la Guaranty Trust Co. de Nueva York, hasta la suma de $1,200,000, que sería invertido, como se ha dicho, bajo la supervisión de un experto financiero norteamericano; en el aumento de los impuestos al alcohol y al tabaco, cuyos impuestos podrían ser recaudados por la Receptoría, y como punto tercero, que el gobierno dominicano solicitara los servicios de un experto financiero, que interviniera en el pago de las reclamaciones, en la organización de nuevos sistemas de contabilidad pública, y otras medidas para

> asegurar la estabilidad y el orden financiero y prevenir los déficits.[73]

La reacción del gobierno fue pedir que la cuantía del empréstito en perspectiva se elevase a $1,650,000 y que el experto financiero asumiera el rol de attaché comercial, adscrito a la Legación norteamericana en Santo Domingo, para disfrazarlo ante los ojos del pueblo con un cargo diplomático. Pero los partidos políticos que se preparaban a una próxima lucha electoral, husmeando el festín, hicieron presión para que la contratación de ese empréstito se demorara hasta la instauración del gobierno definitivo. Bordas Valdez y su gabinete no pudieron cuajar la tan deseada negociación, aunque el experto financiero surgió a flote de todo ese cúmulo inquietante de gestiones apresuradas.

El 12 de febrero, el secretario de Estado Bryan envió al ministro Sullivan un proyecto de nota que, a su vez, el secretario de Relaciones Exteriores dominicano debía dirigir a la legación norteamericana en Santo Domingo, solicitando la designación del experto financiero. Era éste el mismo procedimiento usado por el presidente

[73]"Foreign Relations", 1914, p. 200.

Roosevelt, cuando reclamó de Morales Languasco la solicitud del control de las aduanas por funcionarios estadounidense.

Bajo el asedio de tan poderosas circunstancias internas y externas, el secretario de Estado de Relaciones Exteriores del gobierno de Bordas Valdez, don Eliseo Grullón, solicitó finalmente el 20 de marzo la designación del Experto Financiero, con facultades de verdadero interventor en la administración pública. El gobernante dominicano y sus principales colaboradores calcularon que con la aceptación del experto financiero se conseguiría rápidamente el empréstito de $1,650,000, que se negociaba en esos momentos. A fines de ese mismo mes estalló una revolución en el Cibao, que obligó a Bordas a salir a campaña al frente de sus tropas. Pocos días después, el secretario de Estado Bryan autorizaba a la Receptoría a entregar $3,500.00 diarios en vez de $2,000.00 a título de préstamo por un lapso de 15 días, dentro de cuyo plazo el Congreso debería aprobar el empréstito. En caso de que esa aprobación no se obtuviera, los avances serían suspendidos.

El 1° de junio designó el presidente Wilson a Charles M. Johnston como Experto Financiero con facultades de control y supervisión en la vida financiera del Estado dominicano.

Para el mejor conocimiento del lector incluimos los diversos documentos que integran el proceso final que creó tan singular funcionario, en uno de los momentos más críticos de la historia nacional, de plena bancarrota y desconcierto, bajo el imperio de las luchas políticas partidistas.

* * *

(Traducción)

Nota que fue finalmente convenida

El gobierno del Presidente Bordas, deseoso de resguardar su respeto de las obligaciones internacionales de la República conforme a las exigencias de la soberanía nacional sugiere que con el fin de hacer efectivas las cláusulas de

la Convención de 1907, el Presidente de los Estados Unidos designe un experto financiero competente para que venga a Santo Domingo a ayudar a los funcionarios competentes de este Gobierno al arreglo de las deudas, trazar un sistema adecuado de contabilidad pública, y formular y poner en ejecución el convenio primitivo de aumentar las entradas y ajustarlas a los gastos, esto con el propósito de asegurar el orden y la estabilidad de nuestra hacienda y evitar déficits. En el desempeño de su misión tendrá el deber especialmente de averiguar la validez de cualquier gasto o reclamación que pueda serle presentado, refrendar los cheques, letras y órdenes de pago de los fondos dominicanos en favor de un tercero, ilustrar a ambos Gobiernos con respecto a cualquier deuda eventual determinando si esa deuda está en conformidad con la Convención de 1907, y ejercer todos los poderes de un inspector.

El experto financiero será empleado en conexión con la Receptoría en virtud de los términos de la Convención de 1907, pero en vista de que no estará subordinado a ella, su sueldo y sus gastos serán pagados por la Receptoría.

Las obligaciones que le son asignadas al experto financiero serán efectivas para con la Receptoría, el Departamento de Obras Públicas y cualquier Departamento u Oficina de cuentas públicas.

En caso de desavenencia entre la Receptoría y el Departamento de Hacienda y Comercio y cuando esta desavenencia no sea asunto cuya solución no requiera la intervención de ambos Gobiernos, el experto financiero estará autorizado a usar de sus buenos oficios para solucionar la diferencia.

Cuando el Gobierno Dominicano tenga noticias de que ha sido designado el experto financiero, le dará aviso inmediatamente al Receptor General de dicha designación y por lo tanto éste quedará autorizado a hacer los pagos mensuales y poner todos los demás gastos del 5% para la recaudación de las aduanas según fue determinado por el Presidente de los Estados Unidos y el Presidente de la República Dominicana.

* * *

(Traducción)

A Su Excelencia el General José Bordas Valdez,
Presidente de la República Dominicana.

Excelencia:

Tengo el gusto de presentarle al Sr. Charles M. Johnston, de Indianápolis, Indiana, a quien, de conformidad con la sugestión hecha por Vuestro Gobierno en su nota del 26 de mayo de 1914, dirigida al Gobierno de los Estados Unidos, he designado como Experto Financiero para ayudar, de conformidad con las disposiciones del Tratado del 8 de Febrero de 1907, entre los Estados

Unidos y la República Dominicana, a los funcionarios competentes del Gobierno Dominicano a arreglar sus deudas, trazar un sistema adecuado de contabilidad pública y conservar y poner en ejecución el acuerdo primitivo de aumentar las entradas y ajustarlas a los gastos con el fin de asegurar el orden y la estabilidad en la hacienda de la República Dominicana, y evitar los déficits. Para desempeñar su cometido estará en el deber de investigar la validez de cualquiera cuenta o reclamación que pueda ser presentada al Gobierno Dominicano, refrendar los cheques, giros, y órdenes de pago de fondos dominicanos en favor de tercero, ilustrar al Gobierno de los Estados Unidos y al de la República Dominicana con respecto a cualquiera deuda eventual, determinar si esa deuda está o no en conformidad con el ya dicho Tratado de 1907, y ejercer todos los poderes de un inspector.

Tengo confianza en que el Sr. Johnston desempeñará su cargo de manera aceptable por Vuestra Excelencia, y lo recomiendo a Ud. como un caballero en cuya honradez, discreción y experiencia puede Ud. tener entera confianza.

Su buen amigo,

Woodrow Wilson,

Refrendado:
J. W. Bryan,
Secretario de Estado

Washington, 29 de mayo, 1914.

* * *

(Traducción)

Woodrow Wilson,
Presidente de los Estados Unidos de América.

A todos los que la presente vieren, salud;

SABED. Que teniendo especial confianza en la integridad y habilidad de Charles M. Johnston, de Indiana, por la presente lo designo como Experto Financiero para ayudar, de conformidad con la Convención del 8 de Febrero de 1907, entre los Estados Unidos y la República Dominicana a arreglar las deudas, trazar sistema adecuado de contabilidad pública y conservar y poner en ejecución el convenio primitivo de aumentar las entradas y ajustarlas a los gastos del Gobierno, con el propósito de asegurar el orden y la estabilidad en la hacienda de la República Dominicana y evitar los déficits, y llenar todas las obligaciones que sean necesarias al desempeñar las disposiciones de la mencionada Convención.

En fe de lo cual he hecho fijar en esta, el sello de los Estados Unidos.

Dado de mi mano en la ciudad de Washington a los veintinueve días del mes de Mayo en el año mil novecientos catorce de L. S. Nuestro Señor y ciento treintiocho de la Independencia de los Estados Unidos de América.

(Fdo.) Woodrow Wilson,

Refrendado: (Fdo.) W. J. Bryan.

* * *

(Traducción)

DEPARTAMENTO DE ESTADO

1o. de Junio 1914.

Sr. Charles M. Johnston,

Washington, D. C.

Señor:

En conformidad con la sugestión de su Excelencia, el Presidente Provisional de la República Dominicana, General José Bordas Valdez, trasmitida al Departamento de Estado por el Encargado de Negocios dominicano en esta capital, en fecha 26 de mayo 1914, es Ud. informado de que ha sido designado por el Presidente de los Estados Unidos, bajo el artículo I de la Convención del 8 de Febrero 1907, para asumir el cargo de Experto Financiero en la República Dominicana. Ud. está encargado especialmente de las siguientes obligaciones:

(1) Hacer efectivas las cláusulas de la Convención de 1907 ayudando a los funcionarios competentes del Gobierno Dominicano en la determinación y arreglo de todas sus deudas pendientes;

(2) Formular e inaugurar un sistema adecuado de contabilidad pública;

(3) Investigar los medios propios para aumentar las entradas públicas y ajustar a ellas los gastos públicos de modo que sean evitados los déficits;

(4) Averiguar la validez de cualquier reclamación que pueda ser presentada contra el Gobierno Dominicano;

(5) Refrendar todos los cheques, letras, libramientos a órdenes de pago de fondos Dominicanos a terceros;

(6) Ilustrar a ambos Gobiernos con respecto a cualquier deuda eventual y determinar si esa deuda es o no conforme con la Convención de 1907;

(7) Ejercer todos los poderes de un inspector sobre la Receptoría, el Departamento de Obras Públicas y todos los Departamentos u oficinas de cuentas públicas;

(8) Arreglar cualquier diferencia que pueda surgir entre la Receptoría y el Departamento de Hacienda y Comercio, en asuntos que no requieran la intervención de ambos gobiernos;

(9) Ayudar a los funcionarios competentes del Gobierno Dominicano en la preparación del presupuesto anual y ayudarlos a ajustar al mismo los gastos gubernamentales.

Queda entendido que, aunque su designación se hace bajo el artículo I de la Convención, relativo al nombramiento de un Receptor General de Aduanas y otros empleados de la Receptoría Ud. no estará bajo la jurisdicción de dicha Receptoría o al servicio de ella.

Su remuneración de Ud., según fue convenido entre los Presidentes de los Estados Unidos y de la República Dominicana, será de ocho mil dollars (8,000.00) por año, en moneda americana pagadero mensualmente al cambio sobre New York. El Gobierno Dominicano le conocerá también todos los gastos necesarios de viaje cuando esté Ud. desempeñando sus funciones oficiales, incluyendo también los gastos necesarios de dependiente, oficina y diversos ocasionados en el cumplimiento de sus obligaciones. Dicha remuneración será sufragada por la Receptoría del cinco por ciento (5%) concedido por la Convención de 1907.

Soy, Señor, obediente servidor,

(Fdo.) W. J. Bryan

* * *

El 17 de junio de 1914 inauguró sus funciones Mr. Johnston, y el país dio un nuevo paso hacia el abismo. La situación política dominicana que se había complicado gravemente con la muerte del presidente Cáceres en 1911, había llegado entonces a un punto verdaderamente desastroso, que permitía a los funcionarios de turno en el capitolio de Washington, intervenir al capricho en los asuntos internos de la República Dominicana en violación de todas las leyes y normas que aseguran el respeto a los pueblos pequeños de la tierra.

Fue siempre táctica de los dominicanos que en algún momento asumieron la presidencia de la República con carácter provisional, quedarse o tratar de quedarse con carácter constitucional, mediante

[74]G. O. No. 2537, sept. de 1914.

la celebración de elecciones donde el sufragio quedaba supeditado al imperio de la fuerza y de la maquinaria de gobierno que las controlaba. Bordas Valdez también maniobró en este sentido. La revolución que diferentes partidos y sus cabecillas levantaron en distintas regiones del país, impidió cristalizara sus aspiraciones, y dio lugar a nuevas intervenciones norteamericanas en los asuntos del país. El presidente Wilson no quiso perder tiempo, y formó una comisión para visitar nuestro país, y presentar su plan, con el cual creía resolver todos los problemas que conturbaban la vida nacional. Esta comisión la integraban el ministro Sullivan; Franklin Fort, ex gobernador de Nueva Jersey y Mr. Charles Cogswell Smith. El plan del presidente Wilson era la más inaudita violación de la soberanía nacional. Basta consignar que el inciso 1° de la cláusula II del célebre Plan Wilson exigía que los líderes políticos dominicanos se pusieran de acuerdo para elegir un presidente provisional, o de lo contrario el gobierno de los Estados Unidos designaría uno, y le brindaría todo su apoyo para sostenerlo en el poder. Esto era ya la intervención abierta.

CAÍDA DE BORDAS VALDEZ
PRESIDENCIA PROVISIONAL DEL DOCTOR BÁEZ
TRIUNFO ELECTORAL DE JIMENES

Aunque el presidente Bordas desplegó su reconocido valor y serenidad en el sangriento asedio a la insurrecta plaza de Puerto Plata, no pudo triunfar, y hasta su campamento de campaña fue cañoneado por el barco de guerra norteamericano Machias en violación de todas las leyes internacionales. La llegada de los comisionados norteamericanos a Santo Domingo señaló su caída, y la instauración de un nuevo gobierno provisional. El 27 de agosto, después de enconadas deliberaciones bajo la mirada de la Comisión de Wilson, fue elegido presidente el doctor Ramón Báez, quien no era considerado con grandes ambiciones políticas, sino como uno de los médicos dominicanos más eminentes de su tiempo, consagrado

al cómodo disfrute de su posición social y de su prestigio de galeno y de hombre de bien.

Bajo la supervisión norteamericana se efectuaron las elecciones generales el 25 de octubre de 1915, en las que salió triunfante don Juan Isidro Jimenes, aunque no obtuvo una mayoría muy cómoda en el Congreso, donde sería objeto más tarde de enconada y abierta oposición.

El partido horacista se manifestó disconforme con las elecciones y trató de impugnarlas. Tal coyuntura la aprovechó el Departamento de Estado de Washington, para obtener una declaración previa de Jimenes y de Velázquez, su aliado electoral, prometiendo reconocer el *status* del Control o Experto Financiero, a cambio de la validación del proceso electoral y del reconocimiento de Jimenes tan pronto prestara su juramento constitucional. Asimismo se le ofrecería el apoyo más firme para su sostenimiento contra todas las maquinaciones de sus contrincantes. El 18 de noviembre de 1914, el encargado de negocios de los Estados Unidos, Mr. White, cablegrafiaba al ministro Bryan, que tenía una carta confidencial de Jimenes y Velázquez favorable al Control Financiero.[75] El 5 de diciembre se instaló Jimenes como Presidente Constitucional de la República Dominicana, en una atmósfera de alta tensión política.

El secretario Bryan no quiso dejar tiempo a Jiménez de acomodarse en la silla presidencial, sin presentarle formalmente sus exigencias. El 14 de diciembre, por medio del ministro Sullivan, presentó una nota con diversos puntos a los cuales requería la aquiescencia inmediata del gobierno. Estos eran: 1° Colocar la recaudación de las rentas internas bajo el control de la Receptoría General de Aduanas; 2° Reconocimiento oficial de Charles M. Johnston como contralor

[75]"Foreign Relations", 1914, p. 256.

de las finanzas de la República Dominicana con las atribuciones convenidas anteriormente; 3° Modificación del contrato del Director General de Obras Públicas, Mr. Collect, con el propósito de otorgarle mayor independencia a este funcionario norteamericano, y 4° la reducción de los gastos militares que absorbían en ese momento el 50% del presupuesto del Estado.[76] Sullivan informó que había presentado ese requerimiento al gobierno, y recomendaba al Departamento de Estado tener paciencia durante algunas semanas, pues él consideraba que todos esos asuntos serían aprobados, tan pronto como el nuevo gobierno terminara de instalarse.

CONTROVERSIA SOBRE EL EXPERTO FINANCIERO

Jimenes iba a sufrir en su nueva administración los más grandes sinsabores de su vida. Las exigencias del gobierno norteamericano, caracterizadas por una intromisión constante encaminada a manejar libremente los asuntos del Estado dominicano, no dejarían un momento de reposo al anciano mandatario, que se hallaba también agobiado por los graves problemas políticos internos.

El 8 de enero de 1915, el impaciente y tenaz secretario Bryan presentó directamente al ministro dominicano en Washington, doctor Enrique Jiménez, un *memorándum* extenso que contenía los cuatro puntos del 14 de diciembre, además de nuevos y graves requerimientos. Ahora pedía que el sistema inalámbrico, y los servicios de telégrafos y teléfonos fueran puestos bajo la supervigilancia del director general de Obras Públicas, que era como ya hemos dicho, un ciudadano norteamericano con carácter casi autónomo. Asimismo se pedía la designación de un superintendente para estos servicios, para cuyas funciones el Departamento de Marina de los Estados Unidos recomendaba al técnico Roscoe Kent.

[76]"Foreign Relations", 1914, pp. 260-61.

Situado en posición tan difícil el presidente Jimenes sometió a la consideración del Senado todo el expediente relativo al Experto Financiero. Según la respuesta del presidente del Senado, señor Mario Fermín Cabral "ese Alto Cuerpo resolvió no tomarlo en consideración".[77]

Amparándose en esta repudiación del Senado para tomar siquiera en consideración el asunto del Experto y sus atribuciones, Jimenes dictó una resolución el 1° de abril designando una comisión especial para tratar directamente en el Departamento de Estado de Washington estos asuntos, y procurar un acuerdo satisfactorio para ambas partes interesadas. La comisión estaba integrada por Federico Velázquez y Hernández, secretario de Estado de Fomento y Comunicaciones; licenciado Jacinto B. Peynado, Secretario de Estado de Justicia e Instrucción Pública; doctor Francisco Henríquez y Carvajal, y el licenciado Enrique Jiménez, Ministro Plenipotenciario de la República en Washington.

El secretario de Estado de Relaciones Exteriores, don Bernardo Pichardo, preparó un pliego pormenorizado de instrucciones, fechado el 17 de abril de 1915, que serviría de pauta en sus gestiones frente a la Cancillería de los Estados Unidos. El párrafo (I) de este interesante documento era una repudiación absoluta a tan continuas intromisiones en la vida nacional. Dice así:

> Todas estas explicaciones deben llevar el convencimiento a los Señores Comisionados de que es forzoso hacer una declaración formal al Honorable Presidente W. Wilson y al Secretario de Estado Honorable E. J. Bryan de que las exigencias que, en forma de insinuación, se le hacen a cada paso al Gobierno Dominicano de reformas para las que tiene que irse preparando gradualmente y que tienen generalmente por base subordinar un ramo de la administración pública al Gobierno Americano, alejan la confianza que el Gobierno dominicano quisiera que inspirara la política de los Estados Unidos de América al Pueblo dominicano.

[77]Col. Trujillo, Tomo 15, p. 379.

> La acción del Gobierno Dominicano debe ser amplia y desembarazada a fin de obviar las dificultades internas, que crea el recelo del sentimiento nacional, para que *motu proprio*, se establezca definitivamente un régimen administrativo liberal y moral, en armonía con las condiciones psicológicas de nuestro pueblo.[78]

Las notas intercambiadas en Washington por la Comisión y el Departamento de Estado son muy interesantes. Los comisionados presentaron inicialmente un *memorándum* redactado de manera cuidadosa y serena, rechazando la designación del discutido experto. En respuesta el Departamento de Estado manifestó que

> el Presidente de los Estados Unidos había decidido que asignando ciertos deberes adicionales al Receptor General de las Aduanas Dominicanas y a sus asistentes nombrados de acuerdo con el artículo 1° de la Convención de 1907, los beneficiosos efectos anticipados por la designación de un Experto Financiero pueden extensamente ser obtenidos, sin crear en ninguna forma impedimentos legales o de otra naturaleza como sucede con la creación de una oficina especial para el Experto Financiero.[79]

Pero esos deberes adicionales al receptor eran nada menos los que se les habían señalado al experto financiero en el acuerdo con Bordas Valdez. La comisión dominicana rechazó estas proposiciones, y tratando de zafarse de este anillo de hierro, indicó que el gobierno dominicano podría contratar directamente los servicios de un técnico en asuntos financieros, sin carácter oficial, para que realizara amplios estudios de las finanzas del Estado y de la situación económica en general, y que por medio de memorias y proyectos, pusiera al gobierno en aptitud de emprender las reformas necesarias para asegurar la estabilidad y prosperidad de la hacienda pública y privada.

Finalmente se llegó a un acuerdo tomando como base la proposición norteamericana. Se suprimió al experto, pero se amplió

[78]Col. Trujillo, Tomo 15, p. 389.
[79]Col. Trujillo, Tomo 15, p. 396.

la esfera de acción de la Receptoría. Una vez más la influencia noteamericana mutilaba la soberanía nacional.

Los deberes adicionales atribuidos a la Receptoría General de Aduanas eran:

> (a) Aconsejará a los empleados correspondientes de la Administración Dominicana sobre el arreglo de las deudas de la República pendientes de pago;
> (b) Hará recomendaciones al Gobierno Dominicano tendentes al mejoramiento del sistema de contabilidad pública;
> (c) Hará sugestiones al Gobierno Dominicano acerca de medios equitativos para el aumento de las rentas públicas y ajustar a estas rentas los desembolsos para evitar déficits.
> (d) Inquirirá, por conducto de la Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio, respecto de la validez de cualquiera y todas las reclamaciones que puedan presentarse contra el Gobierno dominicano y dará su opinión anticipadamente a los miembros de dicho Gobierno respecto de ellas.
> (e) Pedirá informes de tiempo en tiempo por el mismo conducto del Secretario de Hacienda y Comercio sobre las cuentas públicas del Gobierno dominicano y de los Departamentos y Oficinas, con el propósito de que el gobierno de los Estados Unidos esté asegurado de que la deuda pública no se aumenta y advertirá al gobierno de los errores y discrepancias que puedan encontrarse y hará recomendaciones tendentes a su corrección o a la protección del Gobierno contra esas irregularidades.[80]

Al desaparecer así absorbido por la Receptoría el cargo de Experto Financiero, Charles M. Johnston, que desempeñaba esas funciones, fue designado por el gobierno de los Estados Unidos para un cargo en la Receptoría. Tal designación produjo una ola de comentarios desfavorables al gobierno del presidente Jimenes y a su Comisión Especial enviada a Washington, porque consideró que la abolición específica del discutido cargo no entrañaba una modificación al carácter mediatizador del mismo, ya que continuaría desde

[80]Col. Trujillo, Tomo 15, pp. 407-8.

su nueva oficina de la Receptoría como sumo poder financiero sobre el gobierno dominicano. Jimenes se dirigió por cable directamente al presidente Wilson pidiéndole que Johnston no fuera designado para ningún servicio en Santo Domingo. Johnston continuó sin embargo en la Receptoría.

Estas intromisiones amparadas por la fuerza se irían haciendo más ominosas en lo sucesivo. El profesor de Princenton, Mr. Woodrow Wilson, a la sazón presidente de los Estados Unidos, no andaba con remilgos en su política con los países latinoamericanos. Uno de los períodos más crudos del imperialismo yanqui es sin duda su período de gobierno. Su memoria en la República Dominicana es infausta. Para poner en marcha sus proyectos designó a Russell ministro plenipotenciario en la República Dominicana, por segunda vez. Este diplomático no se había distinguido por un espíritu liberal y comprensivo de los problemas nacionales, sino más bien por una agresividad implacable rayana en el desprecio más absoluto de los valores nacionales.

Con fecha 17 de septiembre el secretario de Estado interino Mr. Frank L. Polk, transmitió extensas instrucciones a Russell, para guiar sus gestiones tan pronto pisara la tierra dominicana.

En ellas se le recomendaba gestionar algunas modificaciones a la Convención de 1907, con el propósito de hacer más rígido el control norteamericano, y en caso de que esto no fuera aceptado, presentaría los puntos de vista de su gobierno sobre la interpretación que le daba a varias cláusulas de la convención. Sobre esta interpretación antojadiza y unilateral giraría toda la política estadounidense en Santo Domingo, hasta consumar la muerte de la nacionalidad dominicana pocos meses más tarde.

A fines de octubre Jimenes le presentó un *memorándum* a Russell, demostrativo de la situación financiera del gobierno. El déficit diario del gobierno ascendía a $3,000,00. La deuda nueva alcanzaba casi $5,000,000. Russell informó a su gobierno que:

> El Auditor del Tesoro tiene por lo menos seis o siete años de atraso con sus libros y necesitaría una fuerza de expertos contadores no menos de un año para poner orden e inteligencia en este caos.[81]

Con fecha 19 de noviembre de 1915, sometió Russell al secretario de Estado de Relaciones Exteriores su famosa Nota 14, modelo de irreverencia a los poderes públicos de un Estado soberano, en la que hacía las más severas acusaciones al gobierno del presidente Jimenes, calificando tácitamente a sus altos funcionarios como si fueran una completa banda de ladrones. En uno de los párrafos de esa nota decía:

> si los funcionarios del Gobierno del Presidente Jimenes se están enriqueciendo mientras dejan en la necesidad a los empleados civiles del Gobierno no puede sino estar manifiesto que pronto se llegará a un tal estado de descontento que amenazará la existencia misma de la República.

Y continuaba manifestando que su gobierno estaba dispuesto a exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el gobierno dominicano en la Convención de 1907 y que la misma le daba derecho:

> a compeler a la observancia del Art. III insistiendo sobre el nombramiento inmediato de un Consejero Financiero para la República Dominicana, por designación que hará el Presidente de los Estados Unidos, y quien estará agregado al Ministerio de Hacienda al efecto de que el Ministro de Hacienda le preste ayuda eficaz a sus proposiciones y trabajos. El Consejero Financiero deberá hacer efectivas las cláusulas de la Convención de 1907, ayudando a los funcionarios competentes del Gobierno dominicano en la adjudicación y ajuste de toda su deuda pendiente; formular y establecer un sistema adecuado de contabilidad pública; investigar los medios propios de aumentar las rentas públicas, ajustando a ello los gastos públicos a fin de evitar los déficits; averiguar la validez de cualquiera y todas las reclamaciones que puedan ser presentadas contra el Gobierno Dominicano;

[81] "Foreign Relations", 1915, p. 327.

> refrendar todos los cheques, giros, libramientos y órdenes para el pago de los fondos dominicanos a terceros; ilustrar a ambos gobiernos con respecto a cualquier deuda eventual y determinar si esa deuda es o no conforme con la Convención de 1907; conciliar cualquiera diferencia que pueda surgir entre la Receptoría y el Departamento de Hacienda y Comercio, en asuntos que no requieran la intervención de ambos gobiernos; ayudar a los funcionarios competentes del Gobierno Dominicano en la preparación del presupuesto anual y ayudarles a relacionar con él los gastos gubernamentales; recomendar métodos adelantados para aplicar las rentas y hacerle al Ministro de Hacienda todas las recomendaciones que juzgue necesarias para bienestar y la prosperidad de la República Dominicana, siempre que la autoridad del Receptor General, según lo describe el Art. I, para percibir y aplicar las entradas de Aduanas, no sea en manera alguna afectada con esta interpretación.[82]

El párrafo b) de esta nota exigía la creación de una Guardia Civil, organizada y comandada por un oficial designado por el presidente de los Estados Unidos. Eran exigencias verdaderamente brutales.

El 8 de diciembre de 1915 respondía a esta famosa Nota el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, don Bernardo Pichardo, en un documento histórico, rechazando todas las proposiciones de Russell. Con altivez y energía el canciller dominicano hizo una defensa valerosa de los sagrados atributos de la soberanía nacional, amenazados de mutilación y muerte en la desconcertante misiva del ministro norteamericano. El país reaccionó violentamente con la noticia de las exigencias norteamericanas y la situación llegó a un estado verdaderamente explosivo.

Mientras se ejercía esa ruda presión sobre el gobierno dominicano los amagos de una guerra civil eran cada día más ominosos. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ofreció a Jimenes todo género de ayuda para sostenerlo en el poder, y advirtió a los

[82]Col. Trujillo, Tomo 15, págs. 402-21.

líderes de la presunta conspiración que no toleraría nuevas revueltas contra un poder legalmente constituido.

El presidente Jimenes reclamó la presencia de Horacio Vásquez en la capital, en un plausible gesto de conciliación política ante la gravedad de los acontecimientos. Russell y Vásquez sostuvieron una larga conferencia. Asimismo con Luis Felipe Vidal. Pero la caída estrepitosa de Jimenes la provocaría su propio partido. La ambición de muchos políticos menguados, desataría sobre esta tierra el rigor de la intervención militar norteamericana. El año de 1916 registraría una de las efemérides más dolorosas de nuestra historia. La actitud asumida por el ministro de la Guerra, general Desiderio Arias, empecinado político y revolucionario sin elevadas condiciones para comprender la gravedad de los problemas que agitaban la vida nacional en esos momentos, sería el pretexto para el desembarco de las primeras fuerzas del Cuerpo de Marinos de Estados Unidos.

CAPÍTULO IX

Intervención militar norteamericana

CAÍDA DE JIMENES. DESEMBARCO DE FUERZAS NORTEAMERICANAS EL DOCTOR FRANCISCO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PROCLAMA DE KNAPP

Los acontecimientos políticos en los primeros meses del 1916 se fueron sucediendo con mayor gravedad, complicando la situación difícil del presidente Jimenes, colocado entre la defección de sus amigos, especialmente en el Congreso, y la oposición enconada del horacismo y otros grupos menores.

El 7 de mayo, desde su Cuartel General de San Jerónimo, dirigió Jimenes una proclama a la nación, presentando renuncia de su elevada investidura, antes de utilizar el apoyo militar que con tanta insistencia le ofrecían las fuerzas norteamericanas. El país quedó desde ese momento sin un verdadero gobierno. El Consejo de Secretarios de Estado continuó en la dirección de los asuntos públicos de una manera precaria, mientras Desiderio Arias, adueñado de la capital, recibía un ultimátum del comandante militar norteamericano. En esa baraúnda, la situación financiera llegó al más completo colapso.

El 16 de junio escribía el ministro Russell al Consejo de Secretarios de Estado, informándole que de acuerdo con instrucciones de su gobierno, la Receptoría General de Aduanas se haría cargo

de la recaudación de todas las rentas del gobierno y que actuaría como agencia pagadora del gobierno ciñéndose a las estipulaciones presupuestales. El Consejo de Secretarios de Estado protestó, pero horas después el secretario de Hacienda y Comercio recibió una comunicación del receptor general Baxter, citándolo para el día siguiente en la Receptoría, para trasmitirle de viva voz las órdenes draconianas de entregar a la Receptoría todos los documentos de la Hacienda nacional. Después de un cambio de Notas, el ministro de Hacienda y Comercio, señor J. M. Jiménez renunció al cargo.

En medio de estos acontecimientos tan violentos la pasión política no tenía descanso. La elección del nuevo presidente se hacía imposible por las tácticas obstruccionistas de los grupos interesados. Al fin, el 25 de julio fue elegido el doctor Francisco Henríquez y Carvajal, quien residía desde muchos años atrás en Santiago de Cuba. Llamado por el Congreso llegó al país el 29 de julio y el 31 prestó el juramento constitucional. Pero el gobierno de los Estados Unidos estaba resuelto a suprimir la Constitución de la República Dominicana, y a establecer en este país el imperio de una fuerza militar interventora.

Como ningún gobierno puede subsistir sin recursos, el primer paso para estrangular la novísima administración del doctor Henríquez y Carvajal fue la suspensión de los pagos regulares a que estaba obligada la Receptoría. El 18 de agosto el receptor general Baxter publicó un aviso informando la cesación de pagos al gobierno dominicano

> hasta que se llegue a un completo entendido respecto a la interpretación de ciertos artículos de la Convención américo-dominicana de 1907.

Con tenacidad lucharon el doctor Henríquez y su gabinete para llegar a un acuerdo honroso con Russell pero las exigencias, de tan inicuas, hicieron imposible toda transacción. Mientras

tanto el gobierno seguía funcionando sin recibir un centavo de la Receptoría. Después de un activo cambio de notas, el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, licenciado José María Cabral y Báez entregó a Russell un *memorándum* presentando en detalle las consideraciones fundamentales por las cuales el gobierno dominicano no podía acceder a las exigencias de disolver el Ejército Nacional, y crear una Guardia Rural como única fuerza armada bajo el mando de un oficial norteamericano designado por el presidente de los Estados Unidos.

Para poner fin a sus agudas divergencias de criterio con el gobierno del doctor Henríquez, que representaba un resto de legalidad y constitucionalismo en la República, el gobierno norteamericano resolvió dar el paso decisivo, poniendo al país bajo estado de ocupación por las fuerzas militares, que desde el 16 de mayo lo habían sojuzgado en la empresa de armas menos gloriosa de aquellas en las cuales ha participado la bandera de las barras y las estrellas. El 29 de noviembre de 1916, la proclama del capitán H. S. Knapp puso término a la vida independiente de la República Dominicana. Desde ese momento los resortes financieros del Estado dominicano, así como todos los demás atributos de su soberanía, quedaron bajo el control de las fuerzas militares de ocupación. La forma como el gobierno interventor manejó esos asuntos es uno de los más interesantes y pintorescos capítulos de la vieja política imperialista de los Estados Unidos en la América Hispánica.

LA COMISIÓN DOMINICANA DE RECLAMACIONES (1917)

Por la Orden Ejecutiva N° 60 del 26 de junio de 1917 se creó la Comisión Dominicana de Reclamaciones, para conocer y depurar todas las reclamaciones contra el Estado dominicano, posteriores al Ajuste de 1907. Por una disposición subsiguiente se estableció que las reclamaciones a depurar abarcarían un período del 1° de julio

de 1904 al 29 de noviembre de 1916, siempre que la reclamación no hubiese sido incluida, o ajustada, o rechazada en el Plan de Ajuste. En un acto solemne celebrado con asistencia del gobernador militar, quien pronunció un discurso alusivo a las funciones de esa Comisión, quedó instalada el día 30 de julio de 1917, integrada de la siguiente manera:

J. H. Edwards, Presidente; teniente coronel J. Bootes, licenciado Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, licenciado Emilio C. Joubert y Martín Travieso hijo, Miembros.

Esta Comisión, once días después de instalada, calculó que se necesitaría una emisión de bonos de $5,000,000.00 para cubrir la deuda flotante. Ponderando la imposibilidad del erario nacional para hacer frente a tan ingente compromiso, y las dificultades que se presentarían para flotar un empréstito de esa cuantía, el gobernador militar de Santo Domingo, contralmirante H. S. Knapp, presentó personalmente en Washington, la proposición de que la Tesorería de los Estados Unidos facilitara el dinero, a título de empréstito al Tesoro dominicano. Como esta fórmula fue rechazada, entonces Mr. Edwards, presidente de la Comisión de Reclamaciones, viajó a los Estados Unidos para contratar el empréstito en el mercado financiero. Cuando todo esto sucedía, la Comisión no había terminado sus labores, y el proyecto de un empréstito tuvo que ser descartado. A fines de 1917 el gobernador militar informaba a la Comisión, para su buen gobierno, que los secretarios del Tesoro y de la Marina de los Estados Unidos, le habían comunicado que ese gobierno no permitiría la venta de bonos dominicanos en el mercado doméstico de los Estados Unidos, hasta que ellos no vendieran sus bonos de guerra, emitidos para cubrir en parte los gastos de su reciente intervención en la gran contienda europea.

Según los datos consignados en el Informe Final de la Comisión, el valor a que ascendió el total de las reclamaciones ajustadas

fue de $4,292,343.52, en 6,287 reclamaciones depuradas. El total de las reclamaciones sometidas al estudio de la Comisión fue de 9,038 con un valor nominal de $16,960,513.48. Lo cierto es que el gobierno interventor manejó este asunto con una serie de titubeos y tropiezos de carácter legal, y que nunca se publicó una Orden Ejecutiva fijando la cuantía de la emisión de bonos que servirían para canjear los títulos de esta deuda. El 2 de agosto se publicó en la prensa nacional, con la indicación de haber sido aprobada en Washington, la Orden Ejecutiva N° 193, que dispuso todo lo relativo a esta operación, que en el fondo y técnicamente no puede considerarse como un empréstito. Esa Orden Ejecutiva disponía una emisión de bonos al 5% redimibles "en o antes del 1° de enero de 1938". Todas las adjudicaciones hechas por la Comisión Dominicana de Reclamaciones se canjearían por esos bonos. Las adjudicaciones menores de $50.00 se pagarían en efectivo. La parte capital del artículo 4° de esta Orden Ejecutiva dice:

> Para atender al pago en bonos de las adjudicaciones hechas por la Comisión Dominicana, de Reclamaciones de 1917, en la forma dispuesta en el párrafo dos (2) de esta Orden Ejecutiva, la Contaduría General de Hacienda por la presente queda autorizada y facultada, y se le ordena expedir bonos de la República Dominicana en la forma y bajo las condiciones que se dispondrán más adelante, por la cantidad que pueda ser necesaria para pagar tales adjudicaciones, sin que pueda excederse en ningún caso de esa cantidad necesitada.[83]

Como algunos interesados consideraron que los efectos de la Convención de 1907 podían cesar antes del 1° de enero de 1938, en caso de que hubiesen sido cancelados para esa fecha los bonos de la emisión de 1908 por $20,000,000.00 se dispuso por la Orden Ejecutiva N° 272 del 13 de marzo de 1919 utilizar una porción (60%) del excedente que ocurriera sobre toda recaudación anual

[83]Colección de Órdenes Ejecutivas 1918, p. 156.

de más de tres millones de pesos, aunque en la Convención de 1907 se estipulaba que el 50% de todos estos excedentes pasaría al fondo de amortización de los bonos de 1908. Las estipulaciones de esta Orden Ejecutiva, disponiendo una distribución de cualquier excedente sobre las recaudaciones aduaneras de más de tres millones de pesos anuales, era una violación al famoso convenio de 1907. Es interesante hacer constar que todas estas operaciones se discutieron en Washington, y que produjo una dura controversia entre altos funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Marina.

La Comisión de Reclamaciones de 1917 terminó sus labores el 20 de julio de 1920. Pero desde 1918 se iban entregando los bonos a los interesados, fechados todos el 1° de enero de ese mismo año. La distribución final de acuerdo con los datos oficiales de la propia Comisión es como sigue:

Bonos emitidos de las Series C, D y M.	$4,025,600.00
Pagado en efectivo de cada adjudicación menor de $50.00.....	131,043.52
Pagado en efectivo por los bonos de la Serie L no emitidos.....	135,700.00
	$4,292,343.52

El gobernador militar, Almirante Thomas Snowden, informaba al Departamento de Marina, en fecha 30 de junio de 1920, que hasta ese momento habían sido liquidadas reclamaciones por un total de $3,809,757.91, dividido así:

En bonos.....	$3,554,200.00
En efectivo.....	255,557.91
	$3,809,757.91

Aunque Snowden informó en esa fecha que los bonos emitidos alcanzaban a $4,161,300, es necesario reducir esta suma en $135,700.00 correspondientes a los bonos de la Serie L que no fue emitida de acuerdo con la Orden Ejecutiva Nº 225, del 6 de noviembre de 1918, que dispuso pagar esos valores en efectivo. Los contadores de Mr. Snowden no eran muy minuciosos.

De los bonos adjudicados a los reclamantes, el teniente Arthur H. Mayo, hizo una buena cosecha. Este oficial desempeñaba las funciones de secretario de Hacienda y Comercio en el gobierno interventor, y fue factor de muchos de los desastres financieros de ese período. Esta vez negoció con una casa bancaria norteamericana, la adquisición de los bonos otorgados por la Comisión de Reclamaciones. En su *Report* de 1920 dice el hábil funcionario lo siguiente:

> Este Departamento se ha esforzado por ayudar a los reclamantes, a quienes se les había adjudicado los bonos de la emisión de 1919, a vender sus bonos, y en 1919 suscribió un contrato con la Fletcher American Company, de Indianápolis, Indiana, para la compra y reventa de estos bonos. Bajo este contrato se entregaron a la Fletcher American Company bonos con un valor a la par aproximadamente de $1,000,000. La Comisión de Reclamaciones Dominicana esperaba terminar la adjudicación de las reclamaciones ante la Comisión al 31 de diciembre de 1919, y por lo tanto el contrato con la Fletcher American Company en su redacción requería la entrega al 31 de enero de 1920 de todos los bonos que ella estaba obligada a comprar. La Comisión de Reclamaciones no tuvo éxito en terminar su trabajo a tiempo para permitir tal entrega, y como mientras tanto el mercado de bonos en los Estados Unidos había decaído hasta el punto que estos bonos no podían venderse con éxito en los Estados Unidos a un precio razonable, la Fletcher American Company declinó renovar su contrato. En la fecha de escribir este informe las condiciones han mejorado considerablemente y durante los últimos dos meses ha sido posible revender una cantidad considerable de bonos en los Estados Unidos. (Arthur H. Mayo "Report of Department of State of Finance and Commerce of the Dominican Republic for the period 1916 to 1919", etc.)

LOS EMPRÉSTITOS DEL GOBIERNO MILITAR

Los funcionarios del gobierno militar no se iban a contentar con una operación tan mediocre. Emulando a los políticos dominicanos a quienes ellos calificaban en los tonos más acres por la falta de escrúpulos en los asuntos financieros, tratarían con tenacidad de levantar cuantiosos empréstitos con el pretexto de ejecutar diversas obras públicas. Sin pecar de exceso en el juicio, o de animadversión contra esos funcionarios por la odiosa misión que desempeñaban en esta tierra, se puede afirmar que la administración de los funcionarios interventores, en el aspecto financiero, fue un verdadero desastre, como lo fue también en casi todos los asuntos donde pusieron la mano.

En 1921 Snowden quería diez millones más para obras públicas, y el Departamento de Estado se mostraba renuente a conceder la autorización que era necesaria, de acuerdo con el Art. 3° de la Convención de 1907, porque el gobierno militar actuaba "en nombre de la República Dominicana". En ese tiempo el país sufría una de las peores crisis económicas de su historia. El comercio estaba arruinado por la baja súbita en los precios de las grandes existencias de mercaderías acumuladas, y el descenso vertical de los precios de los principales artículos de exportación de la agricultura y la industria nacionales. La política de los bancos extranjeros radicados en el país, complicaba la angustiosa situación nacional. Aquí aparece entonces un personaje interesante, el teniente de marina Arthur H. Mayo, a la sazón encargado del Departamento de Hacienda y Comercio, y quien fue designado por Snowden como agente financiero especial de la República Dominicana, para que se trasladara a los Estados Unidos a tratar de cristalizar la jugosa operación. De la muy reconocida habilidad de Mayo en asuntos financieros, esperaba su mejor éxito el gobierno militar, para mantener en marcha tan bellos proyectos

en beneficio de la República Dominicana, que tan menesterosa estaba de ellos.

Interesado en amparar su conducta con algún voto favorable, Snowden dirigió una circular a todos los Ayuntamientos del país, así como a las Cámaras de Comercio, pidiendo le informaran si deseaban que se continuara la construcción de carreteras y otras obras de interés público. Todas estas instituciones contestaron favorablemente, pero manifestaron que estaban opuestas si para ello era necesaria la contratación de nuevos empréstitos.

Esta opinión tan categórica no inmutó lo más mínimo al almirante gobernador, que insistió ante su gobierno invocando que el prestigio nacional de Estados Unidos estaba comprometido en el programa de obras públicas de la República Dominicana. Frente a tan rotunda afirmación, el secretario de Estado norteamericano, Mr. Charles Evans Hughes, autorizó el 1° de junio de 1921 un empréstito de $2,500,000 únicamente. Esta emisión fue regulada por la Orden Ejecutiva N° 637, del 18 del mismo mes y año. Los bonos se emitirían vencederos en cuatro años, con un 8% de interés anual. Esta emisión fue suscrita por la Equitable Trust Company, de Nueva York.

GOBIERNO DEL CONTRALMIRANTE ROBINSON
NUEVOS EMPRÉSTITOS

Los $2,500,000 obtenidos por Snowden se esfumaron rápidamente. El viejo almirante fue sustituido por el contraalmirante Samuel S. Robinson, más enérgico, y que venía también interesado en el progreso dominicano y especialmente en el desarrollo de sus obras públicas. Sin pérdida de tiempo, el nuevo gobernador militar cargó contra el Departamento de Estado para obtener la autorización necesaria para emitir bonos por la suma de $7,500,000. Mr. Hughes, hombre de elevadas condiciones morales y políticas, se manifestó en principio contrario a este nuevo proyecto de empréstito,

por considerar que desacreditaba completamente al gobierno militar establecido en Santo Domingo, así como al Departamento de Estado, supremo control de sus actividades más trascendentales.

Para aliviar en algo la aguda situación de los funcionarios interventores, agobiados por la situación general del país en el aspecto económico, y por la enconada lucha que la inmensa mayoría del pueblo libraba contra la intervención, Hughes, "después de un cuidadoso estudio del asunto"[84] decidió autorizar la emisión de certificados por quinientos mil pesos a seis meses de plazo.

El gobierno militar arregló su asunto de esta manera: dictó la Orden Ejecutiva N° 713, del 23 de enero de 1922, autorizando la emisión de un "Título de la Deuda de la República Dominicana" por la suma de $450,000 amortizable a los seis meses con intereses a razón de 7% anuales, pagaderos a los seis meses de emitirse el título de referencia.

> Como garantía subsidiaria del pago de este título a su vencimiento, se autoriza y faculta a la susodicha Secretaría para emitir, y se le ordena que emita, un bono amortizable a los cinco años, por la suma de Quinientos Mil pesos oro ($500,000) con intereses a razón de siete por ciento (7%) anuales. Este bono será entregado al comprador del Título de la Deuda, y será por él retenido conforme a las condiciones siguientes: si a los treinta (30) días por lo menos antes del vencimiento del Título de la Deuda el comprador de éste no hubiere recibido del funcionario encargado de los asuntos de la Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio de la República Dominicana un aviso oficial de que se pagará el consabido Título a su vencimiento, con los intereses fijados en esta Orden; o si no hubiere efectuado la amortización del Título al vencerse éste, hubiérese o no recibido el previo aviso ya mencionado, el comprador del Título, al vencimiento de éste, o en cualquier tiempo después, quedará facultado para vender el bono en un precio no menor del noventa por ciento (90%) de la suma principal del mismo, más los intereses devengados hasta la fecha de la venta, y después de abonar al pago del título una cantidad en efectivo igual

[84]"Foreign Relations", 1921, p. 870.

> al valor nominal del mismo y los intereses devengados hasta la fecha de la venta, rendir cuenta de cualquier sobrante del precio de compra al funcionario encargado de los asuntos de la Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio. La venta de la especie podrá verificarse pública o privadamente, sin notificársela ni a la República Dominicana ni al Gobierno Militar Americano en Santo Domingo, ni a ningún funcionario de éste, pues se renuncia expresamente a todo aviso de la índole como condición de la compra y aceptación del Título de la Deuda por el comprador anteriormente mencionado. Pero dado que en cumplimiento del aviso previo de pago a que se ha hecho referencia el Título sea pagado a su vencimiento, con los intereses correspondientes, entonces el comprador entregará dicho bono provisional con arreglo a las instrucciones del Funcionario Encargado de los Asuntos de la Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio.[85]

Esta complicada fórmula, nacida en el cerebro de los hacendistas de la intervención, no daba frutos sazonados por su menor cuantía. Poderosas circunstancias políticas abrirían el camino para operaciones más jugosas. Cuando Robinson llegó al país trajo en su portafolio el famoso Plan Harding para la desocupación de la República Dominicana. En su proclama del 14 de junio de 1921, la sometió al conocimiento del pueblo dominicano. Las condiciones señaladas en este documento fueron consideradas como inaceptables, y levantaron una encendida ola de protesta en todo el país, que encontró vigoroso eco en el extranjero, muy especialmente en los países hispánicos. Considerada suficientemente debatida en la prensa y en fervorosas asambleas populares, el gobernador Robinson la juzgó rechazada, y lanzó una nueva proclama, el 6 de marzo de 1922, informando que retiraba y anulaba su proclamación del 14 de junio anterior, y que la ocupación militar continuaría en toda su fuerza y vigor, y que se haría un nuevo empréstito

> para continuar *el programa de obras públicas* y de instrucción pública, y la organización y adiestramiento de una fuerza militar dominicana

[85]Colección de Leyes, Tomo XXVIII, pp. 17-18.

> suficiente para mantener el orden en la República sin la ayuda de las fuerzas militares de los Estados Unidos.

Robinson ampliaba su interés por el país. Además del inevitable programa de obras públicas, habría mayor instrucción amén de una fuerza militar organizada, para defensa de las instituciones, lamentablemente quebrantadas en 1916 por el capitán Knapp.

Poniendo en obra lo ofrecido, el gobernador militar dictó la Orden Ejecutiva N° 735, fechada el 28 de marzo de 1922, disponiendo una cuantiosa emisión de bonos por un valor nominal de $6,700,000 de una emisión de $10,000,000 que el gobierno de Washington se había comprometido a autorizar. La airada y amenazadora proclama de Robinson del día 6 de ese mismo mes fue autorizada en todas sus partes por el Departamento de Estado, y el visto bueno a la cuantiosa emisión anunciada fue el fruto de la irritada sensibilidad de sus dirigentes políticos. Los bonos de esta emisión eran vencederos a los 20 años, con un interés de 5½%.

La vibrante lucha sostenida por el pueblo dominicano en defensa de su libertad y por el rescate de su soberanía culminó ese mismo año con el histórico Plan Hughes-Peynado, concertado en Washington, por negociaciones directas del licenciado Francisco J. Peynado, ilustre hombre público dominicano, y el secretario de Estado, Mr. Charles Evans Hughes. Este instrumento, que ponía cese a la intervención armada fue firmado también por los jefes de los Partidos Políticos, cuyas actividades estaban en receso, esperando únicamente propicias oportunidades para lanzarse a la lucha. En este Plan de Desocupación quedaron validadas todas las actividades del gobierno militar, y de manera muy expresa los empréstitos de 1918 y 1922.

CAPÍTULO X

La Tercera República

GOBIERNO DEL GENERAL HORACIO VÁSQUEZ
NUEVOS EMPRÉSTITOS

El período de gobierno de don Juan Bautista Vicini Burgos como presidente provisional para dirigir el proceso eleccionario, y al mismo tiempo como prueba de un gobierno semiautónomo, no es de interés en cuanto al proceso histórico de la deuda pública se refiere, a pesar de que en los últimos meses de su gestión, trató de obtener la autorización necesaria para contratar un empréstito, para terminar obras públicas y adquirir determinadas empresas de agua y luz. El general Horacio Vásquez, elevado al solio presidencial por la pujanza de su tradicional partido, en oposición a la candidatura del licenciado Francisco J. Peynado, tenía ante sí, cuando prestó el juramento constitucional, la oportunidad más brillante de su vida para cerrar con gloria el ciclo de sus intensas actividades políticas. Si bien su conducta no puede tacharse como la de un miserable sin criterio en las funciones del poder, es necesario convenir que no contaba con las condiciones esenciales para el mando supremo en el momento histórico en que llegó a conquistar por la vía de unas elecciones generales la posición que tanto anheló en sus años de más vibrante poderío político.

Pocos días después de instalado su gobierno, el Congreso Nacional dictó una Resolución (26 de julio de 1924), autorizando al Poder Ejecutivo a emitir bonos por $2,500,000 con interés de 5½% redimibles a los dos años. Como si este nuevo gobierno fuera una continuación legal del gobierno militar norteamericano, esta emisión de bonos se iba a realizar amparándose en la Orden Ejecutiva No 735 del 28 de marzo de 1922, que había dejado de manera expresa un excedente sin emitir de $3,300,000. El pretexto para esta emisión de bonos era el "Programa de Obras Públicas". Los espejismos de este programa servirían para ocultar los nuevos eslabones que se le agregaban a la cadena de oprobios que arrastraba el Estado dominicano por sus desastres financieros.

El contrato de empréstito por los $2,500,000.00 fue suscrito el 25 de septiembre de 1924, por don José del Carmen Ariza, Ministro Plenipotenciario de la República Dominicana en Washington, y por Jerome D. Greene, representante de la firma bancaria de Chicago, señores Lee, Higginson & Company.

Pero los $2,500,000 no eran suficientes. Se necesitaba cubrir los $3,300,000 dejados pendientes por el gobierno interventor. El secretario de Estado de Hacienda y Comercio, don M. Martín de Moya, en la memoria correspondiente al año 1926 dice textualmente:

> En el 1924, se dio como garantía colateral la diferencia entre los bonos vendidos y los autorizados en la emisión (de 1922) que alcanzaba a un valor de $3,300,000, por un avance de $2,500,000 y esta garantía colateral se canceló en abril de 1926, al efectuarse la venta neta a un tipo de $95.76, de los referidos $3,300,000.

Con el remanente de esta operación se hizo el pago a la Liberty Trust Company, de Nueva York, del pagaré que poseía contra la República por la cantidad de $300,000 más intereses, por la compra de la Empresa Agua y Luz de Puerto Plata y Santiago, ingresando

la suma de $331,617.73 resto de este remanente en los Fondos Generales de la Nación.[86]

LA CONVENCIÓN DOMÍNICO-AMERICANA DE 1924

Cuando el general Horacio Vásquez asumió el poder en 1924, la deuda internacional del Estado ascendía más o menos a $11,000,000. Lamentablemente, la experiencia de la intervención militar parece que no había sido todo lo amarga para que los políticos dominicanos buscaran nuevos rumbos a la vida financiera de la nación. Por eso, uno de los primeros empeños del equipo político en el poder fue emitir, como ya va dicho, bonos con cargo a la emisión autorizada para el gobierno interventor en 1922, y pocos meses después negociar una nueva Convención, que sustituyera la de 1907, y aprovechar la oportunidad para nuevos empréstitos. Si se estudia el instrumento político internacional concertado por la República Dominicana y los Estados Unidos en 1924, no se le encuentra una justificación adecuada, pues prolongaba la existencia a lo más oneroso de la Convención de 1907, como era la recaudación de las rentas aduaneras por medio de agentes de los Estados Unidos, y a cambio no ofrecía nada sustancialmente favorable. Esta nueva Convención fue firmada *ad-referéndum* el 27 de diciembre de 1924, y después de aprobada por el Congreso Nacional, fue ratificada por los Estados Unidos el 26 de abril de 1925. Se autorizaba en el nuevo convenio a la República Dominicana para emitir bonos hasta la suma de $25,000,000, consolidando las emisiones pendientes

> y para destinar el saldo existente después de concluida dicha operación, a mejoras públicas permanentes y a otros progresos encaminados a favorecer el desarrollo económico e industrial del país.[87]

[86]Memoria de Hacienda y Comercio, 1928, p. 16.
[87]Convención de 1924, Colección Trujillo, Tomo 15, p. 491.

La grave situación financiera existente en el mundo por esa época impidió, en parte, que se cristalizara esta operación.

Antes de canjearse las ratificaciones se suscitó un cambio de notas aclaratorias sobre la oportunidad de la emisión de los $25,000,000 en bonos punto clave de todo el acuerdo. El secretario de Estado, Mr. Frank B. Kellogg, respondió el 4 de abril de 1925, a la nota del ministro dominicano en Washington, don José del Carmen Ariza, fechada el 31 de marzo de 1925, en la cual decía:

> En contestación deseo manifestarle que es la opinión de este Gobierno que se requerirá un acuerdo especial de parte de los gobiernos de los Estados Unidos y la República Dominicana antes de la emisión de los bonos del proyectado empréstito de $25,000,000 ó de cualquier parte de él.[88]

La famosa cláusula III de la Convención de 1907 que prohibía a la República Dominicana aumentar su deuda pública sin el consentimiento de los Estados Unidos hasta que la totalidad de la emisión de bonos fuera cubierta, fue mantenida en el Acuerdo de 1924. La prohibición de modificar los aranceles sin autorización del gobierno norteamericano que figuraba en la Convención de 1907 como parte final del artículo III pasó a ser en la de 1924, el artículo IV con ligeras modificaciones.

LOS EMPRÉSTITOS DE 1926 Y 1928

En 1926 realiza el gobierno de Vásquez su primer gran empréstito. Por la ley N° 516 del Congreso Nacional de fecha 9 de octubre, promulgada por el presidente Vásquez en fecha 15, se autorizó una emisión de $10,000,000

> amortizables a los 14 años, a un interés no más de 5½%, prima de no más de 1% y tipo de venta no menos de 92%.
> El artículo 2° de esta ley disponía:

[88]Colección Trujillo, Tomo 15, p. 488.

El producido neto de la venta de estos bonos se distribuiría y se aplicaría en la forma y para las obras y propósitos que se detallan a continuación:

a)—Acueducto de la ciudad de Santo Domingo	$2,500,000
b)—Mejora y Dragado de los puertos de Santo Domingo, Puerto Plata y San Pedro de Macorís.....	2,000,000
c)—Ejecución de Carreteras y Caminos en construcción de acuerdo con el Plan de Obras Públicas, conforme a leyes especiales.....	2,500,000
d)—Continuación del Plan de Riego, Colonización en la frontera y otras zonas del país, compra de terrenos, etc.....	1,600,000
e)—Construcción de diez Casas Escuelas en Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Moca, La Vega, Barahona, Seibo, Samaná, San Francisco de Macorís, San Cristóbal	200,000
f)—Para contribución como fondo inicial a la organización de un Banco Agrícola con otros capitalistas	500,000

El licenciado Ángel Morales, ministro plenipotenciario dominicano, se dirigió oficialmente al Departamento de Estado en fecha 14 de octubre, solicitando la autorización legal para la emisión de este empréstito. Los funcionarios norteamericanos consideraban excesiva la cuantía, y recomendaron al gobierno dominicano, por la vía de su representante diplomático en Estados Unidos, que para completar la suma de diez millones se emitieran diversas series, siendo la primera de cuatro o cinco millones a lo sumo. El presidente Vásquez, y su ministro de Hacienda, M. Martín de Moya, invitaron al ministro norteamericano, Mr. Young, en Santo Domingo, para discutir la conveniencia de emitir en una sola vez los diez millones propuestos.

En ese momento era secretario de Estado norteamericano, Mr. Frank B. Kellogg, quien manifestó que

> el Departamento de Estado estaba ansioso de tener la seguridad de que el dinero destinado para Obras Públicas será sabia y eficientemente gastado.

Además, el alto funcionario norteamericano informó a Young, en Santo Domingo, que se le había comunicado a Morales que cuatro millones eran suficientes, distribuidos así: $2,500,000 para el acueducto; $1,200,000 para construcción de caminos, y $300,000 para irrigación y proyectos agrícolas. Cuatro millones serían autorizados para el año siguiente, y los dos millones finales el subsiguiente. Pero Kellogg no podía quedarse atrás. Indicaba a su ministro, con el propósito de que fuera ponderado por las autoridades dominicanas, que si era indispensable la emisión de los diez millones, Morales debía, al presentar una nueva solicitud de autorización, presentar una nota indicando que $3,000,000 serán usados el año que viene para ciertos propósitos definidos que han sido hecho públicos y el remanente será depositado en un banco de Nueva York, para ser retirado por orden de una Oficina de Obras Públicas que será constituida por un miembro designado por el presidente de la República Dominicana; un miembro designado por el ministro norteamericano, y el tercer miembro será el receptor general de Aduanas.[89]

La ley N° 516 ya citada fue modificada por la No 562, del 11 de diciembre de 1926, agregándosele al artículo 5to. un párrafo que decía:

> El Poder Ejecutivo queda autorizado a emitir los Diez Millones de pesos en dos o más series. La suma anual que se separe para el fondo de amortización e intereses será proporcional al valor de cada emisión.

La primera serie de los bonos de este empréstito fue puesta en pública subasta. Los banqueros de Chicago, Lee, Higginson & Co., remataron la totalidad al tipo de $98.07. No se pagó comisión.

Hubo un compás de espera antes de emitir la segunda serie. El 26 de enero de 1928, Lee, Higginson & Co., de Chicago, obtuvieron

[89]"Foreign Relations", 1926, p. 43.

la buena pro para adquirir los $5,000,000 de la segunda serie del empréstito de 1926. Según la Memoria del Secretario de Estado de Hacienda y Comercio correspondiente a ese año, los bonos de esa segunda serie fueron vendidos a $97.29 netos.

La deuda pública al finalizar el año 1928 ascendía a $20,000,000 en la siguiente distribución:

Emisión Bonos 1922:	
1ª Serie autorizada por O. E. 735	$6,700,000
Emisión Bonos 1922:	
2ª Serie autorizada por O. E. 735	3,300,000
Emisión Bonos 1926:	
1ª. Serie autorizada por Ley 516.....	5,000,000
Emisión Bonos 1926:	
2ª Serie autorizada por Ley 516.....	5,000,000[90]

[90]Memoria de Hacienda y Comercio, 1928.

CAPÍTULO XI
Era de Trujillo

LA ERA DE TRUJILLO
GRAVES CRISIS FINANCIERAS

Los desaciertos políticos y financieros que caracterizaron los tres últimos años del gobierno del general Vásquez, culminaron con el derrocamiento del viejo caudillo, que era el último representativo de una larga progenie de políticos, que durante casi un siglo imprimieron sobre la vida nacional las huellas de su poderío personalista. El 23 de febrero de 1930 se inició un movimiento revolucionario que a poco se extendió por todo el país, como una repudiación al régimen cuyos cimientos políticos estaban carcomidos por las disensiones que su propio caudillo había introducido como táctica divisionista, en interés de aniquilar la fuerza de algunos de los miembros más prominentes de su partido.

La ejemplar conducta seguida por el Comandante del Ejército Nacional, Rafael Leónidas Trujillo Molina, en esos días aciagos, evitando el derramamiento de sangre, hizo que el pueblo dominicano fijara sus ojos en este hombre, que sin pronunciados ribetes políticos había dado constantes demostraciones de carácter e inteligencia en el desempeño de sus delicadas funciones. La caída del régimen horacista se produce cuando tomaba vigor una gran crisis económica, de carácter mundial.

Bajo las peores condiciones políticas y financieras del Estado dominicano, fue elegido para la presidencia de la República, el general Rafael L. Trujillo Molina, como candidato de una confederación de partidos, pero muy especialmente de grandes sectores de la opinión pública, en beligerancia electoral frente a la alianza de los partidos Nacional y Progresista.

Las indomables energías de este hombre nuevo en el más elevado escenario de la vida nacional iban a quedar a prueba casi inmediatamente desde su asunción del mando presidencial. Primero, la jauría hambrienta de los partidos que lo postularon, trataría de descuartizar lo poco que había quedado en pie a la caída de Vásquez. Su primer éxito brillante fue frenar el desbordamiento de las ambiciones del heterogéneo grupo que se arremolinaba en torno suyo. En ese grupo pavoroso figuraban hombres de larga historia como Desiderio Arias, jefe del aniquilado partido jimenista o *bolo* que se había disfrazado con el pomposo título de Partido Liberal. Desiderio Arias, impenitente revolucionario noroestano, con millares de seguidores montaraces, era en el 1930, el símbolo más perfecto de la regresión y la barbarie políticas. La segunda prueba triunfal de Trujillo fue la espantosa catástrofe del 3 de septiembre de 1930, cuando la ciudad capital de la República quedó asolada por un ciclón de proporciones dantescas. Este desastre nacional paralizó momentáneamente todas las actividades normales del Estado, y llevó sus finanzas a un completo estado de bancarrota. Con semejante cohorte de males, un hombre menos dotado que Trujillo de tan inmensas energías habría resignado abatido y derrotado su elevada posición. Cuando todo este cúmulo ominoso caía sobre el gobierno, debían iniciarse los pagos de las amortizaciones de los empréstitos de Vásquez, con la cual se rebosaba la copa de las angustias nacionales.

LEY DE EMERGENCIA DE 1931

Desde los primeros días de enero de 1930 comenzó a perfilarse la gravedad de los problemas financieros. El propio receptor general de Aduanas comunicaba oficialmente al secretario de Estado de Hacienda, con fecha 3 de abril, la gravedad de la situación para la cual no había solución factible a la vista. En el párrafo 3° de esa sombría comunicación el citado funcionario dice:

> Aunque es empeño constante de la Receptoría complacer al Gobierno y cooperar con él, después de un estudio y examen cuidadoso del estado de cosas actual, según lo evidencia la adjunta tabla, si no mejora la situación que mantiene restringidos los ingresos, hasta nuevo aviso nos será menester retener todos los fondos aduaneros remesados a esta Receptoría, para poder con ellos hacer frente a los compromisos de amortización de los empréstitos, dos últimas emisiones de 1926, por diez millones de pesos que comienza a surtir efecto el 26 de agosto de 1930: $84,166.66 por mes.[91]

Este aviso significaba la quiebra del Estado, pues prácticamente quedaría en estado de insolvencia al no recibir de la Receptoría las remesas normales que necesitaba para subsistir.

Durante más de año y medio el receptor general de Aduanas procedió de acuerdo con su criterio, mientras el gobierno se desenvolvía en forma precaria, incapacitado de emprender nada importante en beneficio del país, y sin poder pagar siquiera los sueldos de los empleados públicos. En agosto de 1931 el representante diplomático dominicano en Washington, cumpliendo instrucciones del presidente Trujillo, se dirigió al secretario de Estado interino, Mr. William R. Castle Jr., pidiéndole una interpretación del Art. 5° de la Convención de 1924, por cuya autoridad el receptor general de Aduanas retenía remanentes del producto de las recaudaciones aduaneras. El alto funcionario norteamericano respondió el 12 de octubre diciendo:

[91]Colección Trujillo, Tomo 15 bis, p. 4

> Se ha hecho una cuidadosa investigación de la práctica en que se lleva la contabilidad y se hace el servicio de la deuda ejecutada por el Receptor General, y, aunque es aparente que ha habido alguna confusión o mal entendido, se comprueba que los términos de la Convención de 1924 se llenan cabalmente por el Receptor General. [92]

Frente a una posición tan lesiva para los intereses nacionales sólo era posible una acción enérgica, que los políticos dominicanos se habían mostrado incapaces de asumir cuando se trataba de conflictos con potencias extranjeras, muy especialmente los Estados Unidos. El presidente Trujillo, abroquelado por un derecho tan sagrado como era el derecho del pueblo dominicano a la supervivencia, decidió jugar una carta decisiva, en una acción de incalculables alcances patrióticos y administrativos. El 23 de octubre de 1931, votó el Congreso Nacional la Ley de Emergencia, de acuerdo con el proyecto que le fuera sometido por el presidente Trujillo, por cuyas valientes disposiciones quedaba suspendida la amortización de los empréstitos nacionales cuyo servicio oneroso había complicado gravemente la situación financiera del Estado dominicano. Los efectos de esa Ley cesarían el 31 de diciembre de 1934, o antes, si las causas que la habían generado cesaban en el lapso de su vigencia.

El párrafo c) del artículo 6° de esa Ley (N° 206), disponía que del Fondo de Emergencia el gobierno dominicano recibiría un máximo de $125,000.00 mensuales destinados de manera específica a diversos fines, y el párrafo d) disponía que el exceso en las rentas después de cubiertas las asignaciones especiales de la Ley de Emergencia sería aplicado al pago de las cuotas de amortización. Es decir, que en 1931, millón y medio de pesos era una cifra que significaba la vida o la muerte para el Estado dominicano. El señor

[92]Colección Trujillo, Tomo 15 bis, p. 12.

W. E. Dunn, consejero financiero del presidente de la República, fue designado Agente Especial de Emergencia de la República Dominicana.

REAJUSTE DE LA DEUDA EXTERNA

La Ley de Emergencia era una solución temporal y paliativa del grave problema. Como su nombre lo indica, era una medida de emergencia para que el Estado dominicano escapara al caos que se le venía encima. Pero desafortunadamente, las causas que gravitaban en 1931 con tan ominosa fuerza sobre todos los resortes de la vida pública no habían desaparecido en 1933, ni se vislumbraba una era de recuperación y prosperidad que borrara tantos factores negativos para el desarrollo de la economía nacional. Los desaciertos financieros del gobierno militar interventor de 1916 a 1924 y la descontrolada administración del general Horacio Vásquez de 1924 a 1930, habían legado al presidente Trujillo un cúmulo de problemas tan ingentes, que eran suficientes para desalentar a cualquier hombre de Estado. Frente a problemas tan agudos el presidente Trujillo decidió negociar nuevos arreglos que le permitieran salir adelante y dirigir el país por la senda del orden y la prosperidad. En octubre de 1933, Mr. Oliver P. Newman, Consejero Económico y Financiero, y el Dr. Joseph E. Davies, Consejero Legal, ambos al servicio de la República en su Legación de Washington, presentaron una Nota al Departamento de Estado de los Estados Unidos, informándole que era indispensable y necesaria la promulgación de una nueva Ley de Emergencia, para suspender los pagos de las amortizaciones de los bonos pendientes hasta el 31 de diciembre de 1937, con la estipulación categórica de

> aplicación del remanente de las rentas aduaneras y del actual balance en el fondo de emergencia a necesidades vitales del Gobierno y determinadas obras públicas, con el fin de dar empleo a las clases obreras, aliviar la miseria producida por la crisis económica y dar impulso a una rehabilitación permanente.

Más adelante, en el texto de la nota citada, ambos expertos, al referirse a la ley de 1931 decían:

> Dicha Ley ha permitido al Gobierno Dominicano simplemente sobrevivir. Sin ella se hubiera producido un caos.[93]

En su respuesta el secretario de Estado, Mr. Hull, informó que el gobierno norteamericano no podía intervenir en la modificación de los términos de los contratos por medio de los cuales se emitieron los empréstitos, y recomendaba que el gobierno dominicano discutiera ese problema con el Consejo de Protección para los Tenedores de Bonos Extranjeros, que el presidente Roosevelt había ordenado crear para atender a todos los asuntos de esa índole. Mr. Hull sugirió

> de manera informal y oficiosa que se mantuviera el status quo de la Ley de Emergencia por seis meses más después de su expiración en diciembre de 1933.

Actuando con diligente prontitud el Congreso Nacional dictó una ley el 14 de noviembre de 1933, a petición del Poder Ejecutivo, prorrogando la vigencia de la Ley N° 206 de Emergencia, sin hacer mención de un nuevo término de expiración. En la parte capital de su artículo único dice que se prorroga

> mientras se concluyan los arreglos económicos que por esfuerzo del Gobierno dominicano se realizan.

A pesar de la confusa redacción de esta ley, una de las más cortas, pero de las más importantes dictadas en la Era de Trujillo, se tuvo buen cuidado de eliminar el plazo de seis meses sugeridos por Cordell Hull. El gobierno dominicano dejaba así claramente sentado, que la prórroga de la Ley de Emergencia sería indefinida si no se llegaba al acuerdo que se gestionaba.

[93]Colección Trujillo, Tomo 15 bis, p. 62.

Tan pronto quedó constituido en los Estados Unidos el Consejo de Protección para los Tenedores de Bonos Extranjeros, el gobierno sometió a su consideración la nueva prórroga que fue amplia y duramente discutida. El señor Frank H. Vedder, representante de un grupo de tenedores de bonos, elevó un memorial al referido Consejo rechazando las conclusiones dominicanas y solicitando la intervención del gobierno de Estados Unidos, para la recaudación y distribución de todos los derechos de aduana, sin tomar en cuenta leyes de emergencia ni sus prórrogas.

Pero la hábil dirección del presidente Trujillo en el manejo de este asunto, amparado en la justicia moral que le asistía le permitió llevar adelante la defensa de sus proposiciones. Afortunadamente, el flamante Consejo de los Tenedores de Bonos estaba presidido por un hombre eminente, el Dr. J. Reuben Clark, de largo y brillante historial al servicio del Departamento de Estado de Washington. Este Clark fue el autor del famoso *memorándum* interpretativo y aclaratorio de la Doctrina de Monroe, para desvanecer la tensa atmósfera de recelos y desconfianzas existente en la América Latina, con respecto a la histórica Declaración, por causa del Corolario de Roosevelt (Theodore) y a cuyo amparo se cometieron tantas violaciones a la libertad de nuestros pueblos.

El 10 de octubre de 1934, el presidente Trujillo se dirigió oficialmente al Consejo, presentándole una amplia y detallada proposición, cuyas conclusiones principales eran como sigue: la República amortizaría en los años 1935, 1936, 1937 y 1938 porcentajes sobre el total de la deuda, con aumento gradual en proporción a los ingresos de las rentas aduaneras. El párrafo C) de esa proposición estipulaba que a partir de 1939 los bonos de 1940 (éstos eran los emitidos por la administración Vásquez en 1926), se amortizarían a razón del 1% anualmente, calculándose que su redención final terminaría en 1970. El párrafo D) estipulaba que los bonos de 1942, (éstos eran

los emitidos por el gobierno interventor en 1922) se amortizarían anualmente a razón del 1½% de su totalidad.

Todas estas proposiciones del presidente Trujillo fueron aceptadas por el Consejo y el 16 de agosto se dio un comunicado a la prensa informando del resultado final de estas negociaciones. Este acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional mediante ley dictada el 23 de agosto de 1934, quedando derogada toda la legislación de "emergencia" promulgada a partir de la ley N° 206 del 23 de octubre de 1931.

TRATADO TRUJILLO-HULL (1940)

Los esfuerzos del presidente Trujillo por solucionar favorablemente para los intereses nacionales el crónico y grave problema de la deuda pública, tenían una finalidad más alta que el reajuste de sus pagos para liberar al Estado de una carga demasiado pesada. Su pensamiento estaba dirigido hacia dos conquistas capitales. Primero: la abrogación de la Convención de 1924, que mantuvo todas las estipulaciones onerosas de la del 1907, y por cuyo medio la recaudación de las rentas aduaneras fue puesta a cargo de funcionarios nombrados por el presidente de los Estados Unidos. Y segundo: la cancelación total de la deuda pública, pagando y recogiendo hasta el último bono dominicano existente en los mercados financieros. La existencia de la Receptoría General de Aduanas, dirigida por un *staff* de funcionarios norteamericanos, era el símbolo más claro de la mediatización de la soberanía nacional. El receptor general se había convertido, en el ejercicio de sus funciones, en árbitro supremo de la vida financiera del Estado, como en efecto sucedió en 1912, 1914 y 1916, cuando amenazaron suspender, y suspendieron, los pagos al gobierno nacional. La existencia de un poder incontrastable como ese, fuera del alcance del poder público dominicano, moviéndose dentro de la órbita natural de la administración del Estado, había menguado la plenitud de la soberanía, y sólo teníamos un Estado

a medias. Ese estado de cosas venía, como hemos visto, desde que el presidente Báez firmó el 1° de mayo de 1869 el famoso contrato de empréstito con Hartmont, por cuyo medio se hipotecaba todo el patrimonio nacional, y autorizaba a los prestamistas para que designaran agentes en las aduanas de Puerto Plata y Santo Domingo, para recaudar los fondos afectados al pago del empréstito. Aunque Hartmont no percibió ninguna renta, ni lo necesitó para lucrarse, pues estafó ampliamente al gobierno dominicano, en los contratos de empréstitos subsiguientes siempre apareció la sombra de su turbia maquinación. Cuando se realiza en 1888 el empréstito con Westendorp, contratado por Ulises Heureaux, se creó la famosa Caja General de Recaudación, "La Regie", de tan triste recordación, que pasó cinco años después en la integridad de sus funciones a la San Domingo Improvement Co. La existencia de este engendro, es un testigo de la desnacionalizante conducta de los gobernantes dominicanos de más larga historia, y evidencia que el proceso de la formación nacional aún no se había completado.

La Convención de 1905, el *Modus Vivendi*, y la Convención de 1907 recogieron y dieron nuevo nombre y atribuciones a una intervención fiscal que en ningún momento los dirigentes de 1905 y 1907 estaban en capacidad de desterrar. La pobreza del erario nacional, y la rampante actividad de tanto caudillaje a caza de prebendas, eran poderosos factores negativos que impedían de consuno toda acción consagrada a la defensa de los intereses nacionales.

El hombre que ascendió al poder en 1924, no tenía tampoco las eminentes condiciones necesarias para una acción de gobierno constructiva en todos los órdenes como era necesario después de ocho años de intervención yanqui. El país puso en evidencia que no había alcanzado un estado óptimo de madurez política cuando eligió en forma tan abrumadora a un caudillo de la vieja escuela, que durante más de 30 años cabalgó incesantemente en pos de la

más alta magistratura del Estado. El general Horacio Vásquez, al ascender al solio presidencial, había perdido sus ardorosos bríos de luchador, y fue, en manos de sus más cercanos partidarios, un instrumento ciego e irresponsable. La conocida veleidad de su carácter lo llevó a cometer varios desaciertos capitales, entre ellos la concertación precipitada de la Convención de 1924, con el deliberado propósito de obtener nuevos y jugosos empréstitos. Como homenaje a la verdad histórica, es justo proclamar que la famosa camarilla de palacio fue culpable en gran parte de sus devaneos políticos y de sus desaciertos financieros que abocaron al país en 1930 al más tremendo caos de su historia.

La acción emprendida por Trujillo en 1931 con la Ley de Emergencia y que culminó con el Tratado Trujillo-Hull, es de tan alto valor histórico como las guerras de la Independencia o de la Restauración, porque en ese acuerdo memorable se completa e integra la soberanía nacional y adquiere el Estado dominicano la plenitud de sus funciones políticas y se completa el tortuoso proceso de la formación nacional.

Después de dos períodos sucesivos de intensa labor de gobierno el presidente Trujillo se retiró, en cierto modo, a la vida privada, pero se mantenía vigilante de los problemas nacionales, ofreciendo a la nueva administración pública el concurso de su capacidad y experiencia. Así fue como todas las negociaciones que culminaron con la firma del Tratado Trujillo-Hull, iniciadas durante el período de gobierno del licenciado Jacinto B. Peynado, y completadas bajo la administración del doctor Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, que sucedió a Peynado a causa de su fallecimiento, estuvieran en todo momento bajo la suprema dirección del Generalísimo Trujillo.

Los primeros contactos establecidos por el gobierno dominicano para negociar la abolición de la Convención de 1924, heredera de la

del 1907 estuvieron a cargo de la Cancillería, por los canales diplomáticos ordinarios. Pero en julio de 1939, el Generalísimo Trujillo visitaba los Estados Unidos, rumbo a Europa, en bien ganado viaje de descanso. El 26 de ese mes le dirigió una carta personal al presidente Franklin D. Roosevelt, invitándolo a dar una nueva nota de sinceridad política hacia los pueblos de América Latina, anulando la cláusula de la convención que facultaba al presidente de los Estados Unidos a designar al receptor general de las Aduanas.

Roosevelt respondió a Trujillo excusándose de no poder tomar una medida de ese alcance, sin la intervención del Senado de su patria, pero ofrecía interesarse por el éxito de cualquier negociación futura sobre ese mismo asunto.

En Europa recibió Trujillo la respuesta de Roosevelt. El estallido de la Segunda Guerra Mundial precipitó el retorno del estadista dominicano, cuyo regreso al seno de la patria era solicitado por todo el país. A su paso nuevamente por Washington, escribió a Roosevelt, en fecha 25 de octubre, sometiéndole una proposición concreta de cuatro puntos, que con los desarrollos pertinentes, fue la base del Acuerdo Trujillo-Hull. Durante algunos meses las negociaciones continuaron a cargo de la Legación dominicana de Washington, bajo la dirección de la Cancillería.

El 15 de agosto de 1940, el Departamento de Estado de Washington dio un comunicado a la prensa informando que se había designado al señor Hugh R. Wilson, como embajador representante del secretario de Estado, para que continuara en Ciudad Trujillo las negociaciones iniciadas en Washington para la solución de los problemas originados de la convención de 1924. El gobierno dominicano designó a su vez una comisión para negociar con el enviado norteamericano, integrada por el licenciado Arturo Despradel, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores; José María Bonetti Burgos, Secretario de Estado de la Presidencia, y por el licenciado

Jesús María Troncoso Sánchez, Subsecretario de Estado de la Presidencia. Completadas las negociaciones en Ciudad Trujillo se resolvió que la firma del Tratado se realizara en Estados Unidos.

El 28 de agosto, el presidente Troncoso de la Concha confirió plenos poderes al Generalísimo Trujillo, como Embajador Extraordinario en Misión Especial, para firmar el trascendental acuerdo con que se le daba cima a tan laboriosas negociaciones, y se clausuraba un proceso histórico dominicano de tanta influencia en el cuadro general de los problemas nacionales.

El 24 de septiembre de 1940, el embajador Trujillo Molina y el secretario de Estado Mr. Cordell Hull firmaron en Washington el histórico documento que ponía cese a la ingerencia norteamericana en el manejo de los asuntos financieros del Estado dominicano. En uno de los párrafos del comunicado dado a la prensa por la Legación dominicana en Washington ese mismo día dice:

> Con la abrogación de la Convención el Gobierno Dominicano pone fin a una ingerencia extranjera que lesionaba su soberanía, obstaculizaba el desarrollo de su intercambio comercial y constituía un gran obstáculo para el fomento de las industrias en la República Dominicana.[94]
>
> El histórico acuerdo, alta conquista del patriotismo y de la fe política de un hombre esclarecido dice así:
>
> POR CUANTO, en la ciudad de Washington D. C. el día 27 de diciembre de 1924 se concertó y firmó una Convención entre los Plenipotenciarios de la República Dominicana y de los Estados Unidos de América, estipulando la ayuda de los Estados Unidos de América en la Recaudación y aplicación de las rentas aduaneras de la República Dominicana; y POR CUANTO el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América desean modificar dicha Convención a beneficio de ambas partes y al mismo tiempo proteger los derechos de los Tenedores de bonos de los empréstitos de 1922 y 1926;

[94]Colección Trujillo, Tomo 15 bis, p. 221.

El Presidente de la República Dominicana, representado por el Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, Embajador Extraordinario en Misión Especial, y El Presidente de los Estados Unidos de América, representado por Cordell Hull, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, quienes, habiéndose comunicado mutuamente sus respectivos plenos poderes, los cuales fueron hallados en correcta y debida forma, han convenido en los siguientes artículos:

Artículo I

El Gobierno de la República Dominicana recaudará por mediación de sus correspondientes funcionarios nacionales, las rentas aduaneras de la República Dominicana y todas las rentas correspondientes a los derechos de Aduanas. La Receptoría General de las Aduanas Dominicanas, estipulada en la Convención del 27 de Diciembre de de 1924, dejará de funcionar en la fecha en que el Gobierno Dominicano se haga cargo de la recaudación de las rentas aduaneras.

Todas las propiedades y fondos de la Receptoría General serán entregadas en la misma fecha al Gobierno de la República Dominicana.

Ninguna reclamación será hecha por un Gobierno contra el otro en razón de cualquier acto de la Receptoría General.

Artículo II

El Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América de común acuerdo, designarán un Banco con establecimiento en la República Dominicana, como único depositario de todas las rentas y fondos públicos de cualquier naturaleza del Gobierno Dominicano. Asimismo designarán, por común acuerdo, un funcionario para que actúe en dicho Banco como representante de los tenedores de bonos de la Deuda Externa de 1922 y 1926 en todo lo relativo al servicio de dicha Deuda Externa. Si en cualquier momento el Banco así designado deja de funcionar en esta capacidad por cualquier motivo, o si cualquiera de los Gobiernos estima aconsejable un cambio, se designará un sucesor de acuerdo con el procedimiento mencionado más arriba. Si el representante de los tenedores de bonos de la Deuda Externa de 1922 y 1926 no pudiere, por cualquier motivo, continuar en tal capacidad, o si cualquiera de los Gobiernos no estima aconsejable un cambio, su sucesor será designado de acuerdo en el mismo procedimiento establecido para la designación original. En el caso de que sea necesario nombrar

un sucesor, bien del Banco o del funcionario que represente a los tenedores de bonos de la Deuda Externa de 1922 y 1926, y en el caso eventual de que los dos Gobiernos no puedan llegar a un acuerdo sobre dicha designación en el término de tres meses, se solicitará del Consejo Protector de Tenedores de Bonos Extranjeros Inc. que proponga dicho sucesor, y en el caso de que dicho Consejo no hiciere esa proposición, se solicitará del Presidente o de uno de los Vicepresidentes de la Asociación Americana de Banqueros, o de su representante debidamente autorizado, que haga dicha proposición, a condición, sin embargo, de que ni un Banco ni una persona anteriormente repudiada por cualquiera de los Gobiernos puedan ser propuestos. En el caso de que un Banco o una persona sea propuesta de acuerdo con este procedimiento, los dos Gobiernos nombrarán al Banco o persona en esa forma propuesta.

El funcionario que represente a los tenedores de bonos de la Deuda Externa de 1922 y 1926, nombrará, con la aprobación de los dos gobiernos, el sustituto que ha de servir en su lugar en el caso de ausencia o incapacidad temporales.

Artículo III

En los diez primeros días de cada mes natural, el representante de los tenedores de bonos de la Deuda Externa de 1922 y 1926, o sus sustitutos recibirá por endoso y mediante órdenes de pago que le serán dadas al Banco depositario por el Gobierno Dominicano, por vía de la Secretaría de Estado del Tesoro y Comercio, la suma necesaria para cubrir los pagos mensuales de la manera siguiente:

Primero. Al pago de una duodécima parte de los intereses anuales de todos los bonos pendientes de la Deuda Externa de 1922 y 1926.

Segundo. Al pago de una duodécima parte de las cantidades anuales señaladas para la amortización de dichos bonos, incluyendo el interés de todos los bonos que esté o puedan ser reunidos en el fondo de amortización. Dicha amortización se calculará y efectuará de acuerdo con los contratos de empréstitos modificados por el Convenio entre la República Dominicana y el Consejo Protector de Tenedores de Bonos Extranjeros Inc., celebrado en fecha 16 de Agosto de 1934, y por las estipulaciones del Artículo V del presente acuerdo.

Tercero. Al pago de una duodécima parte del costo anual de los servicios prestados por el representante de los tenedores de bonos de

la Deuda Externa de 1922 y 1926, o su sustituto, quienes recibirán sueldos que se establecen mediante un cambio de notas, que se anexa a este documento, y a las cuales se les dará entera fuerza y efecto como parte integrante de este Acuerdo, y una suma razonable para gastos que ocasione el desempeño de sus deberes; y el pago de una duodécima parte de la suma anual convenida entre el Gobierno Dominicano y el Banco depositario como compensación de los servicios de dicho Banco.

Ningún desembolso de fondos de la República Dominicana será hecho por el Banco Depositario hasta que los pagos previstos en este artículo hayan sido hechos:

Las sumas decididas por el antedicho representante, para el servicio de los bonos, serán transmitidas inmediatamente por él al Agente o Agentes Fiscales de los Empréstitos.

Artículo IV

El Gobierno de la República Dominicana declara que el servicio de intereses y amortización de los bonos de la Deuda Externa de 1922 y 1926, así como los pagos estipulados en el tercer ordinal del Artículo III del presente Acuerdo, constituyen una afectación irrevocable en primer rango de todas las rentas de cualquier naturaleza del Gobierno Dominicano.

Artículo V

En el caso de que la recaudación total de todas las rentas de cualquier naturaleza del Gobierno Dominicano excediere en cualquier año de $12,500,000, se aplicará al fondo de amortización para la redención de los fondos de la Deuda Externa de 1922 y 1926 que estén pendientes, un (10) por ciento del excedente sobre $12,500,000 hasta la suma de $13,500,000 y además, un cinco por ciento (5) de todas las sumas que excedan de $13,500,000.

Artículo VI

El representante de los tenedores de bonos de la Deuda Externa de 1922 y 1926 tendrá acceso completo a todos los récords y libros del Banco depositario que tengan relación con las rentas públicas.

El Secretario de Estado del Tesoro y Comercio del Gobierno Dominicano suministrará mensualmente al representante de los tenedores de bonos de los empréstitos de 1922 y 1926, completos y detallados informes, debidamente certificados, de todas las entradas y

desembolsos, así como de las otras operaciones fiscales del Gobierno Dominicano.

Artículo VII

El sistema de depósito de todas las rentas de la República Dominicana será efectuado de acuerdo con las leyes dominicanas de Contabilidad y de Hacienda que ahora rigen esa materia, y estas leyes, así como las atribuciones conferidas por este Acuerdo al representante de los tenedores de bonos de los empréstitos de 1922 y 1926, no serán modificadas, ni su fuerza disminuida por el Gobierno Dominicano durante la vigencia de este Acuerdo, sin el consentimiento previo de ambos Gobiernos.

Artículo VIII

Cualesquiera controversias que puedan surgir entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América, en relación con la ejecución de las disposiciones del presente Acuerdo, serán, si es posible arregladas por la vía diplomática. Si el Gobierno de la República Dominicana o el Gobierno de los Estados Unidos de América notificare que, en su opinión, las posibilidades de arreglo por esta vía han sido agotadas, estas controversias serán solucionadas de acuerdo con el procedimiento estipulado en la Convención Interamericana de Arbitraje, firmada en Washington el 5 de enero de 1929, no obstante las disposiciones del artículo 2° (a) de dicha Convención.

Artículo IX

La Convención firmada por la República Dominicana y los Estados Unidos de América el 27 de Diciembre de 1924, cesará en sus efectos y el presente Acuerdo entrará en vigor cuando se lleve a efecto el cambio de ratificaciones, que tendrá lugar en la ciudad de Washington dentro de los treinta días siguientes a la ratificación por el Gobierno que, en cuanto a tiempo, sea el último en ratificar; a condición sin embargo, de que los artículos I, II y V de dicha Convención del 27 de Diciembre de 1924 continúen en toda su fuerza y efecto hasta que los dos Gobiernos reconozcan que se han adoptado y puesto en operación todas las medidas necesarias para la ejecución del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo continuará en toda su fuerza y efecto durante el período de duración de los bonos externos de 1922 y 1926 aún pendientes.

> Después de la redención o cancelación de dichos bonos, las estipulaciones de este Acuerdo dejarán automáticamente de tener efecto.
> En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios firman y sellan este Acuerdo, en duplicado, en español e inglés, siendo ambos textos auténticos.
> Hecho en la ciudad de Washington, el día 24 de Septiembre de 1940.
>
> (firmado) *Rafael L. Trujillo*
> (firmado) *Cordell Hull.*

Sobre este documento extraordinario caben mejor las ponderaciones históricas que las de carácter jurídico-técnico. Y ello es así porque el Tratado Trujillo-Hull es uno de los ápices de nuestra historia. En la vida de relación de los Estados modernos, los tratados, acuerdos y convenciones señalan el ritmo de la vida de relación de los mismos. Pero cuando se realiza una conquista extraordinaria como la que encierra ese documento memorable, es una nación entera que se pone de pie para recibir sus beneficios, y bañar de luz su frente tan cargada de amarguras inenarrables.

El Tratado Trujillo-Hull es una reivindicación de la historia nacional, pues las mayores fuentes de angustia que martirizaron esta tierra tuvieron como origen sus desventuras financieras.

En la República Dominicana no se puede escribir la historia financiera, sin que ella sea, en proporción considerable, la historia de la deuda pública. Abatidos por la miseria, sin aliento para iniciar una vida próspera y constructiva, los dominicanos llegaron al año 1930, como una masa gregaria sin ideales superiores en la estructuración de una nacionalidad eminente y respetada. Fue necesaria la comparecencia en el escenario de la vida pública de un hombre extraordinario, cerebral y visionario al mismo tiempo, que se dedicara con sin igual patriotismo a la portentosa tarea de reconstruir desde sus cimientos la organización del Estado, para infundir en el país las energías y esperanzas necesarias para levantarlo a un plano digno de su historia.

El manejo de las aduanas nacionales por los funcionarios norteamericanos, además de ser un baldón para un pueblo libre, era un rémora para el desarrollo de todos los factores de su prosperidad. Los Estados Unidos otorgaron a Cuba un Tratado Comercial que impulsó a toda máquina el desarrollo de la Antilla hermana, y a la República Dominicana le impidieron, por la desdichada cláusula III de la Convención de 1907, reiterada en 1924, el derecho a modificar sus aranceles, y como consecuencia a negociar tratados de comercio favorables al desarrollo de la economía nacional.

Trujillo planteó con soberana dignidad el problema dominicano, y triunfó, amparado por la fuerza del derecho.

De un solo golpe de acción, borró para siempre lo que fue llaga viva y dolorosa para la nacionalidad. De Hartmont a Trujillo hay una diferencia astronómica. Los acuerdos financieros del pasado son el fruto de la miseria moral de muchos políticos sin escrúpulos, mientras que el Tratado Trujillo-Hull es el símbolo luminoso que marca la integración total del Estado dominicano, en la plenitud de sus formas políticas y en la concreción de la soberanía con todos sus atributos inmortales.

La Receptoría General de Aduanas, símbolo de la mutilación de la soberanía nacional, quedaba clausurada, pasando sus funciones al gobierno dominicano, como una dependencia más del tren administrativo. Las amortizaciones se fijaron en un límite tolerable para las finanzas nacionales, sin caer en las obligaciones onerosas que invalidaron tantos contratos anteriores, y obligaron al Estado a recurrir a nuevos empréstitos.

Esta vez el Consejo de Protección de los Tenedores de Bonos Extranjeros protestó del Acuerdo, alegando que se violaban las garantías de los bonos. Cuando se sometió el Acuerdo a la consideración del Senado de los Estados Unidos, este Comité le sometió

un *memorándum* presentando sus objeciones y puntos de vista. Dos de sus miembros, Francis White y Dana G. Munro, fueron citados a declarar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Sus declaraciones quedaron a la altura de la vieja política imperialista que Roosevelt estaba eliminando en esos históricos momentos. Ambos presentaron una tesis tan mezquina frente a las conclusiones fundamentales del Departamento de Estado en defensa del Acuerdo, que el Senado no tuvo dificultades para impartirle su aprobación del 15 de febrero de 1941.

La transferencia de las funciones de la Receptoría a las autoridades dominicanas se efectuó en la mañana del 1° de abril de ese mismo año, en un acto solemne que tuvo efecto en el muelle principal del puerto de Ciudad Trujillo. El presidente Troncoso de la Concha, acompañado del gobierno en pleno y de todos los altos funcionarios del Estado, procedió a enhestar, como símbolo de plena soberanía, la bandera nacional en la Puerta de San Diego, principal vía de acceso a la zona portuaria. Un regimiento del Ejército Nacional rindió los honores en ese momento espléndido, que ponía cese a la intervención directa de los Estados Unidos en la recaudación de las rentas aduaneras nacionales que tuvo su inicio con la designación del coronel George R. Colton, bajo las cláusulas del *Modus Vivendi* en 1905. El último receptor general norteamericano fue el señor Thomas Pearson, y el primer director general de Aduanas, (nueva designación oficial de la Receptoría) fue el ciudadano dominicano don Horacio Pérez Licairac.

El éxito alcanzado por la administración dominicana de las aduanas ha sido uno de los factores preponderantes en la total liberación financiera de la República Dominicana. Desde esa fecha, los ingresos aduaneros han mantenido un ritmo creciente gracias a las normas científicas, y a la revisión de los viejos aranceles, dictadas por el presidente Trujillo.

CAPÍTULO XII

La solemne reivindicación

CANCELACIÓN TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA

Es necesario convenir que la historia de la deuda pública de la República Dominicana es una gran parte de la historia de sus desventuras sociales y políticas. Empréstitos, deuda pública, reclamaciones extranjeras, etc., han sonado siempre en los oídos dominicanos con acentos ominosos. No solamente porque la existencia de la deuda hacía mantener un estado de subordinación nacional a los Estados Unidos, sino como una suprema reinvindicación de la historia, el presidente Trujillo se fijó como meta la eliminación del último vestigio de ese pasado desastroso, cuyas consecuencias padecían directamente los dominicanos que festejaron con entusiasmo triunfal el primer centenario de la República, en el año 1944.

Un día ya memorable en las efemérides nacionales, el 17 de julio de 1947, se anunció al país que el presidente Trujillo presentaría personalmente al Congreso Nacional un mensaje de trascendental importancia, acompañado de un proyecto de ley con efectos extraordinarios sobre la vida pública nacional. En efecto, el jefe del Estado anunció, en sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados que el remanente de la deuda pública, ascendente a $9,401,855.55, sería cancelado en un solo pago. El presidente Trujillo al detallar su proyecto dijo:

> En el plan que he concebido no se ofrecerán bonos en venta al público. El Gobierno está concertando actualmente una negociación con el Banco de Reservas de la República para negociarle los Bonos cuya emisión se autoriza en el proyecto de ley adjunto que serán al 5% de interés anual y pagaderos en el curso del año 1948.
> La posición financiera del Gobierno y la situación del Banco de Reservas demostrada por su Estado al 30 de junio ppdo. revelan que esta operación será de la mayor conveniencia tanto para el Fisco como para nuestra primera institución bancaria.
> El activo del Banco de Reservas muestra un total de cerca de $35,000,000 con depósitos totales de cerca de $30,000,000 de los cuales $10,188,000 son depósitos del Gobierno. De los depósitos del Banco de Reservas éste tiene en Bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos o que pertenecen al sistema de la Reserva Federal, $29,500,000 de los cuales $8,200,000 encontrarán colocación apropiada en los valores que avanzará contra los impuestos especiales del año próximo, a que antes me he referido.
> Mirando hacia el futuro y contemplando las incertidumbres provocadas por la situación internacional, el pago de la Deuda Externa conforme al plan contenido en el anexo proyecto de ley afianzará nuestra posición financiera y económica.[95]

El ilustre estadista, con singular maestría, trazó un cuadro formidable del problema nacional, y de la solución que le daba en ese momento. Sus palabras bien podrían servir para punto final a este trabajo, porque nadie podrá jamás fijar con tanta precisión el alcance dominicanista del esfuerzo triunfal que el gran gobernante realizó para resolver el problema secular que trababa el progreso del país en todos sus órdenes. Dice así en los párrafos finales de su histórico mensaje:

> He trazado ante vosotros, con detalles indispensables por la importancia de este caso, un cuadro sintético, pero completo, de la historia de la deuda externa de la República desde sus orígenes hasta la época presente. He señalado cómo, por causa de esa deuda, de la ineptitud de pasadas administraciones y del sentimiento de inferioridad nacional que era su secuela inevitable, la República vio

[95]Mensaje del presidente Trujillo, Boletín del Archivo General de la Nación No. 52-53, 1947.

> mediatizadas sus prerrogativas más esenciales, hasta que el Tratado que gestioné y suscribí en Washington el 24 de septiembre de 1940 nos reintegró el jirón de soberanía que tantos errores y desgracias nos habían arrebatado.
>
> No lo he hecho así por el prurito de censurar a los hombres del pasado, que, acaso, no eran completamente dueños de sus decisiones, atados como estaban a situaciones desesperadas que la mera acción gubernativa de un momento no podía remediar en un instante. La solución del problema de la deuda externa toma ahora expresión material en una operación financiera, como la que vengo a proponer a vosotros en este día solemne y glorioso de la Patria. Pero, ciertamente, habría sido pueril pedir a cualquier gobierno del pasado, aún a los mejores inspirados que tuvimos, una operación financiera de esta envergadura. Actuaciones de esta especie y de este alcance no pueden improvisarse. Requieren una larga preparación previa, una base de paz, de progreso, de reconstrucción y de prestigio muy amplia, una robustez económica muy sólida y profunda. Por eso, antes de pensar en la que ahora vamos a llevar a feliz término, mis empeños de gobernante han consistido, principalmente, en dotar a la República de esa base, de ese vigor y de esa preparación, de modo que la cancelación de la deuda externa no sólo pudiera realizarse eficazmente en el aspecto financiero, sino de manera que no causara la más mínima depresión en la actividad administrativa ni la más ligera contracción en las actividades económicas nacionales.
>
> La circunstancia de que pueda llevarse a buen logro esta trascendental operación es un símbolo fehaciente de la potencialidad integral de la República en su presente Era. Pero es también algo más, es la más convincente prueba de lo que puede realizar la voluntad de un gobierno profundamente interesado en el engrandecimiento de su Patria, y esencialmente dedicado a la sagrada gestión de redimirla de un pasado doloroso e infecundo y de asegurarle y organizarle para la vida del presente y para la vida del futuro, insospechadas fuerzas espirituales y materiales.[96]

Convertido en ley el proyecto sometido por el presidente Trujillo al Congreso Nacional, inmediatamente expidió el Tesorero Nacional un cheque a favor del Representante de los Tenedores de

[96]Ibídem.

Bonos Dominicanos, por $9,271,855.55, balance total pendiente a esa fecha de las emisiones de bonos de 1922 y 1926. En imponente acto celebrado en el Palacio Nacional, el presidente Trujillo hizo entrega a Mr. Oliver P. Newman, Representante de los Tenedores de Bonos Dominicanos, del referido cheque, quedando desde ese momento totalmente liberadas las finanzas nacionales de toda injerencia extranjera. Ese es tal vez el momento más glorioso de la vida política del presidente Trujillo, que vio coronada su brillante acción de gobierno con un acontecimiento de suprema significación patriótica.

Libre de toda traba, la República Dominicana ha continuado su ritmo ascensional. Los métodos científicos establecidos en la recaudación de las rentas públicas han evitado que las diversas crisis financieras que han afectado otros pueblos como consecuencia de los trastornos mundiales, nos tocaran directamente.

El 9 de agosto de 1951 se celebró en Washington un cambio de notas, entre la Embajada dominicana y el Departamento de Estado, para extinguir los efectos de la Convención del 24 de septiembre de 1940.

El Comunicado Oficial de nuestra Cancillería dice así:

> ESTADOS UNIDOS RECONOCEN FORMALMENTE LA TOTAL EXTINCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DE NUESTRA REPÚBLICA.
> CANJEADAS LAS NOTAS ENTRE LOS GOBIERNOS.
> (COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO).
>
> La Cancillería Dominicana se complace en hacer de público conocimiento que en el día de hoy se ha celebrado un solemne cambio de notas entre nuestra Embajada en Washington y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, celebrado en dicho Departamento, mediante el cual ha quedado concluyentemente formalizada la extinción, con efecto retroactivo al primero de octubre de 1947, de la Convención entre la República Dominicana y los

> Estados Unidos de América del 24 de septiembre de 1940, relativa a la deuda externa de la República.
> En virtud de este canje de notas han, por consiguiente, cesado de existir todas las obligaciones o compromisos relacionados con dicha convención.
> Ciudad Trujillo, D. S. D.,
> 9 de agosto del 1951.

La International New Service comunicó al mundo la noticia en la siguiente forma:

> WASHINGTON, 9 de agosto. (Por Joseph Hinshaw, Corresponsal de I.N.S.) Los Estados Unidos reconocieron hoy formalmente la extinción, firmada el 1° de octubre de 1947, de la deuda externa de la República Dominicana por el Tratado Trujillo-Hull.
> La Convención, firmada en 1940, estipulaba que el Gobierno dominicano se haría cargo de toda la deuda externa de la República Dominicana, con el entendimiento de que "quedaría liquidada para 1967".
> Sin embargo, la situación económica de la república del Caribe mejoró tanto después de 1940, que para julio de 1947 la obligación ya había quedado satisfecha cabalmente.
> En un intercambio de notas entre el Secretario de Estado Dean Acheson y el Embajador dominicano, Luis F. Thomen, se reconoció hoy oficialmente la extinción y finiquito del convenio.

"Anteriormente los dos gobiernos habían confirmado que la República Dominicana había cumplido los compromisos que contrajera en la convención *Trujillo-Hull*.

En una declaración escrita, el embajador Thomen manifestó: "En julio de 1947 la República Dominicana pagó por adelantado la totalidad del saldo pendiente de su deuda externa"

Como consecuencia de este pago, la convención de 1940 dejó de tener efecto como ha sido reconocido por los Estados Unidos en la nota entregada hoy por el secretario Acheson al embajador Thomen.

El reconocimiento formal por parte de los Estados Unidos de la extinción de la convención de 1940 es el resultado de la

comprobación efectuada por ambos gobiernos, en el sentido de que la República Dominicana ha cumplido cabalmente sus compromisos.

Los favorables acontecimientos que dieron por resultado esa extinción de la convención, son particularmente placenteros para el gobierno de la República Dominicana, ya que constituyen la culminación feliz de los consagrados esfuerzos realizados por el presidente Trujillo en pro de la rehabilitación económica de su país.

La convención financiera de 1940 –suscrita el 24 de septiembre de dicho año–, puso término a otra convención originalmente firmada en 1907 y que había sido prorrogada hasta el 1924. En esa convención original del gobierno dominicano convino en permitir que un funcionario norteamericano administrara las aduanas del país para aplicar el producto de los aranceles recaudados a la liquidación de la deuda exterior.

El Departamento de Estado norteamericano informa que en el intercambio de notas se reconoce que la República Dominicana ha redimido en su totalidad su deuda externa de 1922 y 1926.

La comunicación norteamericana, suscrita por el secretario Acheson, agrega que al liquidar los bonos de la deuda exterior, al igual que ciertas reclamaciones particulares, la República Dominicana ha cumplido cabalmente los compromisos que contrajera con los Estados Unidos en la convención de 1940.

Acheson dijo que el acontecimiento "señala un momento significante en la historia económica de la República Dominicana" y agregó: "La situación financiera internacional de la República Dominicana ha acusado un continuado progreso en los años recientes y las notas cambiadas hoy dan fe del éxito del programa desarrollado por el gobierno dominicano para extinguir sus obligaciones en el extranjero".

Thomen comunicó a Acheson que quedaba "muy agradecido a los Estados Unidos por su cooperación en el cumplimiento de esta

obligación", y que estaba más complacido aún por "habernos sido posible cumplir nuestros compromisos por adelantado".[97]

CONSIDERACIONES FINALES

Contemplando el panorama que hemos presentado es necesario convenir en que la tarea realizada por el presidente Trujillo no tiene precedentes en la historia nacional. Emergimos a la vida nacional en el más completo desamparo; alentados únicamente por una fe sublime, que hizo el milagro de mantener firmes a un puñado de hombres, con capacidad heroica para vencer todos los embates de los enemigos de nuestra tierra. Si en 1795, cuando se firma el Tratado de Basilea entre España y Francia, que estipulaba en su Artículo IX la cesión de la parte española de la isla de Santo Domingo a esa última potencia, la población criolla mantenía una vida lánguida, sin dinámica social, no es de asombrarse que en 1844 el cuadro fuera sencillamente desolador.

El infausto Artículo IX de ese Tratado rompió la evolución normal de la sociedad colonial de la Española. El proceso natural que fue transformando el mundo social americano nos es ajeno. Los grandes movimientos de la emancipación americana son dirigidos por los más brillantes representativos de cada provincia española en este vasto Nuevo Mundo, lo que evidencia que el proceso de la madurez política colonial llegaba a su plenitud en 1812, y que las clases superiores habían adquirido la conciencia de su importancia política. Por eso, Bolívar es, en el mejor sentido, el último gran español de América y el primer gran americano. Los países de América que no han logrado aún una plena madurez política republicana, lo deben a factores originados en su vida colonial.

[97](De "La Nación", del viernes 10 de agosto de 1951, número 4174).

De 1795 a 1822, año en que se inicia el "cautiverio babilónico" después de ahogar Haití en su cuna al efímero Estado creado por Núñez de Cáceres, la emigración dominicana hacia otras tierras constituyó uno de los éxodos nacionales más pavorosos ocurridos en América. Se calculan en millares las familias que abandonaron esta tierra para siempre. Ahí se fueron los hombres de elevada cultura junto con los bien hallados de fortuna; profesores, funcionarios y hombres de letras, y todo cuanto podía servir para integrar en el futuro el núcleo dirigente del estado que debía crearse sobre el derrumbe de las instituciones coloniales españolas, como sucedió en toda América. En el momento oportuno y necesario, nos faltó la clase recta, que abandonó el país como una consecuencia inmediata del funesto Tratado de Basilea. Pobres, analfabetos, abandonados, los verdaderos residuos sociales de la colonia sirvieron de base para crear en 1844 lo que es hoy la República Dominicana. No se contó entonces con la clase avezada a los achaques del mando público. Faltó la falange de hombres importantes que se necesitaba para orientar un Estado recién nacido por rumbos de progreso a base de una eficaz organización política y administrativa. Eso no quiere decir que hubiera una ausencia absoluta de hombres ilustrados y de pro, pero sí en minoría impotente para contrarrestar el galope del personalismo mandonista y bárbaro.

De los campos de batalla donde se consolidó la Independencia, saltaron los guerreros al palenque de la vida pública, con todas sus pasiones primitivas, para subyugar bajo su imperio personal todos los resortes debilísimos del naciente Estado. Santana es el prototipo de ese momento histórico. Dotado de férreas condiciones para el mando absoluto, no permitió jamás que a su paso se opusieran las trabas de la Constitución o de las leyes. Patriota elemental, o más bien antihaitiano, actuó en el poder con el mismo desenfado con que gobernaba sus inmensos hatos de "El Prado". Sus enemigos políticos eran, para él, los enemigos de la patria. Pero creemos

que al someter la vida nacional bajo su mando omnipotente sin cortapisas, salvó a la República. En aquel estado de semibarbarie política, la poderosa personalidad de primitivo, de guerrero y de señor feudal que ostentaba Santana, evitó, frente a las continuas agresiones haitianas, el colapso político que hubiera permitido a los agresores subyugarnos para siempre.

Con Báez se inician los desaciertos financieros. Este hombre de tan dilatada actuación pública, inteligente y hábil, no tenía fe, ni tal vez amor, por su patria. Era un sibarita del poder únicamente. Como la sangre de los gobiernos es el dinero, trató de conseguirlo sin tomar en cuenta los intereses nacionales. Su funesta negociación con Hartmont es la clave de las mayores desventuras nacionales. Sus briosos empeños por anexar el país a los Estados Unidos, amparado en su poderoso partido, no fue, al fin de cuentas, sino un episodio más en la torturada historia nacional. A su caída, el presidente González que le sucede, trata de seguir sus pasos. Así casi todos los presidentes, hasta que se presenta la figura trágica del general Ulises Heureaux, hombre intrépido, de valor personal a toda prueba, megalómano risible a veces, y deshonesto siempre en el manejo de los fondos públicos. El período de gobierno de este hombre tan complejo es tal vez el más funesto que ha tenido y tendrá la República Dominicana. Arregló el problema de los Bonos Hartmont para limpiar de escollos su camino. Contrató los dos empréstitos con la Casa Westendorp. Creó las compañías de crédito para robar al Estado. Manejó las finanzas nacionales con menos tino que su propio bolsillo. Contrató con la San Domingo Improvement Co. y hundió la República. Este hombre abismático, esfinge cruel sin el más ligero asomo de estadismo, realizó con la Improvement toda clase de negociaciones fraudulentas, muchas con carácter secreto, que formaron una deuda internacional fabulosa para aquellos tiempos.

Juan Isidro Jimenes no pudo frenar el desastre. Asesorado en los problemas fundamentales del Estado por un hombre notable como el doctor Francisco Henríquez y Carvajal, trató de solucionar los problemas con la Improvement y con los inversionistas europeos. La oposición que se hizo a los contratos negociados por el doctor Henríquez en 1901, frustró el momento más oportuno para conseguir acuerdos ventajosos. Horacio Vásquez lo derrocó y firmó el funesto Protocolo del 30 de enero de 1903, de cuyas estipulaciones no pudo zafarse después la República, hasta caer en el Laudo Arbitral. Morales Languasco negoció con Roosevelt las primeras convenciones, y creó la singular posición del *Modus Vivendi*. Abatido del poder por el enconado encuentro de las pasiones políticas, por el empeño de cada bando en aupar a sus caudillos, al asumir el mando constitucional el general Ramón Cáceres, heredó una situación financiera desastrosa. Como gobernante de fuerza creó por el hierro y el fuego la paz necesaria para que el país y su gobierno tuvieran un respiro con los tremendos problemas que agobiaban su existencia. Ramón Cáceres negoció la famosa Convención enfocando con agudo realismo el problema. Sus dos oráculos de ese momento, Emiliano Tejera y Federico Velázquez, condujeron las negociaciones, mientras él mantenía un control absoluto sobre la nación. La Convención de 1907 vino a regularizar, o a confirmar, una situación de hecho que venía desde 1888. Cuando cayó este férreo mandatario, se produjo el más completo caos. Victoria, Nouel, Bordas Valdez, Báez y Jimenes, fueron a su turno, barridos por el torbellino de acontecimientos políticos incontrolables. De un lado la guerra civil y por el otro las terribles exigencias norteamericanas. Toda esa baraúnda culminó con la intervención militar estadounidense. (El estudio de las causas y consecuencias de este momento histórico nacional tiene incitaciones apasionantes). El gobierno militar establecido en 1916, fue, en materia financiera,

tan desastroso como los gobiernos nacionales que le antecedieron. En 1924 el general Horacio Vásquez asume el poder aclamado por las mayorías nacionales como un verdadero ídolo político. Entre sus graves desaciertos está la Convención de 1924, realizada para sustituir la de 1907, y obtener la autorización de Washington para colocar un empréstito cuantioso. Negoció un empréstito en dos series, emitidas en 1926 y 1928 por un total de diez millones de pesos. Antes de eso completó la emisión del empréstito autorizado al gobierno militar por $10,000,000. (Orden Ejecutiva N° 735 del 23 de marzo de 1922) y del cual quedaban $3,300,000 sin emitir.

Cuando se derrumba su régimen bajo el peso de tantos desaciertos, aparece la personalidad nueva de Rafael L. Trujillo Molina, para hacer frente a la más grave crisis financiera de toda la historia nacional. Mientras los políticos de oficio creían que este hombre nuevo no podría resistir el embate de situación tan anormal y tormentosa, un feliz instinto popular hizo que el pueblo tuviera fe en él. Sus triunfos extraordinarios obedecen a un cúmulo de condiciones fundamentales, que rara vez se adunan en un hombre de Estado; pero cuando esto sucede, nos encontramos frente a lo verdaderamente extraordinario. Tenía, tiene, patriotismo, valor personal, talento, gran capacidad de trabajo y una inmensa dote de carácter.

Su primer empeño fue crear el orden, fundar la paz. Sin vacilaciones ni debilidades se encaró al problema. Con ánimo templado barrió las facciones levantiscas y aplacó los tumultos y motines del politiqueo consuetudinario. Los pequeños caciques regionales, ejemplares trágicos de una fauna política pintoresca, supieron que no podían venir a escupir las alfombras de Palacio, y a imponer sus deseos con amenazas de sedición. En el gobierno no había un presidente más, sino un presidente distinto.

Purificada así la atmósfera política, Trujillo se dedicó a la tarea extraordinaria de construir una nación, remodelando desde sus

cimientos, cuanto había quedado en pie a través de la pavorosa tormenta de 86 años de infecundo personalismo caudillista. Una de sus máximas conquistas es la cancelación total de la deuda extranjera, eliminando las trabas humillantes que limitaban la soberanía nacional. En este sentido su obra adquiere altura patricia, y completa definitivamente la obra de los fundadores de la República. El pedestal de sus glorias es sencillamente la República Dominicana, orientada felizmente hacia la conquista de sus más altos destinos históricos.

SEGUNDA PARTE

Sección Documental

DOCUMENTO Nº 1

Empréstito Erlanger y Cª

1867.

Entre el Señor Jacobo Pereira obrando en nombre de la República Dominicana en virtud de los poderes que le han sido conferidos en fecha quince de noviembre de mil ochocientos sesenta y seis, de una parte, y los Señores Emilio Erlanger y Cª banqueros en París, de la otra, ha sido convenido lo que sigue:

Art. 1º El Gobierno Dominicano encarga a los Señores Emilio Erlanger y Cª de la emisión de un empréstito por la cantidad efectiva de cuatrocientas mil libras esterlinas o diez millones de francos, según está autorizado por decreto del Congreso de la República fecha cinco de Abril de mil ochocientos sesenta y siete.

El empréstito se destinará a trabajos de utilidad pública.

El Gobierno declara que no ha contraído ningún empréstito antes del presente, ni interior ni exteriormente, y se compromete a no contraer ningún otro durante dos años contados de la fecha de la emisión del actual empréstito, salvo el caso de entenderse antes de ello con los Señores Emilio Erlanger y Cª.

Art. 2º El empréstito lo representarán obligaciones de quinientos francos o veinte libras esterlinas, cada una, o bien por medio de títulos que representen los múltiplos de esta suma.

Cada obligación contendrá cuarenta y ocho cupones de intereses semestrales, de los cuales el primero vencerá el primero del sesto mes después de la emisión; de modo que si la emisión tiene lugar el cuatro de diciembre, el

primer cupón será pagadero el primero de junio, y de este modo de seis en seis meses hasta la recaudación de todo el empréstito.

El reembolso se efectuará por cuarenta y ocho sorteos semestrales. Los sorteos tendrán lugar en las mismas épocas que el pago de los cupones, y las obligaciones que salgan serán inmediatamente reembolsadas a la par.

El precio de la emisión de los títulos, su número lo mismo que el tanto de interés serán fijados por los Señores Emilio Erlanger y Cª bajo la sola condición que el servicio de los intereses y el del reembolso podrá efectuarse integralmente por las veinte y cuatro anualidades de que habla el art. 4º.

Los Señores Emilio Erlanger y Cª elevarán al Gobierno Dominicano un estado que demostrará que las citadas veinte y cuatro anualidades son suficientes para redimir al Gobierno de todo empeño.

Art. 3º El Gobierno afecta para la garantía del empréstito las entradas de las Aduanas de la República, las que ascienden aproximativamente a cuatro millones de francos por año; las obligaciones gozarán del mismo modo de una primera hipoteca sobre esta entrada, y el gobierno prohíbe toda alteración a las leyes actuales sobre aduanas que puedan irrogar perjuicio alguno al valor de la hipoteca.

Además, el Gobierno se compromete a obtener la autorización para el Cónsul Inglés en Santo Domingo para que pueda controlar, directa o indirectamente el servicio de las Aduanas, y separar mensualmente la suma que represente la cuota de la anualidad destinada al pago de los cupones y al reembolso de las obligaciones.

Art. 4º La anualidad que el Gobierno Dominicano se compromete a pagar semestralmente durante veinte y cuatro años consecutivos, a contar del primero del mes de la emisión del empréstito para el servicio de los intereses y de la amortización, queda fijada en sesenta y ocho mil libras esterlinas o sea un millón setecientos mil francos.

El montante de cada semestre, es decir: treinta y cuatro mil libras esterlinas o sean ochocientos cincuenta mil francos, debe depositarse en manos de los Señores Emilio Erlanger y Cª o de sus Agentes en Londres a más tardar un mes antes del vencimiento de los cupones y sorteos respectivos. El Gobierno tomará las disposiciones necesarias al efecto de acuerdo con el Cónsul Inglés en Santo Domingo.

Para el pago de los Cupones y obligaciones salidas en París y en Londres, el Gobierno Dominicano señala a los Sres. Emilio Erlanger y Cª una comisión de medio por ciento sobre el valor.

Art. 5º Los sorteos tendrán lugar en París o en Londres ante un notario, y los números que salgan se publicarán en tres diarios de los que se publican en París y en Londres. Los gastos de avisos serán también por cuenta del Gobierno.

El Gobierno Dominicano enviará a París a su costo, un delegado con poderes bastantes para que firme los títulos provisorios y definitivos de las obligaciones en nombre del Gobierno, reciba los fondos del empréstito, dé recibo y descargos, y en general haga todo lo que exigiere la ejecución del presente contrato.

Art. 6º Los Sres. Emilio Erlanger y Cª, se comprometen a pagar el producido del empréstito en seis entregas iguales y mensuales, la primera, quince días después de la emisión. Garantizan al Gobierno la colocación de cien mil libras esterlinas o sean dos millones quinientos mil francos y deberán declarar al Gobierno a más tardar tres meses después de la emisión, la totalidad de las obligaciones que hayan colocado. Si restaren obligaciones para aquella época, sin suscripción, se pondrán a la disposición libre del Gobierno Dominicano.

Los Sres. Emilio Erlanger o sus agentes para la emisión del empréstito contraseñarán las obligaciones y correrán por su cuenta las corredurías, comisiones y todos los gastos, menos los determinados en el art. 5º.

Art. 7º Contra cada entrega, el Gobierno remitirá a los Sres. Emilio Erlanger y Cª los títulos provisorios, (que serán cambiados por obligaciones en cuanto estos últimos estén confeccionados) representando un valor correspondiente, calculando que los títulos del empréstito.

Los Sres. Emilio Erlanger y Cª tendrán el derecho de anticipar las entregas estipuladas en el art. 6º con la deducción del interés a razón de seis por ciento al año.

Art. 8º El presente contrato es provisorio y no será obligatorio para el Gobierno Dominicano sino después de ser ratificado por el Congreso de la República, cuya ratificación se compromete a pedir en la primera sesión después de llegado a Santo Domingo el presente convenio; y no será obligatorio para los Sres. Emilio Erlanger y Cª, sino en el caso o quince días después de notificárseles que el Congreso Dominicano lo ha aprobado y que el Gobierno está pronto a ejecutarlo integralmente, entonces declararán aceptarlo por su parte.

La notificación de la aprobación del Congreso, debe ser hecha en París por el Sr. Pereira u otro delegado debidamente autorizado y cuyos poderes deberán ser legalizados por los Cónsules, Inglés y Francés en Santo Domingo. La contestación de los Sres. Emilio Erlanger y Cª será hecha en las formas legales usadas en París.

En caso de no ser ratificado por el Gobierno y el Congreso Dominicano, o de no ser aceptado por los Sres. Emilio Erlanger y Cª, este contrato se considerará como nulo.

Hecho doble en París a catorce de Setiembre de mil ochocientos sesenta y siete.— Apruebo el anterior escrito.— *J. PEREIRA*.— Apruebo el anterior escrito.— *P. P. EMILE ERLANGER Y C.ª*.— *H. BAMBERG*.

Es copia conforme al original que queda depositada en la Secretaría de Hacienda. El Oficial Mayor.— *Bernardo Delgado*.

DOCUMENTO Nº 2

Núm. 1138.— TRATADO de empréstito celebrado con los Señores Hartmont & Comp., aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo, ratificado por el S. C. en fecha 1º de junio del corriente año, y derogado por R. del mismo, de fecha 20 de Julio de 1870.

Deseando el Gobierno de la República Dominicana contraer un empréstito, con el objeto de desarrollar sus trabajos públicos, y la industria y comercio de sus nacionales, se han ajustado y convenido los siguientes pactos, entre dicho Gobierno, representado por el ciudadano Ricardo Curiel, Ministro de Hacienda, debidamente autorizado, y el Señor Eduardo H. Hartmont & Comp., de Londres, y cualesquier otras casas que puedan unírsele en la ejecución de este tratado.

Art. 1º El Gobierno Dominicano recibe en empréstito una suma de cuatrocientos veinte mil libras esterlinas, que los Sres. Hartmont & Comp. se obligan a prestar al Gobierno Dominicano, bajo las condiciones estipuladas y que se expresarán más adelante.

Art. 2º Para el interés y amortización de esta deuda, el Gobierno Dominicano se obliga a pagar a los contratistas del empréstito una suma de cincuenta y ocho mil novecientas libras esterlinas al año, pagadera por mitad cada seis meses, el 15 de diciembre y junio de cada año, a lo más tarde, por espacio de veinte y cinco años consecutivos. El primero de estos pagos se efectuará el 15 de junio o de diciembre, siguiente a la emisión del empréstito.

Art. 3º La deuda será representada por emisiones al portador, y los Señores Hartmont & Compañía quedan autorizados para abrir o hacer abrir suscripciones en Londres, o en aquellas plazas que conceptuaren convenientes para la colocación de esas obligaciones.

Art. 4º Quedan autorizados los Señores Hartmont & Compañía para fijar el montamiento nominal de las obligaciones que el Gobierno Dominicano deberá suscribir; tienen derecho de distribuir la dotación anual sobre el interés y la amortización a su discreción, con tal de que la suma total, a cuyo pago anual se compromete el Gobierno, no exceda de la dotación estipulada.

Art. 5º Los títulos serán de la cuantía que plugiere fijarle a los Señores Hartmont & Compañía. La indicación de su valor se dará en libras esterlinas y francos. Los títulos se imprimirán en lengua española, Inglesa

y Francesa; estarán firmados por el Ministro de Hacienda o por un Comisionado especial del Gobierno Dominicano, nombrado ad-hoc. La forma de esos titules será de todo punto conforme a las exigencias de las Bolsas Europeas, y con particularidad de la Bolsa de Londres. Estarán provistos de cupones semestrales para veinte y cuatro años, pagaderos en Londres, París, y cualesquiera otras plazas que designaren los Señores Hartmont & Compañía.

Art. 6° Los gastos de impresión de los títulos, los de publicación, todos los gastos, en fin, causados directa o indirectamente para la emisión del empréstito, serán a cargo de los Señores Hartmont y Compañía.

Art. 7° Los Señores Hartmont y Compañía se obligan a entregar la suma estipulada de *cuatrocientos veinte mil libras esterlinas* de la manera siguiente: *cincuenta mil libras esterlinas*, el día en que se firmare el tratado, ya sea en numerario, ya en libranza a sesenta días de vista sobre los Señores Smith, Payne y Smith en Londres, y el saldo a su arbitrio durante el último semestre del corriente año.

Art. 8° Todas estas entregas incluirán interés, al precio que fijen las obligaciones, desde el día en que se hubieren efectuado; y los intereses devengados de este modo sobre las entregas precedentes se deducirán de las siguientes entregas.

Art. 9° El pago regular de las sumas necesarias para el servicio de los intereses y de la amortización, está garantizado por todo el activo del Estado de Santo Domingo, sus aduanas, provento y dominios. Por el presente se acuerda a los portadores de títulos de este empréstito, primera hipoteca sobre los objetos antes dichos, no teniendo el Estado de Santo Domingo, ninguna otra deuda contraída.

Art. 10. Para más afianzar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Dominicano, este último afecta, como garantía especial, los derechos de importación y exportación que se recaudaren en las aduanas de los puertos de Santo Domingo y Puerto Plata. El Gobierno declara que los ingresos de esas aduanas ascienden anualmente a cerca de *quinientos mil pesos*, como mínimum de los años ordinarios, pero que a veces han ascendido como a *ochocientos mil*, declarando además el Gobierno que dichas aduanas permanecen libres de todo gravamen.

Art. 11. Con el fin de asegurar la pronta entrega de sus fondos a los acreedores, el Gobierno Dominicano autoriza, por este tratado, a los señores Hartmont y Compañía o a la casa que éstos encargaren de la emisión del empréstito, para que nombre un empleado en cada una de las aduanas de Santo Domingo y Puerto Plata. Estos empleados deberán contrafirmar los recibidos expedidos por los receptores de aduanas, colectar los derechos

hasta concurrencia de la suma necesaria para el pago de los intereses y de la amortización del empréstito, y enviarlos al Consulado Británico, en la ciudad de Santo Domingo, quien los remitirá mensualmente a Londres. En caso de que el Cónsul Inglés no pudiere encargarse de esta misión, se le conferiría al Cónsul de S. M. el Emperador de los Franceses. La colección de esos derechos por cuenta de los obligatorios, principiará el 1° de enero próximo.

Art. 12. Para facilitar todavía más el pago de los dividendos, y disminuir en cuanto sea posible el movimiento de los fondos, las obligaciones deberán aceptarse en pago en las aduanas de Santo Domingo y Puerto Plata, en la proporción fijada para el reembolso sucesivo. Con tal objeto se efectuará un sorteo en Londres el 31 de diciembre de cada año; las obligaciones sorteadas se reembolsarán a la par el 31 de diciembre del año siguiente, pero durante el año que trascurra desde la fecha del sorteo hasta la del reembolso, pueden presentarse las obligaciones sorteadas y deben ser aceptadas en pago de la mitad de los derechos de importación y exportación, pagaderos en los puertos de Santo Domingo y Puerto Plata, a la par.

Art. 13. El Gobierno Dominicano se obliga a no disminuir los derechos de importación y exportación antes del reembolso total del empréstito, a menos que una comisión nombrada por los prestamistas consientan en ello.

Art. 14. Como garantía suplementaria, el Gobierno Dominicano otorga a los empresarios de este empréstito primera hipoteca sobre las minas de carbón y los bosques pertenecientes al Estado en la península de Samaná, al E. del grande Estero, así como los derechos que ingrese el tesoro por la exportación del *guano o guanitos* de la isla de *Alto-Velo*. Estas explotaciones se han concedido a los Señores Hartmont y Compañía por medio de tratados especiales, y una cláusula de esos tratados dice: Que todos los derechos o proventos debidos al Gobierno Dominicano, en razón de esas explotaciones, se pagaran directamente a los accionistas del empréstito, para que se imputen en pago de los intereses y la amortización del empréstito.

Art. 15. El Gobierno Dominicano pagará a la casa de Banco, encargada del pago de los cupones, la comisión del 1¼ por ciento anual, sobre el montante que se ha fijado para el pago de sus intereses y amortización.

Art. 16. Se retendrá de la totalidad de la última entrega del empréstito, la cantidad que baste para pagar el interés y la amortización del primer año.

Art. 17. El Gobierno Dominicano se compromete a no establecer derecho ni impuesto alguno, cualquiera que sea su naturaleza, sobre los pagos que tendrá que hacer para la ejecución de este tratado. Se obliga además el Gobierno de una manera solemne, a que las anualidades serán pagadas y las garantías se conservarán intactas en todas las circunstancias del país, bien en época de paz o bien en guerra, y aunque el portador de una o varias de

estas obligaciones sea o no súbdito del Gobierno con quien el Dominicano se halle en estado de guerra, o con el cual no tenga establecidas relaciones diplomáticas o que éstas se hallen interrumpidas.

Art. 18. En todos los cálculos que tengan que hacerse para el arreglo de cuentas de este empréstito, se calculará la libra esterlina a razón de veinte y cinco francos, moneda Francesa.

Art. 19. Los Señores Hartmont y Compañía tienen derecho de traspasar este tratado a otra casa, que se colocara en su puesto, como si sus nombres figurasen en este tratado.

Hecho doble y de buena fe, en Santo Domingo, a 1° de Mayo de 1869. (Firmados) *Ricardo Curiel. Edward H. Hartmont.*

Aprobado por Resolución del Consejo de Secretarios de Estado de esta misma fecha y en virtud del decreto del Senado Consultor de fecha 29 de Abril último.— Santo Domingo 1° de Mayo de 1869.— El Presidente de la República, *Buenaventura Báez.*— El Ministro de lo Interior y Policía, &, *Manuel M. Gautier.*— El Ministro de Justicia e Instrucción Pública, *Félix M. Del Monte.*— El Ministro de Hacienda y Comercio, *Ricardo Curiel.*— El Ministro de Guerra y Marina, *José Hungría.*

(Colección de Leyes, Tomo V, pp. 283-287).

DOCUMENTO Nº 3

Núm. 1139.— TRATADO adicional entre el Gobierno Dominicano y los Señores Hartmont & Compañía, aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo, ratificado por el S. C. en fecha 1° de junio del año corriente, y derogado por R. del mismo de fecha 20 de julio 1870.

Entre los infrascritos, ciudadano Ricardo Curiel, Ministro de Hacienda de la República Dominicana, actuando en representación de su Gobierno, por una parte;

Y los Señores Hartmont y Compañía, negociantes de Londres, número 7, Unión Court, por otra parte.

Habiendo concluido ambos en fecha de hoy un tratado de empréstito han convenido además en lo siguiente:

Artículo 1° Habiendo firmado el Gobierno Dominicano el día de hoy un tratado con los Señores Hartmont & Compañía, para la conclusión de un empréstito de cuatrocientos veinte mil libras esterlinas, se obliga a pagar a los Señores Hartmont y Compañía una suma de *cien mil libras esterlinas*, como compensación de sus desembolsos y riesgos, y en calidad de comisión. Esta suma se pagará a prorrata de las entregas sucesivas que se hicieren a cuenta

del empréstito, y los Señores Hartmont y Compañía quedan autorizados para retenerla de los pagos sucesivos.

Art. 2° En caso de que el tratado celebrado con los Señores Hartmont y Compañía se traspasase por ellos a otra casa, o que los Señores Hartmont, en virtud de los poderes que se le han conferido, celebrase un nuevo tratado, lo estipulado en el artículo primero de este tratado, se aplicará al nuevo, y los Señores Hartmont y Compañía percibirá la comisión estipulada del mismo modo que se establece en el artículo 1° de este Tratado.

Sin embargo, es de advertir que en este caso no tendrá el Gobierno Dominicano que pagar ninguna otra comisión, ya sea a la casa que emita el empréstito o a cualquiera otra persona. Toda comisión de esa clase será pagada por los Señores Hartmont y Compañía, y los pagos del Gobierno Dominicano no deben en ningún caso exceder de los estipulados en los tratados que se han celebrado hoy.

Hecho doble y de buena fe en la ciudad de Santo Domingo a 1° de Mayo de 1869.— Firmados. *Ricardo Curiel.— Edward H. Hartmont.*

Aprobado por Resolución del Consejo de Secretarios de Estado de esta misma fecha, y en virtud del decreto del Senado Consultor de fecha 29 de abril ultimo.— Santo Domingo 1° de Mayo de 1869.— El Presidente de la República.— *Buenaventura Báez.*— Refrendado: el Ministro de lo Interior y Policía, Manuel Ma. Gautier. El ministro de Justicia e Instrucción Pública, *Félix M. del Monte.*— El Ministro de Hacienda y Comercio, *Ricardo Curiel.*— El Ministro de Guerra y Marina, *José Hungría.*

(Colección de Leyes, Tomo V, pp. 287-288).

DOCUMENTO N° 4

Núm. 1178. SESIÓN DEL S. C. fecha 30 de Julio de 1870, en la cual se declara caducado el contrato de empréstito celebrado con la casa de Hartmont y Comp., de Londres.

Dios, Patria y Libertad.— República Dominicana.— Sesión del día 20 de Julio de 1870.— Presidencia del honorable Pedro T. Garrido.— Presente la mayoría compuesta del presidente y de los honorables Gerardo Bobadilla, vicepresidente. Jacinto de la Concha, Félix M. Lluberes, José del Rosario Bernal y Javier Angulo Guridi, secretario, se declaró abierta la sesión en la morada de S. E. el Presidente de la República.

Hallándose presentes todos los miembros del Gobierno, S. E. en seguida: que había solicitado esta reunión del Senado, en la Residencia del Ejecutivo, con el objeto de poner en su conocimiento: que el vapor-correo de los Estados

Unidos había traído a su bordo cincuenta mil pesos fuertes enviados por la casa Hartmont y Com., a cuenta del empréstito con ella contratado; pero como aquella casa había faltado a las estipulaciones, no enviando en tiempo oportuno las correspondientes entregas, el Gobierno tenía el derecho para declarar caduco el tratado y no aceptar la suma; sobre lo cual quería oír el parecer del Senado.

Todos los Senadores fueron de parecer se declarase nulo el contrato; y el honorable Guridi manifestó: que él debía felicitarse de que dicho contrato no se hubiese llevado a efecto, pues si las graves circunstancias en que se hallaba el Gobierno cuando lo estipuló, pudieron hacerlo aceptable entonces, hoy que tenían las cosas muy diferente aspecto, no había necesidad de imponer a la nación las onerosas condiciones de un contrato tan calamitoso, pudiendo reformarlo en términos más favorables, si la casa Hartmont quería llevarlo a efecto.

En consecuencia, el Senado declaró haber caducado el contrato de empréstito, celebrado en 1° de Mayo de 1869 con la casa Hartmont y Comp., de Londres, por no haber dichos señores llenado en tiempo oportuno las condiciones que le concernían.

Después se suspendió la sesión. El Presidente, *Pedro T. Garrido*.— El Secretario, *Javier Angulo Guridi*.

(Colección de Leyes, Tomo V, pp. 342-343).

DOCUMENTO Nº 5

Condiciones de un empréstito que será titulado el empréstito de los Estados Unidos y Santo Domingo.

Entre los Señores Jay Cooke & Co., de Nueva York y Washington, sus asociados y causa habientes de una parte, y el Gobierno de la República Dominicana representada por el Señor José Warren Fabens en virtud de los poderes como Agente Fiscal de dicha República, copia de las cuales se han unido a este documento, de otra parte se ha convenido lo siguiente:

Artículo 1° La primera parte empresta la suma de cincuenta mil pesos en moneda papel de los Estados Unidos, al representante de la Segunda, con el privilegio de extenderlo hasta la suma de cincuenta mil pesos, según se especificará en las condiciones siguientes

PRIMERA CONDICIÓN El representante de la segunda parte pagará un interés sobre dicho empréstito de diez por ciento (10%) anual, pagadero semi anualmente en la oficina de Jay Cooke & Co., en la ciudad de Nueva

York, o Washington, hasta que sea satisfecha el principal, y podrá pagar la suma total en o antes de tres años de la fecha. Cada suma principal y intereses no satisfecho a su término, ganara un interés de diez por ciento (10%) hasta que sea satisfecha.

SEGUNDA El Agente de la Segunda Parte, queda obligado a dar cupones cuando sea requerido por el de la primera parte a expensas de esta, por sumas, nada menos de mil pesos ($1000) cada uno.

Tercero: Se dará garantía, y como accesorio para la seguridad del pago de dichos Cupones una orden sobre el Gobierno de los Estados Unidos inmediatamente al recibir los mencionados cincuenta mil pesos ($50,000) por el agente de la Segunda parte, sobre la suma debida ya, por los Estados Unidos, al Gobierno de Santo Domingo por la renta de la Bahía de Samaná, cuyo número será equivalente a la suma que cubra la suma del empréstito, la cual especificará que debe ser pagada en oro, y la diferencia del cambio será arreglada al pago del principal y interés de dicho empréstito. Además se establece como otra medida accesoria que todo el producto que se realice de la venta de los terrenos públicos de Santo Domingo efectuadas por el Agente de la primera parte, según se especifica a continuación, será apropiada a la cancelación de dicho empréstito y sus intereses todo el tiempo que quedare alguna parte no satisfecha.

4° Una Agencia para los terrenos.

El Agente de la Segunda parte establecerá un Bufete en los Estados Unidos para la venta de los terrenos públicos que no estuvieren apropiados por la suma de $1-25% por acre, pagaderos en Currency de los Estados Unidos, y se le acordara una comisión de diez por ciento (10%) sobre todas las ventas que hiciere el Agente de la primera parte.

5° Mensura de los Terrenos.- El Agente de la primera parte puede hacer una medida lineal en los terrenos públicos (o de la cantidad de ellos que él juzgue necesario) en Secciones de una milla cuadrada, subdividiéndola en quartos de secciones de 160 acres cada una. También puede el dicho Agente hacer avances para esta medida, pero será reducida del producto de las ventas hechas por el mencionado Agente.

6° Certificado de Terrenos. Los certificados de títulos de tierras dados por el Agente de la primera parte en conformidad con las condiciones anteriores deberán ser reconocidas y garantizadas por la Segunda parte.

Artículo 2do. El Agente de la Segunda Parte acepta las susodichas condiciones y declara haber recibido la suma de ciento cincuenta mil pesos en moneda papel de los Estados Unidos.

Artículo 3° El Agente de la primera parte puede extender el empréstito a ciento cincuenta mil pesos en moneda papel Currency, remitiendo cien mil

pesos más como adicional, en suma de Diez mil pesos por mes, de los cuales siete mil quinientos pesos serán dados en Currency o en su equivalente en oro, al precio de cambio, en Nueva York, en la de su remesa, y dos mil quinientos pesos en recibos de los Sres. Schuyler Hailley & Graham de Nueva York, a cuenta de obligaciones y contraídas con ellos por el agente de la Segunda parte por armas y municiones.

Art. 4º El empréstito es por el término de tres años a menos que antes sea satisfecho, de la mencionada renta de Samaná, o de producidos de la venta de terrenos públicos, pero podrá ser liquidada por el Agente de la Segunda parte a cualquier momento previo dando un aviso al agente de los primeros treinta días, seguido del pago del principal y los intereses hasta el día de su cancelación.

(Exp. 10, Legajo 22, Sección de RR. EE., A. G. N.)

DOCUMENTO Nº 6

Contrato de José Ml. Glass

Entre les Soussignés:

Mr. José Manuel Glass, au nom & lieu du Gouvemement Dominicain en vertu des pleins pouvoirs qui lui ont été conférés le 7 Obre 1874 à 1'effet de contracter un emprunt en Europe & qui se trouvent déposés en original entre les mains de Mr. Thirion Montauban, ministre plénipotentiaire de la République Dominicaine en France,

d'une part

Et la Banque Générale de Change & de Commission, Société Anonyme au Capital de Dix Millions de francs, dont le Siège est à Paris 53 Rue de Chateaudun

d'autre part, a été dit & convenu ce qui Suit:

Article 1er.

Le Gouvernement Dominicain contracte un emprunt de Quinze Millions de Francs, dont la dite Banque Générale de Change & de Commission garantit qu'elle saura souscrire toutes les obligations & prend 1'engagement de faire l'émission aux clauses & conditions suivantes:

Article 2e.

Le Gouvernement Dominicain *haiera* à Paris pour le service de l'intèrêt & de 1'amortissement, pendant vingt ans, une somme de Un Million Cent

Seize Mille quatre-vingt deux francs chaque semestre & par avance pour 1'intérêt & 1'amortissement, de la dette, soit 14.¾ pour cent, qui devra être éteinte au bout de la 20ème année à partir de la date qui sera fixée à la ratification & de même la première semestrialité, échéant six mois après, main payable par avance sera retenue sur le produit de 1'emprunt comme il sera dit Article 5—

Article 3e.

Sur la demande de la Banque Générale de Change & de Commission, le Gouvernement Dominicain convertira les 1,116,082 francs de la susdite rente semestrielle en Obligations du type que conviendra le mieux à ladite Banque pourvu qu'il résulte du tableau d'amortissement à dresser par elle que moyennant les quarante paiements semestriels la dette gouvernementale envers les porteurs d'obligations soit éteinte en Capital & intérêt.

Après la souscription & lors de la répartition, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires au pasteur & le Gouvernement deviendra créancier direct des porteurs de ces titres; la Banque Générale de Change & de Commission étant des lors dégagée de toute responsabilité quant à la rentrée des versements ultérieurs.

Le Gouvernement Dominicain charge dès à présent, la Banque Générale de Change & de Commission qui s'y engage à faire les démarches nécessaires conformément au prospecteur d'émission & suivant les lois, en vigueur en France pour exécuter les porteurs de titres provisoires en retard de versements & jusqu'à paiement complet des sommes dues par lesdits porteurs.

Les titres provisoires & définitifs seront signés par Mr. Glass, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par son Gouvernement & il sera certifié par la légation que tous les documents relatifs à l'emprunt sont déposés aux archives de la légation Dominicaine à Paris.

Les sommes provenant des versements faits par les souscripteurs seront remises à la disposition du Gouvernement Dominicain ou de ses plénipotentiaires dans les termes fixés à après.

Article 4e.

Sur les titres provisoires au porteur remis aux souscripteurs lors de la répartition, les époques des versements ultérieurs seront échelonnées par la Banque Générale de Change & de Commission de telle manière, qu'elle puisse mettre à la disposition du Gouvernement sur les rentrées de l'emprunt les divers versements qui seront fixés d'un commun accord lors de la ratification.

Sur les premières sommes qui seront versées par le souscripteurs, la Banque Générale de Change & de Commission retiendra la différence entre

la somme que doit recevoir le Gouvernement Dominicain & celle qu'elle doit recevoir des souscripteurs, cette différence lui étant allouée à forfait par le Gouvernement pour sa commission & pour se rembourser de tous les frais exigés par 1'émission, la publicité, la confection des titres provisoires & définitifs, le timbre de circulation, toutes choses qui restent entièrement à la charge de la Banque, le Gouvernement ne payant absolument rien pour ces frais & tous autres imprévus occasionnés par l'emprunt.

Article 5.

Il sera établi entre les parties contractantes un comptecoutant dressé de manière que le Gouvernement Dominicain ne paye 14¾% d'intérêt que sur les sommes versées par les souscripteurs sur les obligations suivant 1'article 4— La Banque Générale de Change & de Commission retiendra sur le produit de l'emprunt ces intérêts ainsi que la première semestrialité entière.

Article 6.

Cet emprunt est garanti par le Gouvernement Dominicain par tous ses biens & ses revenus directs & indirects; et pour donner les garanties les plus étendues aux porteurs des titres de cet emprunt, le Gouvernement affecte spécialement par les présentes à cette fin les droits d'importation & d'exportation, ainsi que généralement toutes les recettes effectives de Douane, de port Co. des ports de Puerto Plata d'abord & ensuite ceux de Saint Domingue dont les revenus, entièrement libres, se sont élevés en moyenne, suivant les documents officiels déposés à la légation Dominicaine à Paris & visés par le consul Anglais à Saint Domingue à quatre Millions de francs pour chacune des années de 1871 à 1873.

Article 7.

En supposant que par suite d'une cause imprévue, les revenus de Puerto Plata d'abord & puis ceux de Saint-Domingue ne couvrissent pas 1'annuité, le Gouvernement n'en sera pas moins tenu à payer immédiatement 1'intégralité des semestrialités.

Article 8.

Le Gouvernement Dominicain prend 1'engagement de ne présenter ou laisser voter aucune loi qui puisse nuire aux garanties qui précédent en changeant les droits ci-dessus mentionnés pendant toute la durée de 1'emprunt, à moins que les recettes des deux ports soient pendant deux années consécutives supérieures à Six Millions de francs.

Article 9.

Le Gouvernement Dominicain enverra annuellement à sa légation à Paris, pour en faire la publication dans le Journal Officiel de Paris, comme moyen de contrôle un état des entrées de Douane de Puerto Plata & de Saint Domingue.

Article 10

Les Semestrialités, payables d'avance, comme il est dit Article 2, Seront envoyés à Paris par le Gouvernement Dominicain en espèces sonnantes ou en valeurs de banque, franc de port & de tous frais & à ses risques & périls.

Article 11.

Les tirages au sort pour désigner les obligations à rembourser auront lieu publiquement & semestriellement, un mois avant la date des remboursements, à la Banque Générale de Change & de Commission, ou, à son défaut, dans telle autre maison de Paris que le Gouvernement Dominicain désignera- Les numéros extraits seront publiés dans le Journal Officiel de Paris.

Après cinq années révolues, les coupons échus & les obligations désignées pour le remboursement deviendront caducs ainsi que les soldes actifs résultant de la vente des titres exécutés pour non versement.

Le Gouvernement bénéficiera de cette caducité.

Cette clause sera imprimée sur les titres.

Article 12.

Le prospectus de 1'émission sera rédigé par Mr. Glass, d'accord avec la Banque, sauf le prix d'émission qui ne concerne que la Banque; il sera signé au nom du Gouvernement Dominicain par Mr. Glass & contresigné par 1'exactitude de tous les renseignements qu'il contiendra par Mr. Thirion Montauban, en sa qualité de Ministre Plénipotentiaire du Gouvernement Dominicain.

Article 13.

La Banque est chargée, moyennant ¼% de commission, du paiement des coupons & des obligations échus- Si pour une raison quelconque, elle était dans 1'impossibilité matérielle de continuer à se charger des paiements, le Gouvernement Dominicain remetrait immédiatement ce soin à une autre maison de Paris.

Article 14.

Le présent contrat ne sera mis en vigueur qu'après avoir été ratifié officiellement par le Gouvernement Dominicain- La Banque Générale de Change & de Commission accorde à cet effet quatre mois de temps à partir

du (sic) jour [où] l'émission devra avoir lieu dans les trois mois qui suivront, soit au plus tard dans les Sept mois a partir de ce jour.

Article 15.

Les parties contractantes élisent domicile à Paris, la Banque à son siège social & le Gouvernement Dominicain au parquet de Mr. le procureur de la République, près le tribunal civil de première instance de la Seine.

Toutes deux se soumettent à la juridiction Francaise.

Fait double a Paris le Douze Mai Mil huit Cent Soixante quinze.

Banque Générale de Change & de Commission
1'Administrateur
Directeur

Por poder del
Gobierno Dominicano
J. M. Glass

Article Additionnel

Il a été convenu entre les parties contractantes que le Gouvernement Dominicain paiera sur 1'Emprunt de QUINZE MILLIONS de francs, dont se refère le présent, 18% au lieu de 143/4 comme il a été convenu dans 1'Art. 2, ou soit, quarante semestrialités de UN MILLION TROIS CENT CINQUANTE MILLE francs (au lieu de 1,116,082 fs) soit 3¾% de plus, différence qu'il laisse, sauf justification au Gouvernement, pour remplir une convention particulière par laquelle: Le Gouvernement Dominicain s'engage pour la susdite annuité de créer, sur la demande de la Banque Générale de Change et de Commission, des obligations d'un type que cette dernière indiquera. La Banque Générale de Change et de Commission s'engage, par contre, pour la différence des 3¾ susmentionnés, à remettre comme contrevaleur au Gouvernement Dominicain pour les nouvelles obligations, la série d'obligations dont il est fait mention dans une lettre particulière obligations qui seront déposées entre les mains de la personne qui sera désignée officiellement à Paris par Monsieur Glass pour les recevoir en depôt.

Fait double a Paris le Douze Mai Mil huit cent soixante-quinze.

Banque Générale de Change & de Commission
L'Administrateur
Directeur.
Montauban

Por poder del Gobierno
Dominicano.
J. M. Glass.

(Doc. 1, Exp. 4, Legajo 28, Sección de RR. EE., A. G. N.)

DOCUMENTO Nº 7

Contrato de Empréstito de Meriño

Entre los infrascritos: El Reverendo padre Fernando Arturo de Meriño, Deán y administrador apostólico, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República Dominicana, en nombre del Gbno de dicha República, residente en París, 25 Boulevard des Capuccines, por una parte; y el Señor Doctor Henri Joseph Celestin Dinsart, ex profesor de la Universidad de Varsovia, Caballero del Orden de San Gregorio el Grande, en su nombre personal, residente en Tellin, Grupont, Bélgica; por otra parte, ha quedado convenido lo siguiente:

Art. I.— El Sr. Dr. Dinsart le presta a la República Dominicana la suma de un millón de pesos bajo las condiciones siguientes:

A.— Dicha suma pagará un interés de 12% anual (doce por ciento).

B.— El pago se efectuará en la República Dominicana en moneda corriente en el país, a razón de 130,000 pesos (ciento treinta mil pesos) anuales durante veinte tres años o menos, conforme con lo que dice el párrafo D de este artículo, esta suma quedando afectada primero al pago de los intereses y luego a la amortización del capital, pero queda entendido que el último año el pago no se hará, sino hasta cubrir lo restante que se adeude (capital e intereses).

C.— El gobierno dominicano consagra al pago de esta suma anual de 130,000$ el trece por ciento de las rentas de importación de sus aduanas, deduciendo para el cálculo de esta proporción de las sumas apartadas ya de dichas rentas por otras leyes para diferentes servicios como 2% de subvención para vapores, 2% de recargo sobre aforo para deuda extranjera, 6% de recargo para deuda interior, 1% para instituto profesional.

Al efecto las oficinas fiscales del Gobierno pondrán a la disposición del Sr. Dr. Dinsart o de sus representantes o de los empleados nombrados por el esa suma de 13% en pagarés suscritos por los importadores de manos de quienes el señor Doctor Dinsart cobrará directamente el montante, y eso a medida que vayan verificándose las entradas.

En cuanto al trece por ciento de las rentas de importación que se produjesen al contado, el Sr. Dr. Dinsart o sus empleados o sus representantes los cobrarán de manos de los agentes fiscales de la República Dominicana, igualmente a medida que vayan verificándose las entradas.

D.— Si los trece por ciento indicados en el párrafo precedente excediesen la suma de ciento treinta mil pesos, el Sr. Dr. Dinsart podrá ser llamado por el gobierno Dominicano a aceptar el sobrante hasta la suma de $150,000 (ciento cincuenta mil pesos) y habrá de disminuir de otro tanto su acreencia contra la República.

E.— Si por el contrario los dichos 13% fuesen inferiores a dicha suma de 130.000 pesos, el Gobierno Dominicano se compromete a saldar la diferencia al Sr. Dr. Dinsart el último día del año en que aquello suceda.

F.— En el caso en que el Gobierno Dominicano se encontrase en la imposibilidad de llenar la obligación a que se halla sujeto por el párrafo E precedente, autoriza por la presente al Sr. Dr. Dinsart, para probarle su entera buena fe a coger, empezando desde el primer día del año siguiente, y de manos de los mismos importadores la totalidad de los derechos de aduana hasta cubrir todo lo que quede debido del año precedente exceptuando sin embargo los once% (once por ciento) mencionados en el párrafo C precedente.

G.— Queda entendido que para la ejecución del presente contrato el año empieza a contarse desde el día en que el Sr. Dr. Dinsart haya entregado al gobierno dominicano la suma de un millón de pesos y termina el mismo día del año siguiente.

Art. II.— El Sr. Dr. Dinsart pagará, según le convenga al gobierno dominicano y libre de toda clase de gastos, o cinco millones de francos a su agente fiscal o mandatario especial para este efecto, como se dirá en el artículo IV del presente contrato, o un millón de pesos en la capital de la República Dominicana y en moneda mejicana con deducción de las sumas que el Gobierno dominicano le dé orden de pagar en Europa antes de la salida del dinero para Santo Domingo, como letras o giros suscritos por dicho Gobierno.

Art. III.— El Sr. Dr. Dinsart entregará ese millón de pesos a los cinco millones de francos como lo dice el artículo II precedente, a más tardar, tres meses después que haya recibido del Gobierno Dominicano el aviso oficial de la ratificación del presente contrato.

Queda entendido que el reembolso del dinero no comenzará a efectuarse ni tampoco correrán los intereses sino el día después que el Sr. Dr. Dinsart o sus representantes hayan entregado el total del empréstito al gobierno de la República Dominicana o presente el recibo de haberlo hecho al agente fiscal del mismo gobierno acreditado en París.

Art. IV.— El Sr. Dr. Dinsart se reserva la facultad de formar una compañía por acciones que quedará reemplazándolo en todo para con el Gobierno dominicano en el presente contrato, bastando para ello una simple notificación hecha por el Sr. Dr. Dinsart al gobierno dominicano, notificación de que este gobierno le acusara oficialmente recibo.

Esta compañía será formada de nacionales y extranjeros. Su residencia social será establecida ya en la capital de la República, ya en París o en otra ciudad de Europa sin que el Gobierno dominicano tenga más derecho que el de vigilar la emisión de las acciones. Cualquiera que sea la ciudad en que se fije la residencia social de la compañía, ésta tendrá que mantener uno o

varios representantes oficiales suyos en la República Dominicana para facilitar sus comunicaciones con el gobierno.

Por su parte el Gobierno de la República Dominicana se reserva el derecho absoluto de tener un agente fiscal, ya en París donde el empréstito puede pagarse, ya en otra ciudad cualquiera en que se establezca la residencia de la Sociedad para vigilar la emisión de las acciones.

Art. V.— El Sr. Dr. Dinsart se reserva igualmente el derecho de ceder a una compañía o a un tercero -con tal que no sea un gobierno extranjero- todo o parte de sus derechos y cargos en el presente contrato, pero deberá darle notificación al Gobierno dominicano, quien, a su vez, le acusará oficialmente recibo de esta notificación, obligado para con dicho tercero al cual el Sr. Dr. Dinsart haya trasmitido todo o parte de sus derechos en la proporción indicada en el traspaso, así como el tercero quedará obligado para con el gobierno en los límites mismos del presente contrato.

Art. VI.— Toda cuestión que surja entre el Sr. Dr. Dinsart o su sustituto o la Compañía por acciones, por una parte, y el Gobierno Dominicano por otra parte, respecto al presente contrato y al actual empréstito, será decidida por los tribunales de la República Dominicana y no podrá jamás dar lugar a una acción diplomática.

Hecho en París por duplicado en español y en francés el día veinte de junio de mil ochocientos ochenta y cinco.

Approuvés les écritures ci dessus en francais et en espagnol, in 'un rerefant pour la ratification a nous gouvernement.

(Fdo.) *Fernando A. de Meriño*

Approuvé les écritures ci dessus en francais et en espagnol.

Le Dr. Dinsart.

Hay una nota abajo que dice:
Falta la cláusula de amortización en cualquier tiempo, si el Gobno. quisiera y tuviera los medios para ello.
(Doc. 5, Exp. 12, Legajo 19, Sección de Hacienda y Comercio, A. G. N.)

DOCUMENTO Nº 8

Contrato Adicional

Entre los infrascritos el Reverendo Padre Fernando Arturo de Meriño, deán y administrador apostólico, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República Dominicana en nombre del gobierno de dicha República, residente en París, 25 Boulevard des Capucines.

Por una parte y el Sr. Dr. Henri Joseph, Celestin Dinsart, ex profesor de la Universidad de Varsovia, Caballero de la Orden de San Gregorio el Grande en su nombre personal residente en Tellin (Grupont) Bélgica.

Por otra parte;

Ha quedado convenido como adición y aclaración del contrato firmado el día de ayer entre las partes aquí presentes lo que sigue:

Art. I.— El Gobierno dominicano autoriza al Sr. Dr. Dinsart a retener del millón de pesos de que se trata en el contrato firmado ayer, la suma de doscientos mil pesos adjudicados al prestamista por el decreto del congreso con fecha del 8 de octubre 1884, promulgado por el Poder Ejecutivo el 9 de octubre del mismo año.

Art. II.— Aunque el Sr. Dr. Dinsart trasmita sus derechos a un tercero como lo dice el artículo IV de dicho contrato, el Gobierno dominicano pondrá siempre a la disposición del Sr. Dr. Dinsart los doscientos mil pesos de prima, en letras de cambio pagaderos sobre el importe del empréstito en la misma fecha fijada para la entrega del millón de pesos lo cual se hará bajo las condiciones siguientes:

1° El Gobierno dará orden a ese tercero de pagar las letras correspondientes.

2° Esas letras serán remitidas al Sr. Dr. Dinsart al mismo tiempo que el gobierno dominicano le acuse oficialmente recibo de la notificación hecha por el conforme al art. IV. del contrato firmado ayer.

Art. III.— El Gobierno dominicano conviene además en conceder al Sr. Dr. Dinsart todos los terrenos libres del Estado que pueda cultivar y la explotación por cincuenta años de todas las minas que descubriese y denunciase en el termino de dos años llenando las formalidades legales del caso.

Pero queda entendido que si el Sr. Dr. no hubiese empezado la explotación de tal o cual mina a él concedida dos años después de haber recibido la concesión legal, quedará excluido de todo derecho sobre dichas minas.

Art. IV. El presente contrato y el que se firmó ayer deberán ser ratificados a un tiempo por el Gobierno dominicano, entendido que si deja de ratificarse uno de ellos, uno y otro quedarán por este hecho sólo, considerados como absolutamente nulos y sin efecto.

Hecho en París por duplicado escrito en español y en francés el día veinte y seis de junio de mil ochocientos ochenta y cinco.

Approuvé les écritures ci dessus en francais et en espagnol, ni en referant pour la ratification a nous gouvernement.

(fdo.). *Fernando A. de Meriño.*

Approuvé les écritures ci dessus en francais et en espagnol.

(fdo.) *Le Dr. Dinsart.*

(Doc. 6, Exp. 12, Legajo 19, Sección de Hacienda y Comercio, A. G. N.)

DOCUMENTO Nº 9

Instrucciones a Marchena
Mes de enero de 18886 (Dic. 14)

No. 576. Eugenio G. Marchena, Agente Fiscal de la República Dominicana en Europa. Ciudad.

Ciudadano: Como la verá V. por la plenipotencia que tengo la satisfacción de acompañarle adjunta, el Poder Ejecutivo ha juzgado de alta conveniencia para los intereses del país, enviarle a Europa con el carácter de Agente Fiscal de la República siendo sus miras y deseos que V. se empeñe en consolidar de una manera eficaz el crédito de la Nación, ya contratando empréstitos, ya negociando las bases de un Banco Nacional o ambas cosas relacionadas entre sí, aún cuando para el caso o casos tenga que hacer concesiones que desvanezcan los obstáculos creados por los tenedores de bonos de la denominada deuda de Sto. Domingo. Para tales fines y de conformidad a la Resolución de Gobierno por la cual se confiere a V. el dicho carácter de Agente Fiscal de la República en Europa, he creído conveniente como ampliación y para mayar inteligencia de sus plenos poderes, darle las siguientes instrucciones:

1o.— Se embarcará V. por la primera ocasión directa o indirecta que se presentare para Europa y con preferencia en una que vaya a Inglaterra, punto principal donde pondrá en práctica sus operaciones y tan luego llegue allí, notificará su llegada a los Representantes del Gobierno, (Agentes Diplomáticos o Consulares) para que estando en relación con ellos, pueda utilizar sus servicios en beneficio de la misión que se le encomienda, en todo aquello que V. juzgue conveniente o necesario.

2o.— Debiendo ser el objeto más principal de la Agencia Fiscal Dominicana conforme al pensamiento del Gobierno, que se llegue a obtener la constitución y establecimiento de un Banco en la ciudad de Sto. Domingo, que asuma y tenga el carácter de Banco Nacional, recomiendo a V. el mayor interés en celebrar lo más pronto posible un contrato, para llegar a tales fines, mejorando las bases del que se había concedido al Sr. Paul Blondot, con las diferencias que a continuación se expresan: 1º respecto del monto del capital social, que no ha de bajar en tres millones de pesos ($3,000,000); 2º en las cantidades que ha de aprontar al Gobierno de la República, para satisfacer a priori los compromisos de actualidad, que hoy alcanzan la cifra de un millón doscientos mil pesos fuertes.

3o.— En la obligación de destinar una parte del capital a operaciones de préstamos sobre propiedades urbanas y rurales con interés módico aunque para ello tenga que acordársele al Banco el derecho exclusivo de emitir cédulas hipotecarias por un valor igual al que declare oficialmente que dedicará a

tales operaciones; 4° en que deberá exigirse una parte en las utilidades de la acuñación, aún cuando en cambio se renuncie a las ventajas designadas en los arts. 20 y 21 de la concesión Blondot.

Facúltese a V. a hacer el compromiso para el establecimiento de la unidad de moneda nacional, de modo que pueda obtenerse la ley de la materia al mismo tiempo que se apruebe por el Congreso, el Contrato para el Banco.

3° En el caso de que no fuere posible obtener la negociación para el establecimiento del Banco, con las condiciones indicadas y conforme lo piden las necesidades y conveniencias del país en el actual estado de desarrollo de su industria y progreso, V. procederá a levantar un empréstito que como mínimum, no baje de *cinco millones de pesos* ($5,000,000) en su valor nominal o de emisión, pero procurando que la conversión a metálico, produzca a lo menos la cantidad de *tres millones quinientos mil pesos* (3,500,000) o sea el tipo de 70%, cuando no fuere posible obtener una colocación más ventajosa para los bonos que se emitan.

Es facultativo a V. como Agente Fiscal de la República, para asegurar esta operación como cualquiera otra de su naturaleza, afectar y poner en garantía parte o el todo de las rentas fiscales, parte, hasta un 30% si se trata del servicio del empréstito, y todas, si los contratantes se obligaren a satisfacer los compromisos actuales del Gobierno y las atenciones del presupuesto de gastos públicos.

4o.— Antes de entablar las negociaciones fijadas en los artículos anteriores, V. notificará su presencia en Europa, y su carácter de Agente Fiscal al Dr. Ramón E. Betances. París rue de Chateau d'un 6 bis (o donde se encuentre) y se informará del estado de la negociación encomendada a aquel Sr.; y siempre que a la fecha de dicha notificación e informes no estuviese completamente terminada, notificará al mismo Dr. Betances, que conforme a lo resuelto por el Gobierno, suspenda toda operación fiscal y que por tanto cesan las facultades que para ello se le habían dado.

Si por el contrario la negociación encomendada al precitado Sr. Betances estuviere terminada, como el fin principal de ellas es cubrir los compromisos actuales del Estado, tendrá V. presente esta circunstancia para que no sea obica al Contrato sobre el establecimiento del Banco, pues por el contrario podrá verse con mayor claridad que un Contrato reemplazará otro. Lo mismo resultará respecto del empréstito.

2o.— Se considerará terminada la negociación del Doctor Betances en el caso de que a la llegada de V. a Europa se haya recibido o reciba el valor del empréstito.

5o.— No ocultándose al Gobierno el daño que causan al Crédito del Estado las pretensiones de los tenedores de bonos de la denominada deuda de

Santo Domingo, y con el objeto de evitar todo género de inconvenientes a las operaciones que deba V. emprender como Agente Fiscal de la República en Europa, queda V. plenamente autorizado, teniendo a la vista las proposiciones hechas por el Dr. Antonio Ma. Regidor y Jurado en nombre y a solicitud de la Junta del Comité de Tenedores de bonos de Santo Domingo que se reunió en 17 Mongate St., Londres. Este Central, el 22 de Stbre. último, a conceder como solución final de ese enojoso asunto, el reconocimiento de las £38,095 (*treinta* y *ocho mil noventa* y *cinco libras* esterlinas) que recibió el Tesoro dominicano, y sus intereses capitalizados al 12% anual. Para el efecto y no siendo aceptable el tipo de interés que pretenden desde el momento que haya un arreglo, V. se limitará como *máximum* de toda concesión, a estipular el 3% en los primeros dos años, 4% en el 3° y cuarto y 5% del sexto año en adelante, dejando a cargo de los tenedores de dichos bonos, el pago de cualquier gasto que se origine hasta la terminación completa de esa operación. No hay impedimento por parte del Gobierno para que si V. lo creyere necesario, hiciera otro género de concesiones, que no aumenten ni la suma que se concede ni los intereses que se dejan señalados para el caso de que este convenio tenga lugar.

Para garantizar los intereses que se estipulen en el arreglo que se autoriza, puede V. afectar a dichos tenedores de bonos, el 2% (dos por ciento) que se cobra actualmente para pagar la deuda internacional una vez cancelada ésta, comprometiéndose el Estado a cubrir en todo tiempo cualquier diferencia que resulte entre el producto del 2% citado y el valor de los cupones que deban servirse.

6o.— En ningún caso se aceptará el compromiso de una transacción con los tenedores de bonos de la deuda expresada si no se consigue conjuntamente la constitución del Banco o la realización del empréstito.

7o.— Para el mejor desempeño de su cometido queda V. plenamente facultado de asesorarse como consejo, un abogado de reputación conocida.

8o.— El Gobierno de la República confiando en su patriotismo y conocidas aptitudes, deja a V. el cuidado de dar a estas instrucciones la aplicación más eficaz conforme a su leal saber y entender, y confía en que V. así como lo ha sabido hacer en otras ocasiones se pondrá a la altura correspondiente, mereciendo bien del país y de la alta confianza con que le distingue el Gobierno.

Saluda a V. con la más alta y distinguida consideración.

El Ministro de Hacienda
(Fdo.) *R. R. Boscowitz*.

Libro No. 73, pág. 7074, Secretaría de E. de Hacienda. A. G. de la N.

DOCUMENTO Nº 10

Informe del General Eugenio Generoso de Marchena

Copia.

Al Ciudadº Ministro de Hacienda y Comercio.— El día 31 de Octubre de 1887.

Ciudadº Ministro:

Honrado por el Gobierno con el nombramiento de Agente Fiscal de la República en Europa, por resolución de fecha 14 de enero de 1886, partí para aquel destino sin perder un solo instante, regresando al país ocho meses después. Las circunstancias anormales que se atravesaban en aquellos momentos y los diferentes servicios que se dignara encargarme el Gobierno desde mi llegada y sucesivamente hasta hace poco, habían impedido el que rindiese cuenta de lo actuado en el desempeño de ese puesto; y esperando que sean tomadas en consideración tales circunstancias y servicios, para excusar el retardo en que he incurrido, paso hoy a cumplir ese deber haciendo la exposición de esos actos, en la forma siguiente.

Con el objeto de encaminar lo más acertadamente posible las gestiones que debía emprender para obtener el crédito y recursos necesarios al desarrollo de la riqueza pública, procedí antes de dar ningún paso con ese fin a conocer del estado en que se hallaba la negociación encomendada al Dr. Dn. Ramón E. Betances; y habiéndome manifestado este Señor el 13 de febrero del año citado, los grandes esfuerzos hechos por él, sin resultado alguno, y la necesidad de varios días más para saber a qué atenerse sobre una operación que se ocupaba de ultimar, tuve por conveniente abstenerme de notificarle la cesación de sus poderes, conforme lo indicaba el apartado 4º de mis instrucciones, y le acordé el tiempo que creyó suficiente para la enunciada necesidad, el cual dio por terminado dicho Dr., el 26 del mismo mes, con motivo de haber fracasado también, esa última gestión.

Más de un año hacía, que corrían de mano en mano las proposiciones de los Agentes de la República en todos los principales mercados del mundo financiero, y era ya del dominio público la solicitud de un empréstito que no había tenido aceptación. Así las cosas y conociendo la imposibilidad de lanzar ninguna operación de crédito que pudiese encontrar algún obstáculo en su falta de cotización en la Bolsa de Londres, creí inútil perder tiempo en gestiones que lejos de dar provecho habrían puesto más de manifiesto nuestra desacreditada situación económica y desde luego me fijé en la necesidad de ponerme en relación con el "Comité" de los tenedores de Bonos de Santo Domingo y el "Consejo de los tenedores de Bonos Extranjeros", que son las dos corporaciones que en representación de los acreedores del empréstito

Hartmont, se opone a toda negociación o empresa pública que requiera Capital europeo para esta Antilla, haciendo valer para ello la acusación de que estamos en defecto y apoyándose para ese fin, en la fuerza que les dan las reglas establecidas por la mencionada Bolsa, o sea por el London General Stock Exchange.

Delicada era la situación en que me encontraba para dirigirme a las precitadas Corporaciones, sin comprometer los derechos e intereses de la República por ante estas; por tanto y haciendo uso de las facultades prescritas en los apartados 5° y 6° y 7° de mis instrucciones, tomé como intermediario y asesor al Señor Dr. Dn. Antonio Ma. Regidor y Jurado, abogado español residente en Londres y con estudio abierto en la casa No. 21 de Billiter St., persona de quien me había valido algunos meses antes, para conocer las disposiciones de los tenedores de la deuda emitida por E. H. Hartmont, el monto de esa acreencia y la forma más fácil de llegar a un arreglo, bajo el pretexto de un convenio que firmamos el 7 de agosto de 1885, según lo comprueban los documentos que bajo los Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, forman parte del expediente que acompañó a este informe.

No era pues, el Dr. Jurado, un desconocido para las corporaciones aludidas, y así sucedió que le acogieron muy bien, recibiendo sus nuevas gestiones como la continuación de las primeras de que he hecho mención, las que no habían sido resueltas, porque el carácter reservado con que se me encomendó dirigir ese asunto no me permitió dar cuenta de su estado ostensiblemente y porque el Gobierno creyó conveniente que volviese yo en persona a buscarle solución más ventajosa, combinando ésta, con otra operación económica provechosa al país.

Ya habían sido presentadas y desechadas por el "Comité de la deuda de Santo Domingo" y el Consejo de los tenedores de bonos extranjeros, las estipulaciones del 7 de agosto de 1885 que fueron discutidas en Junta General el 17 de Setiembre del mismo año, por temor de que la suma £261,561,152 de que hacía concesión la República en ellos, no alcanzara para recoger los bonos en circulación a un 50% y porque el tipo de interés fijado se creía sumamente reducido; y estaba pendiente de respuesta entonces, la contraproposición hecha por esas corporaciones el 22 de *Setiembre del año citado*, por conducto del Dr. Jurado, y siendo esa contraproposición la de que se emitieran bonos nuevos de £50 por cada £100 de los viejos, y que se abonase el interés de 4 y 5% en los primeros dos años que siguieron al arreglo, en escala de uno, y el 6% del 3r. año en adelante, tuve a bien autorizar al Dr. Jurado para que notificase al "Comité de los tenedores de bonos de Santo Domingo", que el Gobierno se negaba a admitirla, y para que entrase a discutir una nueva forma de arreglo bajo las bases siguientes:

1°— Cesión de la República a favor de los tenedores de bonos de las £38.095, que se recibieron, con más sus intereses compuesto al 12% anual hasta el 30 de Abril del año 1886.

2°— Amortización de los bonos antiguos emitidos por E. H. Hartmont, con nuevos bonos que se emitirían por el Gobierno Dominicano en la extensión que le permitiera el monto de las dichas £38,095 y sus intereses compuestos, llevando Cupones pagaderos cada seis meses a los tipos que siguen: 3% para los primeros dos años, 4% el cuarto y quinto año, y del sexto en adelante, 5%.

3°— Anticipación de £200,000 en clase de préstamos con 6% de interés anual.

Esta proposición causó muy mal efecto, dando ella lugar a que el público inglés dudase de la seriedad del Gobierno Dominicano y temiese una sorpresa, pues no faltó quien en privado lo manifestase a nuestro abogado, suponiendo que con el mal precedente que tenía la República bien podía pretender salvar solamente sus dificultades económicas perentorias, antes que dejar probada su buena fe con el propósito preferente de consolidar su crédito dando satisfacción a sus compromisos anteriores, si bien no debía escaparse a nadie que lo último expresado, era el único medio de levantar el estigma que pesa sobre ella y de inspirar confianza a los capitalistas en general, para que acudieran en ayuda de las necesidades del país y por consiguiente de su Administración.

En vista de tan malas impresiones y notando gran frialdad en las personas importantes que con mayor calor habían tomado parte en favor de nuestros intereses, resolví seguir el Consejo de mi asesor, y celebré una conferencia con el Presidente del "Comité", en la cual pudo desvanecer la desconfianza que en un principio me demostró ese respetable Señor, concluyendo por dejarle satisfecho. Pasó esto a principios de Abril y habiéndose sometido a discusión lo propuesto por mí, en junta convocada al efecto, se decidió según oficio del Comité", fecha 29 de Abril y que obra bajo el No. 8 del expediente:

1°— No aceptar la conversión de la deuda sino en la proporción de £50 de bonos nuevos por cada £100 de bonos viejos.

2°— Que el interés a partir del término del arreglo se estableciese, a 3% para los dos primeros años, a 4% en el tercer año, a 5% en el cuarto y 6% del quinto en adelante.

3°— Que se garantizase el pago del servicio de esa deuda con las rentas de Aduanas, mientras se le pudiera asignar con especialidad del 2% destinado a las acreencias extranjeras. Esta decisión fue tomada con el carácter de ultimátum y haciéndose caso omiso del empréstito, cuya idea se rechazó a unanimidad.

Al notificárseme lo resuelto, creí de mi deber significar acto continuo a mi intermediario y asesor, Dr. Antonio Ma. Regidor y Jurado, que había terminado su encargo, no estando en mis facultades aceptar las condiciones a que aspiraba el "Comité", según su última resolución, pero creyendo este Señor que un rompimiento de esa naturaleza echaría por tierra todos los demás proyectos que debían venir a favorecer la república a la sombra de este arreglo, me expuso extensamente sus opiniones, y Consejo, en atento oficio que se sirvió dirigirme el 30 del mes antes dicho, el que se halla en el expediente anexo, bajo el No. 9. A ese oficio acompañaba la lista de los tenedores de bonos y el valor registrado, montante a £502,400; este documento lleva en el expediente el No. 10.

Colocado entre la pauta que me trazaban mis instrucciones y los inconvenientes que se presentaban para obrar conforme a ellas, no pude menos que considerar: que aunque podía discutirse el derecho que asistiera al Señor E. H. Hartmont, para cobrar una comisión que solo se debía pagar en el caso de que se probase que por causa de fuerza mayor justificada no pudo llevarse a cabo el empréstito, no era menos cierto, que la República había otorgado documento reconociendo £50,000, en representación de las £38,095, que entraron en su Tesoro; que en consecuencia de eso y tomando por base nuestra proposición misma, si se producía ese documento en reclamación contra el país, no podría éste sustraerse a su pago; que ascendiendo a £502,400 el monto de la suma registrada por el Dr. Jurado, y a £510,000 la que acusa en circulación el registro de la Bolsa de Londres o sea el Stock Exchange Year Book, el 50% de cualquiera de esas dos sumas me alcanzaría a la cifra que estaba dispuesta a conceder la República y que por tanto no había peligro en aceptar la conversión de la deuda bajo la condición de dar por cada £100 de bonos viejos £50 de los nuevos; que para asegurar la República sin peligro el arreglo al 50%, como queda dicho, podrá reservarse el derecho de conservar o inutilizar el excedente de la emisión que en el término fijado para la conversión, quedase sin aplicación a ella; y por último, que examinada esta forma de arreglo, no se afectaba en manera alguna el fondo del que llevaba propuesto ni extralimitaba mis instrucciones, sino que por el contrario, obtendríamos un triunfo espléndido para nuestro buen nombre, si se recababa de los tenedores de bonos el que ellos, abdicando sus pretensiones al reclamo de la totalidad del empréstito, solicitaban ese pago, como acreedores de Hartmont. Tales consideraciones y las expuestas por el señor Jurado en el oficio a que ya me he referido, dieron lugar a que basado en ellas, le contestara en los términos que expresa mi comunicación del 1o. de Mayo, cuya Copia obra en el expediente de esta Agencia Fiscal, bajo el No. 11.

Con alguna dificultad y después de varias conferencias con personas influyentes, obtuvo el Dr. Jurado que el "Comité" de los tenedores de bonos de Santo

Domingo se reuniese el 4 de Mayo y adoptase en principio mi idea resolviéndose en esa sesión, que su Presidente quedaba autorizado a tratar conmigo bajo las bases enunciadas, con reserva de un 10% de los bonos de la nueva emisión, que destinaban a atender los gastos del arreglo, el cual debía someterse a la aprobación de una Junta General que convocaría el "Consejo de los tenedores de bonos extranjeros". (Véase en el expediente el documento No. 12).

Repetidas y largas fueron, las discusiones que tuve de sostener con el Señor "Presidente del Comité", para convencerle de que no me era posible aceptar la imposición del 6% de interés, en que insistía, pues hacía gran mérito del fundamento de su argumentación, con la cual justificaba hasta cierto punto su creencia de que la suma de crédito que obtendrá la República con motivo de ese convenio, le evitaría llegar a pagar ese tipo, pudiendo recoger la deuda antes de que se cobrase el sexto o séptimo cupón, que solo llevarían el de 4% y 5%; y como quiera que al fin se penetrara de la formalidad del impedimento que me obligaba a rechazar sus buenas razones, concluyó mostrándome el acta de 4 de Mayo en que se limitaba a lo resuelto en aquel día, y quedamos de acuerdo en que nada podíamos hacer definitivamente.

Así estaban las cosas y se consideraban rotas las negociaciones establecidas, cuando recibí el oficio No. 826 (documento No. 13 del expediente) que me dirigía el Ministro del Ramo, justamente en respuesta de la consulta que elevé el 20 de Marzo, sobre el pretendido interés de 6%; oficio que contesté aquel mismo día 16 de Mayo, y de cuya contesta acompaño copia bajo el No. 14.

Ya había hablado con mi asesor y solo esperaba la reunión del "Consejo de los tenedores de bonos extranjeros" para cambiar las últimas comunicaciones sobre la imposibilidad de un entendido, cuando se me presentó de nuevo el Presidente del Comité a exponer: que satisfecho él y los demás miembros de su corporación y del Consejo, de la honorabilidad con que procedía la República, así como de mi manera de obrar evitando la extralimitación de mis instrucciones, me proponía celebrar el arreglo firmándolo yo ad-referéndum y por consiguiente sujeto a la aprobación de mi Gobierno, sin que por tal acto se siguiera responsabilidad alguna en caso de desaprobación.

Esta proposición venía a salvar todas las dificultades que se presentaban, y me dejaba campo libre para ocuparme con buenas probabilidades, de las demás gestiones que me estaban encomendadas; por tanto y sin vacilación alguna la acepté, dándole las gracias en nombre de la República, por el buen concepto que merecía de él y de los demás representantes de los tenedores de bonos, haciendo resplandecer como lo acababa de hacer con sus expresiones, la justificación de la conducta observada por ella en ese desgraciado asunto.

Las conferencias que siguieron a esa última entrevista, dieron lugar al Contrato de arreglo que tengo a bien elevar hoy a la consideración y

aprobación del Supremo Gobierno por conducto del Ministerio al digno cargo a V., suplicando se tengan muy en cuenta las explicaciones que anteceden. (Este documento lleva el No. 15).

También encontrará V. adjunto, bajo el No. 16, una copia del acta levantada con fecha 29 de junio, dando constancia de la aprobación otorgada por la Junta General de los tenedores de bonos, en su reunión de aquella fecha.

Y aunque después de la exposición que llevo hecha no se necesitan nuevas explicaciones para encontrar de un modo preciso y claro, la razón de ser de cada una de las cláusulas que figuran en el Contrato de referencia, no puede menos, por más prolijo que parezca en los detalles de la cuenta de esta misión, que entrar en un orden de consideraciones que servirán siempre para ampliarlas a la vez que como apreciaciones de grandísima importancia que pueden servir luego quizás si como Consejo, para la mayor cordura con que se deba obrar, en la resolución que reclama este delicado asunto.

Mucho se ha comentado por algunas personas, el reconocimiento hipotético de las £357,150 a que puede extenderse la emisión de bonos nuevos, considerando la suma excesiva; por lo mismo debo aclarar que existiendo declaración oficial en Londres, de que el empréstito se emitió por £757,700 que al 70% debieron producir £530,390, la que dio lugar a que se probase la extralimitación de poderes del Señor E. H. Hartmont, por no estar éste autorizado a emitir sino hasta un valor que al 70% diese £420,000, las Corporaciones que representan a los tenedores de bonos, no pueden echar a un lado esa cifra que les sirve de punto de partida y por tanto han debido atenerse a su balance, que es de £714,300, deducida la de £43,400 que pagó el dicho Hartmont durante los años 69,—70,—71 y 72, mientras apareció en su oficina de Londres (sea la de la República de allí) haciendo el servicio de la deuda en nombre de la República, cuya representación conservaba como Agente de ese negocio y también como su Cónsul General. Sin embargo de esta aclaración bastante por sí sola para probar que no era posible desechar esa forma, los datos de que llevo cuenta dada, para que se conozca la existencia de bonos en circulación, y la merma que acusan como natural todos los empréstitos que se han convertido en estos últimos tiempos, ponen de relieve la ignorancia o mala fe de los que sostienen esa cifra como valor invariable de la nueva emisión. Bien se ve, por el final del Art. 1o. del Contrato, que se ha querido llenar una mera formalidad, desde que se coteja éste, con el apartado tercero del artículo 9o. de ese instrumento, en el cual queda previsto el solvente de la emisión, su reintegro al Gobierno y la fijación definitiva del monto de dicha emisión, después de convertida la deuda.

Lo expuesto me parece suficiente para desvanecer la duda que pudiera abrigar el Gobierno para aceptar ese compromiso, bajo seguridad reservada de que

no se hará efectivo; pero asumiendo yo la responsabilidad de haberlo suscrito a su nombre, es deber mío robustecer esa seguridad, y por tanto llamo su atención sobre la circunstancia de que no siendo el arreglo hecho, sino una transacción protectora de los intereses del Gobierno y de los tenedores de bonos, que pone fin al sufrimiento que experimenta cada uno por su lado ya con el quebranto del crédito del primero o bien con no recibir pago alguno los segundos, tiene hoy por hoy la cabida de rechazar el pago de los tres años de intereses que sirvió al Señor Hartmont, fundándose precisamente en que el perjuicio recibido por esos acreedores, no les da el derecho de cobrar nada sino desde el día en que principiaron a sentir ese perjuicio; este alegato reduciría el valor máximum del reconocimiento, a una suma muy inferior a la que se me autorizó reconocer; y como es posible que se eche de menos el que yo no hiciera uso de él, debo advertir, que esto puede hacerse hoy después de firmado el Contrato y no antes cuando nuestra fuerza consistía en desconocer los actos del mencionado Hartmont.

A pesar de mi convencimiento de que la fundada advertencia que acabo de hacer no puede ser desatendida por los tenedores de bonos, considero también que podría traer gran trastorno esa observación, si se hace en forma retroactiva del convenio y sin el espíritu de conciliación que ha de presidir toda gestión que deba poner término al estado de este desgraciado asunto; por tanto y como quiera que el retardo con que se ha venido a tratar de él, favorecerá las pretensiones que en el sentido indicado se presentarán, me permitiré opinar para el caso de que el Gobierno adopte el contrato en principio reservándose hacerle sus observaciones al someterlo a la aprobación del Congreso Nacional en su legislatura ordinaria, que convendría se concretara a obtener la compensación, en el aplazamiento de la ejecución; de lo pactado, para el 1o. de Mayo de 1888; de ese modo se reenviaría el pago del primer cupón al 1o. de noviembre siguiente, dejando evitados desembolsos que de momento serían gravosos, y el pago de intereses que bien contados representarían una disminución considerable sobre el total nominal reconocido. Esa forma de aprobación no solo tendría las conveniencias y ventajas señaladas, sino que prestigiaría nuestro crédito en una manera prodigiosa en mérito de la nueva concesión que ella envuelve, y nos daría el tiempo necesario para realizar muy anticipadamente al vencimiento del primer compromiso, operaciones económicas de las cuales depende la organización administrativa que tanto necesita el país, y el desarrollo de su riqueza pública.

Paso ahora a referirme al punto en que puedo aparecer extralimitando mis instrucciones; éste es el de intereses al 6% del quinto año en adelante; tipo que no estaba autorizado a admitir.

Ya he dado cuenta de mi resistencia a admitirlo y del extremo a que llegué, resultando de esa actitud, que no firmase lo pactado sino ad-referéndum; pero

si así me correspondía obrar en cumplimiento de mis instrucciones, no por eso debo dejar de declarar al rendir esta cuenta, que la consolidación de nuestro propio crédito así lo exigía, atendiendo a que nuestro reconocimiento era puramente nominal y debíamos dar a la nueva emisión todas las probabilidades de una perspectiva que sirviera en el porvenir, de compensación a los perjuicios que había irrogado el papel anteriormente emitido, pues que eso le daría movimiento y concluiría por desvanecer la desconfianza en que había incurrido el país, y porque se trataba de la sustitución de un Agente fiduciario lanzado a aquellos mercados, con el tipo del 6%. Esta consideración, importantísima para los hombres de negocios, el detenido estudio que hice de los resultados inmediatos que produciría a nuestro crédito y las facilidades que obtendríamos al recuperar este para poner en práctica la amortización de esa deuda a un 30 ó 40% antes de que llegase a pagarse el sexto cupón o sea mientras se hiciera el servicio del 3%, y 4% de intereses, todo ello reunido, fue la causa de que ya accediera a conceder el mencionado tipo de 6%, sin temor de correr el peligro de que llegase a gravarnos directamente, y queriendo traer una prueba incontestable del fundamento de esa convicción, celebré a nombre del Estado y con la reserva, del caso, el Contrato que acompaño bajo el No. 17; Contrato que como todos los de su naturaleza, acusan pingüe utilidad para el que los realiza y que por tanto, pone de manifiesto, al Gobierno, lo que podría hacer por sí, en favor de sus propios intereses. Dicho esto dejo al ilustrado criterio de V. Ciud. Ministro, y al de los demás miembros del Poder Ejecutivo, la consideración de mi manera de obrar, para que se digne en justicia resolver, si procedí o no con el acierto que exigía la delicadeza de mi encargo.

Réstame dar cuenta de lo actuado para cumplimentar el apartado 2° de las instrucciones que se sirviera darme el Ministerio de Hacienda que tan dignamente desempeña V. paso a ella.

Bajo el No. 18 de este expediente encontrará V. un Contrato de Banco que recomiendo, para que se haga de él detenido examen; éste lo ajusté otorgando concesión en nombre del Gobierno, al Dr. Don Antonio Ma. Regidor y Jurado, como lo expresa ese mismo instrumento. Las condiciones en que está concebido y las ventajas que redundarían para la República de su realización, me hacen esperar de acuerdo con la autorización que recibí al efecto, que tendrá del Gobierno, merecida aprobación.

Cúmpleme advertir que ese documento está discutido ya por un sindicato de banqueros respetables de Londres, cuyos nombres no me es dado producir, sin saber antes la acogida que se le dará al mencionado documento.

Si el Gobierno, inspirándose en las necesidades y conveniencias del país, tiene a bien adoptar como suyos los actos de su Agencia Fiscal en Europa, encontrará en ellos y por ellos, con toda seguridad, recursos que no podrá

conseguir en otra parte o por otros medios, bajo idénticas condiciones; piense pues que hoy por hoy, los compromisos crecientes del Tesoro, no se cancelarán con menos de $3,500,000, que las proposiciones más ventajosas que ha podido recibir y que son de dudosa realización, no alcanzan a un 43% de esa suma con reconocimiento nominal de su total y que eso daría una pérdida inmediata de más de un 57%, o sea de $2,000,000; que esas operaciones solo protegerían los intereses del extranjero con perjuicio de los nacionales, aunque de momento aparezcan aliviando la crisis económica; y en conclusión, que en el arreglo de que rindo cuenta en unión del Contrato de Banco que presento, el país tendrá los Capitales que necesite, con solo el sacrificio de seis o setecientos mil pesos, con que se puede amortizar esa deuda, que en el caso de no arreglarse hoy, siempre se deberá y habrá de pagarse otro día con mayor suma, quizás cuando la situación de nuestras finanzas esté aun más estrecha.

Al terminar esta Cuenta, no puedo menos de recomendar a la consideración del Gobierno, la conducta, digna de encomios, observada por el Señor Dr. Antonio Ma. Regidor y Jurado, nuestro abogado, suplicando para mí, que solo se vea en la conducta que he observado, el buen deseo que debe animar a todo buen Ciudadano por la honra y adelanto de su Patria, teniéndose esto en cuenta para excusarme si en algo he podido separarme de los propósitos del Gobierno, o si no los dejo satisfechos.

Saluda a V. con la más alta y distinguida consideración.

Ciudº Ministro de Hacienda y Comercio
El Agente Fiscal de la República en Europa.

Firmado — *Eugenio Generoso Marchena*.

Es copia conforme con el original

El Oficial Mayor del Ministerio
José M. *Díaz*.

Copia

Consejo de Tenedores de Bonos Extrangs..
17 Moorgate Street — E. C.
Londres — Julio 18 de 1887

Señor:

El 22 de Mayo de 1886, se celebró un convenio entre el general Marchena, Agente Fiscal de la República Dominicana en Europa, y en virtud de los poderes especiales conferídosle por el Gobierno de la República, y entre el Consejo de los Tenedores de bonos extranjeros en nombre y en representación del Comité de los tenedores de bonos de la República.

Las condiciones y el objeto de ese convenio con respecto a los Bonos, conocidos en la bolsa de Londres por Bonos de Santo Domingo de 1869 estaban expuestos en el convenio, y se consideraban mutuamente ventajosos tanto para el Gobierno de la República como para los tenedores de bonos:

Quedaba estipulado por el Artº 14 de dicho convenio, que debía ser sometido a la ratificación por el Estado, lo más pronto posible, a fin de darle toda validez de acuerdo a las leyes de la República Dominicana.

Mucho más de un año ha transcurrido desde que se concluyó el convenio, pero no ha tenido lugar dicha ratificación y el Consejo de tenedores de bonos Extranjeros no percibe ninguna razón que le haga suponer que se dará tal ratificación. Sin embargo no pierden toda esperanza de ver al Gobierno tomar un paso tan necesario, para el complemento de un arreglo tan ventajoso al Estado, y deseamos llamar la atención de V. E. sobre este asunto y suplicarle tenga la bondad de informar al Consejo lo más pronto, si es la intención o no del Gobierno de la República, de proceder a esa ratificación. También le recordaremos a V. E. que el arreglo propuesto en el convenio, cesa de ser aceptable por los tenedores de bonos si se permitiera dejar pasar el plazo convenido sin efectuar ningún pago con respecto a las reclamaciones que desde tanto tiempo han estado pendientes le recordaremos a V. E. que según el convenio, si acaso hubiere sido ratificado, el primer cupón hubiere tenido que pagarse el 1o. de noviembre de 1886, cuya fecha ha transcurrido ya desde mucho tiempo.

Tenemos pues que manifestarle, que a menos que la ratificación arriba expuesta esté efectuada en el término de seis meses de la fecha en esta carta, el Consejo de acuerdo con el Comité no tendrá otra alternativa que considerar el convenio enteramente nulo y todo concluido.

Tengo el honor de ser Señor de V. E. muy obediente humilde servidor

firmado — *E. P. Bouverie*

Presidente del Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros,

firmado — *Bennoch*

Presidente del Comité de Tenedores de Bonos de Santo Domingo.

A su Excelencia
El Presidente de la República Dominicana.

Es copia conforme con el original
El Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda,
José M. Díaz.

Copia

Santo Domingo, Octubre 4 de 1887

Mr. E. P. Bouverie
Chairman of the council of Bondholders y
Francis Bennoch chairman of the committee
of Santo Domingo Bondholders.
17 Morgate Street.
Londres.

Muy Señores míos:

A mi regreso a esta Capital de las fronteras del Sur de la República tuve el honor de recibir la atenta carta de Ustedes del 18 de julio por la cual se digna manifestarme los diferentes puntos de la Convención celebrada entre "El Consejo de los tenedores de bonos extranjeros" y el Gral. Marchena como Agente Fiscal de la República, así como las disposiciones de dicho Consejo respecto a las ratificaciones del mencionado convenio. Debo manifestar a ustedes respondiendo a su exposición que cuando el Gral. Marchena regresaba de Europa de vuelta de su misión, tuvo por disposición del Gobierno antes de llegar a esta Capital que entrar al servicio activo en el ejército dadas las circunstancias por que atravesaba entonces la República, y después ha tenido que estar ausente de esta capital largos días por idénticos motivos, lo mismo que he estado yo.

Después de mi vuelta al Gobierno no he tenido aún lugar de pedir cuenta al Consejo de Secretarios de Estado del asunto de referencia. Lo haré tan pronto me sea posible, pero debo advertir a ustedes que tales negocios no le es permitido tratarlos directamente al Jefe del Estado, a fin de que en cualquiera otra ocasión puedan dirigirse ustedes al Ministro correspondiente, lo cual será más regular y expeditivo.

Con distinguida consideración soy de ustedes muy atento seguro servidor,

firmado— *U. Heureaux*

Es copia conforme con el original

El Oficial Mayor del Ministerio.

Copia

Consejo de tenedores de bonos Extranjeros.

17 Morgate Street E. C.

No. 1984/87.

Londres, 22 de noviembre de 1887.

Señor:

En nombre del Consejo de tenedores de bonos Extranjeros, tengo la honra de acusarle recibo de la carta del 4 de Octubre, que tuvo a bien S. E. el Presidente de la República dirigirle informándole de las circunstancias que hasta la fecha habían impedido ratificar el convenio concluido el año pasado para el arreglo de la deuda Extranjera de la República, y prometiendo que pronto se tomaría en consideración:

Queda también impuesto el Consejo de la súplica que hace S. E. el Presidente para que en futuro, sean dirigidas al departamento que le correspondan, todas las comunicaciones que traten de ese objeto, por ser irregular dirigirse al primer magistrado sobre cuestiones de igual naturaleza. Siente el Consejo haber cometido semejante error, y asegura que se conformará a los deseos de su E. el Presidente sobre el particular.

Como el Presidente manifiesta que en aquella fecha 4 de Octubre, no se había presentado la oportunidad de pedir un informe sobre ese negocio para presentarlo delante del Consejo de Ministros, lo que hará tan pronto le sea posible, el Consejo espera no se perderá más tiempo en llegar a una decisión sobre ese particular, y me encarga manifestarle que si acaso ya no se hubiera hecho, que esperara tres meses más a contar de esta fecha, antes de abandonar toda esperanza de una conclusión satisfactoria del arreglo que se halla bajo consideración.

Tengo el honor de ser Señor de Vuestra Excelencia muy obediente servidor

firmado— *Charles O'Leary*,
Secretario.

A su Excelencia
El Secretario de Estado de
Hacienda de la República Dominicana
Es copia conforme con el original
El Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda,

José M. Díaz.

Anexo R. a la Memoria del Secretario de Estado de Hacienda y Comercio correspondiente al año 1888.

(Original en el Archivo General de la Nación).

Copia
No. 441

Santo Domingo, 16 de enero 1888.

Señor Charles O'Leary
Secretario del Council of foreign.
Bonoholders

17 Morgate Street Londres.

Muy Sr. Mío:

Tuve el honor de recibir la atenta comunicación de Ud. del día 22 de noviembre del año próximo pasado No. 1984/87 que llegó a este Ministerio el 29 de diciembre último y después haberme impuesto de su importante contenido conformándome a los deseos del Ciud° Presidente de la República ausente de esta Capital, y haciendo mérito de lo que Ud. se sirve manifestarme a nombre del Presidente (Chairman) del "Consejo de Tenedores de bonos extranjeros" y del Presidente (Chairman) del "Comité de bonos de Santo Domingo", sometí al Consejo de Secretarios de Estado encargado del Poder Ejecutivo de la República el expediente relativo a la Convención celebrada entre el Gral. Marchena como Agente Fiscal de la República Dominicana y el Consejo de Tenedores de bonos extranjeros el 22 de Mayo de 1886 en esa ciudad de Londres.

El Consejo de Secretarios de Estado después de un examen detenido de aquel expediente, no obstante que sean dignos de consideración los esfuerzos y trabajos de su Agente Fiscal para buscar una solución adecuada a un asunto que tantas contrariedades ha traído a la República Dominicana, y no obstante también, las buenas disposiciones notables con idéntico objeto, en el proceder del Consejo de Tenedores de bonos extranjeros y de sus representados, se ha observado que el convenio mencionado y de que se trata, si llegara a ponerse en ejecución, en vez de aliviar la situación económica de la República, que era el fin que se proponía el Gobierno y persigue, no haría sino agravarla, trayéndole compromisos que no siendo de fácil o posible ejecución por no estar combinados con otras operaciones de crédito inmediato que debieran servir de auxilio para llevarlos, vendrían tales compromisos a hacer inmediata e irremisiblemente más pesadas las cargas del Estado, inutilizando su crédito y comprometiendo su honra.

Esas consideraciones que abrazan en sus generalidades al citado convenio hacen desde luego innecesarias e improcedentes las diferentes objeciones particulares o de detalles a que conforme al criterio del Gobierno puede prestarse.

Por tanto, en virtud de lo dicho, el Consejo de Secretarios de Estado resolvió el día 12 del corriente mes y año negar su aprobación al ya mencionado convenio de 22 de Mayo de 1886, firmado entre el Agente Fiscal de la

República y el Consejo de Tenedores de bonos extranjeros, considerándolo como inexistente y de ningún valor ni efecto.

Al comunicar a Ud. tal resolución con el fin, como dice Ud. mismo en la comunicación a que respondo, de que no se pierda más tiempo en que se conozca la solución del asunto de referencia.

Tengo el honor de suscribirme con sentimientos de elevada consideración de Ud. su más obediente servidor.

El Ministro de Relaciones Exteriores encargado de la cartera de Hacienda y Comercio.

firmado— M. M. *Gautier*

Es copia conforme al original.

El Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda y Comercio.

José M. Díaz.

Anexo S. a la Memoria del Secretario de Estado de Hacienda y Comercio correspondiente al año 1888.

(Original en el Archivo General de la Nación).

DOCUMENTO Nº 11

Informes del Dr. Regidor y Jurado al General Marchena

Dr. A. M. Regidor Jurado,
Spanish Advocate
and
General Translator
21, Billiter Street,
London, E. C.

DUPLICADO
Despacho No. 1
Londres, 3 de Octubre 1885.

Sr. General Don Eugenio Generoso Marchena
Ex-Ministro de Hacienda, Encargado secreto para el arreglo
de la Deuda de Santo Domingo.

Muy Sr. mío: cumpliendo las instrucciones de Ud. y ateniéndome a las estipulaciones consignadas en nuestro contrato de 7 de agosto último, traté de averiguar la verdadera importancia de los Bonos emitidos a nombre de esa República por el Señor Don E. H. Hartmont.

Según la cotización oficial (Documento No. 1) se emitieron Bonos por un total de £757,700 de los cuales existen en el mercado £714,500. Según el Stock Exchange Year Book (Documento No. 2) libro que se publica todos los años, el cual si bien no tiene un carácter oficial, es considerado y

atendido, atribuyéndosele completa fe para todas las transacciones en esta Bolsa, el importe total de dicha deuda no ha sido sino de £530.390, cuya suma fue posteriormente reducida, sin que la importancia de la reducción sea conocida.

Habiéndose constituido en este país años atrás, una Comisión Parlamentaria que tuvo el encargo de esclarecer los hechos relacionados con la emisión en este mercado de varias Deudas Extranjeras, entre las cuales, se comprendió la lanzada por el dicho Mr. E. H. Hartmont, adquirí un ejemplar oficial del Protocolo formado entonces, y después de examinarlo detenidamente me encontré, con que no era posible precisar con los datos que arroja, el particular que deseamos averiguar.

Entonces acudí a la Junta Directiva de la Bolsa, pidiendo los datos oficiales, y su Secretario me manifestó, confidencialmente, que no los tenía pero que los Bonos existentes en el mercado importaban, a su juicio, solo £500,000, poco más o menos, según lo consignaba el "Stock Exchange Year Book" antes citado.

El Señor Secretario de la Corporación de Tenedores de Bonos Extranjeros me manifestó a su vez, que tampoco tenían los datos precisos sobre la importancia de la Deuda citada, si bien creía que debía partirse de la cifra señalada en la lista de valores cotizables en este mercado.

En tal situación puso muchos y repetidos anuncios pidiendo a los Tenedores de estos Bonos que me facilitasen el montante de lo que cada uno poseía y el número con que estaba marcado cada Bono.

El plazo que fijé se prorrogó a solicitud de varios Tenedores, en atención a que, siendo la estación veraniega, muchos de ellos estaban fuera de sus casas.

Al vencimiento de la prórroga que fue el día 30 de agosto resultaron registrados los Bonos siguientes.

De la Serie (A), que comprende los números del 1 al 100, de a £500 cada uno, 555 Bonos; de la Serie (B) de a £100 cada uno, que comprende del número 10001 al 3577, 1431 Bonos.

Otras personas han avisado tenerlos también por un valor total de £71.800, pero no han dicho cuál es el número respectivo de sus Bonos.

De ser ciertos estos avisos, el total nominal efectivo que hay que redimir de los Bonos, importaría la suma de £492,400.

Los corredores de Bolsa, Sres. Coates Son & Co., firma prominente de este mercado, que son los que parecen mejor enterados de este asunto, me han informado también que, según sus cálculos, el total existente no excede de £500,000.

Dando por supuesto este dato, cité a una Junta de todos los Tenedores de Bonos de la llamada Deuda de Santo Domingo.

Esta convocatoria produjo reclamaciones por considerar muchos que al calificarla de "Llamada" tendía a hacer reconocer que no se trataba de una Deuda real y legítima de ese país. Yo, sin embargo, insistí en el calificativo, ateniéndome a las procedentes instrucciones de Ud.

La Junta tuvo lugar el 17 de septiembre. El acta de la misma que en copia incluyo (Documento No. 3) le enterará de lo ocurrido en ella.

Los Tenedores confiaron su representación para ultimar este asunto al Comité de Tenedores de Bonos de Santo Domingo, autorizándole a tratar conmigo sobre las modificaciones que debían solicitarse del Gobierno de esa República.

El 22 del corriente fui invitado por el Comité antes citado para asistir a la primera reunión.

Después de dar por retirados a aquellos de sus miembros que no poseían ya Bonos de la Deuda Hartmont, y de admitir en su seno a los nuevamente elegidos, se discutió extensamente la proposición presentada por mí.

Me complace manifestar a Ud., para que se digne hacerlo presente al Ilustre Señor Presidente de la República que todos los concurrentes hicieron justos elogios de ese Gobierno y del proceder honroso de ese país al encomendar a Ud., el arreglo de este asunto.

El Presidente del Comité, Señor Benock, dio lectura del proyecto de arreglo formulado por él y que por conducto confidencial había mandado a ese Gobierno, el cual consistía en lo siguiente:

1o. Emisión de nuevos Bonos por valor de £250,000.

2o. Estos Bonos llevarían cupones que representasen el 3% en el primer año de interés. 4% en el 2o. y el 5% en los años sucesivos.

3o. Emisión de otros Bonos que representasen el 10% de los cupones vencidos con un interés del 2% al año.

Comparada esta proposición con la acordada por Ud., se reconoció que había entre ellas gran diferencia.

Varios de los vocales presentes formularon diversas proposiciones después de larga conferencia y examen de cifras y antecedentes.

Para facilitar la solución expliqué el derecho y los deberes de esa República, tales cuales nosotros en nuestras conferencias lo habíamos entendido; sostuve y afirmé que la República ni había reconocido ni reconocía esta Deuda y que por el contrario la rechazaba como ilegal; les demostré que la renuncia a favor de los Tenedores de los derechos de ese Estado sobre las £38,095 recibidas por ese tesoro, no significaba abdicación alguna, sino concesión graciosa de su parte, para evitar el que continuase sobre él un estigma injusto e inmerecido; estigma que le había acarreado perjuicios incalculables, al ser un obstáculo para el desarrollo de su prosperidad y riqueza.

Teniendo a la vista la memoria financiera que firmó Ud., siendo digno Ministro de Hacienda, presenté el cuadro de las finanzas de ese País; y en fin recordando el acuerdo de la Junta General de los Tenedores, celebrada el día 17 del corriente, indiqué lo conveniente que sería no modificar el Contrato celebrado entre Ud. y yo, sino, en la parte más precisa y reduciendo en cuanto fuera dable las exigencias de los Tenedores, como única manera categórica y precisa que no podía separarme del Contrato presentado por mí, pero que trasmitiría gustoso cualquier alteración razonable que se hiciese.

En vista de estas declaraciones los vocales presentes modificaron su actitud; y habiendo sido apoyadas mis palabras por los Señores Coronel Ray, Mr. Thomas Wood, Jefe de la respetable casa Wood Quintana & Co., Mr. A. Cotes y el mismo Señor Benock, Presidente del Comité, se acordó lo que expresa el acuerdo que en copia y traducido tengo el honor de remitir a Ud., con este despacho (Documento No 4).

Cumpliendo, pues, con el compromiso que he contraído con Ud., como representante confidencial de ese Gobierno y con los Tenedores de Bonos de la llamada Deuda de Santo Domingo doy a Ud., cuenta minuciosa de mis gestiones y del resultado obtenido.

Confío, Señor General, que inspirándose en las ideas de conciliación tan necesarias para completar esta clase de negociaciones, y en los inmensos o inmediatos beneficios que el arreglo ha de reportar a Santo Domingo, conseguirá que se acepte el acuerdo adoptado por el Comité, toda vez que éste difiere poco de las proposiciones fijadas por Ud. Tengo el honor de reiterar a Ud., mi más distinguida consideración.

B. L. M.

Dr. Antonio M. Regidor y Jurado.

Doc. No. 17, Exp. No. 4, Leg. 1; Hacienda y Comercio Ano 1885.

Dr. A. M. Regidor Jurado,
Spanish Advocate
and
General Traslator
21, Billiter Street,
London, E. C.

DUPLICADO

Despacho No. 3
Londres, 3 de Octubre 1885.
Despacho No. 1.

(Impreso al margen) En Londres a 17 de septiembre de 1885.

Previamente citados por medio de una circular y de anuncios en los periódicos de Londres y de Glasgow, tuvo lugar en este día una reunión de los Tenedores de Bonos de la llamada Deuda de Santo Domingo, emitida en este mercado en el año 1869 por Mr. E. H. Hartmont como Comisionado del Gobierno constituido entonces de la República Dominicana.

A las doce en punto del día, se hallaban reunidos en el Salón designado al efecto en Cannon Street Hotel sobre 160 Tenedores de Bonos de la dicha Deuda, entre los que se encontraban representaciones de Banqueros, Corredores de Bolsa, Capitalistas e impositores.

También acudió Mr. Francis Benock, Presidente de la Junta de Tenedores de Bonos de Santo Domingo, constituida hacía 12 años y que forma parte de la institución llamada "Counsil of the Corporation of Bonholders", cuyas oficinas se encuentran en 17 Moorgate Street.

El Doctor Don Antonio María Regidor y Jurado, Abogado español, con oficinas en la casa No. 21 de Billiter Street, se levantó a hablar a la hora designada, a las doce en punto, y expresó que a fin de facilitar la discusión de lo que se iba a tratar y discutir en la Junta y pudiendo ser que interpretasen bien sus palabras por no ser su idioma natal el inglés, proponía a los Tenedores presentes que eligiesen de entre ellos una persona que ocupara la presidencia de la Junta y al efecto proponía al Señor Coronel Don A. W. Ray, Director Gerente de la Compañía titulada The Gouvernment Stock Investiment Company Limited. Esta proposición fue aceptada por unanimidad y en su virtud ocupó la Presidencia el dicho Señor Coronel Ray.

Se levantó entonces a expresar, que invitado por el Doctor Regidor y Jurado, había examinado los documentos que comprueban su personalidad y que los había encontrado correctos. Explicó a grandes rasgos la historia del Empréstito Hartmont y en vista de lo noble, honrada y generosa actitud del Gobierno Dominicano proponía que se tomara en consideración el convenio celebrado en 7 de agosto último entre el General Don Eugenio Generoso Marchena y el Doctor Regidor y Jurado, si bien reservándose emitir su opinión sobre dicho contrato si la Junta creía conveniente escucharle en el curso de la discusión. Propuso asimismo que para llevar a cabo la negociación se designase al Comité de Santo Domingo del Consejo de la Corporación de Tenedores de Bonos, retirándose de dicho Comité aquellos de sus individuos que no poseyesen en la actualidad estos valores y se designasen nuevos miembros que entrasen a sustituir a los que debían cesar. Al terminar dio lectura del Contrato antes mencionado.

El dicho Señor Don Francis Benock hizo uso de la palabra para explicar las gestiones que con carácter confidencial había practicado el Comité de que era Presidente, expuso que había mandado a Santo Domingo un proyecto de arreglo y concluyó adhiriéndose a la proposición del Señor Coronel Ray, por estimar que el Convenio antes citado del 7 de agosto no debía satisfacer a los actuales Tenedores y en lugar de entrar entonces en una amplia discusión de las bases aceptables era preferible confiar esto al nuevo Comité, dejando a éste en libertad de resolver lo más conveniente.

Después hizo uso de la palabra el Señor Gudalla, el cual celebró la actitud honrada y digna de aplauso e imitación de la República Dominicana al querer compensar de alguna manera los perjuicios causados a los Tenedores de Bonos de la Deuda Hartmont. Censuró la conducta de éste y justificó la actitud y proceder de los Gobiernos de la República. Consignó que ambas partes debían ceder de lo que consideraban sus respectivos derechos, y venir a un acuerdo que compensase sus sacrificios y que beneficiara a ambas partes. Expuso con lucidez el brillante porvenir que esperaba a Santo Domingo el día que se abriese el Canal de Panamá, los progresos que venía haciendo, el orden que reinaba en ella y la sensatez y cordura que predominaba en sus hombres de Gobierno. Hizo especial mención de los últimos Gobiernos nombrando al ilustre Señor Meriño, el bravo General Heureaux, al patriota Señor Billini y al activo y enérgico Presidente actual. Sus palabras fueron recibidas con muestras de especial satisfacción por todos los concurrentes. Concluyó pidiendo que se aceptara la proposición presentada sin más alteración que la de abonar por intereses el 4 por ciento desde el día 1° de Mayo de 1886.

El Señor Richardson pidió la palabra y se opuso a la última parte de la proposición del Señor Gudalla. Expuso los derechos de los Tenedores y los deberes a que en su concepto, estaba obligado el Gobierno Dominicano, y propuso que se pidiera el pago del Capital, el de los intereses vencidos y un interés de 6 por ciento para los nuevos Bonos.

El Señor Henderson impugnó como inexacta la cifra de £38,095 que se consignaba como recibida por el Gobierno. Sostuvo que lo que se le entregó fueron £50,000 y que sobre éstas debía exigirse el interés compuesto del 12 por ciento.

Otros dos tenedores se opusieron a que se aceptasen las £261,561-15-2 como pago definitivo del capital; sostuvieron que debía reclamarse algo en equivalencia de los Cupones vencidos y consideraron mezquina e inaceptable la escala de interés consignada en el contrato del 7 de agosto.

Mr. F. E. Coates convino con los anteriores, proponiendo sin embargo que se aceptasen las £261,561 si alcanzaba a cubrir el 50 por ciento de los Bonos existentes, con un mayor interés, el cual, a su juicio, no debía ser menor de un 3 por ciento sobre la totalidad de la deuda, o sea un 6 por ciento sobre el valor de los nuevos Bonos.

A petición de gran número de personas volvió a hacer uso de la palabra el Señor Coronel Ray, para expresar su opinión sobre las bases del arreglo. Manifestó que le parecía aceptable y muy razonable la primera parte, o sea la referente a la cesión a favor de los Tenedores de la suma recibida de Mr. Hartmont, con más los intereses compuestos y no simples de un doce por ciento. Fijado este dato por el representante de la República debía aceptarse de

plano, pues que con ello había un punto de partida. Que es verdad que la cifra expresada no representaba más de la cuarta parte de la totalidad del Crédito de los Tenedores, si se sumaba el Capital y el valor de los cupones vencidos; pero también era preciso no olvidar que la Deuda Hartmont era excepcional, hasta el extremo de que considerado el asunto bajo un punto de vista estricto y riguroso, creía que los Tenedores tenían el deber de transigir y de no ser exigentes. Que examinada la parte del contrato referente a los intereses, opinaba que era inaceptable y que debía solicitarse una variación. Que en lo demás lo encontraba arreglado a las conveniencias y a la equidad. Que las £261,561 cubría el 50 por ciento de los Bonos existentes en el mercado, si resultaba que éstos no eran más de los que se habían presentado al Dr. Regidor y Jurado, pero que si aparecía un número mayor la compensación sería menor y que a fin de evitar esto se dejará al Comité el arreglar con el Comisionado del Gobierno, por conducto del Doctor Regidor y Jurado, la manera de evitarlo.

En vista de todo lo expuesto sometió a la Junta el acuerdo siguiente:

Que la proposición de la República de Santo Domingo de dar las £380,095 y el interés compuesto de £223,446-15-2, o sea el total de £261,561-15-2 en cambio de los Bonos emitidos por Mr. Hartmont en nombre de la República, sea aceptada y que la forma de pago de la suma expresada se deje a que el Comité lo arregle.

Apoyada la proposición por el antes nombrado Mr. Francis Benock fue aceptada por unanimidad. En su consecuencia se procedió a la elección de las nuevas personas que debían entrar a formar parte del Comité, siendo designados los Señores Coronel Ray, Thomas Wood, F. E. Coates y Mr. J. E. Wadsworth.

El Doctor Regidor y Jurado antes de terminar dio las gracias a los concurrentes por la atención que le habían dispensado al acudir a la Junta, por la benevolencia con que habían aceptado sus proposiciones y por la forma cortés y digna en que todos se habían expresado al referirse a la República Dominicana y a sus dignísimos hombres públicos. Al mismo tiempo propuso un voto de gracias al Señor Coronel Ray, por la habilidad y mesura con que había dirigido la discusión. Secundada la proposición por el mismo Señor Benock se acordó por unanimidad el voto de gracias.

A la una y cuarto de la tarde se dio por terminado el acto, al que acudieron varios representantes de la prensa, los cuales ocuparon desde el principio con sus taquígrafos, un puesto preferente en la mesa, destinada a la presidencia.

Todo lo cual se hace constar a los efectos que correspondan.

Es copia,

Dr. Antonio M. Regidor y Jurado.

Doc. No. 15, Exp. No. 4, Leg. No. 1; Hacienda y Comercio. Año 1885.

DOCUMENTO Nº 12

Instrumento definitivo del empréstito dominicano, 6% de 1888.
—Contrato con Westendorp & C.—

El Gobierno de la República Dominicana, de conformidad con la decisión del Congreso Nacional votada el 27 de Marzo de 1888, cuya copia legalizada se adjunta, y que tiene por objeto la conversión y el reembolso de las deudas exterior e interior, comprendiendo en ellas todos los compromisos del Estado, ha decidido contratar un empréstito de £770,000 nominales, y a este fin ha dado al General Eugenio Generoso Marchena, Agente Fiscal de la República Dominicana, sus plenos poderes en fecha 16 de junio de 1888, cuyo original se halla adjunto, a fin de concluir y establecer las condiciones de dicho empréstito. En virtud a lo que precede, el General Marchena, en nombre de su Gobierno, ha celebrado con el Conde de Oksza un contrato preliminar, cuyo contrato ha sido transferido por el citado Conde de Oksza, a los Sres. Westendorp & Co., banqueros de Amsterdam, quienes se sustituyen en lugar del contratante primitivo.

De esta exposición resulta, que en fecha de hoy, entre:

El General Eugenio Generoso Marchena, Agente Fiscal de la República Dominicana, obrando en nombre y por cuenta de su Gobierno, en virtud de los plenos poderes de que se halla provisto, de una parte.

Y los Señores Westendorp & Co., banqueros de Amsterdam, obrando tanto en su nombre como en el de un grupo de banqueros y de capitalistas, de los que ellos responden, de otra parte.

Se ha convenido y resuelto en último lugar lo que sigue:

Art. 1o.— El Gobierno de la República Dominicana se compromete a crear en virtud de la Ley de 27 de Marzo de 1888, obligaciones (bonos) de £100 y de £20 hasta la concurrencia de £770,000 nominales. Dichas obligaciones serán emitidas por los Sres. Westendorp & Co., quienes se encargan por el presente contrato a emitirlas o hacerlas emitir, en el momento que ellos crean oportuno, por casas de banco o establecimientos financieros, en los mercados de Amsterdam, Londres, Bruselas, Amberes y Hamburgo, a su elección, y por cuenta del Gobierno Dominicano. Dichas obligaciones gozarán de un interés de £6 anuales por una obligación de £100 y de £1, 4, 0, por cada obligación de £20. Este interés será pagado semestralmente, en oro, el 2 de Enero y el 1° de Julio de cada año. Las obligaciones serán reembolsadas, en oro y a la par, en un término de treinta años y por sorteos igualmente semestrales, el 15 de Junio y el 15 de Diciembre de cada año.

El primer cupón será pagado el 1o. de Enero de 1889 y el primer sorteo para el reembolso tendrá lugar el 15 de Junio de 1889, por ante el notario. El

Gobierno se reserva el derecho de reembolsar en cualquier época, y por anticipación, a la par, dichas obligaciones, a condición de dar aviso al público con seis meses de anticipación, contando desde la fecha del pago del cupón.

Art. 2o.— Este empréstito se destina a reembolsar parte en efectivo y parte en obligaciones, en virtud a los decretos del Congreso Nacional Dominicano, todas las deudas interiores de la República; a convertir la deuda exterior llamada de Hartmont, cotizada en Londres bajo la rúbrica "San Domingo 6% 1869 bonds".

Esta conversión tendrá lugar conforme a las cláusulas del contrato celebrado con el Consejo y el Comité de los Bondholders aplicado en este caso, cuya cifra se halla adjunta; a hacer frente a los diversos compromisos del Gobierno de la República, lo mismo que para subvenir a los medios de asegurar el desarrollo del progreso del país y buen funcionamiento de su organización administrativa.

Art. 3o.— Los Sres. Westendorp & Co., lo mismo que las casas de banco indicadas por ellos en Londres, Amberes, Bruselas y Hamburgo, recibirán del Gobierno, que les hará entrega, las 7,700 obligaciones de £100, o el número equivalente a fracciones o títulos de £20, al precio de £78 libras esterlinas por obligación de £100 y de £15-12-0 por fracción de £20.

El Gobierno se reserva 2,945 ⅕ títulos para la conversión de sus deudas, y los Sres. Westendorp & Co. determinarán el tipo a que serán ofrecidas a los suscriptores las 4,754 ⅘ obligaciones restantes de £100 cada una, o el número equivalente de fracciones de £20 cada una y la diferencia entre la tasa de 78% y el curso de emisión de dichas 4,754 ⅘ de obligaciones de £100 cada una, será naturalmente adquirida por los Sres. Westendorp & Co. En compensación, todos los gastos que sean necesarios para la emisión, impresión y timbres de todos los títulos, serán soportados por los Sres. Westendorp & Co.

Art. 4o.— El capital nominal de £770,000 que representan las 7,700 obligaciones de £100 cada una, será reembolsado a la par, como se ha dicho antes, por semestres, en treinta años, sea una anualidad de £55,645 conforme al cuadro de amortización.

Para hacer frente al pago semestral de dicha anualidad, se apartará semestralmente, sobre los ingresos de las aduanas, como se dirá más adelante, una suma equivalente a £27,822 10 cts. en oro, explicándose que el conjunto de la anualidad, a saber: £55,645 en oro, representa una suma de 30% de las rentas generales de la nación, prevista por el artículo 2o. de la Ley del 27 de Marzo de 1888.

Estas anualidades, lo mismo que el presente empréstito, quedan garantizadas por una hipoteca general sobre todas las rentas, y por un primer privilegio sobre los ingresos de todas las aduanas de la República Dominicana, (derechos

de importación y derechos de exportación) de acuerdo con dicha Ley del 27 de Marzo de 1888. Los Sres. Westendorp & Co. tendrán el derecho de ingresar directamente esas rentas por los cuidados, o por medio de sus agentes, o de sus delegados, o de una sociedad, o de una casa de banca indicada por ellos. Dichos agentes o delegados percibirán, sobre las rentas ingresadas, en primer lugar el monto de la anualidad antes indicada, y el excedente será entregado al Gobierno, con las condiciones mencionadas en los siguientes artículos.

Si por cualquier motivo los Sres. Westendorp & Co. no quisiesen, o no pudiesen, ni encargarse por sí mismos, ni sustituir en su lugar a una sociedad, o a una banca, para efectuar ingresos, la Comisión de Control de que luego se hablará, tendrá el derecho de encargarse de esta operación en nombre de los portadores de las obligaciones.

Art. 5o.— Se creará en Santo Domingo el 1o. de noviembre de 1888 una Caja General de Recaudación de Aduanas, que será encargada de efectuar el ingreso de los derechos de importación y de exportación percibidos en todos los puertos de la República actualmente abiertos al comercio exterior, o que puedan serlo en lo adelante. Esta Caja General de Recaudación será administrada por delegados nombrados por los Señores Westendorp & Co. o los que representen sus derechos, durante toda la duración de este contrato y hasta la extinción del empréstito.

Art. 6o.— Los derechos de importación y de exportación serán percibidos conforme a las tarifas de derechos existentes (Ley sobre aranceles de importación y de exportación 1883). Podrán, sin embargo, ser modificados ulteriormente, sea a proposición del Gobierno, o gestión de los Señores Westendorp & Co. y aun de la banca o de la sociedad que se sustituyan en la ejecución de esta parte del presente contrato. Pero en uno u otro de estos diversos casos, las modificaciones no podrían ser introducidas, sino en virtud de un acuerdo intervenido entre las partes contratantes.

El Gobierno renuncia formalmente a la facultad de acordar, a quien quiera que sea, y por cualquiera causa que sea, ninguna concesión concerniente a exención o disminución de los derechos de aduana; en una palabra, ningún privilegio de cualesquiera naturaleza que sea, sin el consentimiento de los Señores Westendorp & Co. Toda concesión, en lo que concierne a esos derechos de aduanas, acordada anteriormente, no podrá ser renovada a su expiración sin el asentimiento de los Señores Westendorp & Co., o de los que representen sus derechos. Exceptúanse de este artículo: el material de guerra o cualesquiera otro de que pueda tener necesidad el Gobierno: los artículos necesarios para el funcionamiento de las oficinas, y los mobiliarios y objetos de uso destinados a los empleados de la Caja de Recaudación General de aduanas para sus instalaciones, que serán exentos de todo derecho

de importación. Queda entendido, que el goce de la exención de derechos de aduana para los empleados no tendrá lugar sino una sola vez.

Art. 7o.— Después del apartado que se hará en primer lugar de las sumas mensuales necesarias para el pago del interés y amortización de este empréstito y de la suma de $3,000 mejicanos, de que se habla en el artículo 89, la Caja General de Recaudación antes mencionada, tendrá al fin de cada mes, a cuenta de las rentas ingresadas por ella, una suma máximum de $75,000 mejicanos que estarán a disposición del Gobierno para el servicio de su presupuesto administrativo.

Art. 8o.— Para poner en práctica el tratado se abrirá en la Oficina Central de la Caja General de Recaudación de aduanas en Santo Domingo, en un gran libro especial, una cuenta al Gobierno. Al crédito de esta cuenta serán llevadas todas las sumas realmente ingresadas por dicha Caja General de Recaudación desde el 1° hasta el último día del mes, en virtud de la delegación dada a los Obligatores (portadores de títulos) de todos los derechos de importación y de exportación, percibidos en todos los puertos abiertos a la Aduana. En contra, serán llevados al débito de esa cuenta todos los pagos necesarios para hacer frente al servicio y amortización del empréstito, y una suma mensual de $3,000 mejicanos destinada a cubrir los gastos generales de la administración de la Caja General de Recaudación, para pagar los sueldos de sus directores, agentes o inspectores nombrados por los Señores Westendorp & Cía. o quienes sus derechos representaren, lo mismo que los gastos de la Oficina Central en Santo Domingo, y los sueldos y gastos de la Comisión de Control, de la cual se hablará más adelante, lo mismo que la suma de $75,000 mejicanos de que tratan los artículos 7 y 10 del presente contrato. Además, cuando los ingresos anuales totales de los derechos de exportación y de importación reunidos sobrepasen de la suma de $1,500,000 mejicanos, se percibirá al fin del año por la Caja General de Recaudación una comisión de ½% sobre la totalidad de dichos ingresos. El monto de esta comisión servirá en parte para recompensar el celo de los empleados de las aduanas.

Art. 9o.— Si la cuenta establecida y cortada mensualmente sobre las bases que preceden, presenta un saldo en el haber a favor del Gobierno, ese saldo será conservado por la Caja General de Recaudación al crédito del Gobierno, para atenuar las insuficiencias eventuales de los meses correspondientes al semestre siguiente.

Art. 10.— El pago de los $75,000 que deben entregarse mensualmente al Gobierno, mientras esto pueda hacerse conforme al artículo 7° del presente contrato, se efectuará por fracciones el 1° y 15 de cada mes por la Oficina Central de la Caja General de Recaudación de las aduanas en Santo Domingo, y por oficinas locales de dicha Caja en Puerto Plata, Samaná y Montecristi.

La Caja General podrá hacer entrega de una parte de este valor a oficinas de Hacienda de la República establecidas en otras ciudades distintas de las cuatro antes nombradas; pero en este caso el Gobierno deberá asegurar los riesgos y los gastos de trasmisión de los fondos.

Art. 11.— Independientemente de los cortes mensuales, intervendrá el Gobierno y la Caja General de Recaudación un arreglo anual el 31 de diciembre de cada año. Si a esa época la cuenta especial arroja excedentes a favor del Gobierno, esos excedentes serán puestos inmediatamente a su disposición, salvo una reserva de cincuenta mil pesos, que serán destinados a proveer las insuficiencias eventuales de ingresos del primer semestre del ejercicio siguiente.

Art. 12.— Se formulará antes del 1° de noviembre de 1888, de acuerdo con el Gobierno y los Señores Westendorp & Cía., o quienes sus derechos represente, o sus delegados, un reglamento de administración pública para establecer las atribuciones de la Caja General de Recaudación de aduanas y fijar su organización, la forma de los pagos que está llamado a verificar en virtud de este contrato, y para asegurar la regularidad y la integralidad de la percepción por la Caja General de Recaudación de todos los derechos de importación y exportación; pero queda desde ahora entendido:

1o.— Que cuando haya lugar de proveer al reemplazo de un empleado de aduana, el Director General de recaudación deberá ser consultado sobre la elección que deba hacerse. El Gobierno no podrá rehusar el retiro, a proposición de dicho Director, de los empleados cuya infidelidad o incapacidad le fueren señaladas.

El Gobierno se reserva el derecho de nombrar cerca de cada cajero, si lo cree conveniente, un contralor en título. Por su parte los Señores Westendorp & Cía. o los que sus derechos representen, nombrarán si lo desean, para las necesidades de su servicio, inspectores que vigilen su funcionamiento regular.

2o.— Los pagos a cuenta sobre los $75,000 mejicanos mencionados en el artículo 7° del presente contrato, se harán sobre mandatos regulares correspondientes al estado de gastos que deberá ser entregado a la Caja General de Recaudación.

3o.— Sólo el servicio de la Caja General de Recaudación podrá dar recibo por el pago de los derechos de aduana.

Art. 13.— Las obligaciones, o cualquiera otros títulos emitidos por los Señores Westendorp & Cía., o los que sus derechos representen en virtud de este contrato, no podrán ser gravados por el Gobierno Dominicano, de ningunos derechos de registros, de emisión, de timbre, ni de ningún impuesto análogo, sobre la venta y la trasmisión de las obligaciones, ni sobre los intereses producidos por esos valores. Además, todas las operaciones de

la Caja General de Recaudación, de cualquier naturaleza que sean, no serán nunca sometidas a ningún impuesto.

Art. 14.— El Gobierno de la República Dominicana se compromete por el presente contrato a tomar todas las medidas necesarias para libertar completamente los derechos de aduanas y entregarlos integralmente, inmediatamente después de la emisión del empréstito por los Señores Westendorp & Cía. o quienes sus derechos representaren. La entrega de las aduanas en manos de los Señores Westendorp & Cía. o sus delegados, o quienes sus derechos representen, tendrá lugar lo más tarde el 1° de noviembre de 1888, de modo que el funcionamiento de la Caja General de Recaudación pueda principiar en Santo Domingo, lo mismo que en todas las demás aduanas de la República, el 1° de noviembre de 1888.

Sin embargo, el 2% sobre los derechos de importación, votado por el decreto de 6 de agosto de 1879, afectado al servicio de la deuda llamada "internacional", será apartado por los Señores Westendorp & Cía. o quienes representen sus derechos, y puesto a disposición del Gobierno Dominicano, hasta la extinción total de dicha deuda; después de lo cual entrará en la cuenta del tesoro como los demás ingresos cuyo uso está previsto en los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de este contrato.

Art. 15.— Los Señores Westendorp & Cía. pueden, de acuerdo con el Gobierno o su delegado, constituir una comisión financiera en Europa, de la cual se habló en los artículos 4 y 8 de este contrato. Las atribuciones de esta comisión consistirán en controlar la gestión de la Caja General de Recaudación de aduanas; en tomar conocimiento de sus ingresos mensuales; en verificarlos si hay lugar y dar cuenta a los contratantes; y en supervigilar los pagos regulares de los intereses y de la amortización de los títulos emitidos en virtud de este contrato, y usar del artículo 4° del presente contrato en caso necesario; la remuneración anual de esta comisión, lo mismo que sus gastos, será tomada de la mensualidad de $3,000 mejicanos de que antes se ha hablado, de acuerdo con la convención adicional de fecha 28 de julio de 1888.

Art. 16.— La redacción del texto de los títulos que se deben emitir, será hecha de común acuerdo entre el delegado del Gobierno y los Señores Westendorp & Cía. o los que representen sus derechos. Los recibos o scrip provisionales serán firmados por el delegado del Gobierno, y los títulos definitivos por el Ministro de Hacienda de la República Dominicana, y contrafirmados por los Señores Westendorp & Cía. y registrados por la Oficina Central de Hacienda de la República Dominicana. El prospecto de la emisión deberá igualmente ser firmado, si fuere necesario, por el delegado del Gobierno.

Los cupones de dichas obligaciones y el reembolso de los títulos tendrán lugar en los establecimientos financieros, o las casas de banca indicadas por

los Señores Westendorp & Cía. en Londres, Bruselas, Amberes, Amsterdam y Hamburgo, y una comisión de 1/2% sobre el monto de los pagos será concedida semestralmente con este fin a los Señores Westendorp & Cía. o a quienes sus derechos representen. El pago de los cupones y la amortización de los títulos deben tener lugar el 1° de julio y el 2 de enero de cada año, y el sorteo el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año, la remesa de los fondos necesarios para esos pagos deberá hacerse en manos de los señores Westendorp y Cía. de Amsterdam, o de quienes sus derechos representaren, y esto en un mes, por lo menos, antes de los vencimientos. Queda bien entendido que las pérdidas de cambio provenientes de esos pagos o reembolsos, lo mismo que los gastos de envío, serán a cargo del Gobierno Dominicano, a cuya cuenta se cargarán semestralmente por la Caja General de Recaudación de Aduanas.

Art. 17.— Para asegurar la validez del desprendimiento de los derechos de aduana en manos de los Señores Westendorp & Cía. o quienes sus derechos representen, y para dar a los portadores de obligaciones la seguridad más absoluta, el Gobierno Dominicano, consiente, en caso de contestaciones, aceptar como árbitro, sin apelación, al Gobierno Holandés.

Art. 18.— La emisión de los títulos de que es materia este contrato, debe tener lugar a lo más tarde, hacia fines del mes de julio corriente y el Gobierno se compromete a este fin a llenar todas las formalidades necesarias para dicha emisión, a lo más tarde antes del 20 de julio corriente. En cuanto a los títulos definitivos, deberán estar firmados y remitidos a Amsterdam antes del 1° de diciembre próximo.

Art. 19.— Sobre 7,700 obligaciones de £100 cada una, o su equivalente en títulos de £20 cada uno, el Gobierno Dominicano retendrá 7,143 títulos de £20 cada uno, para ejecutar en Londres el cambio de estas obligaciones contra los títulos de la antigua deuda Hartmont, conocida bajo el nombre de "San Domingo 6% 1869 bonds". A este fin un certificado "scrip" provisorio, firmado por el delegado del Gobierno y contrafirmado por los Señores Westendorp & Cía. será depositado en una casa de banca o un establecimiento financiero de Londres, que será encargado por el Gobierno de dicha operación. Este certificado "scrip" provisorio será retirado a la llegada de los títulos definitivos debidamente firmados como se ha dicho en el artículo 16, y el cambio definitivo de los nuevos títulos contra los antiguos no tendrá lugar sino en esa época. El Gobierno Dominicano retendrá igualmente 6,183 títulos de £20 cada uno y 280 de £100 cada uno, para operar la conversión de su deuda interior y para hacer frente a los diferentes compromisos del Gobierno. Los certificados provisorios para esos títulos firmados por el delegado del Gobierno y contrafirmados por los Señores Westendorp & Cía., serán comprados al delegado del Gobierno con la condición que ellos no serán

canjeados contra los títulos definitivos sino simultáneamente con los demás certificados provisorios.

Art. 20.— Sobre los 4,754 ⅘ títulos restantes de £100 cada uno los Señores Westendorp & Cía. tomarán firme ciento veinte y cinco mil libras esterlinas nominales, es decir, 1,250 títulos de £100 cada uno, o su equivalente de £20 cada uno. El monto de esta toma en firme, a saber: £97,500 será pagado del modo siguiente: (a) a la firma de este contrato £32,500, (b) el 16 de agosto £56,000, y (c) el 20 de septiembre próximo £9,000.

Art. 21.— El resto de los títulos, a saber: 3,500 ⅘ de £100 cada uno, o su equivalente de £20 cada uno, será ofrecido al público por cuenta del Gobierno Dominicano, y su producto será puesto a su disposición por los Señores Westendorp & Cía. en la forma y condiciones que establecerá el artículo 22 siguiente.

Art. 22.— El producto de la emisión servirá en primer lugar para reembolsar los 1,250 títulos de £100 cada uno, o su equivalente de £20 cada uno, que han sido tomados firme por los Señores Westendorp & Cía.: sobre el resto y a medida del ingreso de las entregas indicadas en el prospecto, los Señores Westendorp & Cía. pagarán al Gobierno Dominicano la suma de £136,000 el 20 de septiembre de 1888, a fin de dar al Gobierno Dominicano la posibilidad de desagravar sus aduanas, con obligación expresa de entregarlas en manos de los referidos Señores Westendorp & Cía. o de sus delegados, a lo más tarde el 1° de noviembre. El balance quedará a disposición del Gobierno, pero sin que pueda disponer de una suma superior a £10,000 el 1° de noviembre próximo y de £10,000 el 1° de diciembre próximo, y los cupones del primer semestre serán igualmente pagados del dicho balance. A partir del 15 de enero de 1889, el Gobierno podrá disponer de la totalidad del balance que tenga a su crédito en casa de los Señores Westendorp & Cía. Todos esos pagos tendrán lugar en virtud de delegaciones regulares.

Art. 23.— Las partes eligen domicilio para la ejecución de las presentes: Mr. Westendorp & Cía. en su residencia social en Amsterdam.

El Gral. Eugenio Generoso Marchena en el domicilio del Consulado de la República Dominicana en Amsterdam.

Art. 24.— El registro del presente contrato será a cargo de aquellas de las partes que por su falta de ejecución, diese lugar.

Art. 25.— Queda entendido, que hablando en este contrato de las obligaciones o de los títulos, se comprenden las obligaciones o los títulos de £100 cada uno, o su equivalente en títulos o fracciones de £20 cada una.

Art. 26.— El sorteo general de las obligaciones para la amortización se hará en Amsterdam en la casa de los Sres. Westendorp & Cía.

Art. 27.— El Gobierno Dominicano se compromete a no principiar la conversión de la deuda llamada Hartmont hasta el 1° de enero de 1889 a lo más tarde, y eso por intermedio de una casa de banca o de un establecimiento financiero en Londres; los gastos de esta operación serán a cargo exclusivo del Gobierno Dominicano.

Art. 28.— El Gobierno Dominicano por medio de sus agentes diplomáticos en Holanda, Bélgica, Inglaterra y Alemania, dará los pasos necesarios y de uso en semejantes casos para obtener la cotización oficial en los mercados correspondientes.

Hecho así en duplicado entre las partes en Amsterdam el 16 de agosto de 1888.

Art. Adicional. Queda entendido que el Gob. Dominicano proveerá a los Sres. Westendorp & Co. o quien represente sus derechos, gratuitamente, los locales necesarios para el establecimiento de las Oficinas de la Caja General de Recaudación, donde quiera que esas Oficinas se establezcan.

(Firmado) *Eugenio Generoso Marchena,* Agente Fiscal de la República Dominicana en Europa. (Firmado) *Westendorp & Cía.*

Amsterdam, 16 de agosto de 1888.

Los abajo firmados habiendo llenado las condiciones establecidas por el artículo 19 del Contrato de empréstito firmado en Bruselas el 14 de julio de 1888 por las dos partes contratantes en cuanto a la emisión de títulos (scrip) provisorios, hacen constar por el presente acto que la mencionada emisión de títulos provisorios ha sido hecha como sigue:

B. un título £142,860 nominales destinado a la conversión de la deuda dominicana emitida en Londres en 1869, por E. H. Hartmont, llevando los números 1 a 7,143 que representan el número de las antiguas obligaciones que deben convertirse por la "Capital and Comities Bank of London".

B. un título de £123,660 nominales destinado a la conversión de la deuda interior de la República Dominicana, llevando los números 7,144 y 13,326 representando el valor de una parte de esta deuda. Dicho título ha quedado en manos del infrascrito agente fiscal de la República, para remitirlo a su gobierno.

A. 2,565 títulos de £100 representando el valor de £256,500 nominales que ha sido suscrito por el público, en esta serie.

B. 10,949 secciones o títulos de £20 representando el valor de £218,980 nominales, como balance de la cantidad total que ha sido ofrecida al público y que se ha suscrito.

Los 2,565 títulos serie A que llevan del N° 1 hasta el 2,565 y las 10,949 secciones serie B que llevan el N° 13,327 hasta el 24,275 que hacen la suma nominal de £475,480 ofrecida al público, han sido recibidos por los

infrascritos Sres. Westendorp & Cía. y declaramos que estos son los únicos títulos y secciones de ellos emitidos por efecto del empréstito dominicana 6% 1888; y que no quedan por emitir sino doscientos ochenta, títulos serie A. ascendentes a £28,000 nominales de los que el Gobierno se ha reservado para hacer frente a sus deudas y otros compromisos.

En virtud de lo cual firman ambas partes.

(Firmado) *Eugenio Generoso Marchena.*— Agente Fiscal de la República Dominicana en Europa.

(Firmado) *Westendorp & Cía.*

Los abajo firmados declaramos haber emitido los 280 (doscientos ochenta) títulos Serie A de £100 cada uno, destinados a hacer frente a los compromisos del Gobierno y de los que se ha hablado en el presente documento, y que esta misión ha sido hecha en siete "scrip" como sigue:

Un	scrip	llevando	los	núms.	2566	a	2645	montante	a	£8,000
Un	id	"	"	"	2646	—	2725	"	"	8,000
Un	id	"	"	"	2726	—	2765	"	"	4,000
Un	id	"	"	"	2776	—	2799	"	"	3,000
Un	id	"	"	"	2800	—	2815	"	"	1,600
Un	id	"	"	"	2816	—	2835	"	"	2,000
Un	id	"	"	"	2836	—	2845	"	"	1,000

En virtud de lo cual firman ambas partes.
Amsterdam, septiembre 5 de 1888.

(Firmado)— *Eugenio Generoso Marchena.*— Agente Fiscal de la República Dominicana en Europa.

(Firmado)— *Westendorp & Cía.*
Colección de Leyes, Tomo X, pp. 510/21.

DOCUMENTO Nº 13

TRADUCCIÓN
ORIGINAL INGLÉS

No. 12

REPÚBLICA DOMINICANA

CONVENIO celebrado entre el General Eugenio Generoso Marchena, Agente Fiscal del Gobierno de la República Dominicana en Europa, actuando

en la presente en representación y a nombre del referido Gobierno, en virtud de los poderes especiales que le han sido otorgados bajo fecha del 16 de junio de 1888, por una parte, y El Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros de Londres. (*The Council of Foreing Bondholders of London*) actuando en la presente de acuerdo con la Comisión de Tenedores de Bonos de Hartmont, a que se refiere en la presente más tarde, y en representación de los citados Tenedores de Bonos, por la otra parte.

Por cuanto, en el año 1885, Don Antonio María Regidor y Jurado entabló negociaciones con el General Marchena, Agente de dicho Gobierno con el propósito de inducir al citado Gobierno para que concediese a los Tenedores de Bonos de Hartmont, conocidos en la bolsa de Londres por "Bonos de Sto. Domingo del 1869" alguna compensación que a la vez que se prestase a restablecer el crédito de la República, sirviera para compensar a los Tenedores de Bonos al menos de una parte del valor de sus bonos.

Y por cuanto estas negociaciones procedían de la base que ellas no debían perjudicar ni modificar, en manera alguna, ni en todo ni en parte los derechos que la República Dominicana creía tener en derechos, ni tampoco aquellos sobre los cuales fundan los Tenedores de Bonos, su reclamo.

Y por cuanto, después de varias prolongadas Reuniones y Discusiones se convino mutuamente celebrar un Convenio ad-referéndum, el cual fue celebrado entre el referido General Marchena, el Consejo de Tenedores de Bonos, actuando con la Comisión de Tenedores de Bonos y el citado Don Antonio María Regidor y Jurado, con fecha 22 de mayo 1886, cuyo arreglo el Gobno. de Sto. Domingo, se negó a sancionar según consta por una carta dirigida por el Ministro de Relas. Exteriores y el de Hacienda en fecha 16 de enero de 1888, al citado Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros.

Y por cuanto el Dr. Antonio María Regidor y Jurado, después de esto, entabló nuevas negociaciones para un nuevo arreglo, y en consecuencia de ello, después de varias reuniones con la Comisión de los Tenedores de Bonos y con el Presidente del Consejo de Tenedores de Bonos, sometió, autorizado por el General Marchena, una nueva proposición para el arreglo de la citada deuda, en una reunión general de Tenedores de Bonos que se celebró el 22 de marzo de 1888 en el hotel "Cannon Street" Cannon Street London E. C., en cuya reunión se pasó una Resolución para aceptar la referida proposición, la cual se pone en ejecución por el presente Convenio.

Y por cuanto la República Dominicana ha celebrado un Contrato, con fecha 14 de julio de 1888 con los Señores Westendorp y C. de Amsterdam modificado por un Contrato suplementario de fecha 27 de julio de 1888, por cuyo Contrato los Sres. Westendorp han convenido emitir un Empréstito por cuenta del Gobierno Dominicano por un Capital nominal de L770,000

representados por obligaciones de L100 y de L20, cada cual devengando intereses al 6% anual y redimible en 30 años por medio de una anualidad fija de L55,645 por año, y por el cual el citado Gobierno se compromete para asegurar el pago de las anualidades fijadas a hipotecar todos los derechos de importación y exportación de la República Dominicana y con ese fin a remitir la recaudación de los citados derechos a los referidos Westendorp y C. de la manera y con las garantías estipuladas en el Contrato mencionado, y con el fin de dar toda la validez a lo que se relaciona con la delegación de las Aduanas, el Gobierno Dominicano, deseando a los citados Westendorp y subsidiarios en las obligaciones la más extensa seguridad, ha consentido que en caso de disputa se nombre al Gobierno Holandés como árbitro.

Y *por cuanto* por el referido Contrato se dedica L142,860, parte del Empréstito de L770,000, para el arreglo de la Deuda llamada de Hartmont bien sea en esta u otra forma, para la Conversión de los Bonos existentes de esa Deuda.

Por tanto, las partes han convenido mutuamente lo siguiente:

Art. 1.

1o.— El Gob. de la República Dominicana incluirá en sus deudas presentes, vista la aceptación del presente arreglo, de los citados Tenedores de Bonos, los referidos bonos por L714,300 emitidos por el mencionado Hartmont, en Londres 1869. A pesar que el Gobierno solamente reconoció haber recibido del dicho Hartmont, la suma de L38,095 en efectivo por las cuales y otras consideraciones, el Gob. sin embargo le otorgó recibo por L50,000.

2o.— El Gobierno Dominicano canjeará los Bonos que representan las referidas L714,300 por L143 obligaciones de a L20, devengando intereses a 6% al año emitidas por dichos Señores Westendorp y C. o por Banqueros que ellos designen.

3o.— Los tenedores de Bonos emitidos en 1869 recibirán una de las citadas obligaciones de a L20 por cada L100 y cinco de las citadas obligaciones por cada Bono de L500.

4o.— Todos los referidos Bonos de 1869 deberán tener adaptados sus Cupones no pagados y los no vencidos y de otro modo no serán admitidos en la Convención.

5o.— Todos los Bonos y Cupones que sean canjeados deberán ser cancelados (inválidos) y entregados al representante de la República Dominicana.

Art. 2.

lo.— Estas obligaciones devengarán el interés ya especificado y serán garantizados y redimidos del modo que se estipule en el referido contrato del 14 de julio 1888 como parte del nuevo Empréstito de L770,000 que a él se refiere.

2o.— Estas obligaciones llevarán sus respectivos y consecutivos números de 1 al 7,143 y la estampilla Inglesa que les corresponda.

Art. 3.

No se impondrá ninguna clase de contribución o impuesto en ningún tiempo, por el Estado, ni a los intereses ni al rescate de las referidas obligaciones.

Art. 4.

1o.— El Gobierno Dominicano, confiará la conversión de las obligaciones y para atender a dichas obligaciones en Londres a The "Capital and Counties Bank Limited" u otra casa de alta posición, las cuales serán igualmente amovibles.

2o.— Se efectuará la conversión, se pagará los Cupones y se redimirá las obligaciones por completo sin que se haga a los Tenedores de Bonos ni deducción ni cargo alguno.

Art. 5o.

1o.— La operación de dicha Conversión quedará en vigor por un período de 12 meses desde su principio, y los antiguos Bonos que no se presenten para su inversión, perderán después de 6 meses, el primer Cupón, en las nuevas obligaciones, que ya hubiese vencido.

2o.— Al expirar la Conversión de antiguos bonos presentada de antemano, las obligaciones restantes serán entregadas al Gobierno por el Banco, al cual se confiará la Conversión.

Art. 6o.

La Conversión se llevará a cabo de acuerdo con los reglamentos y las formalidades que deberá determinar dicho agente del Gobierno de conformidad con el Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros, en representación a los Tenedores de Bonos, para la debida seguridad de todos los interesados.

Art. 7o.

El Agente Fiscal del Estado, en la actualidad en Europa, representará al Estado en Londres para todos los fines en llevar a efecto la citada operación.

Art. 8o.

Concluida la Conversión por la entrega de los citados bonos de 1869, los Tenedores de Bonos, por ese medio redimirán y eximirán al Estado de todo reclamo que contra el Estado tengan en virtud de los antiguos Bonos y que pueda haber por concepto de su emisión. Pero ellos, sin embargo, se reservan todos sus derechos y reclamos contra el citado Hartmont u otras personas relacionadas con la emisión de los Antiguos Bonos por cuenta o por razón de la tal emisión y el Estado, por la presente, renuncia a favor de los citados Tenedores de Bonos, a todo dinero recibido por el referido Hartmont, o por otra persona, por medio de la citada emisión.

Art. 9o.

Este arreglo ha sido celebrado en representación de los Tenedores de Bonos por el Consejo y la Comisión de Tenedores de Bonos de conformidad con la resolución de la Reunión General de Tenedores de Bonos, celebrada en Londres el 22 de marzo de 1888.

Londres 28 de julio de 1888.

Por el Gob. de la Rep. Dominicana, fdo.: *Eugenio Generoso Marchena*. Por el Consejo de Tenedores de Bonos y la Comisión de los Tenedores de Bonos Dominicanos de 1869.— fdo.: E. P. Boswine-Presidente.

(Pieza No. 78, año 1888, Sección Congreso Nacional. A. G. N.).

DOCUMENTO Nº 14

Negociaciones relativas a la transferencia de los derechos de Westendorp a la San Domingo Improvement Co.

The San Domingo Improvement Company of New York

New York, agosto 2, 1892.

Temporary office:
36 Wall Street

A Sus Excelencias

El General Juan Fco. Sánchez
Ministro de Hacienda y Comercio

y El General T. Cordero y Bidó,
Ministro de Fomento y Obras Públicas
de la República Dominicana, Santo Domingo.

Excelencias:

La "San Domingo Improvement Company of New York", por medio del consejo de Directores y Oficiales, tiene el honor por la presente de entregar a Sus Excelencias diferentes cartas de los Señores Westendorp & Cía. y del Señor Dr. C. J. den Tex Bondt, a saber:

1.—Una carta fecha 27 de mayo 1892 de los Señores Westendorp & Cía. de Amsterdam dirigida a la Excelencia el Señor Ministro de Hacienda con el objeto de avisarles a Uds. de qué, esta casa de comercio ha sustituido, de acuerdo con las cláusula de los pactos celebrados en los años 1888 y 1890 entre el Gobierno de Sus Excelencias y dichos Señores a esta Compañía en su lugar por la recaudación y distribución

de las entradas de Aduanas del Gobierno de Sus Excelencias, según está previsto por dichos contratos.

2.— Una carta de la misma fecha también de los Señores Westendorp & Cía. dirigida a su Excelencia el señor Ministro de Hacienda acreditando a esta Compañía hace Su Gobierno para celebrar, en su nombre todos actos, tomar todas medidas, proseguir negociaciones y firmar todos pactos con Su Gobierno, con el objeto de la execución o modificación de los contratos celebrados entre el Gobierno de Sus Excelencias y los Señores Westendorp & Cía. de 14 de julio de 1888, 16 de agosto del mismo año y el 14 de mayo 1890.

3.— Una carta de la misma fecha dirigida a Sus Excelencias firmada por el señor Dr. C. J. den Tex Bondt avisándoles que dicho señor ha transferido a esta Compañía todos sus derechos y obligaciones para la construcción del Ferrocarril de Puerto Plata a Santiago, en conformidad con la convención celebrada entre Su Gobierno y este Señor.

4.— Una carta de la misma fecha dirigida a Sus Excelencias firmada por el mismo Señor, informándoles a Sus Excelencias, de que él había transferido a esta Compañía todos sus derechos y obligaciones para la explotación del Ferrocarril Central Dominicano, según está estipulado en el pacto entre Su Gobierno y dicho Señor de fecha de 14 de mayo 1890. Confiamos, que el Gobierno de la Excelencia el Señor Presidente de la República Dominicana, tendrá a bien examinar dichas cartas cuidadosa y favorablemente.

Sin embargo, queremos enterarles de que un ciudadano muy distinguido de los Estados Unidos, como representante de esta Compañía, saldrá de Nueva York con dirección a Santo Domingo por el vapor que sigue él, que le traje esta carta.

Este Señor tan pronto como llegue, suplicará una entrevista con Sus Excelencias como también con la Excelencia, el Señor Presidente de la República. Les rogamos a Uds. para dicho Señor la cortesía, que tanto distingue a los miembros del Gobierno de la Excelencia, el Señor Presidente, y confiamos que de estas entrevistas resultarán las más armoniosas relaciones entre su Gobierno y esta Compañía, la cual tiene por único objeto de obrar para el bien del Gobierno y del Pueblo de la República Dominicana.

Mientras tanto nuestro amigo el Señor Dr. C. J. den Tex Bondt, quien va a Puerto Plata por el vapor trayendo esta carta, ha aceptado la representación provisional de los intereses de esta Compañía en su país. Por causa de una estipulación hecha por los Señores Westendorp & Cía., esta Compañía no tendrá ningún interés en las entradas aduaneras, referidas en los contratos de 1888 y 1890 antes del 1° de septiembre próximo, y hasta esta fecha el Señor Dr. C. J. den Tex Bondt seguirá con la Dirección General de la Caja de Recaudación en representación de los mismos intereses que representaba antes.

Sin embargo, después de la fecha arriba mencionada, el mismo señor seguirá con la Dirección General, por cuenta y en los intereses de la presente Compañía.

Les saludamos a Uds. con la más alta consideración.

The San Domingo Improvement Company of New York

Smith W. Weed
President

G. S. *Bixby*
Secretary

República Dominicana
Secretaría de Estado de
Hacienda y Comercio.

Santo Domingo, 18 de agosto de 1892

386 COPIA

Señores Smith W. Weed y Geo. S. Bixby.
N. York — 36 Wall Street.

Señores:

Este Despacho ha sido favorecido por la carta que con fecha 2 del corriente dirigen Uds. colectivamente al Ministerio a mi cargo y al de Fomento y Obras Públicas, anunciando: 1° el traspaso hecho por los Señores Westendorp Cía. a la Sociedad denominada "The San Domingo Improvement Company de N. York" de la facultad que tienen dichos Señores a recaudar las entradas de aduanas de la República Dominicana según las cláusulas de los Contratos de Empréstitos 6% de 1888 y 1890; 2° la facultad adquirida desde luego por la citada Compañía para proseguir, reformar o mejorar los Contratos celebrados entre el Gobierno y los Señores Westendorp & Cía.; 3° el transferimiento que hace el Señor Dr. C. J. den Tex Bondt en su calidad de Contratista para la Construcción, primero, y luego para la explotación del Ferrocarril Central Dominicano, cuyas obligaciones y derechos asume la San Domingo Improvement Company de N. York; 4° la próxima llegada a esta Capital de un personaje americano con el objeto de celebrar entrevistas con el Gobierno Dominicano y armonizar la acción común de éste y de la Compañía en el asunto que nos ocupa y 5° la dirección temporal del Señor Dr. C. J. den Tex Bondt como Representante de la repetida Compañía Americana que pretende comenzar desde el 1° de septiembre próximo venidero la gestión a que supuestamente le da derecho el traspaso hecho por los Sres. Westendorp Cía. y el Doctor C. J. den Tex Bondt.

Concretándome a la parte sustancial del asunto, que es la que precisamente atañe a mi ejercicio como Ministro de Hacienda y Comercio del Gobierno Dominicano, creo oportuno, sin que esto se entienda que rechazamos la visita del Comisionado que se nos anuncia, y el que será recibido, sino con un carácter que no podemos reconocerle porque dimana de un acto no consentido por el Gobierno de que formo parte, pero sí con toda la cortesía que nos es habitual, creo oportuno, repito, y conveniente manifestar a Uds. que el Gobierno Dominicano considera nulo y de ningún valor ni efecto el traspaso hecho por los Señores Westendorp Cía. al grupo de capitalistas que se ha constituido con el nombre de The San Domingo Improvement Company de N. York.

Las razones que obran en el ánimo del Gobierno para proceder de esta manera están comprendidas en la nota que con esta fecha dirige este Ministerio a los Señores Westendorp Cía. y que juzgándola de oportuno conocimiento para Uds. tengo el gusto de adjuntársela en copia exacta.

Lo mismo hará el Señor Ministro de Fomento y Obras Públicas con la que dirige el Señor Dr. C. J. den Tex Bondt relativa al hecho del traspaso de sus contratos de construcción y explotación del Ferrocarril Central.

Saludo a Uds. con sentimientos de la mayor consideración

El Ministro de Hacienda y Comercio
—Firmado *Sánchez*—

Expediente No. 5, Legajo No. 35, Ministerio de Hacienda y Comercio. A. G. N

Amsterdam, le 27 Mai 1892.

A. S. E. Monsieur le Ministre des Finances et du Commerce de la République Dominicaine.

Excellence,

En exécution du traité que nous avons passé avec votre Gouvernement le 14 Juillet 1888, modifié par convention additionnelle du 16 Aout suiront, lequel traité, par son article 4, nous confère le droit d' encaisser directement les recettes des douanes de la République Dominicaine, soit par nos soins ou par l'entremise de nos agents ou délégués, soit par une Société ou une maison de Banque que nous désignerions a cet effect, nous avons l'honneur de vous informer officiellement que nous d'signons a l'effet d'encaisser directement les dites recettes des douanes de la République Dominicaine, "The San Domingo, Improvement Company of New York", Société constituée sous l'empire des lois de l'Etat de New Jersey, au capital de deux millions de dollars.

En conséquence la dite Société "The San Domingo Improvement Company of New York" se trouve dès à présent et définitivement substituée à tous les droits et obligations qui nous sont, aux effets ci-dessus, conférés par l'article 4 du traité du 14 Juillet 1888, modifié par convention additionnelle du 16 Août suivant, ainsi qu'à tous ceux qui sont confères á nous ou à nos ayants droit par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du dit traité et ainsi également qu'à tous les droits conférés à la Caisse de la Régie (Caja de Recaudación) par les articles 4, 5, 6, 7 et 9 de la convention que nous avons passée avec votre Gouvernement les 14 Mai 1890, modifiée par un vote du Congrès National Dominicain en date du 8 Septembre 1890.

Nous prions, en vertu du droit qui nous est expressément réservé par l'article 4 de la convention du 14 Juillet 1888, de vouloir considérer la présente substitution comme absolument définitive et devont sortir tous ses effets légaux et juridiques, à partir de la date à laquelle la présente vous aura été remise.

Veuillez, agréer, Excellence, 1'expression de nos sentiments les plus distingués.

Westendorp Co.

Amsterdam, le 27 Mai 1892.

A. S. E. Monsieur le Ministre des Finances et du Commerce de la République Dominicaine.

Excellence,

Nous avons l'honneur de vous informer par la présente que nous accréditons auprès de votre Gouvernement, comme nos représentants et porteurs de nos pleins pouvoirs, "The San Domingo Improvement Company of N. York", Société constituée sous l'empire des lois de 1'Etat de New Jersey, au capital de deux millions de dollars. En conséquence la dite Société, ainsi duement autorisée et accréditée auprès de votre Gouvernement, a, dès, à présent, qualité pour, en notre nom pour compte, et en notre lieu et place, poser tous actes, prendre toutes mesures, entamer toutes négociations et signer touts conventions avec votre Gouvernement en exécution ou modification des traités intervenus entre votre Gouvernement et nous les 14 Juillet 1888, 16 Août 1888 et 14 Mai 1890- le tout comme nous pourrions le faire nous mêmes en vertu des droits et obligations qui nous sont conférés.

Nous vous prions de vouloir en prendre note et de considérer la présente comme devant sortir tous ses effects juriques et légaux à partir de la date à laquelle elle vous aura été remise.

Veuillez agréer, Excellence, 1'expression de nos sentiments le plus distingués.

Westendorp Co.

Expediente No. 5, Legajo No. 35, Ministerio de Hacienda y Comercio. A.G.N.

No. 385 Agosto 18 de 1892

Señores Westendorp & Co.
Amsterdam

Señores:

Se han recibido en este Despacho las notas que Uds. dirigen con fecha 27 de mayo del corriente año y que han sido transmitidas por los Señores Smith W. Weed y Geo. S. Bixby de N. York, no habiendo llegado a su destino hasta esta fecha en que contesto.

El Gobierno Dominicano, de que tengo el honor de formar parte, y ante cuyo consejo tuve ocasión de presentar el caso que Uds. me comunican de haber transferido los derechos y obligaciones que dimanan del Contrato de Empréstito 1888 a un grupo que se ha constituido en el Estado de Nueva Jersey con el nombre de "The San Domingo Improvement Company de N. York", ha resuelto manifestar a Uds. por mi órgano, su parecer y su resolución respecto del asunto; parecer y resolución en un todo opuestos al criterio que Uds. han tenido y al negocio que han querido Uds. llevar a cabo.

Bastaría para demostrar la nulidad del traspaso anunciado buscar el verdadero sentido de la cláusula que Uds. mismos invocan como título para efectuar la negociación y la cual no puede de ningún modo tener el valor que Uds. han querido atribuirle.

En efecto, y trayendo a la vista el instrumento definitivo del Empréstito 1888, encontramos en su Art. 4° que "M. M. Westendorp & Co. auront "le droit d'encaisser *directement* ces recettes par le soins ou par *l' "entremise* de leurs agents ou de leurs délegués ou d'une Societé ou d'une "maison de Banque indiquée par eux". Y cual que sea el idioma a que se traduzcan las palabras *directament* y *partentremise*, nunca podrá racionalmente atribuírseles otro sentido que el de una acción directa y exclusiva del sujeto principal ejecutada por su mandato y del cual los demás: agentes, delegados, casa de Banca, Sociedad no pueden ser otra cosa que representantes o apoderados reflejando la personalidad del Contratista primero; todo lo cual es antagónico a toda idea de sustitución, transferimiento o actos análogos.

En ese concepto es que la "Regie" o Caja de Recaudación gestiona en este país desde el 1° de noviembre de 1888 y solamente en ese concepto será que el Gobierno Dominicano podrá admitir y acoger a toda persona o grupo que designen Uds. con el objeto de recaudar las rentas de nuestras Aduanas.

Lo dicho respecto al Contrato de 1888 puede referirse al tratado del 1890 que está identificado y subordinado al primero y del cual solo podríamos citar, como circunstancia nueva de notoria importancia y de oportuna recordación, el compromiso contraído por Uds. de tomar a firme las obligaciones de este Empréstito, compromiso que no tiene conocimiento este Ministerio haya sido cumplido exactamente.

Otras razones de no menos peso para el Gobierno Dominicano obran en su conciencia para desconocer el transferimiento anunciado por Uds. en favor de la San Domingo Improvement: entre éstas, y apartándose del hecho insólito de haber concluido un negocio de la magnitud y del género del que es objeto de esta contestación sin su anuencia previa como parte contratante, el no menos raro de haber prescindido por completo de la opinión y el consentimiento del público suscriptor, del que no son Uds. más que representantes. Y aun podríamos traer a la vista la circunstancia de que, estando aún en discusión, a pesar de estarse ejercitando, el Convenio de fecha 10 de diciembre 1891 para la separación de las Rentas aduaneras en 35 unidades pa. la Regie y 65 pa. el Gobierno dominicano, no podríamos admitir una cesión contraída exclusivamente a una ejecución que, habiendo sido modificada, ha dado lugar a combinaciones de administración interior que no podrían variarse súbitamente sin graves perjuicios.

Pero abandonando consideraciones de ampliación y contrayéndome de nuevo a la parte sustancial del asunto, a nombre del Gobierno Dominicano y en contestación a las notas de Uds. dirigidas a este Despacho con fecha 27 de mayo del presente año, tengo el honor de notificarles que tenemos por nulo y sin ningún valor ni efecto el traspaso hecho por Uds. a la Sociedad que se ha constituido bajo el nombre de "The San Domingo Improvement Company of N. York", y lo que no podemos por consiguiente admitir con el carácter con que Uds. la han anunciado al Gobierno Dominicano, como así mismo cualquier otro negocio de este género que hubieren Uds. llevado a cabo o llevaren a cabo con otra persona o Sociedad y que no esté de acuerdo con el sentido estricto del Art. 4º del Contrato de 1888 y limitado por consiguiente a una mera delegación o agencia para recaudar en nombre y representación de Uds. las entradas de Aduanas, sin otros derechos ni circunstancias que los previstos en el instrumento firmado el 16 de agosto de 1888 y de cuyas contestaciones o dificultades sólo puede ser árbitro el Gobierno de S. M. de Holanda, en caso necesario.

En esa virtud y con las reservas necesarias para la réplica, tengo el honor de saludar a Uds. muy atentamente,

El Ministro de Hacienda y Comercio.

(No hay firma)

Expediente No. 5, Legajo No. 35, Ministerio de Hacienda y Comercio. A. G. N.

Ministerio de Fomento y Obras Públicas

No. 69.

Santo Domingo, agosto 23 de 1892

Señor Dr. C. J. den Tex Bondt.
Contratista del Ferrocarril Central
Dominicano. Puerto Plata.

Señor: Han favorecido a este Despacho las notas de Ud. de fecha 27 de mayo del año corriente, dirigidas desde Amsterdam y llegadas por vía de Nueva York en el vapor "Saginavo" el 18 del mes actual, contraídas a comunicar a este Ministerio el traspaso que Ud. ha pretendido verificar de sus derechos y obligaciones como contratista para la construcción, primero, para la explotación después, del camino de hierro "Central Dominicano", a un grupo de capitalistas americanos que se han constituido bajo el nombre de "The San Domingo Improvement Company of N. York". Aun prescindiendo de la circunstancia capital de que, siendo el traspaso enunciado un hecho que se deriva y es secundario del traspaso intentado por los Sres. Westendorp & Co. de los contratos de 1888 y 1890, del último de los cuales se desprenden los de Ud. y habiendo sido rechazado aquel que llamaremos principal, quedan todavía en el ánimo del Gobierno otros motivos para no acoger el transferimiento que Ud. notifica y que, a pesar de estar previsto en el Art. 18 del contrato firmado en fecha 14 de mayo de 1890, puede muy bien no ser legal o potestativo de Ud. siempre que -y esto sería preciso comprobarlo y previamente- del estado de los trabajos del ferrocarril llevados a cabo por Ud. y de la marcha seguida hasta la fecha, pudiera deducirse alguna infracción, o negligencia de los compromisos y condiciones a que está sometido el contratista. En esta virtud, el Gobierno considera el traspaso de construcción y explotación propuesto por Ud., en las mismas condiciones que el intentado por los Sres. Westendorp & Co. y el cual ha sido declarado nulo y sin ningún valor ni efecto. Saluda a Ud. con la mayor consideración.— El Ministro de Fomento y Obras Públicas, Intº.— (Firmado) *Ignacio M. González.*

Expediente No. 5, Legajo No. 35, Ministerio de Hacienda y Comercio. A.G.N.

DOCUMENTO Nº 15

DICTAMEN

de los infrascritos abogados, respondiendo a la consulta del Ciudadano Presidente de la República, sobre el derecho que pueda, o no, asistir a los Sres. Westendorp & Co. para hacerse sustituir en determinadas funciones, como contratistas de los empréstitos de 1888 y 1890.

Los infrascritos, abogados en los Tribunales de la República, reunidos en virtud de circular que en fecha 12 de enero del corriente año les ha dirigido el señor Presidente de la República, por la cual les manifiesta que deberá llegar en estos días a esta Capital "una comisión delegada del Sindicato a quien han traspasado los señores Westendorp & Co. las obligaciones y derechos que les corresponden en virtud de los contratos celebrados entre aquellos Señores y el Gobierno, por lo que éste desea, para el mejor servicio de los intereses nacionales que una opinión jurídica ilustre su criterio respecto de la obligación en que pueda encontrarse para dar su aceptación al referido traspaso, o del derecho que le asista para ratificar su negativa", y que a este fin el Presidente encomienda a los infrascritos abogados el encargo "de estudiar la documentación que informa todo ese proceso, y comunicar al Gobierno la opinión que de su estudio resulte".

Después de examinar detenidamente los documentos que les han sido sometidos como elementos de la consulta, y los cuales son:

1o.— Una copia del contrato firmado en Amsterdam el 16 de agosto de 1888 entre el Agente Fiscal de la República Dominicana, actuando en nombre y por cuenta de su Gobierno con plenos poderes al efecto, de una parte, y los Señores Westendorp & Co., banqueros de Amsterdam, tanto en su propio nombre como en el de un grupo de banqueros y de capitalistas por quienes aquellos se obligan, de otra parte. Este documento está intitulado así: "Instrumento definitivo del empréstito dominicano".

2o.— Otro contrato inserto en la "Gaceta Oficial" de Santo Domingo, No. 839, del 29 de septiembre de 1890, convenido en fecha 14 de mayo del mismo año entre el ciudadano Ministro de Hacienda y Comercio, debidamente autorizado, de una parte, y los mismos Señores Westendorp & Co., Banqueros de Amsterdam, de otra parte, con el objeto de emitir obligaciones de un empréstito para la construcción de un ferrocarril cuya primera sección de Puerto Plata a Santiago de los Caballeros se comprometió a construir el señor Dr. C. J. den Tex Bondt, súbdito neerlandés, según consta de la convención pactada entre el ciudadano Ministro de Fomento y Obras Públicas, en representación del Gobierno, y el dicho Dr. den Tex Bondt, acto que obra a continuación del precedente, en la misma "Gaceta Oficial" antes citada.

3o.— Un expediente que contiene:

a.— Carta de los denominados Presidente y Secretarios de la Compañía intitulada "San Domingo Improvement Company of New York", fechada en New York, a dos de agosto de 1892, y dirigida a los señores Ministros de Hacienda y Comercio y de Fomento y Obras Públicas, participándoles que de acuerdo con las cláusulas de los contratos de 1888 y 1890 intervenidos entre el Gobierno Dominicano y los Sres. Westendorp & Co. de Amsterdam, aquella

compañía de New York ha sustituido a ésta para la recaudación y distribución de las rentas de Aduanas de la República, y que los mismos Westendorp & Co. han acreditado a la compañía San Domingo Improvement para celebrar en su nombre toda clase de actos, negociaciones y actos relativos a las dichas convenciones, su ejecución o modificación. También participan que el Señor den Tex Bondt ha transferido a la misma compañía todos sus derechos y obligaciones para la construcción y explotación del Ferrocarril de Puerto Plata a Santiago.

b.— Oficio fecha 18 de agosto de 1892 del Ministro de Hacienda y Comercio a los Sres. Smith W. Weed y Geo S. Bixby, contestación a la carta anterior, negando el consentimiento del Gobierno Dominicano al notificado traspaso, y diciéndoles que el mismo Gobierno considera nulo, de ningún valor ni efecto el dicho traspaso.

c.— Dos oficios fecha 27 de mayo del 92, dirigidos por los Señores Westendorp & Co. al Señor Ministro de Hacienda y Comercio, notificando por ello, que acreditan a la referida compañía de New York para proceder en nombre, por cuenta y en vez y lugar de Westendorp & Co., a otorgar actos, acordar medidas, negociar y firmar cualesquiera convenciones con el Gobierno Dominicano, en ejecución o modificación de los contratos de 14 de julio y 16 de agosto de 1888, y de 14 de mayo de 1890, todo como pudieran hacerlo los mismos Westendorp & Co. en virtud de los derechos y obligaciones que les están conferidos; y por el 2o. oficio notifican que la San Domingo Improvement Company les está desde la fecha y definitivamente sustituida en todos los derechos y obligaciones que conciernen a los mismos Sres. Westendorp & Co. por virtud del artículo 4 del contrato de 14 de julio de 1888, modificado por convención adicional del 16 de agosto siguiente, así como en todos los derechos y obligaciones que están conferidos a dichos Westendorp & Co. o a sus causahabientes por los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del referido contrato, e igualmente en los conferidos a la Caja de Recaudación por la Convención del 14 de mayo de 1890, modificada por un voto del Congreso Nacional Dominicano en 8 de septiembre del mismo año. Concluye pidiendo en virtud del citado artículo 4 del Contrato de 14 de julio de 1888, que se considere tal sustitución como absolutamente definitiva, y debiendo surtir todos sus efectos legales y jurídicos.

d.— Oficio fecha 18 de agosto de 1892, contestación del ciudadano Ministro de Hacienda y Comercio a los Señores Westendorp & Co., fijando el sentido estricto del artículo 4o. del llamado "Instrumento definitivo del empréstito de 1888", y notificado a dicha firma en nombre del Gobierno Dominicano, que tiene por nulo, sin ningún valor ni efecto el traspaso hecho a la Sociedad San Domingo Improvement Company of New York,

como asimismo cualquier otro negocio de ese género que Westendorp & Co. hubiesen llevado o llevaren a cabo con otra persona o Sociedad, y que no esté de acuerdo con el sentido estricto del artículo 4o. citado, y limitado a una mera delegación o agencia para recaudar en nombre y representación de los mismos Westendorp & Co. las entradas de Aduanas, sin otros derechos y circunstancias que los previstos en el mencionado instrumento de 16 de agosto de 1888, y concluye diciendo que de las contestaciones y dificultades sólo puede ser árbitro S. M. el Rey de Holanda, en caso necesario.

e.— Oficio del Ministro de Fomento y Obras Públicas en el mismo sentido negativo al Dr. C. J. den Tex Bondt, fecha 23 de agosto de 1892.

Los abogados infrascritos, ciñéndose al objeto de la consulta, determinado en la nota circular antes referida del Señor Presidente de la República, aplicaron su atención primeramente a fijar y precisar, por el sentido de las cartas de los Señores Westendorp & Co. y de los oficios de los Sres. Ministros de Hacienda y Comercio y de Fomento y Obras Públicas, el origen y fundamento de la disidencia, y la naturaleza de los puntos controvertidos.

Las notas reseñadas arriba con la letra C, dirigidas ambas en 27 de mayo de 1892 al Ministro de Hacienda de la República, difieren notablemente entre sí. Mientras que la una tiene por sus términos todo el carácter de una credencial en la que se ruega al Gobierno que reconozca y admita a la nueva Compañía formada en New York, como representante y mandatario de los Señores Westendorp & Co., pues que, cualquiera que sea la extensión del mandato, que es mucha, la calidad del Agente queda reducida a obrar y gestionar "*en nombre, por cuenta y en vez y lugar de los dichos Señores Westendorp & Co.*", la otra nota va más allá de ese límite del mandato o la procuración, pues por sus términos se participa al Gobierno no solamente que en virtud del artículo 4o. del contrato de 14 de julio de 1888, modificado por el de 16 de agosto siguiente, los dichos Señores designan a la San Domingo Improvement Company para recaudar directamente los productos de las Aduanas de la República, sino también que, como consecuencia de esa designación la dicha Sociedad San Domingo Improvement & Co., *se halla luego y definitivamente subrogada en "todos los derechos y obligaciones que están conferidos* (a Westendorp & Co.) *para el dicho efecto* por el referido artículo 4o., así como en todos los que están conferidos a los mismos Westendorp & Co. o a sus *ayants droits*, por los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del dicho contrato, e igualmente en los derechos conferidos a la Caja de Recaudación por los artículos 4, 5, 6, 7 y 9 de la convención firmada en 14 de mayo de 1890".

El Ciudadano Ministro de Hacienda en su contestación de fecha 18 de agosto de 1892, extractada arriba con la letra d, apoya la negativa del Gobierno a dar su aprobación a los convenios que se le anuncian, principalmente en

que el texto del artículo 4o. citado es limitativo, y solo faculta a los Señores Westendorp & Co. a conferir poder para hacer representar como mandantes y responsables directos, sin relevarlos a ellos mismos de ninguna de las obligaciones contraídas con la República por sus contratos. Además aduce el Ministro otras consideraciones derivadas de no tener Westendorp & Co., sino el carácter de representantes del público suscriptor de los empréstitos, de estar pendientes de discusión el convenio fecha 10 de diciembre de 1891, a pesar de estarse ejecutando, para la separación de las rentas de Aduanas en 35 unidades para la Regie, y 65 para el Gobierno Dominicano, y de no tener conocimiento el Ministerio de que se haya cumplido exactamente el compromiso contraído por dichos Señores de tomar a firme las obligaciones del empréstito de 1890.

Por su parte, el Ciudadano Ministro de Fomento y Obras Públicas, en su contestación reseñada con la letra e, al Señor den Tex Bondt, declara "que el Gobierno considera el traspaso hecho por él a un grupo de capitalistas americanos, de sus derechos y obligaciones como contratista para la construcción de un camino de hierro, como un hecho derivado y secundario del traspaso intentado por los Señores Westendorp & Co. de sus contratos de 1888 y 1890, del último de los cuales se desprenden los del Sr. den Tex; y además, pudiera también no ser a este potestativo dicho traspaso, sin comprobarse previamente por el estado de los trabajos del ferrocarril y por la marcha seguida hasta la fecha, que no ha habido alguna infracción o negligencia de los compromisos y condiciones a que está sometido el contratista, por lo que el Gobierno considera el traspaso de la construcción y explotación propuesto por el Señor den Tex, en las mismas condiciones que el intentado por los Señores Westendorp & Co. y el cual ha sido declarado nulo y sin ningún valor ni efecto".

Se deduce, pues, del texto de las comunicaciones extractadas:

Que el origen y fundamento de la controversia pendiente han sido los actos de traspasos de derechos y obligaciones, comunicados por los Señores Westendorp & Co. al Gobierno de la República, por órgano del Señor Ministro de Hacienda y Comercio;

Que el Gobierno de la República ha creído que le asistía el derecho de oponerse a dichos actos de traspaso o cesión de derecho de oponerse a dichos actos de traspaso o cesión de derechos y obligaciones, como excediendo el sentido y el límite del artículo 4o. en su convención definitiva con los Sres. Westendorp & Co., disposición citada por estos Señores en primer término, entre las que enumeran como títulos para ejercer la facultad de esos actos de traspaso o cesión de derechos y obligaciones;

Que los puntos controvertidos suponen un conflicto en que no solamente los derechos de las partes, sino los eventuales de terceros están interesados,

y requieren por tanto una solución ajustada a los principios y reglas de interpretación a que el derecho civil somete los contratos y convenciones.

Una redacción defectuosa de la nota fecha 27 de mayo de 1892, que queda extractada en segundo lugar bajo la letra C de este escrito, ha producido una imperfecta comprensión de los términos del artículo 4o. del Contrato de 16 de agosto de 1888. La dicha nota hizo en su primera parte un extracto incompleto del texto del artículo 4o. de la referida Convención, y el Ministro de Hacienda, contestando a esa comunicación, dilucidó ese extracto incompleto de la nota que refutaba, para negar la consecuencia latísima que, a continuación, hacían estribar los Sres. Westendorp & Co. en la parte extractada del dicho artículo 4o. Decían estos Señores en la nota aludida "que el contrato del 88, por su artículo 4o. les confiere el derecho de recaudar directamente los productos de las Aduanas de la República, sea por sí mismos (par nos soins) o por medio (par l'entremise) de sus agentes o delegados, sea por una Sociedad o una Casa de Banco que designase a ese efecto", por lo que informaban al Señor Ministro oficiosamente "que designaban, a ese efecto de recaudar directamente las dichas rentas, a la "San Domingo Improvement", Compañía de New York, y agregaban en seguida:

"En consecuencia, la dicha Sociedad "San Domingo & Co." se halla desde ahora y definitivamente subrogada (*substitutueé*) en todos los derechos y obligaciones que nos están conferidos para los dichos efectos, por el artículo 4o. &".

Y como efectivamente esa consecuencia no se deducía del texto invocado en el primer *acápite* de la nota, hubo motivo para que el Señor Ministro fuese inducido en el error de creer que el artículo 4o. invocado no contenía la amplitud de facultades que le atribuían y de que hacían inmediata aplicación los Sres. Westendorp & Co., y ya no se hizo cargo, ni del texto íntegro invocado en el 2o., ni del texto íntegro invocado en el segundo párrafo de la nota, ni del alcance que tuvieran las demás disposiciones de la convención de referencia, como fundamento de su derechos de hacerse sustituir, citadas por los dichos Señores en el mismo párrafo: a saber, los artículos 5 y siguientes hasta el 12 de la misma convención.

El artículo 4o. en cuestión, incompletamente extractado en la nota de los Señores Westendorp & Cía., y controvertido consiguientemente por el Señor Ministro de Hacienda, tiene el siguiente complemento textual, que no fue comprendido en el extracto de la nota, ni tomado en cuenta en la argumentación contradictoria del Ministerio.

Dice así el extremo final del artículo controvertido:

"Si por una razón cualquiera los Señores Westendorp & Cía., *no quisieren* o no pudieren ni encargarse ellos mismos de la recaudación, *ni sustituir en*

su puesto y lugar una Sociedad o un Banco para efectuar (opérer) dicha recaudación, la comisión de intervención (controle) de la cual se hablará más adelante, tendrá el derecho de encargarse de esta operación, en nombre de los portadores de las obligaciones".

Reintegrado así el texto del artículo 4o., ya la argumentación negativa que le fue opuesta por el Gobierno, en la comunicación del Ministerio de Hacienda, viene a ser deficiente, como deficiente fue el extracto sobre que recayó la controversia. El párrafo omitido determina el verdadero alcance de la estipulación, y hace facultativo para Westendorp & Cía., la sustitución de su persona jurídica por una Sociedad o un Banco, o su elección, para efectuar el cobro de los productos de Aduanas mencionados en el artículo 4o.

Y una vez reintegrada en su totalidad esa cláusula, ya es preciso admitir que ella fue con razón invocada por los firmantes de la nota discutida, como fundamento de aquella facultad, y se explica en toda su latitud el sentido de la frase *o sus causa-habientes, (ou leurs ayants droits)* que se halla profusamente esparcida en otras muchas cláusulas del contrato de empréstito del 88, y especialmente en los artículos 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, y el adicional, de los cuales están citados los cuatro primeros, por los Señores Westendorp & Cía., en apoyo del derecho de hacerse sustituir, que derivan del texto del artículo 4o. en su conjunto, confirmado principal y plenamente por el tenor del artículo 6o. que dice así:

"Los derechos de importación y de exportación serán percibidos conforme a los aranceles de los derechos existentes. Éstos podrán no obstante ser modificados ulteriormente, ya sea a propuesta del Gobierno, ya sea por sugestión de los Señores Westendorp & Cía., *o bien del Banco o de la Sociedad que se les* sustituya en la ejecución de esta parte del Contrato, &a &a".

Por tanto, y dentro de las estipulaciones del mismo contrato, que es la ley que rige a las partes, sin necesidad de emprender una excursión por el dilatado campo del derecho civil, está manifiesto y explícito el derecho de los Señores Westendorp & Cía., a poner otro Banco, Sociedad o persona en lugar suyo, para la más importante de las facultades que les confería su calidad de contratista del empréstito del año 88, para recaudar las rentas aduaneras de la Nación, aplicándolas a las obligaciones de dicho contrato de empréstito. Y así, no existiendo en ninguna otra parte del contrato cláusula prohibitiva o restrictiva de esa facultad, conocida, como todas las estipulaciones de la convención, por los tenedores de obligaciones de ese empréstito, quienes igualmente deben conocer la disposición del artículo 15, según cuyos términos es *potestativo* a los Señores Westendorp & Co., constituir de acuerdo con el Gobierno o su delegado, *una comisión financiera* en Europa, encargada de todas las funciones de los primeros en resguardo de los intereses de los

obligatarios, es fuerza concluir, que no hay motivo legal ni pretexto razonable para cohibir el libre ejercicio de un derecho tan perfectamente establecido en la convención, como es la sustitución de la persona jurídica de los Señores Westendorp & Co. por un Banco o Sociedad que entre en lugar de ellos a ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, derivado de las disposiciones citadas por aquellos Sres., del contrato de empréstito de 1888.

En lo que respecta al de 1890, razonando la negativa del Gobierno de la República a aceptar el traspaso de referencia, dice textualmente el señor Ministro de Hacienda: "Lo dicho respecto al contrato de 1890, que está identificado y subordinado al primero, y del cual solo podríamos citar como circunstancia nueva de notoria importancia y de oportuna recordación, el compromiso contraído por Uds. (Westendorp & Co.) de tomar a firme las obligaciones de este empréstito, compromiso que no tiene conocimiento este Ministerio haya sido cumplido exactamente". Creen los infrascritos que existen efectivamente relación y conexidad, entre ambas convenciones. Hállanla, sobre todo, en la ampliación que el contrato de 1890 da a las funciones y atribuciones de la Caja de Recaudación, por los artículos 4o., 5o., 6o., 7o., y 9o.; y aun por los términos del primero de esos citados artículos, sea el 4o. de la convención, se justifica el concepto de "subordinación" emitido por el señor Ministro, pues que las £24,000 anuales destinadas a la garantía del servicio regular de intereses y amortización de las obligaciones de ese segundo empréstito, solo podrán ser cobradas por la Caja de Recaudación, sobre los derechos de Aduana, "después de haber retirado las sumas destinadas al servicio del empréstito" (6% de 1888). Artículo 4o. del contrato de 1890.

Por lo demás, ese contrato de mayo del año de 1890, publicado en la "Gaceta Oficial" No. 839 del 20 de septiembre del mismo año, no contiene una sola palabra que suponga el compromiso de parte de los Señores Westendorp & Co. de tomar *en firme* las obligaciones del camino de hierro cuya construcción aparece como objeto de la convención, y se debe presumir que exista algún otro fundamento desconocido de los infrascritos, para que el Gobierno haya hecho esa afirmación. Los compromisos asumidos por los Señores Westendorp & Co. en dicha convención, están claramente determinados en el artículo 9 de la misma, y todos ellos gravitan sobre la emisión de las obligaciones creadas para la construcción del ferrocarril de Puerto Plata a Santiago, si bien algunos se apartan de este objeto, para imponer servicios relacionados con el anterior contrato de empréstito de 1888, el cual en cierta manera y por cláusulas a él referentes recibió ligeras modificaciones. Y tanto por esto, como porque las nuevas funciones atribuidas a la Caja de Recaudación en el contrato del año 90, producen notables alteraciones en la convención del 88, especialmente para sus artículos 9 y 11, los cuales recibieron una notable modificación por

dicha causa, es preciso reconocer, como reconocen los infrascritos, que la segunda de dichas convenciones, aunque con objeto especial y distinto del que tuvo la primera, y aunque pactada solamente por los Sres. Westendorp & Co. en su nombre personal, y no con la calidad de representantes de un grupo de banqueros, como lo fue aquella, le está ligada íntimamente; y las obligaciones y los derechos en ellas estipulados, deben seguir a los estipulados en el convenio del 14 de mayo de 1888, a cualesquiera manos que éstos sean transmitidos, si no ha intervenido después alguna novación que rompa ese vínculo de derecho consentido por el Gobierno.

Ese vínculo existe desde que el Gobierno de la República pactó con Westendorp & Co. estipulaciones que afectaban, así no fuese sino en la forma, las convenciones anteriormente consentidas y pactadas con los mismos señores en representación propia y de un grupo de capitalistas, según las calidades que constan en dichas convenciones del 88; y puesto que por éstas tienen dichos Señores la facultad de hacerse sustituir o de traspasar la facultad relativa al percibo de las rentas de Aduanas de la República, y a la administración de la Caja de Recaudación, creada por aquellas convenciones, no se compadece el ejercicio de esa facultad de traspaso, con la retención de las funciones atribuidas a los referidos Westendorp & Co. respecto de la misma Caja de Recaudación, por el contrato de 1890, para los servicios relacionados con la explotación del ferrocarril de Puerto Plata a Santiago. Resultaría una situación imposible, absurda, de tal separación de contratos, y de tal concurrencia de intervenciones y responsabilidades heterogéneas, en una misma administración de los fondos que ambos convenios encomiendan a dicha Caja de Recaudación.

La controversia pendiente entre las partes, (y a la cual alude también el Señor Ministro de Hacienda en su citado oficio), sobre la distración del 65% de los productos de aduanas y su percibo directo por las oficinas del Estado, informando, como informa, una modificación tan sustancial de las estipulaciones anteriores relativas a la Caja de Recaudación, debe seguirse ventilando con los Sres. Westendorp & Co. o sus causa-habientes, cualesquiera que éstos fueren; y no llegándose a una buena inteligencia entre las partes, queda el recurso del arbitraje ante el Gobierno Neerlandés; recurso que subsiste en toda su fuerza y vigor, del contrato de 1888, las cuales no han sido objeto del anunciado traspaso.

Donde sí existe fundamento para contradecir el uso del derecho de subrogación, transferencia o cesión de acciones, y donde se halla reservada al Gobierno esa facultad de contradicción, es en la convención celebrada con el Señor den Tex Bondt, para la construcción de la primera sección del "ferrocarril Central de Santo Domingo", anexa al segundo contrato de

Westendorp & Co. y que lleva como éste, la fecha del 14 de mayo de 1890. En esa convención se halla enunciada, explícita y terminantemente, la restricción al derecho de traspaso, por los siguientes términos del artículo 18:

"El contratista tendrá el derecho de transferir todos los derechos y obligaciones que resultan de esta convención, a cualquiera persona o empresa, *de acuerdo con el parecer del Gobierno Dominicano*. Sin embargo, queda entendido que este traspaso no podrá efectuarse a favor de ninguna Nación o Gobierno extranjero, so pena de nulidad de los derechos adquiridos por la presente convención".

El Señor den Tex Bondt necesita, pues, que el Gobierno de la República esté de acuerdo con él, para efectuar el traspaso de su contrato de obras; y porque esta es una derogación al derecho común, ha sido necesario expresar tal restricción, así como la prohibición absoluta de ceder sus derechos, como contratistas del ferrocarril de Puerto Plata a Santiago, a ningún Gobierno extranjero. Ni esta ni aquella traba fueron consignadas en los contratos de los Señores Westendorp & Co., antes bien, quedaron, por los términos de las disposiciones que ellos invocan, facultades para hacerse subrogar en aquellas funciones que más interesaba al Estado, y a los obligatarios del empréstito, que fueran intervenidas y vigiladas, a cualesquiera manos que fuesen. Y esas son precisamente las funciones en que Westendorp & Co. aparecen sustituyendo su persona jurídica con la "San Domingo Improvement Company", sin sustraerse, ni hacerse sustituir en las demás disposiciones de sus contratos, no comprendidas en las notas del 27 de mayo de 1892.

Ahora, si la convención con el Señor den Tex Bondt se halla adjunta al contrato del 14 de mayo del 90 con los Señores Westendorp & Co., según lo dice expresamente el artículo 9 de este último instrumento, y su conexión se evidencia del texto del artículo 11 de la referida convención, o sea el contrato de obra con el dicho Señor den Tex Bondt, esta circunstancia no basta para anular las reservas hechas en favor del Gobierno en ese contrato de obra, y por consiguiente, subsiste en toda su fuerza y vigor la restricción y la prohibición del artículo 18, arriba mencionado. Es, por tanto, de la exclusiva competencia del Gobierno de la República resolver si convenía dar su asentimiento al traspaso que le anuncia el concesionario, o si, aunque no le es permitido oponerse a la sustitución efectuada por los Señores Westendorp & Co. en su derecho de recaudar las rentas y administrar la Caja de Recaudación, que es lo más delicado del asunto, juzga conveniente oponerse, como puede hacerlo, a que el Señor den Tex Bondt trasmita a otros empresarios sus derechos y obligaciones para la construcción del camino de hierro de Puerto Plata a Santiago.

La trascendencia que para esta importante obra pueda tener la conformidad o negativa del Gobierno, respecto del traspaso dicho, es asunto que

más incumbe a la administración y al fomento de los intereses públicos, que a las rígidas deducciones de la jurisprudencia, y por lo mismo, no consideran los infrascritos que esa materia esté comprendida en la consulta que se les ha sometido.

Resumiendo lo expuesto: 1o. Los Señores Westendorp & Co. usan de un perfecto derecho, claramente establecido por los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del contrato estipulado con ellos por el Gobierno de la República, que lleva la fecha definitiva del 16 de agosto de 1888, al hacerse sustituir por otra sociedad en las funciones y obligaciones que se determinan por las citadas cláusulas, y permaneciendo en causa por lo que respecta a las demás disposiciones del referido contrato, no mencionadas en sus notificaciones de traspaso, fecha 27 de mayo de 1892.

2o.— Los Señores Westendorp & Co. usan más bien de una obligación correlativa a la mencionada sustitución que de un derecho propiamente dicho, adscribiendo a la misma sustitución de persona las funciones que le están conferidas por los artículos 4, 5, 6, 7, y 9 de la convención celebrada por los mismos Señores el 14 de mayo de 1890, funciones todas relacionadas con la Administración de la Caja de Recaudación, creada al servicio del anterior contrato de empréstito, y permaneciendo en causa para todas las demás funciones y obligaciones que determinan los artículos restantes de la enunciada convención de 1890.

3o.— El Señor den Tex Bondt necesita el consentimiento del Gobierno para ceder o traspasar a otra persona o empresa sus derechos y obligaciones como contratista para la construcción del ferrocarril de Puerto Plata, y es, por consiguiente, al Gobierno a quien toca exclusivamente dilucidar si conviene o no a los intereses públicos, oponerse a que ese contrato de obra, con todos sus derechos y responsabilidades, sea transferido a las mismas personas que, en sustitución de Westendorp & Co., están obligadas "a emplear el producto de la emisión de 540,000 libras esterlinas en la construcción del ferrocarril susodicho", según el tenor literal de la cláusula 6a. del artículo 9o. del contrato de 1890.

Esta es la opinión de los infrascritos, fundada fielmente en el texto explícito de las aludidas convenciones, y en los hechos y documentos que han sido sometidos a la presente consulta, por el Señor Presidente de la República.

Santo Domingo, enero 20 de 1893.

Pedro T. Garrido.— Genaro Pérez.— Augusto Franco Bidó.— Manuel de J. Galván.

"Gaceta Oficial", Año XX, No. 964. Febrero 11, 1893.

DOCUMENTO Nº 16

Informe de la Comisión de Hacienda

Sesión del 13 de marzo de 1893. El Diputado Estrella, por la Comisión de Hacienda, dijo:

Ciudadanos Diputados:

Sin perjuicio del indeclinable interés con que la Comisión infrascrita debía estudiar y ha estudiado la convención mediante la cual ha sido por una parte reconocido el transferimiento de los contratos de empréstitos de 1888 y 1890 a la "Improvement Company of New York", y por otra parte convertidos esos dos empréstitos en solo una operación financiera, sin perjuicio de aquel indeclinable interés, la Comisión infrascrita, cediendo a la urgencia ya decretada por este Alto Cuerpo, tiene a honra emitiros su dictamen respecto de aquella convención.

No hay a juicio de los infrascritos ninguna objeción pertinente que oponer a los términos de los varios compromisos que están contenidos y reasumidos en el transferimiento y conversión de los citados empréstitos. Que si acerca de una o varias de las estipulaciones pactadas pudiera el excesivo celo patriótico aconsejar alguna discrepancia más o menos formal, más o menos sustancial, no sería este el momento de hacerlo, por cuanto que ya hoy no se trata de crear compromisos de antiguo creados, sino que pura y simplemente se trata de darle prestigio a nuestro crédito, de antemano comprometido, y de hacer hoy posible, mediante una conversión racional, la existencia económica del Estado.

La única cuestión que podría ameritar un particular estudio sería, en todo caso, la de averiguar si los señores Westendorp & Ca., tenían autorización legal bastante para efectuar el transferimiento de sus derechos a terceras personas; y acerca de esta cuestión que es en sí una de las más elementales de derecho común, supone la Comisión infrascrita que no os es desconocida la forma luminosa en que ha sido resuelta por nuestros ilustrados jurisconsultos los Licenciados Galván, Pérez, Garrido y Bidó.

Con ellos y con el Poder Ejecutivo que ha hecho suya la opinión de tan ilustrados jurisconsultos, cree la Comisión infrascrita que sólo habiéndose expresamente comprometido los señores Westendorp & Ca. a no transferir sus derechos, era como podría haberse desconocido el mismo transferimiento de que se trata.

Por todo lo expuesto os será fácil comprender que la comisión infrascrita sustenta un criterio enteramente favorable a la aprobación de la convención celebrada entre el Gobierno de la República Dominicana y la "San Domingo

Improvement Company of New York", en fecha 28 de enero del año en curso, y al efecto os somete el siguiente proyecto decreto:

(Véase el proyecto anexo a la Memoria de Hacienda).

La Comisión:— *H. Pierret*.— *José Estay*.— *Juan Estrella*.— *H. Duquela*.

"Gaceta Oficial", marzo 25 de 1893, Año XX, Núm. 970.

DOCUMENTO Nº 17

Ley aprobatoria de la transferencia de los derechos de Westendorp a la San Domingo Improvement Co.

EL CONGRESO NACIONAL
El nombre de la República,
y por iniciativa del Poder Ejecutivo

Vista la convención celebrada entre el Poder Ejecutivo de la República, representado por el ciudadano Ministro de Hacienda y Comercio, y la "San Domingo Improvement Company of New York" en fecha 28 de enero del año en curso, contenidas en las siguientes cláusulas:

Entre el Gobierno Dominicano, representado por su Ministro de Hacienda y Comercio, debidamente autorizado de una parte, y de otra parte la "San Domingo Improvement Company of New York" representada por el señor Charles W. Wells, Vicepresidente de la dicha Compañía, provisto de plenos poderes y debidamente autorizado por ella, se ha convenido y pactado lo siguiente:

Art. lo.— El Gobierno Dominicano acepta la sustitución hecha por los señores Westendorp & Ca. de Amsterdam (Holanda) a la "San Domingo Improvement Company of New York", por acto notificado el 27 de mayo de 1892, de los derechos y obligaciones inherentes a los contratos de Empréstitos de 1888 y 1890, y por la cual entra la referida Compañía de pleno derecho a ejercer las funciones y prerrogativas de los citados señores, recaudando directamente todas las rentas aduaneras de la República Dominicana, y a llenar las obligaciones que los instrumentos de 1888 y 1890, imponían a los señores Westendorp & Ca.

Párrafo.— Por el presente contrato el Gobierno pone a la Compañía en posesión de la Caja de Recaudación (Regie de Aduana) y autoriza y obliga a los directores de ella a ejercer en adelante los poderes conferídoles antes por los señores Westendorp & Ca., y después por la Compañía en virtud de dichos contratos de 1888 y 1890 y por los contratos y leyes convenidos por la presente negociación.

Art. 2o.— Todas las rentas ordinarias y extraordinarias de la República Dominicana procedentes de leyes existentes y las que puedan ser creadas en lo futuro serán recaudadas de pleno derecho por la Compañía, y ésta tendrá el derecho de percibirlas y destinarlas al pago de las deudas del Gobierno.

Art. 3o.- Bajo la condición de percibir todas las entradas ordinarias y extraordinarias arriba mencionadas, la Compañía se compromete a pagar al Gobierno para el servicio del presupuesto nacional la suma de noventa mil pesos, plata corriente, mensualmente, desde el 1o. de marzo, bajo las condiciones siguientes:

(1o.) Los pagos se harán por entregas de a 22.500 pesos mejicanos los días 1, 8, 15 y 22 de cada mes.

(2o.) Ningún pago de dicha suma se hará por anticipación y ningún Director, ni el Director General, ni el Contralor General de la Caja de Recaudación, tendrán facultades de aceptar giros a plazos o a cargo de estas sumas, o por cualquier parte de ellas.

(3o.) El Gobierno garantiza una reforma radical en el servicio de las Aduanas, y a ese fin se compromete a lo siguiente:

a) Todos los oficiales y empleados de las Aduanas serán nombrados de común acuerdo entre el Ministro de Hacienda y el Director General de la Caja de Recaudación.

b) En caso de falta de acuerdo sobre tales nombramientos desempeñará temporalmente el empleo vacante, si fuere dominicano dicho Director, hasta que se haya provisto definitivamente el Director de la Caja de Recaudación de la Aduana respectiva y de común acuerdo dicho empleo. Si el Director de la Regie no fuere ciudadano dominicano, el oficial primero de la Aduana desempeñará la vacante temporalmente hasta que se haga el nombramiento definitivo; pero la demora de éste no podrá exceder de un mes.

c) Los oficiales y empleados de las Aduanas serán removidos a requerimiento del Director General de la Caja de Recaudación y de común acuerdo con el Ministro de Hacienda.

d) Ningún miembro de la familia del Interventor de la Aduana o de la del Director de la Regie podrá ser nombrado oficial o empleado de la misma aduana.

e) El Director General de la Caja de Recaudación tendrá derecho, siempre que lo considere oportuno, de nombrar un Contralor General de la Regie que tendrá poderes para controlar las operaciones de las Aduanas lo mismo que los libros, documentos y las cuentas de éstas.

f) Los Interventores de las Aduanas estarán obligados a pedir la asistencia y el control de los Directores de la Regie, en sus puertos respectivos, durante la verificación de las mercaderías importadas o exportadas, y el Director Regie estará obligado a prestar esta asistencia y control.

Ninguna mercadería podrá salir de la Aduana, sea de importación o de exportación, sin esta verificación y control.

g) Un ejemplar de todos los manifiestos que se presentan actualmente a la Administración de Hacienda, será entregado temporalmente al Director de la Regie, y el Director de la Regie se servirá de este ejemplar durante la verificación; después de efectuada será devuelto a la Administración de Hacienda.

h) Todas las liquidaciones serán visadas y firmadas por los Directores respectivos de la Regie, y los comerciantes no están obligados a firmar los pagarés por los derechos indicados si la liquidación no está visada por el Director de la Regie.

i) Ningún pagaré por derechos causados será válido si no está visado asimismo por el referido Director.

(4o.) En caso de que no se cumplan las cláusulas del presente contrato (especialmente respecto a la Administración de las Aduanas, del convenio celebrado con la compañía en la misma fecha, y de la Ley que ratificará el Congreso simultáneamente con el presente), los pagos de la suma mensual para el presupuesto cesarán, y los efectos del presente contrato serán suspendidos.

En este caso la Caja de Recaudación cobrará y guardará el treinta y cinco por ciento del total de las entradas para el servicio de los empréstitos, y las otras cláusulas del convenio de diciembre de 1891 quedarán en vigor para lo futuro.

Art. 4o.— (I) Considerando que el Congreso autorizará la emisión de bonos oro 4% que se llamarán "Dominican Gold" ("Debentures") por la suma de 1,250,000 pesos nominales oro americano, para pagar con ellos la Deuda Interior de la República que asciende más o menos a 658,000 pesos mejicanos, el Gobierno se compromete a crear inmediatamente tales "debentures" y a entregarlos de una vez a la compañía. Los intereses se pagarán semestralmente el 1o. de marzo y el 1o. de septiembre de cada año en la misma moneda de oro y en los mercados de Europa y de América que la Compañía indique. Estos "Debentures" serán pagaderos con una amortización de $6,000 oro al año para cancelar esta deuda en 66 años.

II) La Compañía recibirá por medio de la Caja de Recaudación el pago de los intereses y de la amortización de la deuda precitada, sobre las entradas de las Aduanas y otras rentas de la República, después del pago de los servicios de los empréstitos 1888 y 1890. Como garantía especial, fijada por la ley, la Compañía cobrará desde el 1o. de marzo de 1893 (y el Gobierno lo traspasa por el presente a la compañía): 1o. el montante del aumento íntegro de todos los derechos de puerto de la República, decretada por la ley del 19 de mayo 1892 afectado al pago de un saldo de $80,000 adeudadas al Sr. Cosme Batlle, que asciende hasta ahora a un término medio anual de $35,000 mejicanos; 2o. El recargo de 5% de los derechos de importación que ha sido creada en favor del Banco

Nacional de Santo Domingo y afectado a él, después del pago de la deuda por cuya razón este recargo ha sido decretado -recargo que hasta ahora produce una suma anual de cerca de $60,000 mejicanos:- 3o. como el recargo de que se trata en el párrafo anterior está gravado con una deuda de $243,000 a favor del Banco, el Gobierno pagará a la Compañía la suma de $25,000 mejicanos el 1o. de septiembre y el 1o. de marzo de cada año, hasta que la deuda del Banco quede cancelada enteramente y hasta que estos recargos y derechos especiales queden libres de todo gravamen. Por esta suma el Gobierno proporciona a la Compañía la garantía de una persona de su confianza. La Compañía anulará los cupones y amortizará los bonos por un montante igual a las sumas pagadas a ella según las estipulaciones del artículo presente: 4o. En consideración del pago por la Compañía de la dicha Deuda Interior de $658,000 mejicanos, el 1o. de marzo de 1895 o antes, el Gobierno dará en pago a la Compañía la totalidad de los "Debentures". Sin embargo, dicho pago por la Compañía se hará solamente si las cláusulas del presente Contrato, las del convenio de esta fecha, y las de la ley que ratificará el Congreso simultáneamente con el presente Contrato, fueren plenamente observadas por parte del Gobierno.

Art. 5o.— Los pagos de los intereses y amortización de todos los empréstitos de la República Dominicana serán hechos mensualmente a la Compañía en New York por la Caja de Recaudación (Regie) o por las que sustituyan a ella o por la comisión financiera; después del reembolso de los avances sobre el presupuesto, la Compañía pagará los cupones y amortización de las deudas con este dinero según las obligaciones respectivas.

Art. 6o.— La Compañía tendrá el derecho de transferir todos los derechos y obligaciones procedentes de este contrato y de la ley ratificada por el Congreso simultáneamente con el presente, bajo la condición sine qua non de que este traspaso no se podrá hacer a favor de ningún Gobierno ni Nación extranjera so pena de nulidad de los derechos concedidos.

Considerando: que la plata mejicana no es moneda nacional, ni de curso forzoso en la República, y que por tanto los pagos y desembolsos a que dé lugar la convención del 28 de enero del presente año, deben ejecutarse en moneda corriente, sin determinación de cuño especial;

Considerando: que por lo que respecta a la obligación impuesta a los Interventores de Aduanas en la estipulación de la cláusula 3a. de la predicha convención, convendría establecer la facilidad de que en casos imprevistos el Director de la Regie pueda asistir a la verificación; por medio de una tercera persona que le represente;

Considerando: que conviene dejar de una vez y para siempre definida la facultad o el derecho que asiste a la República para librarse, en cualquier tiempo, de las obligaciones pactadas en la convención ya aludida;

RESUELVE:

Aprobar la convención celebrada por el Poder Ejecutivo, en 28 de enero del año en curso, mediante las siguientes modificaciones:

En el inciso 3o. del artículo lo., inciso 1o. del artículo 4o., 2o. párrafo del inciso 2o., 3er. párrafo del inciso 3o. del referido artículo 4o., fueron sustituidas las palabras *mejicanos* por *moneda de plata corriente*.

La estipulación f de la cláusula 3a. fue modificada así:

Los Interventores de las Aduanas estarán obligados a pedir la asistencia y el Control de los Directores de la Regie, o quienes los representen en sus puertos respectivos, durante la verificación de las mercaderías importadas o exportadas; y el Director de la Regie o quien lo represente estará obligado a prestar esta asistencia y control.

Fue agregada la siguiente cláusula adicional:

Queda la República habilitada para redimir esta deuda, cuando lo tenga a bien, previo aviso de seis meses antes, a la Compañía.

Envíese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dada en la Sala de sesiones del Congreso Nacional, a los 23 días del mes de marzo de 1893, año 50o. de la Independencia y 30o. de la Restauración.

El Vice-Presidente en Funciones de Presidente, *F. García Godoy*.— Los Secretarios.— *R. Martínez*.— *C. Noboa hijo*.— Ejecútese, comuníquese por la Secretaria correspondiente, publicándose en todo el territorio de la República para su cumplimiento.— Dado en la ciudad de Santo Domingo, en el Palacio Nacional, a los veinticuatro días de marzo de 1893, año 50o. de la Independencia y 30o. de la Restauración.— El Presidente de la República.— *U. HEUREAUX*.— Refrendado.— El Ministro de Hacienda y Comercio into.— *P. A. Lluberes*.— 24 de marzo 1893.

"Gaceta Oficial", Año XX, No. 971, abril 1o. de 1893.

DOCUMENTO Nº 18

Primera Ley de Conversión bajo el régimen de la San Domingo Improvement Co.

Núm. 3275.— DECRETO del C. N. relativo a la reducción de los intereses anuales de la Deuda Exterior de la República.

Dios, Patria y Libertad.— República Dominicana.— El Congreso Nacional.— En Nombre de la República.

Por iniciativa del Poder Ejecutivo, declarada la urgencia y previas las tres lecturas constitucionales, ha dado el siguiente

DECRETO:

Art. lo.— (1) Con el propósito de reducir los intereses anuales de la Deuda Exterior de la República se ha convenido que la "San Domingo Improvement Company of New York" emprenderá en seguida la conversión de los bonos 6% de los Empréstitos denominados 1888 y 1890, reembolsables según la presente ley en 30 y 56 años, respectivamente.

(2) A este fin el Gobierno preparará inmediatamente, y los entregará a la Compañía, sus bonos oro 4% de £20 y £100 cada uno, con la denominación de "Bonos oro consolidados de la República Dominicana" (Consolidated Gold Bonds of the Dominican Republic) por una suma total de £2,035,000, ganando un interés de 4% anual, pagadero semestralmente el primero de enero y el primero de julio de cada año, en los mercados de Europa y de América que la Compañía indique.

(3) Estos bonos serán reembolsados en 66 años a contar de la fecha de su emisión, y a este fin el Gobierno Dominicano pagará una amortización de 1/2% anual del capital.

(4) Estos bonos serán garantizados por la totalidad de las entradas aduaneras creadas por la ley actual y las que más tarde puedan crearse en virtud de nuevas leyes en la República Dominicana, las cuales serán percibidas por la Compañía o sus delegados, agentes o sustitutos, o bien por la Comisión financiera de que se tratará más luego, conforme a los términos del contrato del 14 de julio de 1888 firmado por los Sres. Westendorp & Co. modificado y aprobado, y según contrato de esta fecha celebrado entre el Poder Ejecutivo y la Compañía. Estos bonos serán también garantizados por la primera hipoteca sobre la línea trazada, material y accesorios del Ferrocarril Central Dominicano, sección de Puerto Plata a Santiago. Los intereses y la amortización de los bonos oro consolidados serán pagados a la Compañía mensualmente con las entradas aduaneras y con otros ingresos del Gobierno causados por las operaciones de la Caja de Recaudación.

(5) Los intereses atrasados y el montante de la amortización que se debía al primero de marzo a los señores Westendorp & Co. a favor de los tenedores de bonos de los empréstitos 1888 y 1890, ascendente a la suma de £119,000 serán pagados en estos bonos oro consolidados 4% de la emisión de que se habla en el presente contrato.

(6) Se concede como derecho a la Compañía, por sus comisiones y gastos inherentes a esta conversión un ½% al año durante el período de 66 años, cuya suma será capitalizada con su amortización en bonos oro 4% consolidados de esta emisión a requerimiento de la Compañía.

Y considerando que los intereses que paga el Gobierno actualmente sobre la suma de £1,650,000 a que ascienden los empréstitos de 1888 y 1890, cuyos

intereses montan a £112,645 anuales por interés y amortización de dichos empréstitos se reducen convirtiendo la deuda al 4% oro consolidado a £91,575 resultando una diferencia en beneficio del Estado de £21,070 anuales, sean $145,490 moneda corriente, cuya suma durante los 66 años de la amortización representa un capital de $9,734.340; actualmente afectadas por 658 mil pesos, en virtud de contratos que constituyen una segunda hipoteca de las entradas aduaneras, conviene con la "San Domingo Improvement Company of New York" en que ella tome a firme la suma de $1,250,000 nominales en bonos de 4% oro que serán emitidos para pagar la dicha deuda y redimir los compromisos mencionados.

El Gobierno emitirá dichos bonos garantizándolos con las rentas generales de la República Dominicana, y especialmente por los derechos de puerto, creados por la ley del 19 de mayo de 1890, y también por los derechos aduaneros especiales creados en favor del Banco Nacional y comprometidos a este mismo, después de haber cancelado las deudas por las cuales estos derechos han sido creados.

Con el objeto de consolidar el crédito de los bonos de la República Dominicana y de facilitar la conversión que se ha de hacer para pagar la deuda interior y asegurar el pago del presupuesto, y también para la garantía de las dos partes contratantes, queda convenido que la "San Domingo Improvement Company of New York" estará obligada en caso de falta de pago del capital e intereses por falta del Gobierno o por otra necesidad manifiesta, a pedir a los Gobiernos de Holanda, Bélgica, Inglaterra, Francia y de los Estados Unidos de América, (en cuyos países los bonos de los empréstitos 1888 y 1890 están colocados) en nombrar cada uno de ellos uno de sus ciudadanos tenedores de bonos, como miembro de la Comisión financiera de que se habla en los artículos 4 y 15 del contrato de 1888 sancionado por el Congreso de la República Dominicana, y las personas así nombradas constituirán la comisión financiera arriba mencionada, pero la "San Domingo Improvement Company" no tendrá el derecho de pedir a los Gobiernos arriba mencionados, o a cualquier de ellos, de nombrar a su miembro de dicha Comisión, a menos que sus ciudadanos, en el momento de tal requerimiento, posean bonos dominicanos de "las emisiones de 1888 y 1890",[1] y por la suma total de £100,000 a lo menos.

Art. 2o.— Todas las estipulaciones de los contratos de 1888 y 1890 celebrados entre el Gobierno Dominicano y los señores Westendorp & Co. para la garantía y validez de los tenedores de bonos de los empréstitos

[1]Estas palabras fueron suprimidas por resolución del C. N. de fecha 12 de Junio de 1896.

mencionados, quedan en toda su fuerza y vigor, exceptuando la parte en que han sido modificados por la presente Ley, y por los contratos firmados en esta fecha entre las partes contratantes.

Art. 3o.— La Compañía recibirá desde el 1o. de marzo en adelante para los intereses y amortización de las £1,650,000 nominales en bonos 4% oro consolidados la suma de £72,450 oro al año, pagaderos en mensualidades de £6,037 shgs.

Cuando los bonos estén emitidos en pago de la construcción del ferrocarril de Bajabonico a Santiago, estas mensualidades serán aumentadas con una suma correspondiente para el pago de los intereses y de la amortización de los bonos emitidos con este fin.

Art. 4o.— Las obligaciones o cualesquiera otros títulos emitidos por la "San Domingo Improvement Company", o los que sus derechos representen en virtud de este Contrato, no podrán ser gravados por el Gobierno Dominicano, con ningún derecho de registro, de emisión, de timbres, ni de ningún impuesto análogo, sobre la venta y la transmisión de las obligaciones, ni sobre los intereses producidos por esos valores. Además, todas las operaciones de la Caja General de Recaudación, de cualquiera naturaleza que sean, no serán nunca sometidas a ningún impuesto.

Art. 5o.— La Compañía tendrá el derecho de transferir todos los derechos y obligaciones procedentes de este contrato y de esta ley, bajo la condición, sin embargo, que este traspaso no se pueda hacer a favor de ningún Gobierno extranjero, so pena de nulidad de los derechos concedidos.

Art. 6o.— Queda la República habilitada para redimir este empréstito, cuando lo juzgue a bien, previo aviso de seis meses antes a la Compañía.

Envíese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dado en la sala de sesiones del Congreso Nacional, a los 23 días del mes de marzo de 1893; años 50 de la Independencia y 30 de la Restauración.

El Vice-Presidente, en funciones de Presidente.— *F. García Godoy*.— Los Secretarios.— *R. García Martínez*.— *C. Noboa hijo*.

Ejecútese, comuníquese, por la Secretaria correspondiente, publicándose en todo el Territorio de la República para su cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, el día 24 del mes de marzo de 1893; años 50 de la Independencia y 30 de la Restauración.

U. HEUREAUX.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio, interino, *P. A. Lluberes*.

Colección de Leyes, Decretos &.—1893. Páginas 64-68.—Tomo XIII, 1893-1895.

DOCUMENTO Nº 19

Contrato Secreto para distribución Empréstito

CONVENIO privado celebrado entre el Gobierno Dominicano representado por su Ministro de Hacienda y Comercio debidamente autorizado por una parte y la "San Domingo Improvement Company of New York" representada por Mr. Smith M. Weed, su Presidente, con plenos poderes por la otra parte: Como adición al contrato Público Ejecutivo celebrado entre las partes arriba mencionadas, en esta fecha, y de las leyes decretadas por el Congreso Nacional simultáneamente con el presente, se estipula y conviene lo siguiente.

Art. lo.— Los Debentures en oro adicionales se harán en la forma que la Compañía establezca: estarán firmados y sellados por el Ministro de Hacienda y Comercio y por el de Fomento y Obras Públicas en nombre de la República y refrendados en nombre de la Compañía por su Presidente o Vice Presidente. Estos Debentures serán cobrables al portador con los cupones anexos para el pago de intereses, pero pueden ser registrados a petición del tenedor.

Art. 2o.— La deuda interior que será pagada por la Compañía en la forma que más adelante se especifica, y que, con la suma de $131,000 mejicanos pagados al contado en esta fecha, y los servicios y gastos de la referida Compañía constituyen la razón de la emisión completa de los Debentures en oro adicionales estipulados en el referido contrato público ejecutivo, es poco más o menos como sigue:

Al Sr. Cosme Batlle en moneda mejicana	$500,000
Al Sr. Jacobo de Lemos en moneda mejicana	102,689
Al Sr. Juan Bta. Vicini en moneda mejicana	152,706
Al Sr. Eugenio Abreu & Co. en moneda mejicana	11,490

Las deudas del Sr. Cosme Batlle y del Sr. Jacobo de Lemos serán convertidas en oro al tipo de sesenta centavos por peso de plata, y ganarán un interés tan solo de 1% mensual.

Art. 3o.— La Compañía estará obligada a pagar su deuda interior en razón a la emisión total de los Debentures en oro adicionales en la forma siguiente:

Al Sr.	Cosme	Batlle	en Stbre.	15 — 1894	$22,500
id	id	id	Dicbre.	15 — 1894	"22,500
id	id	id	Marzo	15 — 1895	"22,500
id	id	id	Junio	15 — 1895	"27,000
id	id	id	Stbre.	15 — 1895	"27,000
id	id	id	Dicbre.	15 — 1895	"27,000
id	id	id	Marzo	15 — 1896	"27,000

id	id	id	Junio	15 — 1896	"30,000
id	id	id	Stbre.	15 — 1896	"30,000
id	id	id	Dicbre.	15 — 1896	"30,000

(El balance que resulte a favor del referido Sr. Cosme Batlle en febrero 15 de 1897 será pagado inmediatamente por la Compañía).

Al Sr. J. de Lemos mensualmente oro	$ 4,000
Al Sr. J. B. Vicini id plata mejicana	" 11,000
Al Sr. E. Abreu & Co. id id. id	" 1,000

El pago de las anteriores entregas que se hará por la Compañía a los Sres. Jacobo de Lemos, Juan Bta. Vicini y Eugenio Abreu & Co. comenzará el 30 de marzo de 1894.

Art. 4o.— La Compañía estará redimida de la obligación de pagar estas deudas en caso de falta de cumplimiento por parte del Gobierno a las estipulaciones de la ley promulgada en marzo 24 de 1893 al Contrato con esta Compañía aprobado en marzo 23 del mismo año, y al Contrato privado ejecutivo fechado el 28 de enero del precitado año de 1893 y en las prescripciones de los contratos de esta fecha y las leyes votadas de conformidad a estos.

Hecho y firmado de buena fe y por duplicado en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, en la fecha veintiuno de marzo del año mil ochocientos noventa y cuatro.

Firmado: *Rivas*

The San Domingo Improvement
Company of New York by
Smith M. Weed,
Presidente.

Legajo 41, Documento B, año 1894. Sec. Hacienda y Comercio.

DOCUMENTO Nº 20

Segunda Emisión Debentures

Núm. 3399.— CONTRATO celebrado entre el Gobierno Dominicano, representado por su Ministro de Hacienda y Comercio, y la "San Domingo Improvement Company of New York", representada por su Presidente Smith M. Weed, y resolución del C. N. aprobando dicho Contrato.

Dios, Patria y Libertad.— República Dominicana.— El Congreso Nacional.— En nombre de la República.— Declarada la urgencia.

Visto el contrato celebrado entre el Gobierno Dominicano, debidamente representado por su Ministro de Hacienda y Comercio, y la "San Domingo Improvement Company of New York", representada por su Presidente el señor Smith M. Weed; el cual contrato está contenido en los siguientes términos y cláusulas:

En atención a que el Congreso Nacional decretó por la ley promulgada el 24 de marzo de 1893 la emisión de los Debentures de oro, 4%, de esta República, hasta la cantidad de $1,250,000 nominal cuyos Debentures además de ser una carga general para las entradas de la República, fueron garantizados especialmente por los derechos de puerto establecidos por la ley de 19 de mayo de 1892, y por los derechos especiales de Aduana establecidos en favor del Banco Nacional de Santo Domingo, después que se hayan cancelado las deudas para las cuales estos derechos fueran establecidos;

Atendiendo: a que el Gobierno, por contrato con dicha Compañía, aprobado por el Congreso en 23 de marzo de 1893, hizo un cargo de $50,000 anuales en el Presupuesto, hasta que lo adeudado al Banco Nacional fuese enteramente pagado;

Atendiendo: a que este recargo, así como otras necesidades del Gobierno, ordinarias y extraordinarias, ocasionadas por circunstancias imprevistas, tales como gastos de guerra, y la gran depreciación de la moneda de plata, han dado lugar a la creación de varias deudas interiores, alcanzando al presente a la suma de $897,000 plata, próximamente, cuyo pago con las rentas actuales estima el Gobierno que es imposible efectuar;

Atendiendo: a que la gran baja en el valor de la plata en los mercados principales del mundo, además de causar grandes pérdidas a la riqueza pública, ha perturbado considerablemente al Gobierno en todas sus transacciones fiscales, haciendo necesario, lo mismo en bien de los intereses del pueblo que los del Gobierno, que todas las operaciones públicas y privadas, sean efectuadas sobre la base de un valor en oro.

En tal virtud se ha convenido y pactado lo siguiente:

Artículo 1o.— La Compañía pagará inmediatamente al Gobierno la cantidad de $51,000 mejicanos, para habilitarle a que salde sus compromisos con la Unión Postal Universal; y del mismo modo entregará al firmarse el presente Contrato, en poder del Tesoro Público, para cubrir el déficit que tiene la Contaduría General a la fecha, la suma de $80,000 en plata mejicana.

Artículo 2o.— La referida emisión de los Debentures oro, 4%, creada por la ley de 23 de marzo de 1893, ascendente a la suma nominal de $1,250,000 se elevará para los efectos del presente Convenio, a la cifra de $2,500,000 para el pago de la deuda interior, y para habilitar al Gobierno a dejar su Presupuesto libre de ningún otro cargo, que no sea el de las atenciones ordinarias consignadas

en el mismo. En tal virtud la "San Domingo Improvement Company of New York", conviene en tomar "firme" la suma de $1,250,000 de debentures adicionales, y tanto éstos, como los primitivamente emitidos, serán garantizados con la especial garantía de que se hace mención en el artículo 3o., y con los fondos generales de las rentas de la República. El Gobierno creará inmediatamente tales Debentures y los entregará en seguida a la Compañía conjuntamente con el cupón de septiembre de 1894. El interés sobre los dichos Debentures será pagado semestralmente el 1o. de marzo y el 1o. de septiembre de cada año, en moneda de oro americano, cuyo interés con el fondo de amortización, será pagado a la referida Compañía puntualmente por la Caja de Recaudación.

Art. 3o.— Los derechos adicionales de puerto establecidos por la Ley de 19 de mayo de 1892, los cuales constituyen una de las garantías especiales respecto de los Debentures, según lo establecido por la ley 24 de marzo de 1893, constituyen la garantía del total de la emisión de los referidos Debentures, ascendente a la suma de $2,500,000 nominales. Y se conviene en que la Caja de Recaudación entregará a la "San Domingo Improvement Company of New York" lo que recaude por ese concepto, conforme a las prescripciones del Contrato entre el Gobierno y la Compañía, fechado el 28 de enero de 1893, aprobado por el Congreso Nacional en su decreto votado el 23 de marzo del mismo año, y que entregará también a la Compañía los balances sobrantes de las rentas generales de la República, después de hacer los pagos de los cargos que sobre ella recaen según lo especifica el artículo 8o. de este convenio.

Artículo 4o. El Gobierno presentará inmediatamente al Congreso una ley decretando el pago en oro de todos los derechos sobre importación y exportación, de derechos de puerto, permiso de costas y demás acreencias del Gobierno; también se estipulará en dicha ley que el pago en oro se efectuará desde el día 1o. de junio de este año en adelante.

Art. 5o.— Por una nueva ley que se presentará al Congreso se decretará que las rentas generales las formarán las rentas siguientes: Derechos de importación. El tipo de éstos será reducido de modo que llegue a ser un 45% sobre aforo, según la ley de Arancel, derechos de exportación, de permiso de costa, derechos de puerto, (el 50%, exceptuando al 50% afectado a determinado contrato por la Aduana de esta Capital del referido derecho de puerto), el 1½% sobre aforo para obras públicas, el 1½% también sobre aforo para gastos de guerra, el ½% id id., destinado al monumento de Colón y el 1½% id. id., para la deuda extranjera cobrable en oro, en sustitución del 2% que actualmente se cobra en plata mejicana, destinado a la cancelación de dicha deuda.

Art. 6o.— Además de las rentas generales precedentes, la referida ley estipulará los siguientes derechos especiales que serán recaudados del mismo modo que los anteriores, a saber: Banco Nacional de Santo Domingo. Se establecerá

un recargo para la cancelación de la deuda con el Banco de 3½% oro, en sustitución del 5% plata mejicana que actualmente se cobra para dicho fin. Los apartados de los derechos aduaneros aplicados a la canalización del río Yaque, la construcción de la Gobernación de Montecristi, el ferrocarril de Sánchez, el faro y el templo católico de Macorís, serán pagados en oro, o su equivalente, en la proporción relativa al producto que hasta ahora les ha correspondido, según los contratos y concesiones respectivas, y destinados al objeto para que han sido creados según los referidos contratos y concesiones.

Art. 7o.— La mitad de los derechos de puertos adicionales será destinada especialmente a la garantía de los Debentures oro, 4%, según lo expresado en este convenio en el artículo 3.

Art. 8o.— Contra las entradas generales estipuladas en el artículo 5o. de este convenio se cargará lo siguiente, en este orden:

Presupuesto. Éste quedó determinado por la ley de 21 de marzo de 1893, en la suma de $90,000 que al tipo de la plata que entonces prevalecía, es actualmente el equivalente de $60,000 oro, próximamente, y aunque esta suma resulta insuficiente para las necesidades del Gobierno, es decir, para cubrir las atenciones del Presupuesto de la República y otras erogaciones indispensables, el Gobierno, estimando en mucho, tanto el espíritu como la letra de sus compromisos, no dará paso alguno que perjudique a las garantías de los tenedores de sus bonos de oro consolidados, 4%; por lo tanto él distribuye su presupuesto de modo que la referida suma de $60,000 oro, tendrá prioridad únicamente sobre las obligaciones de los empréstitos vigentes, a saber:

1.— Para el Presupuesto, por mes oro	$ 60,000
2.— Interés y fondo de amortización del Empréstito bonos oro consolidados 4%, es £1,610,000 que a razón de £6,037.10 chs. equivalen a oro por mes	30,187
3.— Adición en el Presupuesto, por mes, oro.....	10,000
Para el pago del servicio de la Caja de Recaudación	2,000
Pagos locales: en Macorís, Montecristi, Sánchez, estimados por mes, oro	4,000
Obras Públicas: Se calcula el producido destinado a cubrir los gastos de Obras Públicas en $36,900 anuales, que hace por mes	3,075
Gastos de Guerra. Se calcula el producido de 11/2% destinado a cubrir los gastos de guerra en $36,900 oro por año, o sea la suma por mes de	3,075

Articulo 9o.— La Caja de Recaudación remitirá de hoy en adelante a la Compañía en New York cualquier sobrante en efectivo de las rentas generales

mencionadas en el Artículo 5o. de este Convenio que resulte después de haber hecho únicamente los pagos especificados en el artículo anterior, y la Compañía cancelará los cupones y redimirá los Debentures hasta el montante de la suma que así perciba y de las sumas que también se le paguen por los procedimientos de la garantía especial mencionada en el articulo 3o. de este convenio hasta que todos los Debentures hayan sido totalmente cancelados.

Artículo 10o.— La Compañía tendrá derecho a traspasar todos sus derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, a condición de notificárselo previamente al Gobierno Dominicano. Se estipula, sin embargo, que este traspaso no lo podrá hacer ningún Gobierno extranjero bajo pena de que ipso-facto queden anulados los derechos adquiridos por la Compañía por virtud del presente Contrato;

Considerando: que la celebración de dicho Contrato ha obedecido al propósito de cancelar algunas deudas ocasionadas por las emergencias de la baja de la plata,

RESUELVE:

Art. lo.— Aprobar en todas sus partes el Contrato de referencia.

Art. 2o.— Envíese al Poder Ejecutivo a los fines constitucionales.

Dada en la Sala de sesiones del Congreso Nacional, a los 28 días del mes de abril de 1894; años 51 de la Independencia y 31 de la Restauración.

El Presidente.— *George Curiel.*— Los Secretarios.— *R. García Martínez.*— *C. Noboa hijo.*

Ejecútese, comuníquese por la Secretaría correspondiente, publicándose en todo el territorio de la República para su cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, el día 28 de abril de 1894; años 51 de la Independencia y 31 de la Restauración.

El Presidente de la República,
U. HEUREAUX.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio.— *Mod. Rivas.*

Colección de Leyes, &.— Tomo XII, año 1894.

DOCUMENTO Nº 21

Núm. 3746.

DECRETO del P. E. emitiendo Bonos de la República por la suma de £500,000.

Dios, Patria y Libertad.— República Dominicana.— Ulises Heureaux.— General de División en Jefe del Ejército Nacional.— Pacificador de la Patria y Presidente Constitucional de la República.

Considerando: que en virtud de los contratos celebrados por el Gobierno de la República Dominicana con la "San Domingo Improvement Company of New York" en fechas 24 de marzo de 1894 y 4 de mayo de 1895 para la construcción de la línea férrea de la ciudad de Santiago a la de Moca, y para el cambio de la cremaillere entre Bajabonico y Puerto Plata, se contrajo la obligación de emitir bonos adicionales 4 por ciento de interés anual destinados a cubrir los gastos que dichas obras originen.

Considerando: que los referidos contratos obtuvieron la debida sanción Legislativa y que debiendo acometerse la ejecución de dichas obras, la "San Domingo Improvement Company of New York" se ha dirigido al Gobierno por conducto del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, solicitando que le sean provistas las cantidades en bonos 4 por ciento de interés anual que le permitan acometer esas empresas sin demora alguna.

Considerando: que de conformidad con el Artículo 4 del contrato para el cambio de la cremaillere de Bajabonico a Puerto Plata, y con el Artículo 6 del contrato de construcción del Ferrocarril de la ciudad de Santiago a la de Moca, el Gobierno no puede eludir el compromiso contraído, y, atendiendo a que la realización de esas obras reporta gran beneficio al comercio y a la agricultura del Cibao, y habiendo consultado y oído el parecer del Consejo de Secretarios de Estado,

DECRETA:

Art. lo.— En la misma forma y de acuerdo con la Ley se emiten Bonos de la República por la suma de £500,000 denominados Bonos del Ferrocarril Dominicano 4% de los tipos siguientes: de £20, de £100, de £500 y de £1000 cada uno, con interés de 4 por ciento anual, pagadero en oro por semestres que vencerán el 1° de enero y el 1° de julio de cada año, los cuales bonos quedarán amortizados el 1° de enero de 1965 en moneda esterlina de la Gran Bretaña, con un fondo acumulativo de amortización de 35 por ciento, a comenzar desde el 1° de enero 1899. Estos bonos serán entregados a la "San Domingo Finance Company of New York".

Art. 2o.— El valor de estos bonos quedará garantizado de conformidad con las estipulaciones de los contratos celebrados con la "San Domingo Improvement of New York, de fecha 24 de marzo de 1894, en su artículo 8 del párrafo 1° del Artículo 4 del contrato de fecha 4 de mayo de 1895 aprobado por el Congreso Nacional el día 8 de julio del mismo año.

Art. 3o.— Estos bonos quedarán garantizados por una primera hipoteca sobre todo el ferrocarril "Central Dominicano" de Puerto Plata hasta Moca,

sus ingresos anuales netos, su material y sus accesorios, y sobre todas las rentas de la República recaudadas por la Caja de Recaudación, deducción hecha primeramente del interés y amortización de las Deudas dominicanas creadas y emitidas de acuerdo con la Ley que ascienden a £4,236,750 y después al pago del presupuesto del Gobierno y gastos de la Caja de Recaudación que ascienden en total a $750,000 oro por año. La Caja de Recaudación remitirá mensualmente la suma requerida para el interés y amortización de estos bonos a la persona o Compañía autorizada por la "San Domingo Finance Company of New York" para entregarla a los tenedores de los Bonos.

Art. 4o.— La "San Domingo Finance Company of New York" queda autorizada a retener de esta emisión de £500,000 la cantidad necesaria para proveer al ferrocarril de todo el material rodante que requiera la organización, la seguridad y el buen servicio del tráfico desde Puerto Plata a Moca.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, a los 6 días del mes de agosto de 1897; año 54 de la Independencia y 34 de la Restauración.

U. HEUREAUX

Refrendado: El Ministro de Correos y Telégrafos, encargado de los Despachos de Hacienda y Comercio y de los de Fomento y Obras Públicas.— *Sánchez*.

DOCUMENTO Nº 22

Núm. 3747.— DECRETO DEL C. N. aprobando en todas sus partes el decreto del P. E. de fecha 6 de agosto de 1897.

Dios, Patria y Libertad.— República Dominicana.— El Congreso Nacional.— En Nombre de la República.

Visto el Decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 6 de los corrientes que dice así:

"Considerando: que en virtud de los contratos celebrados por el Gobierno de la República Dominicana con la "San Domingo Improvement Company of New York", en fecha 24 de marzo de 1894 y 4 de mayo de 1895 para la construcción de la línea férrea de la ciudad de Santiago a la de Moca, y para el cambio de la *cremaillere* entre Bajabonico y Puerto Plata, se contrajo la obligación de emitir bonos adicionales 4 por ciento de interés anual destinados a cubrir los gastos que dichas obras originan; Considerando: que los referidos contratos obtuvieron la debida sanción legislativa, y que debiendo acometerse la ejecución de dichas obras, la "San Domingo Improvement Company of New York" se ha dirigido al Gobierno por conducto del Ministerio de Fomento y

Obras Públicas, solicitando que le sean provistas las cantidades en bonos 4 por ciento de interés anual que le permitan acometer esas empresas sin demora alguna; Considerando: que de conformidad con el artículo 4 del contrato para el cambio de la *cremaillere* de Bajabonico a Puerto Plata, y con el Artículo 6 del contrato de construcción del Ferrocarril de la ciudad de Santiago a la de Moca, el Gobierno no puede eludir el compromiso contraído; y atendiendo a que la realización de esas obras reporta gran beneficio al comercio y a la agricultura del Cibao; y habiendo consultado y oído el parecer del Consejo de Secretarios de Estado; Decreta: Art. 1° En la misma forma y de acuerdo con la Ley se emiten Bonos de la República por la suma de £500,000, denominados Bonos del Ferrocarril Dominicano 4 por ciento, de los tipos siguientes: de £20, de £100, de £500 y de £1000 cada uno, con interés de 4 por ciento anual; pagadero en oro por semestres que vencerán el 1° de enero y el 1° de julio de cada año, los cuales bonos quedarán amortizados el 1° de enero de 1965 en moneda esterlina de la Gran Bretaña con un fondo acumulativo de amortización de 35 por ciento, a comenzar desde el 1° de enero de 1899. Estos Bonos serán entregados a la "San Domingo Finance Company of New York". Art. 2° El valor de estos bonos quedará garantizado de conformidad con las estipulaciones de los contratos celebrados con la "San Domingo Improvement Company of New York" de fecha 24 de marzo de 1894, en su artículo 8 y del párrafo 1° del Artículo 4 del contrato de fecha 4 de mayo de 1895, aprobado por el Congreso Nacional el día 8 de junio del mismo año. Art. 3° Estos bonos quedarán garantizados por una primera hipoteca sobre todo el ferrocarril Central Dominicano de Puerto Plata hasta Moca, sus ingresos anuales netos, su material y sus accesorios, y sobre todas las rentas de la República, recaudadas por la Caja de Recaudación, deducción hecha primeramente del interés y amortización de las Deudas creadas y emitidas de acuerdo con la Ley, que ascienden a £4,236,750 y después al pago del presupuesto del Gobierno y gastos de la Caja de Recaudación que ascienden en total a $750,000 oro por año. La Caja de Recaudación remitirá mensualmente la suma requerida para el interés y amortización de estos Bonos a la persona o Compañía autorizada por la "San Domingo Finance Company of New York" para entregarla a los tenedores de los bonos. Art. 4° La "San Domingo Finance Company of New York" queda autorizada a retener de esta emisión de £500,000 la cantidad necesaria para proveer al ferrocarril de todo el material rodante que requiera la organización, la seguridad y el buen servicio del tráfico desde Puerto Plata a Moca".

Considerando: que el Poder Ejecutivo, al votar el Decreto que queda transcrito, ha procedido de acuerdo con las atribuciones que le confirió este Alto Cuerpo, al sancionar los diferentes contratos que dicho P. E. ha celebrado

en distintas épocas con la "San Domingo Improvement Company of New York": previa las tres lecturas constitucionales,

DECRETA:

Único: Aprobar en todas sus partes el decreto de referencia.

Dada en la Sala de sesiones del Congreso Nacional, a los 9 días del mes de agosto de 1897; años 54 de la Independencia y 34 de la Restauración.

El Presidente, *F. L. Vásquez*.— Los Secretarios: Julio A. Lavandier.— *Q. B. Canelo*.

Ejecútese, comuníquese por la Secretaría correspondiente, publicándose en todo el territorio de la República, para su cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, el día 9 de agosto de 1897; años 54 de la Independencia y 34 de la Restauración.

El Presidente Constitucional de la República,

U. HEUREAUX.

Refrendado: El Ministro de Correos y Telégrafos, encargado del Ministerio de Hacienda y Comercio y de los de Fomento y Obras Públicas.— *Sánchez*.

Colección de Leyes &. Tomo 14, Año 1897.

DOCUMENTO Nº 23

Núm. 3748.— LEY sobre consolidación de la deuda exterior y flotante de la República.

Dios, Patria y Libertad.— República Dominicana.— El Congreso Nacional.— En Nombre de la República.— Por iniciativa del Poder Ejecutivo, declarada la urgencia, y previas las tres lecturas constitucionales, ha dictado la siguiente

LEY

Art. lo.— Con el propósito de consolidar la deuda exterior y las flotantes de la República y de unificar todas las garantías y seguridades especiales y generales que separadamente han sido hipotecadas en favor de aquéllas, y con el propósito de obtener una reducción en los intereses anuales de las mismas, conmensurables con las ventajas que esta unificación de garantías y seguridades habrá de reportar a los acreedores de la República, se ha convenido que la "San Domingo Finance Company of New York" tomará a su cargo desde luego la conversión y unificación de estas deudas que abrazan entre otras los empréstitos conocidos bajo los nombres de "Consolidated

Gold Bond, Four Percent, 1893" y los "French American Reclamations Consol, 1895".

Art. 2o.— En razón de los acuerdos pasados a ese efecto entre los tenedores de bonos dominicanos en Bélgica y en Inglaterra con la "San Domingo Improvement Company of New York", el Gobierno creará inmediatamente y entregará a la "San Domingo Finance Company of New York" sus bonos oro con la denominación de "Dominican Unified Debt 4 per cent bonds" y "Obligations or de Saint Domingue 2¾ pour cents", por una suma total que no exceda de £4,236,750 de la cual los bonos 4% no excederán de £1,500,000 y los bonos 2¾% £2,736,750. Todos estos bonos serán entregados en la forma y fracciones que la Compañía requiera, o los antiguos bonos podrán ser estampados. Los primeros devengarán interés al cuatro por ciento anual y los segundos dos y tres cuartos por ciento anual, pagaderos semestralmente el 1° de abril y 1° de octubre de cada año en los mercados de Europa y América que la Compañía indique. El primer cupón será pagadero el 1° de abril de 1898 con el dinero procedente de los ingresos de Aduana afectados al pago de los bonos y recaudados durante el semestre del 1° de julio al 31 de diciembre de 1897.

Art. 3.— El principal de los bonos cuatro por ciento será pagadero en un plazo máximo que no exceda el primero de octubre 1890 y los bonos dos tres cuarto por ciento en un plazo máximo que no exceda el primero de octubre 1899 mediante un fondo acumulativo de amortización al tipo que sea necesario para este objeto, comenzando el primer pago el 1° de octubre de 1901, cuyo pago habrá de ser efectuado mediante sorteos anuales a la par o por virtud de compra de bonos en el mercado, si el precio fuese menor de la par. En estos bonos se expresará que el principal e interés habrán de ser pagados en libras esterlinas, los bonos cuatro por ciento en Londres y los bonos dos tres cuartos por ciento en Bruselas, al cambio de francos 25 por libra.

Art. 4.— Estos bonos cuatro por ciento y dos tres cuartos por ciento de la República Dominicana serán conjuntamente garantizados por una primera hipoteca sobre el importe total de ingresos generales de Aduana y de los "Especiales" y "Apartados" afectados en la actualidad a las deudas que van a ser satisfechas por medio de los bonos, cuyas rentas especiales y apartados han sido creados por las leyes existentes de la República, o los que fueren creados por cualquiera otra ley promulgada en lo sucesivo en sustitución de ellos.

Las rentas especiales abrazan no sólo aquellas afectadas a los "French American Reclamation Consols" sino también el 6 por ciento de recargo creado por la Ley de 20 de mayo de 1896, el 3 por ciento creado por la Ley de 15 de julio de 1895, el 1½% para Guerra y Marina, creado por la ley del 28 de abril de 1894, el 3 por ciento creado por la ley de esta misma fecha, y

el impuesto de cinco centavos recaudado en el puerto de Macorís y conocido bajo el nombre de "templo católico", todos los cuales, en virtud de esta Ley continúan en vigor hasta el pago último y definitivo de dichos bonos.

Cuando las rentas estipuladas más arriba, afectadas en garantía a los bonos excedieren al fin de año de la suma de £325,000 el sobrante hasta la concurrencia de £34,210 será pagado en aumento de intereses por ese año a los tenedores de bonos 2¾% a fin de que esos últimos reciban en ese año un interés que pueda alcanzar hasta cuatro por ciento de su capital. Ese sobrante será entregado al controlador de Bélgica en conformidad a los acuerdos estipulados más arriba en el artículo dos, para ser repartidos entre los tenedores de bonos y pagadero con el cupón del mes siguiente de abril:

Todo sobrante ulterior durante un ejercicio anual hasta la concurrencia de £6,475, será aplicado a la amortización de la deuda dos tres cuarto por ciento, en conformidad al artículo 3 estipulado más arriba.

Art. 5.— Estas rentas serán cobradas directamente por la Caja de Recaudación, cuyos empleados y agentes serán nombrados de acuerdo con los contratos existentes, con todos los derechos y poderes que ahora tienen, o bien serán recaudadas por la "Comisión financiera" de que se tratará más adelante en esta misma Ley.

Párrafo: De las Rentas así cobradas, la Caja de Recaudación remitirá en primer término, mensualmente, a la "San Domingo Improvement Company of N. York", sus sucesores o la comisión financiera, la proporción de interés y amortización mensual correspondiente a dichos bonos, según se viene haciendo bajo las leyes existentes, o hará dicha remesa a los Agentes que la "Improvement Company" establezca con la aprobación del Gobierno. Todas estas rentas públicas seguirán siendo pagaderas en oro según la ley actual o su equivalente a la ley Standard del oro acuñado americano de los Estados Unidos hasta el pago final de los bonos.

Art. 6.— Los intereses atrasados hasta el 1° de octubre 1897 y el principal de la deuda denominada "Consolidated Gold Bonds 4%, 1893", serán convertidos a la par en bonos dos tres cuartos por ciento y los "French American Reclamations Consols, 1895" serán convertidos a la par en "Dominican Unified Debt 4% Bonds". La "San Domingo Finance Company of New York" queda autorizada por la presente Ley, a dar los pasos que sean necesarios para llevar a cabo con buen éxito dicha conversión.

Art. 7.— Para el pago y consolidación de la Deuda Flotante del Gobierno y para el pago de los gastos y comisión que se deriven de la operación y de la conversión, el Gobierno queda autorizado a contratar con la "San Domingo Finance Company" el remanente de dichos bonos que no fueron aplicados a la conversión.

Art. 8.— Con el objeto de consolidar el crédito de los Bonos de la República Dominicana, y para mayor garantía de los tenedores de los mismos, queda convenido que en caso de suspensión de pago de intereses y amortización de dichos bonos por parte del Gobierno Dominicano, o en caso de otra cualquiera necesidad manifiesta, la "San Domingo Improvement Company of New York" tendrá derecho y estará obligada a pedir a cada uno de los Gobiernos de Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, en cuyos países están colocados los Bonos de los Empréstitos de 1893 y 1895, el nombramiento de uno de sus ciudadanos como miembro de la Comisión Financiera, de conformidad con las leyes votadas anteriormente al efecto por este Alto Cuerpo, y la persona o personas así nombradas, constituirán dicha Comisión Financiera, la cual tendrá todos los poderes y obligaciones para la recaudación y desembolso de las Rentas de Aduana que actualmente tiene la Caja de Recaudación.

Párrafo.— En caso de liquidación voluntaria o involuntaria de la dicha "Improvement Company", o de dimisión por parte de ésta de su cargo de "trustee" de los tenedores de Bonos de la República Dominicana", este "trustee" ship o fideicomiso terminará ipso facto, y el Presidente de la "Improvement Company" nombrará otro "trustee" que habrá de ser una Compañía organizada bajo las leyes de uno de los Estados de América, cuyo "trustee" será investido desde luego con todos los derechos, obligaciones y poderes de la dicha "Improvement Company" en lo concerniente a la Caja de Recaudación y al cobro y pago de la Renta, y en lo concerniente a la Comisión Financiera, y continuará en el ejercicio de este cargo de una manera permanente, a menos que dentro de los seis meses después de dicha liquidación o dimisión la mayoría de los tenedores de Bonos Dominicanos hubieran nombrado otra Compañía Americana para encargarse de este fideicomiso. El sucesor o sucesores de aquélla estarán sujetos a las mismas condiciones de este fideicomiso. La "Improvement Company", o sus sucesores no deberán pedir el nombramiento de un miembro de la Comisión Financiera a ninguno de los Gobiernos de Francia, Holanda, Bélgica y Gran Bretaña, cuyos ciudadanos no posean Bonos Dominicanos de un valor nominal de £100,000. Esta limitación no será aplicable al Gobierno de los Estados Unidos de América, sino que la petición en el caso de ésta, será hecha como a Gobierno del domicilio de la "Improvement Company" o sus sucesores en calidad de "trustees" de los tenedores de bonos de la República Dominicana.

Art. 9.— Todas las estipulaciones del contrato de 1888 y 1890 con los señores Westendorp Cía., en vigor, y de las leyes y contratos de 1893, 1894 y 1895 celebrados con la "San Domingo Improvement Company of New

York" para la garantía y solidez de los bonos de la República, quedarán en vigor, excepto en la parte que hubiere sido modificada por la presente Ley y por los contratos que de ella se deriven.

Art. 10.— Estos bonos, sus intereses, registro de venta o trasmisión, así como las operaciones de la "Finance Company" o de la Caja de Recaudación, o de la "Improvement Company" o sus sucesores en calidad de "trustees" de los tenedores de bonos, no estarán sujetos a ninguna contribución ni impuesto, ni timbres del Gobierno Dominicano.

Art. 11.— La "Finance Company" podrá transferir las obligaciones y derechos que le confieren esta ley y los contratos que de ella se originen, previo aviso al Gobierno, pero no podrá bajo ningún concepto transferirlos a favor de ningún Gobierno extranjero, bajo la pena de nulidad de los derechos concedidos.

Art. 12.— La República Dominicana se reserva el derecho de amortizar el empréstito de la Deuda Dominicana, a la par, a su voluntad, mediante aviso anticipado al público con seis meses de anticipación, debiendo ser insertado este aviso en uno de los periódicos de cada una de las ciudades de New York, Londres, París y Bruselas.

Dada en la Sala de sesiones del Congreso Nacional, el día 9 de agosto del año 1897; 54 de la Independencia y 34 de la Restauración.

El Presidente: F. L. Vásquez.— Los Secretarios: Julio A. Lavandier.— Quiterio Berroa Canelo.

Ejecútese, comuníquese por la Secretaría de Estado correspondiente, publicándose en todo el territorio de la República para su cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, el día 9 de agosto de 1897; año 54 de la Independencia y 34 de la Restauración.

El Presidente de la República

U. HEUREAUX.

Refrendado: El Ministro de Correos y Telégrafos, encargado de los Despachos de Hacienda y Comercio y de los de Fomento y Obras Públicas.— *Sánchez.*

Documento 10, Expediente 5, Legajo 47. Secretaría de Hacienda,

DOCUMENTO Nº 24

CONVENIO ADICIONAL celebrado entre el Ministro de Hacienda y Comercio del Gobierno Dominicano y el Vicepresidente de la San Domingo Finance Company of New York.

Santo Domingo, 15 de abril de 1897.

MINISTERIO DE HACIENDA Y COMERCIO
Convenio Adicional.

Entre el señor J. de J. Álvarez, Ministro de Hacienda y Comercio, a nombre del Gobierno, por una parte; y el señor Charles W. Wells, Vicepresidente de la San Domingo Finance Company of New York, a nombre y representación de la misma, se ha convenido y pactado lo siguiente:

1o.— La San Domingo Finance Company of New York estará obligada a pagar a este Ministerio de Hacienda la suma de UN MILLÓN DE DÓLARES ($1,000,000) oro, en el término de tres meses, a partir del día en que estén puestas en vigor las leyes y contratos adjuntos a la carta dirigida por este Ministerio a dicha Compañía en esta misma fecha, relativos a la conversión de la Deuda Interior de la República, representada por los Bonos Dominicanos Unificados de la dicha conversión.

2o.— La San Domingo Finance Company of New York se obliga a pagar al Gobierno de la República Francesa, de orden del Gobierno Dominicano, lo más pronto después de la emisión de los Bonos Dominicanos Unificados, el balance adeudado por este Gobierno, según el contrato del 27 de abril de 1895, y que asciende a la fecha a setecientos cincuenta mil francos (F. 750,000).

3o.— La San Domingo Finance Company of New York se obliga a pagar los gastos de la conversión y de la emisión de los Bonos Dominicanos Unificados, tales como banqueros, corredores, agentes, prensa, estampilla, etc., etc., de modo que el Gobierno Dominicano no cargará con responsabilidad por estos conceptos.

4o.— La San Domingo Finance Company of New York se compromete, por último, a devolver al Gobierno la cantidad de trece mil doscientas ochenta libras esterlinas (£13,280) Bonos Dominicanos Unificados, por las anualidades de amortización liquidadas y cobradas por la San Domingo Improvement Company of New York durante los años 1894, 1895 y 1896 sobre los Consolidated Gold Bonds 4 por 100.

5o.— El Gobierno Dominicano se obliga por su parte, contra los pagos arriba mencionados, a liberar todas las rentas y apartados afectados, incluyendo el nuevo recargo adicional de 3 por 100, y a dejar a la Caja de Recaudación el cobro y la distribución de ellos.

6o.— El Gobierno cede a favor de la San Domingo Finance Company of New York, en Bonos Unificados, la cantidad de ochocientas diez mil novecientas ochenta libras esterlinas (£810,980) nominales, previstos en la ley mencionada.

Hecho doble y de buena fe, en el Palacio Nacional de Santo Domingo, a los 15 días del mes de abril de 1897.

Hay un sello.

Firmados: *J. de J. Álvarez*, Ministro de Hacienda.— San Domingo Finance Company, *C. W. Wells*.

Colección Trujillo, Serie III, Documentos y Estudios Históricos. Volumen III bis, Apéndice P. 337-378.

DOCUMENTO Nº 25

Núm. 3749.— Resolución del P. E. sobre bonos dominicanos.

Dios, Patria y Libertad.— República Dominicana.— Ulises Heureaux.— General de División en Jefe del Ejército Nacional.— Pacificador de la Patria y Presidente Constitucional de la República.

Considerando: la necesidad de abreviar en cuanto sea posible las operaciones de emisión que deben producir los fondos que se requieren para la construcción de la línea férrea que unirá las ciudades de Santiago y Moca;

Visto el artículo 3º del convenio celebrado con la "San Domingo Finance Company of New York" para la conversión de los "Bonos Consolidados 4 por ciento 1893" y los "French American Reclamations Consols 4 por ciento 1895", en los términos y forma indicados por la Ley del Congreso Nacional de fecha 9 de agosto de 1897;

Oído el parecer del Consejo de Secretarios de Estado,

RESUELVE:

Art. Único: Todos los bonos que habrán de emitirse autorizados por la precitada Ley que son: "Unificados 4 por ciento". "Obligaciones oro de Santo Domingo 2¾%" y "Bonos del Ferrocarril Dominicano 4 por cierto" los cuales deberán ser firmados y sellados por el Ministro de Hacienda y Comercio, siéndolo además los del "Ferrocarril Dominicano" por el de Fomento y Obras Públicas, podrán en defecto de estos funcionarios, y a fin de llenar el objeto de la presente resolución, tendiente a abreviar los procedimientos de la operación emprendida, ser firmados y sellados en Europa por el Agente Fiscal del Gobierno Dominicano, *Sr. Don I. Mendel*.

Dada en el Palacio Nacional, en la ciudad de Santo Domingo, a los 9 días del mes de agosto de 1897.

U. HEUREAUX.

Refrendado: el Ministro de Correos y Telégrafos, encargado de los Despachos de Fomento y Obras Públicas, y de los de Hacienda y Comercio.—*Sánchez*.

DOCUMENTO Nº 26

Borrador del Pliego de Reparto de la Conversión, de 1897

Creación total £4,236,750 de las cuales £2,736,750 en bonos a 2¾% que se distribuyen así:

Conversión de los bonos 1893 menos los amortizados		
Para conversión de los bonos de Londres	13,000	
Para cupones que no han sido pagados hasta octubre 1897	101,75	Bruselas
Para 250,000 dollars pagaderos en octubre y para gastos de la conversión en Bruselas	600,000	
Total	£2,736,750	
Bonos 4% £1,500,000, distribuidos así:		
Conversión de los French American Reclamation Consols	875,000	
A deducir amortización	12,000	
	£ 863,000	
Conversión bonos de Londres pagaderos en efectivo	37,000	
A pagar al Gobierno cada seis meses durante 3 años a cuenta del monumento a Colón	40,000	
A entregar al Gobierno	560,000	
Total	£1,500,000	
Según estados hechos las entradas serán de		£ 307,000
junto para apartado Colón		2,000
Total		£ 309,000

que se distribuyen así:

Intereses 2¾%	£ 75,260	
Intereses 4%	60,000	
Bonos Ferrocarril	20,000	
Presupuesto	150,000	305,260
Sobrante		£ 3,740

Este sobrante se aumentará durante tres años.

£40,000 producirán anualmente £6,000.

Mendel está arreglando lo concerniente al apartado Colón.

Bruselas Exige Controlador y Sub Controlador Belga a costo del Gobierno sin exceder de $10,000 anual.

Libere los apartados afectados antes del pago de nuevo dinero. Remesas mensuales para el cupón.

También, cuando las entradas afectadas pasaren de £325,000 todo el sobrante irá a los tenedores de Bonos 2¾% hasta alcanzar una suma necesaria para el pago de 4% interés y amortización.

Las condiciones de la conversión son duras, pero Mendel y yo estamos de acuerdo que es mejor de aceptarlas.

London requiere conversión del resto de los Bonos que Generoso Marchena dejó de recoger bajo las mismas condiciones de su conversión en 88 con intereses acumulados, lo que requiere £50,000 en bonos.

También pide que no se haga una nueva emisión en el extranjero durante el término de cinco años.

Haga votar inmediatamente el nuevo recargo de 2½%.

Doc. 10, Exp. 5, Leg. 47, de la Secretaría de Hacienda y Comercio. A.G.N.

DOCUMENTO Nº 27

CONVENIO

Entre el Gobierno Dominicano, representado por su Ministro de Hacienda y Comercio, debidamente autorizado, de una parte, y de la otra la "San Domingo Finance Company of New York" representada por su Vicepresidente, Mr. Charles W. Wells, debidamente autorizado por dicha Compañía y previsto de plenos poderes, se ha convenido y pactado lo siguiente:

Art. 1.— La "San Domingo Finance Company" toma a su cargo la conversión de los "Bonos Consolidados 4 por ciento 1893", y los "French American Reclamation Consols 4 por ciento 1895" en los términos que expresa la Ley autorizada por el Congreso Nacional de fecha 6 de agosto de 1897.

Art. 2.— La "San Domingo Finance Company" queda desde luego autorizada a pedir la cotización y liquidación oficial en las Bolsas de Europa y New York de los Bonos de la Deuda Dominicana, o de una parte de los mismos, y con tal objeto el Gobierno Dominicano dará las facilidades diplomáticas que fueren del caso para hacer esta petición en nombre y por cuenta del mismo.

Art. 3.— El texto de los bonos dominicanos "Unificados" 4% y "obligaciones de oro de Santo Domingo 2¾%" y "bonos del ferrocarril Dominicano

4%" autorizados por la Ley del Congreso al efecto, serán redactadas en la forma que indique la Compañía citada, de acuerdo con la Ley de la materia. Todas clases de Bonos habrán de ser firmados y sellados por el Ministro de Hacienda y Comercio y los Bonos del Ferrocarril Dominicano lo serán, además, por el Ministro de Fomento y Obras Públicas en nombre de la República, o por alguna persona o personas debidamente autorizadas en representación de ellos. Para la fácil verificación de los mismos, ningún bono será considerado válido y con fuerza legal sin que esté contra firmado por la "San Domingo Improvement Company of New York", o por una persona o Compañía debidamente autorizada por dicha Improvement Company. La "San Domingo Improvement Company of New York" podrá emitir por sí o por medio de personas, corporación, compañía o banco autorizado al efecto, los certificados provisionales (scrip) que en ambos casos fueren necesarios mientras no fuera un hecho la entrega de los Bonos.

Art. 4.— Los Bonos de todas las clases serán pagaderos al portador y llevarán cupones semestrales de interés. La redacción de Bonos y Cupones será extendida en inglés en el anverso de los mismos y con traducción del mismo texto en el reverso, en español y francés.

Art. 5.— El fondo de amortización de las deudas será invertido en bonos de las mismas, mediante sorteos para el pago a la par o por medio de compra en los mercados si el precio de ellos fuere menor de la par. Oportunamente se dará aviso en un periódico por lo menos de cada una de las ciudades de Londres, Bruselas, París y New York, de los números y denominación de los bonos que hubieren salido sorteados, y cesarán estos números de devengar interés en lo sucesivo pasando este interés a formar parte del fondo acumulado de amortización.

Art. 6.— El Gobierno pagará a los Agentes encargados del pago de interés y amortización un medio por ciento de comisión sobre el importe total de estos pagos.

Los gastos de cambio, de transmisión, de dinero o cualquier otro que ocurriese en la situación de fondos para el pago del cupón y amortización, serán de cuenta del Gobierno.

Doc. 7, Exp. 5, Leg. 47, Sección de Hacienda y Comercio, A.G.N.

DOCUMENTO Nº 28

Núm. 3976.— RESOLUCIÓN del C. N. que aprueba un convenio celebrado con la Santo Domingo Improvement Company of New York relativo al pago de la deuda de la República.

G. O. Núm. 1340 del 21 de abril de 1900.

EL CONGRESO NACIONAL
En nombre de la República.

Visto el Convenio celebrado entre el ciudadano Ministro de Hacienda y Comercio, en representación del Poder Ejecutivo de la República, y el Señor John T. Abbot, representante de la "San Domingo Improvement Company of New York", el cual Convenio está contenido en las siguientes cláusulas:

Artículo 1o.— Las rentas aduaneras de la República, que se recauden desde el primero de abril de 1900 (mil novecientos), en adelante y hasta el día primero de abril de 1903 (mil novecientos tres), hasta la suma de $2,000,000 (dos millones), oro americano, cada año, sin incluir los derechos de exportación apropiados para la redención de los billetes del Banco Nacional, se dividirán en apartados, destinándose cada uno de éstos a cubrir las obligaciones que luego se explicarán más extensamente.

Esas rentas comprenden, entre otras, el apartado de 10% (diez por ciento), los derechos fijos, los derechos de puerto y también las especies timbradas en general.

Artículo 2o.— La Caja General de Recaudación repartirá dichas rentas del modo siguiente, a saber:

Un 49% (cuarentinueve por ciento) se aplicará al pago de los gastos presupuestos del Gobierno y canje de la plata nacional de 1897 (mil ochocientos noveintisiete);

Un 3% (tres por ciento) se aplicará al pago de los gastos de servicio de la Caja General de Recaudación;

Un 5% (cinco por ciento) se aplicará al pago de los apartados especiales, los cuales son los siguientes:

Las concesiones de muelle de los Puertos de Santo Domingo, Macorís, Azua, Puerto Plata, Sánchez y Samaná;

Los derechos de barra de San Pedro de Macorís;

El derecho de un centavo por tonelada de carga de la concesión muelle de Puerto Plata;

Los derechos de puerto afectados a la limpieza de puerto de Santo Domingo;

Los derechos del Faro de Macorís;

Los derechos personales de los puertos de Santo Domingo, Macorís, Azua y Puerto Plata;

La concesión de canalización del río Yaque en Montecristi;

La concesión del edificio de la Gobernación en Montecristi;

La concesión del Ferrocarril de Samaná-Santiago;

7% (siete por ciento) sobre las entradas de los derechos de importación de la Aduana de Sánchez;

La concesión del ramal de San Francisco de Macorís;

2% (dos por ciento) sobre todas las entradas de la Aduana de Sánchez;

1½% (uno y medio por ciento), deuda exterior, sobre derechos de importación;

½% (medio por ciento). Colón, sobre derechos de importación y exportación;

En caso de que no se necesite todo este apartado para el pago de dichos apartados especiales, el sobrante se aplicará al pago de la deuda flotante interior;

Un 43% (cuarentitrés por ciento) se aplicará al pago de los cupones y amortización de obligaciones de la deuda.

Artículo 3o.— La Caja de Recaudación entregará los proventos del aumento de derechos de exportación, apropiados para la redención de los billetes, a una Junta de Incineración, nombrada por el Gobierno. Esa Junta aplicará dichos proventos a la amortización de los billetes del Banco Nacional que están ahora en circulación en la República, y todos los billetes que así se recauden serán incinerados públicamente de la misma manera que lo ha venido practicando hasta ahora el Gobierno.

Art. 4o.— La "San Domingo Improvement Company", conviene en que obtendrá el consentimiento de los tenedores de bonos para que el pago de los cupones vencidos, hasta el día primero de abril, inclusive, de 1903 (mil novecientos tres), se suspenda y capitalice, expidiéndose al efecto un certificado por su correspondiente importe a cada tenedor, certificado que devengará interés a razón de 4% (cuatro por ciento) al año desde las fechas en que se venzan los cupones.

La referida "Improvement Company" está igualmente autorizada para acordar con los tenedores de bonos de las llamadas "Obligations or de Saint Domingue", que el interés correspondiente a las mismas desde el día primero de octubre de 1899 (mil ochocientos noveintinueve), se compute al tipo fijo de 3% (tres por ciento) al año y tendrán el requerido fondo de amortización a contar desde el día primero de abril de 1910 (mil novecientos diez).

Artículo 5o.— Todos los derechos de la República serán pagaderos en oro americano, como hasta ahora, pero se entiende y queda convenido que la Caja General de Recaudación podrá aceptar moneda dominicana de plata y níkel, a razón de 5 por 1 (cinco por uno) en pago de una parte que no exceda de 30% (treinta por ciento) de los derechos correspondientes a cualesquiera artículos de importación; y en caso de cobrar esa proporción en tal moneda, el Gobierno aceptará la misma como parte de los ingresos presupuestos y al mismo tipo de cambio; sin embargo, el Gobierno tendrá la facultad de rebajar el por ciento de plata y níkel que se deba recibir en el cobro de los mencionados derechos de importación.

Artículo 6o.— Dentro de seis meses, contados desde el día primero de abril de 1900 (mil novecientos), los bonos unificados "cuatro por ciento" que pertenecen al Gobierno, o sea £350,000 (trescientos cincuenta mil libras esterlinas), serán entregados por la "San Domingo Improvement Company" al ciudadano Ministro de Hacienda para que sean incinerados públicamente.

Artículo 7o.— Cuando los tenedores de la mayor parte de bonos hayan consentido en la capitalización de sus cupones según expuesto en el artículo 4o. de este Contrato, la Caja General de Recaudación aplicará y distribuirá los proventos de dicho apartado de 43% (cuarentitrés por ciento) y hasta el día primero de abril de 1903 (mil novecientos tres), del modo siguiente:

Dicho apartado de 43% (cuarentitrés por ciento) se dividirá, el primer año, del modo siguiente:

17 (diez y siete) unidades se aplicarán al pago de la deuda directamente en manos de los tenedores de esa deuda flotante interior de la República, las cuales 17 (diez y siete) unidades serán entregadas por la Caja General de Recaudación mencionados en el artículo 10, o de las personas que ellos indiquen, debiendo la Caja de Recaudación dar cuenta mensual al Gobierno de todo cuanto reciba y pague por ese concepto;

15 (quince) unidades percibirá la "San Domingo Improvement Company" y las aplicará al pago de la deuda flotante exterior contraída por la dicha Compañía;

5 (cinco) unidades serán entregadas al Gobierno de la República como una adición a su presupuesto, y

6 (seis) unidades serán también entregadas al Gobierno para el pago de reclamaciones y gastos de revolución;

El mismo apartado de 43% (cuarenta y tres por ciento) se distribuirá, durante el segundo y tercer año, en la forma siguiente:

21 (veintiuna) unidades se aplicarán al pago de la deuda flotante interior de la República, y serán entregadas en la misma forma que las 17 (diez y siete) unidades estipuladas anteriormente;

16 (diez y seis) unidades percibirá la "San Domingo Improvement Company" para el mismo fin que las 15 (quince) unidades anteriormente dichas;

6 (seis) unidades serán entregadas al Gobierno para el pago de reclamaciones y gastos de revolución.

Artículo 8o.— Al finalizar los tres años, en que estará vigente este Contrato, la "San Domingo Improvement Company" dará al Gobierno cuenta detallada y justificada de las cantidades que hubiere pagado por el concepto de la deuda flotante exterior, y si resultare que el Gobierno no conviniese en aceptar como deudas suyas todas las que hubiere satisfecho la dicha Compañía,

entonces tanto la cuestión de la responsabilidad del Gobierno para el pago de tales deudas como el importe de las mismas serán sometidas a una Junta, constituida por tres árbitros, de los cuales será nombrado uno por cada parte y el tercero designado de común acuerdo por las mismas partes.

Dicha Junta procederá desde luego a oír las partes para determinar el importe y naturaleza de tales deudas como estime justo y equitativo, siendo definitivo y concluyente lo que decida.

En cuanto a las sumas a que montaren las cantidades que no debieren ser pagadas por el Gobierno, fijadas ya sea por convenio o ya por el fallo de la Junta de árbitros, la dicha Compañía las reembolsará al Gobierno, o en bonos unificados al tipo de 60% (sesenta por ciento) o en certificados de aquellos de que se trata en el artículo 4o. de este contrato, a la par.

Antes de la mencionada fecha de abril de 1903 (mil novecientos tres), las partes contratantes celebrarán un nuevo arreglo para el pago de la parte de la deuda flotante interior y exterior, que aún se debiere a esa fecha.

Artículo 9o.— La deuda flotante que ha de pagarse come lo dispone el artículo 7o. de este contrato, devengará desde el día primero de enero de 1900, (mil novecientos) como máximun un interés a razón de seis por ciento al año, y cada deuda contraída en moneda corriente, se reducirá a oro americano y al tipo de cambio existente en la fecha en que tal deuda se contrajo, o en que se hizo la entrega del dinero, si esa entrega fue subsiguiente a la fecha del contrato.

Artículo 10.— Dentro de un plazo, que no podrá pasar del primero de mayo de este año, el Gobierno presentará un estado detallado de las cantidades debidas en oro americano, a cada uno de los siguientes tenedores de la deuda flotante interior, que ha de ser pagada con el apartado 17% (diez y siete por ciento) el primer año y al 21% (veintiuno por ciento) el segundo y tercer años, según lo establecido en el artículo 7o. de este contrato; las cantidades que ahora no se deben en oro americano serán reducidas a esta moneda en la forma designada en el artículo 9o. de este convenio.

Esos tenedores de la deuda flotante son: Juan B. Vicini, Sucesores de Cosme Batlle, José H. Puente, Santiago Michelena, Eugenio Abreu y Co., Federico Holth, Federico Holth y varios, Rafael Alardo, José R. Roques, Nicolás Vega, J. Sala y Co., Miguel Ventura, B. Bancalari, Font, Miguel Ventura.

El Gobierno tendrá el derecho de agregar a los nombres arriba mencionados cualesquiera otros que no hayan presentados sus cuentas hasta ahora, pero con condición de que sea antes del primero de mayo próximo, y de que el monto total de la deuda flotante interior no pase de $2,600,000 (dos millones seiscientos mil pesos) oro americano, suma que el Gobierno garantiza como máximum de esa deuda.

Las sumas precisas que formarán la dicha deuda flotante interior deberán quedar determinadas por arreglos hechos entre el Gobierno y la "San Domingo Improvement Company", en representación de los tenedores de bonos y cada uno de los varios tenedores de la deuda flotante interior, a fin de que cada uno de esos tenedores de dicha deuda flotante pueda conocer la proporción que debe percibir mensualmente.

Artículo 11.— En el presente contrato no se intenta variar la garantía que defiende a los tenedores de bonos o a otros cualesquiera acreedores que tengan garantía especial, pues esas garantías seguirán siendo como ahora son, estando solamente sujetas a la distribución de los fondos ya prescritos en este documento para el pago de la deuda durante el período mencionado.

Artículo 12.— El sobrante de las rentas (mientras se halle vigente este contrato) que pasen de la cantidad de $2,000,000 (dos millones) oro americano al año, sin incluir las rentas destinadas a la amortización de los billetes del Banco Nacional, será distribuida del modo siguiente:

Un 50% (cincuenta por ciento) será empleado para el pago de necesidades del Gobierno no previstas ahora, y también para el pago de cupones de los bonos que se han de emitir para la prolongación de la línea del Ferrocarril Central Dominicano y para las variaciones que en la misma se hagan; pero éste de ningún modo cambiará ni afectará la garantía para el pago de dichos bonos.

Un 25% (veinticinco por ciento) será empleado para el pago de los certificados de interés cuatro por ciento y

Un 25% (veinticinco por ciento) se aplicará al pago de la deuda flotante interior.

Artículo 13.— En el término de seis meses, contados desde el día primero de abril de 1900 (mil novecientos), el Gobierno y la "San Domingo Improvement Company" harán mutuo ajuste de cuentas de todo lo que entre sí tengan pendiente de arreglo y no esté comprendido en el articulado del presente contrato; y en este mismo período todos los asuntos y cuentas pendientes de arreglo entre el Gobierno, por una parte, y ya sea la "San Domingo Finance Company of New York", el Banco Nacional de Santo Domingo, o la Compañía del Ferrocarril Central Dominicano, por otra parte, serán objeto de consideración a fin de llegar a un arreglo pronto, justo y equitativo.

Todas las cuestiones a que pueda dar origen lo consignado en este artículo se resolverán por convenio, si fuere posible, pero si las partes no lograren ponerse de acuerdo sobre uno o más puntos cualesquiera, éstos se someterán a la consideración de una Junta de Árbitros constituida de la misma manera

como la mencionada en el artículo 8o. de este contrato, y lo que esa Junta resuelva será definitivo.

Artículo 14.— Tan pronto como llegue a ser ley el presente contrato, la "San Domingo Improvement Company" entregará al Gobierno todos los billetes del Banco Nacional que están en poder de la Caja de Recaudación, los cuales suman hoy la cantidad de $400,000 (cuatrocientos mil pesos) poco más o menos, y la cargará a la cuenta del Gobierno al mismo tipo de cambio a que fueron recibidos esos billetes en pago de derechos. Esos billetes de banco serán incinerados públicamente, como los demás arriba mencionados.

Artículo 15.— Toda porción de las rentas apropiadas a la amortización de los billetes del Banco Nacional que en cualquier tiempo deje de emplearse positivamente en la recogida de dichos billetes se destinará al pago de la deuda flotante interior; pero a previa petición de los tenedores de bonos, la "San Domingo Improvement Company" tendrá el derecho de aplicar en lo sucesivo la mitad de tal porción al pago de los supradichos certificados de "Scrip", y la otra mitad al pago de la dicha deuda flotante interior.

Artículo 16.— El Gobierno se compromete a proveer a la extinción de los certificados de interés establecidos en el artículo 4o. de modo que su pago comience a efectuarse dentro de los tres meses siguientes al día primero de abril de 1903 (mil novecientos tres).

Artículo 17.— Toda falta de cumplimiento de parte de la "San Domingo Improvement Company", o de la Caja General de Recaudación a cualquiera de las cláusulas del presente contrato, así como en la entrega de los apartados en él estipulados hará nula la presente convención, quedando las partes sujetas al cumplimiento estricto de los contratos anteriores.

Artículo 18.— Para los efectos legales del presente contrato la "San Domingo Improvement Company" elige por domicilio la oficina que en la ciudad de Santo Domingo tiene la Caja General de Recaudación.

Artículo 19.— En caso de dificultades con motivo del presente contrato, éstas serán dirimidas por juicio de árbitros en la misma forma estipulada en el artículo 8º de este contrato.

Artículo 20.— La presente convención será sometida al Congreso Nacional para su debida sanción.

CONSIDERANDO: que es de absoluta necesidad hacer cesar el estado de incertidumbre en que se hayan todos los gremios sociales, lo que traerá el renacimiento de la confianza en las industrias y en el comercio y la fijación de una base a la administración pública, para que pueda entonces el País emprender una marcha regular y progresiva que lo conduzca al tan anhelado fin de su absoluta redención financiera,

RESUELVE:

Único: Aprobar en todas sus cláusulas el transcrito Convenio.

Envíese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a los 18 días del mes de abril del año 1900; 57 de la Independencia y 37 de la Restauración.

El Vicepresidente, en funciones de Presidente, *Pedro B. Coiscou.*— Los Secretarios: *L. Israel Álvarez.*— *Enrique J. de Castro.*

Ejecútese, comuníquese por la Secretaría correspondiente, publicándose en todo el territorio de la República para su cumplimiento.

Dado en Santo Domingo, Capital de la República, a los 21 días del mes de abril de 1900, años 57 de la Independencia y 37 de la Restauración.

El Presidente de la República
J. JIMENES

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio, *F. AUGUSTO GONZÁLEZ.*

Gaceta Oficial No. 1340 del 21 de abril de 1900.

DOCUMENTO Nº 29

CONTRATO

celebrado entre la San Domingo Improvement Company of New York, la San Domingo Finance Company of New York, The Company of the Dominican Railway, representadas por su Presidente el señor Smith M. Weed; y la Banque Nationale de Saint Domingue, representada por su Presidente, el señor C. W. Wells; y el Gobierno dominicano, representado por el señor doctor Henríquez y Carvajal, Ministro de Relaciones Exteriores en misión especial y Agente Fiscal del mismo Gobierno.

CONSIDERANDO:— que en miras de conciliar los opuestos intereses de orden moral y jurídico que han creado el actual desacuerdo reinante entre el Gobierno Dominicano y la San Domingo Improvement Company of New York, es útil acogerse a una serie de estipulaciones racionales, las cuales permitan, sin desdoro para la República Dominicana, sin lesión de cualquier interés litigioso que le sea adverso, y sin menoscabo de ningún sentimiento de equidad, o llegar a un acuerdo voluntario, de grado a grado, sobre todos los puntos en que haya divergencia entre las dos partes, o llegar a dirimirlos por interposición de un Tribunal Arbitral;

POR TANTO, las partes contratantes, representadas: EL GOBIERNO DOMINICANO, por el Doctor Henríquez y Carvajal, Ministro de Relaciones Exteriores en misión especial y Agente Fiscal del mismo Gobierno, por una parte; y la SAN DOMINGO IMPROVEMENT COMPANY OF NEW YORK, por el Señor Smith M. Weed, su Presidente y especialmente autorizado para el caso; la SAN DOMINGO FINANCE COMPANY OF NEW YORK, por el Señor Smith M. Weed, su Presidente y especialmente autorizado; THE COMPANY OF THE CENTRAL DOMINICAN RAILWAY (La Compañía del Ferrocarril Central Dominicano) por el Señor Smith M. Weed, su Presidente debidamente autorizado; y la BANQUE NATIONALE DE SAINT DOMINGUE (El Banco Nacional de Santo Domingo) por el Señor Charles W. Wells, su Presidente y también apoderado para el caso, han convenido y pactado libremente y de buena fe, las siguientes estipulaciones:

1a.— Con el fin de extinguir todas las dificultades actuales, originadas entre el Gobierno Dominicano y la San Domingo Improvement Company of New York, a causa del diferente criterio que cada una de las dos partes posee y defiende, respecto de la posible y válida ejecución del contrato intervenido entre las mismas partes en fecha 20 de marzo de 1900, sancionado por el Congreso Nacional en fecha 18 de abril del mismo año, diferencia de criterio que emana de la protesta que contra el mismo contrato ha formulado una gran masa de tenedores de bonos, que según los informes del Gobierno exceden en mucho la mitad de la suma total de la deuda pública extranjera, se abandonará toda discusión sobre este punto. El Gobierno declara dicho pacto inexistente, sin fuerza ni valor alguno para obligar a ninguna de las partes al cumplimiento de ninguna de las estipulaciones del mismo instrumento, y la Improvement Company acepta esa declaración, bajo el entendido y cabal cumplimiento de las siguientes estipulaciones:

2a.— El Gobierno, por su parte, deseoso de que todo motivo de discusión sobre aquel mismo asunto quede desechado, conviene en que las sumas que en virtud del contrato de abril fueron por la Caja de Recaudación, obrando por orden de la Improvement Company, aplicadas a la deuda flotante interior y a la de la Improvement Company, en el lapso de tiempo transcurrido desde el 1° de abril de 1900 hasta el 10 de enero de 1901, serán imputadas por el mismo a las mismas deudas, subordinándose ambas partes en un todo, sobre este punto, a las reglas y proporciones establecidas en el mencionado contrato del 18 de abril de 1900, sin otra ni mayor responsabilidad para la Improvement Company que la que sobrevenga por causa de inexactitud o exceso en las distribuciones determinadas en dicho contrato.

3°.— Conviene asimismo el Gobierno en que las sumas que sobre el 6% destinado, de las 43 unidades de que hablan la 4a. y 7a. cláusulas del

mencionado contrato, al pago de indemnizaciones internacionales y deuda de la revolución, le hayan sido entregadas para aquel objeto, serán legalmente imputadas a tal fin bajo la sola y única responsabilidad del Gobierno. En cuanto a las sumas provenientes del 3% que en el mismo contrato fue asignado a la Caja de Recaudación y que esta Caja de Recaudación ha percibido desde el 1° de abril de 1900 hasta el 10 de enero de 1901, la Improvement Company estará dispuesta a abandonarlas a la cuenta del Gobierno, desde el momento en que se inicien las negociaciones, si el Gobierno se lo requiere, después de deducir las mensualidades que, según las leyes de 1888 a 1897, deben aplicarse al pago del servicio de la Regie.

4o.— Queda entendido entre las partes que, a partir del momento en que las presentes estipulaciones hayan sido sancionadas por el Congreso Nacional y promulgado el instrumento que las contiene, con fuerza de ley, la Improvement Company renuncia, ipso-facto, formalmente, desde luego y para lo sucesivo, a todos los derechos y privilegios que le han sido otorgados en las leyes y contratos anteriores a la fecha de hoy. Si en cualquier tiempo, sin embargo, quedasen incumplidas por parte del Gobierno las estipulaciones del presente contrato, se reputará nula y sin ningún valor la antes dicha renuncia, volviendo la Improvement Company al pleno goce de esos mismos derechos y privilegios, excepto todos los que se derivan del contrato de 18 de abril de 1900. Las otras compañías que concurren al presente acto, renunciarán los derechos que posean y demuestren poseer, en virtud de posteriores arreglos amistosos o en virtud de posteriores decisiones arbitrales.

5o.— Tanto la Improvement Company, como la Finance Company, y también las demás compañías, se obligan a rendir al Gobierno Dominicano, antes de todo arreglo amistoso y de toda negociación posterior y dentro de un plazo que no podrá exceder de tres meses, a contar de la fecha en que este contrato sea sancionado con los Poderes del Estado, todas las cuentas que con él tienen pendientes.

6o.— Ambas partes, con el objeto de que tanto la Improvement Company como las demás compañías se retiren del país, convienen en entrar en negociaciones encaminadas a arreglar amistosamente, sobre una base equitativa, todas las cuentas, reclamaciones y diferencias que entre las partes existan. Convienen igualmente en que bajo las estipulaciones que se acuerden en las dichas negociaciones amistosas, las compañías cederán y transferirán al Gobierno Dominicano y éste adquirirá de las compañías.

1o.— Todos los derechos y acciones que ellas posean en la sección ya construida del Ferrocarril Central y los derechos y acciones que demuestren tener en cuanto a la prolongación del mismo ferrocarril de Santiago a Moca y de Moca a San Francisco de Macorís.

2o.— Todos los derechos y acciones que posean en el Banco Nacional.

3o.— Los bonos de la República de que dichas compañías sean propietarias, cuya suma no podrá exceder de £800,000 nominales, y cuyo precio máximun en caso de arbitraje, tampoco podrá exceder de 50%. Queda entendido que todos estos bonos son de los que ganan 4% de interés anual, y que las compañías se comprometen a entregar al Gobierno dentro del mismo plazo marcado en la 5a. cláusula, la lista de los números de cada uno de dichos bonos, que serían los únicos que el Gobierno se obligaría a recibir en el caso de arreglo amistoso.

Se considera que las palabras *sobre una base equitativa*, usadas en este contrato, permiten incluir los gastos propia y racionalmente hechos por las compañías en interés de la República y con propósito de asegurar un buen mercado y dar crédito a los bonos de la misma. La proporción de tales gastos que pueda ser imputada al Gobierno, será determinada, o por el arreglo amistoso, o por el fallo de los árbitros.

7o.— Queda convenido entre el Gobierno y las dichas compañías que si el arreglo y el ajuste de las cuentas, reclamaciones, diferencias, y cesiones y transferimientos mencionados en el artículo 6o. no fueren concluidos amistosamente y puestos en un contrato regularmente sancionado por los Poderes públicos, antes del día treinta y uno del mes de diciembre de 1901, todas esas cuentas, reclamaciones, ventas, diferencias, cesiones, transferimientos y todo lo que se relacione con las enunciaciones de la cláusula sexta, será sometido a un tribunal de arbitraje y por él decidido finalmente, sobre una base equitativa, antes del día treinta y uno del mes de diciembre del año 1902.

Este tribunal será constituido por tres árbitros, nombrados, uno por el Gobierno Dominicano, otro por las compañías, y el tercero por los dos primeros árbitros. Los dos primeros árbitros serán nombrados antes del primero de marzo del año de 1902. En el caso de que los dos primeros árbitros no pudieren ponerse de acuerdo, dentro de un plazo de sesenta días, a contar de la fecha en que levantasen acta de no avenencia, para nombrar el tercero, el Gobierno Dominicano tendrá opción a encomendarle la función de tercer árbitro al Honorable Presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos; pero si el Gobierno Dominicano no usase tal opción, o por cualquiera circunstancia imprevista el Honorable Presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos no ejerciere dicha función, entonces el Gobierno Dominicano ocurrirá por ante S. M. el Rey de Suecia, o solo, o, si fuere necesario, conjuntamente con el Gobierno de los Estados Unidos en solicitud de que S. M. designe al tercero.

La decisión de la mayoría de dicho tribunal tendrá el carácter de cosa juzgada y excluirá toda apelación de cualquiera de las partes, ya sea por ante la jurisdicción judicial o ya por ante la internacional.

En el caso de que cualquiera de las partes, requerida auténticamente al nombramiento y constitución del tribunal arbitral, rehusare o descuidare hacerlo en tiempo útil, o sea antes del día primero del mes de marzo del año 1902, con más una prórroga de 30 días, la otra parte constituirá, con su sola elección, el tribunal arbitral, y todo cuanto la mayoría de este tribunal resuelva, tendrá la misma fuerza legal de cosa juzgada, por ningún modo apelable a la jurisdicción judicial o a la internacional, de que se habla en este mismo artículo.

Así para el requerimiento a que se alude precedentemente como para toda otra notificación, el Gobierno Dominicano de una parte, y la otra parte la Improvement Company, las demás compañías, eligen por respectivos domicilios invariablemente: el Gobierno Dominicano, la ciudad de Santo Domingo, y en ella, el Despacho de Hacienda y Comercio, y la Improvement Company y las demás compañías, la oficina de la Improvement Company en la casa No. 71, de Broadway, en la ciudad de New York.

Queda deferida al tribunal arbitral la atribución de compensar proporcionalmente, entre las partes, la obligación de pagar los costos, sin incluir en estos costos el pago de abogados y demás auxiliares, que cada parte hará respectivamente por su cuenta y sin derechos a repetición contra otra parte.

La primera reunión de los tres árbitros se efectuará en la ciudad de París, excepto en el caso de que la función de tercer árbitro sea ejercida por el Presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, en cuyo caso el punto de reunión será invariablemente la ciudad de Washington.

8o.— Para pagar a la Improvement Company y a las demás compañías que concurren a este contrato las sumas que resulten en su favor, sea a consecuencia de los arreglos convencionales que se lleven a cabo o del fallo de los árbitros, o de ambos modos a la vez, así como el interés del capital que desde ahora se fija en dos y medio por ciento al año, dichas compañías recibirán una suma anual de *doscientos mil dólares* ($200,000), igual al producido del 10 por ciento sobre un mínimum de dos millones de dólares de las entradas generales de la República, distribuida en mensualidades iguales de *diez y seis mil seiscientos sesenta y seis dólares y sesenta y seis centavos y dos tercios de centavo* (16,666,66 ⅔) cada una; y además, cualquiera otra suma que posteriormente fuere fijada en los arreglos amistosos o por fallo de los árbitros en consideración de las propiedades, valores, acciones y ventajas que el Gobierno adquirirá bajo las provisiones de este contrato. Con el objeto de facilitar dicha operación de pago y para mayor garantía de las compañías, el Gobierno se obliga a entregar a dichas compañías o a su apoderado especial, mes por mes, y en forma de órdenes de pago sobre los derechos de importación y exportación que se causaren por la aduana de Puerto Plata, la duodécima parte de la suma anual antes dicha.

9o.— Hasta el momento en que todas las cuestiones pendientes entre ambas partes hayan sido resueltas, o en los arreglos amistosos o por la decisión de los árbitros, el Gobierno, a partir del día 1° del mes de mayo del presente año, depositará en un Banco o Compañía Fideicomisaria de las mejores reputadas de la ciudad de New York, la suma misma mensual ya mencionada en la 8a. cláusula, la cual será aplicada, al pago de una parte de las sumas que sean determinadas en el arreglo, o por la decisión arbitral. Las sumas así depositadas no podrán ser retiradas sino por mutuo consentimiento de las partes o en virtud de la decisión de los árbitros.

Queda entendido que en el caso de que el presente contrato no fuere sancionado por el Congreso Nacional sino con posterioridad a la fecha del 1° de mayo del presente año, el depósito se hará, sin embargo, con relación a dicha fecha.

10o.— Queda entendido entre ambas partes, que el Gobierno podrá en todo tiempo y circunstancia cancelar de contado toda acreencia que contra él tengan las Compañías por razón de los arreglos amistosos o de la decisión arbitral que sobrevengan, y que en ese caso las compañías harán al Gobierno un descuento razonable.

11o.— Queda entendido que todas las Compañías que concurren a este contrato, se hacen solidarias unas de otras y todas entre sí por ante el Gobierno, no sólo en cuanto a la validez de los pagos que éste haga en cumplimiento de las obligaciones que resulten del mismo contrato y de sus legales consecuencias, los cuales serán atribuidos a las masas común de los créditos de dichas compañías; sino en cuanto al cumplimiento por parte de todas ellas de las obligaciones que resulten a cargo de una cualquiera de ella. Por lo tanto, queda entendido que los créditos y reclamaciones que el Gobierno tenga contra una cualquiera de dichas Compañías, compensables con los que resulten por cualquier son título que fuere en valor de cualquiera o cualesquiera de ellas, y que los pagos hechos por el Gobierno al apoderado general de dichas compañías o de una sola cualquiera de ellas; no se podrán repetir contra el mismo Gobierno.

12o.— Queda convenido que tan pronto como se efectúe el arreglo amistoso o el fallo arbitral ya mencionado, en ese caso todas las reclamaciones y cuentas que haya o pueda haber pendientes, basada en ley o equidad, entre el Gobierno, y la Finance Company, The Company of the Central Dominican Railway, la Banque Nationale de Saint Domingue y la San Domingo Improvement Company, o entre cualquiera de esas instituciones o los oficiales, administradores, o accionistas de las mismas, se considerarán, ipso-facto, completamente canceladas, extinguidas e inexistentes, por lo cual no se podrá entablar ninguna acción, en ley o equidad, en reclamación de

ninguna suma de dinero o ningún derecho, que tenga su origen anterior al comienzo de ejecución de este contrato.

13o.— Si ocurriere algún desacuerdo entre las partes acerca de la interpretación precisa del significado de una palabra, de una frase o de una cláusula entera del presente contrato, se ocurrirá desde luego al tribunal arbitral para dirimirlo.

14o.— Las estipulaciones del presente contrato no serán obligatorias para la República Dominicana, sino después de que el Poder Ejecutivo haya ratificado y el Congreso Nacional sancionado este contrato.

Queda, además, entendido y expresamente declarado que los arreglos y convenios ulteriores que se hagan entre las partes, tanto para la adquisición de los bonos, como para la de las demás propiedades, acciones y derechos de las Compañías, solo tendrán fuerza ejecutoria cuando sean aprobados por el Congreso Nacional.

HECHO Y FIRMADO, en cinco originales de un mismo tenor, en la ciudad, Condado y Estado de New York, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año mil novecientos uno.

Por la San Domingo Improvement Company of New York,
firmado:— *Smith M. Weed.*
Presidente.

Por The Company of the Central Dominican Railway,
firmado:— *Smith M. Weed.*
Presidente.

Por la Banque Nationale de Saint Domingue,
firmado:— *Smith M. Weed.*
Presidente.

DOCUMENTO Nº 30

Núm. 4101.— CONVENIO celebrado con la Asociación para la defensa de los tenedores de fondos públicos, y el Comité de portadores franceses de Rentas dominicanas.— G. O. Núm. 1416 del 5 de octubre de 1901.

EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

Previas las tres discusiones constitucionales,

Visto el Convenio celebrado en Amberes y en París el día 3 de junio del corriente año, entre el Gobierno de la República, representado por el

señor Doctor Henríquez y Carvajal, Ministro de Relaciones Exteriores, en misión especial, y Agente Fiscal del mismo Gobierno, y 1o. la "asociación para la defensa de los tenedores de fondos públicos", constituida en Amberes y representada por los señores P. Dierckxsens-Wellens, Michiels-Beels, respectivamente, Presidente y Secretario del Comité de tenedores de fondos dominicanos, y Augusto Dupont, Secretario General de la misma Asociación, y 2o. el "Comité de portadores franceses de Renta Dominicana", constituido bajo los auspicios de la Asociación Nacional de portadores franceses de valores extranjeros, representado por su Presidente, el señor Barón Xavier Reille, diputado del Tarn, y el señor G. Collin, Secretario, el cual convenio está contenido en las siguientes cláusulas:

I

Mientras la República Dominicana no logre resolver de un modo favorable su actual crisis financiera, el Gobierno se obliga a aplicar el quince por ciento (15%) de las entradas aduaneras y demás impuestos fiscales que existen o que en lo sucesivo fueren creados, calculado sobre un mínimum de dos millones de dólares en oro, o sea un mínimum de trescientos mil dólares ($300,000) cada año, al servicio de la Deuda Pública Exterior, representada por los empréstitos nacionales:

"Obligations or de Saint-Domingue 2¾% (4% différé)" y Dominican Unified Debt 4%".

De las mismas entradas aduaneras y demás impuestos fiscales, el veinte por ciento (20%) será igualmente aplicado al pago del interés y capital de la Deuda Flotante Interior cuyo origen sea anterior al presente arreglo, y de la acreencia eventual de la "San Domingo Improvement Co. of New York"; de la "San Domingo Finance Co. of New York"; "The Company of the Central Dominican Railway". (La Compañía del Ferrocarril Central Dominicano), y "La Banque Nationale de Saint Domingue" (El Banco Nacional de Santo Domingo), cuyo origen sea igualmente anterior a este arreglo.

Tan pronto como una u otra de las mencionadas categorías de deudas, a que será aplicado el dicho veinte por ciento, quede extinguida, el Gobierno aplicará, en la proporción que fuere necesario, dicho porcentaje al pago integral del interés de la deuda exterior y a una amortización que será ulteriormente determinada.

Si las entradas aduaneras y demás proventos fiscales excedieren al mínimum anual de dos millones de dólares previsto, se aplicará el quince por ciento del excedente al pago integral del interés de la misma deuda, así como a la amortización que ulteriormente se determine.

II

La ejecución del presente convenio se hará sobre la base de un interés idéntico para toda la Deuda Pública Exterior. La repartición de dicho interés deberá ser simultánea entre todos los títulos de la actual Deuda Pública Exterior, cuyo total se fija en el art. XIV del presente convenio. Dichos títulos gozarán de los mismos derechos, cualesquiera que sean su origen y su forma, con excepción de aquellos cuya validez no fuere reconocida por el Gobierno.

El pago de los intereses de la Deuda Exterior queda garantizado con la totalidad de las entradas aduaneras de la República, conforme a las leyes anteriores.

El pago de las sumas provenientes del quince por ciento que según el precedente artículo se destina al servicio de dicha Deuda Pública Exterior, queda especialmente garantizado con el total de los derechos de importación y exportación de la Aduana del Puerto de Santo Domingo, después de deducidas únicamente las sumas correspondientes a los diversos "Apartados", así como al "aumento en los derechos de Exportación" actualmente aplicado a la amortización de los billetes de banco en circulación.

Los "Apartados" que se causan por la aduana de Santo Domingo son los siguientes:

(a) — Concesión Muelle y Enramada del Puerto de Santo Domingo (Ley de...

(b) — Derechos de puerto afectados a la limpieza y construcción del Puerto de Santo Domingo (Ley de...

(c) — Derechos personales del Puerto de Santo Domingo (Ley de...

(d) — Uno y medio por ciento (1½%) sobre los derechos de Importación, destinado al servicio de la "Deuda Extranjera" (Ley de...

(e) — Medio por ciento (½) sobre los derechos de importación y exportación, destinado al Monumento de Colón (Ley de...

El Gobierno se obliga a no empeñar a ningún otro servicio de garantía el producido de los impuestos de importación y exportación causados en la Aduana del Puerto de Santo Domingo y, dentro de los límites y condiciones expresados en la cláusula X, el producido de la Aduana del Puerto de San Pedro de Macorís.

III

El pago del producido anual del quince por ciento sobre los dos millones de dólares, o sea trescientos mil dólares, en oro, será efectuado en doce entregas mensuales de veinte y cinco mil dólares cada una, tomándose esta suma mensual de la totalidad de las primeras entradas causadas por la Aduana

del Puerto de Santo Domingo, sin otra deducción que la ya estipulada en el presente artículo.

En el caso de que el total de las entradas aduaneras y demás impuestos fiscales exceda de dos millones de dólares, el quince por ciento del excedente será pagado en la misma forma y en el transcurso del primer trimestre que sigue al término del año económico.

IV

Para hacer efectivo el cobro de las sumas antedichas, "1° Association pour la défense des porteurs de fonds publics" (Asociación para la defensa de los tenedores de fondos públicos) constituida en Amberes, nombrará, en su calidad de representante de la mayoría de los tenedores de bonos de la Deuda Pública Exterior, un Agente General y, en caso de que ella lo juzgue necesario, un segundo Agente.

La Asociación Nacional de portadores franceses de valores extranjeros constituida en París, nombrará igualmente un Agente; la elección de este Agente será hecha de acuerdo con el Council of Foreign Bondholders de Londres, si éste se adhiere a esta convención dentro del término de seis meses, a contar desde el día de la suscripción y de las presentes estipulaciones.

El nombramiento y renovación de tales Agentes son de la competencia exclusiva de las Asociaciones de que dependen y de cuya representación oficial están encargados.

V

Estos Agentes recibirán de la Administración de Hacienda de la ciudad de Santo Domingo, sea en especies, sea en forma de pagarés suscritos por los importadores y los exportadores, y endosados a la orden de dichos Agentes, las sumas fijadas en los artículos precedentes, entendiéndose que el Gobierno quedará liberado de esta manera, de toda responsabilidad por ante los tenedores de bonos, siempre que los pagarés sean pagados a su vencimiento.

En el caso en que, de acuerdo con las Asociaciones mencionadas, una parte de la suma proveniente del quince por ciento procediere de impuestos que no fueren los de Aduana, las condiciones de garantía para el cobro serán idénticas a las estipuladas arriba y los gastos que se ocasionaren por este concepto estarán a cargo del Gobierno.

VI

Dichos Agentes, previo aviso dado al Ministro de Hacienda, enviarán mensualmente a Amberes, París y Londres, a un Banco, designado por el Gobierno, de acuerdo con la asociación respectiva a cada uno de esos puntos las sumas destinadas al pago semestral de los intereses de la Deuda, conforme

al total que se fija en el artículo XIV y en proporción a la parte necesaria al servicio de la Deuda, que cada uno de esos bancos deberá efectuar. Las Asociaciones suministrarán al efecto todas las indicaciones útiles a sus Agentes y al Gobierno.

VII

Los mencionados Bancos llevarán cuenta entre sí, para la repartición entre todos los tenedores, indistintamente de las sumas que para tal objeto recibieren.

El Banco designado para Amberes hará el servicio de los cupones en los mercados de Bruselas y Amsterdam.

Cuando, sea por disminución de la cifra nominal de la Deuda Exterior, sea por falta de presentación de cupones en el término de cinco años, sea por cualquier otro motivo, el efectivo en Caja no fuere en su totalidad repartido al vencimiento semestral de los cupones, el sobrante así producido será aplicado al aumento del cupón hasta alcanzar el pago integral del interés.

VIII

Los Agentes de los tenedores de bonos tendrán derecho a tomar en las Aduanas y Oficinas de Hacienda de la República, evitando perturbar el servicio regular de unas y otras, todos los datos relativos a las importaciones, exportaciones y demás impuestos fiscales que ellos juzgaren útiles al cumplimiento de su misión, siempre que estos datos conciernan a los ingresos cuyo quince por ciento, conforme a la primera cláusula, se destina al servicio de la Deuda; podrán además dirigir al Gobierno las observaciones que respecto del funcionamiento de esas oficinas o del desarrollo económico del país, creyeren oportunas.

El ejercicio del derecho establecido por el presente artículo será suspendido desde el momento que el servicio integral del interés sea pagado.

IX

Si por cualquier motivo o razón las rentas de la Aduana del Puerto de Santo Domingo disminuyeran al punto de no poder cubrir la cuota mensual destinada al pago de los intereses de la Deuda Pública Exterior, el Gobierno estará obligado a proveer la compensación necesaria, sea sustituyendo dicha Aduana con otra, sea afectando al mismo servicio de la Deuda cualquiera otro o cualesquiera otros impuestos suficientes para el caso.

X

En el caso de que así conviniere y en atención a la mayor comodidad del servicio de la Deuda Pública Exterior, esta permuta de garantía deberá ser efectuada de acuerdo con las Asociaciones de portadores de bonos.

Mientras se llega a ese acuerdo entre las partes, todo déficit que resulte al fin de un mes será cobrado de los proventos de la Aduana del Puerto de San Pedro de Macorís, según las mismas reglas establecidas en la tercera cláusula.

XI

Los gastos de envío de fondos, así como los de cambio, estarán a cargo del Gobierno. Los de la representación de los tenedores de bonos, estipulada en la cuarta cláusula, no podrán exceder de veinte mil dólares de oro al año. Diez mil dólares serán pagados por el Gobierno en doce entregas mensuales, conforme a las reglas ya establecidas en la tercera cláusula. El saldo será tomado de las sumas que se destinan al servicio de la Deuda.

XII

En el caso de que ulteriormente un cambio de títulos fuere recibido por el Gobierno, éste se pondrá de acuerdo con las Asociaciones respecto del texto y de la forma de los nuevos títulos.

XIII

No se cobrará ningún impuesto sobre el servicio de la Deuda Pública Exterior.

XIV

Mientras por el aumento progresivo de las entradas de la República o, conforme a las reglas ya establecidas en las precedentes cláusulas, por el del porcentaje que se destina al servicio de la Deuda, se llega al pago integral de los intereses de la misma, el Gobierno quedará liberado del pago de cada cupón semestral de dichos intereses, con la sola distribución entre los títulos de la Deuda Exterior, de las sumas recaudadas en ejecución del presente convenio. El total de dicha Deuda se fija así: para el empréstito "Obligations or de Saint Domingüe 2¾%, 4% différé)" en una suma que no puede exceder de £2,736,750; para el empréstito "Dominican Unified Debt", o su similar "French American Reclamation Consols" estampillados 4%, en una suma que se estima en £1,000,000 (un millón de libras esterlinas) y cuyo máximum no podrá exceder de £1,150,000 (un millón ciento cincuenta mil libras esterlinas) más o menos. En el caso de que ulteriormente quedare demostrado que el total del último de los citados empréstitos sobrepuja la cifra de un millón de libras esterlinas antes indicada, el Gobierno proveerá el modo de pagar sobre el excedente el mismo tanto por ciento de interés proporcional que se pague sobre el millón de libras esterlinas.

XV

El primer cupón semestral será pagado el día primero de octubre del presente año.

XVI

El presente convenio podrá ser considerado como nulo por los tenedores de bonos, si dentro del plazo de cuatro meses, a contar del día primero de junio del corriente año, no fuere promulgado y publicado como ley de la República.

Ninguna convención ni medidas ulteriores deberán modificar las condiciones fundamentales del presente arreglo en favor de ninguna categoría de tenedores de bonos.

XVII

El Gobierno Dominicano tendrá el derecho, durante el plazo de veinte años, a contar del día de la promulgación y publicación del presente convenio, de reembolsar en oro efectivo, al tipo de 50% (cincuenta por ciento) de su valor nominal, la totalidad o una parte cualquiera de los títulos de la Deuda Pública Exterior actualmente en circulación, con fondos que no sean de los destinados al servicio de la Deuda.

Para su amortización los títulos serán llamados al reembolso por vía de sorteos, y sus números publicados por orden del Gobierno en cada una de las plazas en que deberá efectuarse el pago de los cupones.

XVIII

Todos los cupones vencidos después del mes de octubre de 1898, quedarán cancelados mediante la repartición de octubre próximo venidero o, a más tardar, la de abril de 1902, obligándose para ello el Gobierno a agregar al total de las cuotas correspondientes a los meses de mayo a octubre del corriente año, o al de las de octubre de 1901 a abril de 1902, percibido conforme a las reglas de la presente convención, la suma de cincuenta mil dólares en oro.

XIX

Los desacuerdos que ocurran entre las partes en cuanto a la aplicación o interpretación del presente convenio, serán sometidos al juicio definitivo de un tribunal arbitral que se reunirá en Europa y será compuesto del siguiente modo: un árbitro será nombrado por el Gobierno y otro por las Asociaciones ya citadas, y el tercero por los dos primeros árbitros. Si dentro del plazo de sesenta días no pudieren dichos primeros árbitros ponerse de acuerdo para nombrar el tercero, las partes deferirán al Presidente de la Confederación Suiza la designación del tercer árbitro.

XX

El presente convenio sólo tendrá fuerza ejecutoria, cuando sea aprobado por el Poder Ejecutivo, sancionado por el Congreso Nacional de la República, promulgado y publicado como ley del Estado.

Las bases del presente arreglo fueron sometidas por la Asociación para la Defensa de los tenedores de Fondos Públicos a las Asambleas generales de tenedores, convocadas en Amberes el día 9 de mayo del corriente año, y en Bruselas el día 10 del mismo mes y año, y en ellas los tenedores de bonos votaron a unanimidad la siguiente resolución:

"La Asamblea general de tenedores de fondos dominicanos, reunida en Amberes el día 9 de mayo del corriente año, aprueba las negociaciones entabladas por el Comité de tenedores de fondos dominicanos constituido en Amberes, en miras de llegar a un acuerdo para el arreglo de la Deuda Exterior. Autoriza, por consiguiente, al Comité a concluir definitivamente un convenio sobre las bases propuestas por el Gobierno.

Encarga al Comité de convenir o modificar, si fuere necesario, todos los detalles de las estipulaciones y de la ulterior ejecución del contrato que sólo él tiene mandato de firmar conforme a los poderes que le han sido otorgados por la mayoría de los tenedores. Emite, además, el voto de que anticipadamente sea resuelta por el Gobierno, de acuerdo con el Comité, la cuestión de los cupones atrasados y de los Scripts en circulación".

La misma resolución fue votada por la Asamblea reunida en Bruselas el día 10 de mayo.

Por consiguiente, y en cumplimiento de tales resoluciones, los Delegados de la Asociación para la defensa de los tenedores de fondos constituida en Amberes, firman el presente convenio en prueba de aceptación definitiva por parte de los tenedores.

El Comité de portadores franceses de renta dominicana se obliga a proponer la presente convención a la aprobación de los interesados, convocados por su iniciativa dentro del plazo de quince días, debiendo modificar inmediatamente al Gobierno Dominicano el voto que sea dado por la Asamblea.

Vista también la Convención Especial pactada en Amberes el día 3 de junio del corriente año, entre el Gobierno de la República, representado por el Sr. Doctor Henríquez y Carvajal, Ministro de Relaciones Exteriores, en misión especial y Agente Fiscal del mismo Gobierno, y el Comité de tenedores de fondos dominicanos, constituido en Amberes, representado por los señores P. Dierckxsens-Wellens, Michiels Beels, respectivamente Presidente y Secretario, y Augusto Dupont, miembro del mismo Comité, la cual convención está contenida en las siguientes cláusulas:

EN ATENCIÓN a los numerosos gastos hechos por los Comités de Defensa de los tenedores de bonos de la Deuda Pública Exterior, hasta llegar a la conclusión del Convenio firmado entre las partes, en la fecha de este día, el

Gobierno Dominicano se obliga a abonar a dichos Comités la suma de ciento veinte y cinco mil francos, con la cual quedan cubiertos los mencionados gastos y los sueldos atrasados del antiguo sub-controlador representante de los Comités belgas en Santo Domingo.

DICHA suma será pagada al Comité de Defensa de fondos Dominicanos constituido en Amberes, del siguiente modo: Cincuenta y cinco mil francos (frs. 55,000) de contado, por el representante del Gobierno Dominicano al firmar la presente convención especial, y el saldo de setenta mil francos (frs. 70,000) será puesto por el mismo representante del Gobierno a la libre disposición del Comité, en el Banco de Amberes.

QUEDA entendido, que se trata de la suma de setenta mil francos (frs. 70,000), que ha sido enviada directamente a dicho Banco por la casa "Sucesores de Cosme Batlle", de Puerto Plata, a favor de los tenedores de bonos y a cuenta de los cupones de abril de 1899 y siguientes, del empréstito 2¾% (4% différé) que quedaron sin ser pagados.

PARA garantizar el pago efectivo de dicha suma de setenta mil francos (frs. 70,000) el Ministro de Hacienda de la República Dominicana pagará directamente al Comité de Amberes, o pondrá a su disposición en Europa, en oro efectivo y al contado, dentro de un plazo que no podrá exceder de tres meses, a contar de la fecha de la suscripción del presente convenio, la suma de catorce mil dólares ($14,000).

SI POR un motivo cualquiera el Banco de Amberes no hubiere podido, dentro del mismo plazo, operar el pago de la indicada suma de setenta mil francos (frs. 70,000), el Comité de Amberes queda autorizado a pagarse el saldo que le es debido, con la remesa de los catorce mil dólares, ($14,000) hecha por el Ministro de Hacienda. En ese caso, ésta última será deducida del cupón de los títulos 2¾% (4% différé) pagadero en octubre próximo, y esto, conforme a la autorización dada al Comité de Amberes por los Poderes Generales firmados por la mayoría de los tenedores de bonos 2¾% (4% différé).

SI ANTES del primero de octubre próximo venidero, una cualquiera de dichas sumas de catorce mil dólares ($14,000) o de setenta mil francos (frs. 70,000) quedare libre, tal suma será puesta en el Banco de Amberes para ser aplicada al servicio de los cupones de la Deuda Pública Exterior de la República.

SI POR el contrario, el Comité entrare, después de recibida la primera, en posesión de la otra, posteriormente al mes de octubre próximo, una de ellas será depositada en el Banco por cuenta de los tenedores de bonos, para ser distribuida al mismo tiempo que el cupón siguiente entre los portadores de títulos del empréstito 2¾% (4% différé) en reintegro de la parte que

eventualmente hubieren dejado de percibir en la distribución de 1901 a consecuencia de la reducción antes indicada.

EL COMITÉ se obliga a hacer todas las diligencias que juzgare útiles a fin de que en el más breve plazo sea puesto en posesión de la dicha suma de setenta mil francos (frs. 70,000) actualmente en el Banco de Amberes.

LA PRESENTE convención, hecha en doble original, debe ser considerada como definitiva e irrevocable por ambas partes contratantes.

DECRETA:

Único: Quedan sancionados en todas sus partes, sin ninguna modificación, el Convenio y Convención Especial, pactados en Amberes y en París, el 3 de junio del corriente año, entre el Gobierno Dominicano y la "Asociación para la defensa de los tenedores de fondos públicos" y el "Comité de portadores franceses de Renta Dominicana".

§ El presente decreto será enviado al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, el día 23 de septiembre del año 1901; 58° de la Independencia y 39° de la Restauración.

El Presidente, Emilio Prud'homme.
Los Secretarios, Moralis L.
firmado:— *Ignacio Coradín*.

Ejecútese, comuníquese por la Secretaría correspondiente, publicándose en todo el territorio de la República para su cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, a los 27 días del mes de septiembre de 1901; año 58° de la Independencia y 39° de la Restauración.

El Presidente de la República,
J. I. JIMENES.

Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio, firmado:— *E. Brache, hijo*.

DOCUMENTO Nº 31

PROTOCOLO de un convenio entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América.— Santo Domingo, 31 de enero del 1903.

Protocolo de un convenio entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América para someter a arbitraje ciertas cuestiones relativas al pago de la suma que por la presente se convenga y que deberá pagar el Gobierno

Dominicano al Gobierno de los Estados Unidos por reclamaciones de la San Domingo Improvement Co. of New York, corporación bajo las leyes del Estado de New Jersey, y un ciudadano de los Estados Unidos y sus compañías aliadas.

Por cuanto existen diferencias entre el Gobierno Dominicano y la San Domingo Improvement Company sus compañías aliadas, y

Por cuanto de resultas de esas diferencias, han quedado seriamente afectados los intereses de la Improvement Co. y sus compañías aliadas, a saber:

The S. D. Finance C. of New York.

The Company of the Central Dominican Rail Way.

Siendo ambas corporaciones creadas bajo las leyes de New Jersey, y The National City Bank of San Domingo, compañía organizada en su origen bajo cédula francesa, siendo las dos últimas compañías de la propiedad y control de la San Domingo Finance Co.; y

Por cuanto se ha convenido, como la base del presente Arreglo, que la Improvement & Co y sus compañías aliadas, deberán retirarse de la República Dominicana, y que ellas deberán ser debidamente indemnizadas por esta última por la renuncia de sus derechos, propiedades e intereses.

La República Dominicana y los Estados Unidos de América, por órgano de sus respectivos representantes, Juan Francisco Sánchez, Ministro de Relaciones Exteriores y W. F. Pouell, Encargado de Negocios, han pactado los artículos siguientes:

1º Habiéndose convenido por la presente que el Gobierno Dominicano no pagará al Gobierno de los Estados Unidos la suma de $4,500,000 (cuatro millones quinientos mil dólares) en oro americano, bajo condiciones que fijarán los Arbitrios, debiendo ser hecho dicho pago y aceptado como compensación cabal y completa por la cesión por las compañías antes citadas de todos sus derechos, propiedades e intereses y como completo arreglo de todas las cuentas, reclamaciones y diferencias existentes entre el Gobierno Dominicano y dichas compañías; las condiciones de pago de la indemnización así convenida será referida a una Comisión de Tres árbitros, uno que nombrará el Presidente de los Estados Unidos, uno que nombrará el Presidente de la República Dominicana, y el tercero entre el Presidente de los Estados Unidos y el Presidente de la República Dominicana conjuntamente; pero si dentro de 60 días después de firmado el presente Protocolo, el tercer Árbitro no hubiese sido nombrado, entonces lo será por el Gobierno Dominicano, escogiéndolo entre los miembros de la Suprema Corte de los Estados Unidos o de la Corte del Circuito de Apelación de los Estados Unidos, de una lista de nombres presentada.

En caso de muerte, ausencia o incapacidad de alguno de los Árbitros o en el caso de que cesare u omitiese de actuar, la vacante será llenada del

mismo modo que el nombramiento original, debiendo calcularse el período de 60 días desde la fecha en que suceda la vacancia.

2º Los Árbitros deben reunirse en la Ciudad de Washington entre los 60 días después de la fecha en que se nombra el tercer Árbitro.

El voto de la mayoría será suficiente para decidir las cuestiones que se sometan al Tribunal, inclusive la sentencia final.

3º En el término de 6 meses después de firmado este Protocolo cada parte presentará a la otra y a su Agente, y también a cada uno de los Árbitros, dos copias de su caso, acompañado de los documentos y testimonios sobre los cuales se apoya, así como las declaraciones de los respectivos testigos.

Dentro de un período adicional de dos meses, cualquiera de las dos partes puede, en igual forma, presentar un caso en contrario con documentos, testimonios y declaraciones adicionales, replicando el caso, documentos y testimonios de la otra parte. Si en el caso o contracaso alguna de las partes presentare referencia a algún documento en posesión exclusiva suya, sin presentar copia, a pedimento de la otra, deberá suministrarle dicha copia; y cada parte puede por intermedio de los Árbitros, exigir los originales de la otra parte o las copias certificadas de cualquier documento aducido como testimonio.

4º Dentro de dos meses después de expirado el término concedido para archivar los contracasos, cada Gobierno puede, bien sea por su Agente, o por consultor adicional, defender su causa ante los Árbitros, tanto por escrito como oralmente. Cada cual deberá suministrar al otro copias de todo argumento escrito, y cada parte, es libre de hacer réplicas por escrito con tal que cada réplica sea sometida dentro de los dos meses especificados.

5º Las compañías antes mencionadas cederán y traspasarán al Gobierno Dominicano y este último adquirirá de las compañías, las propiedades aquí mencionadas, debiendo las épocas, términos y condiciones de ser fijados por los Árbitros:

1. Todos los derechos e intereses que posean en la sección del Ferrocarril Central Dominicano, ya construida, así como todos los derechos e intereses que puedan tener en la extensión del Ferrocarril Central de Santiago a Moca y de Moca a San Francisco de Macorís.

2. Todos los derechos e intereses que puedan tener en el Banco Nacional.

3. Todos los Bonos de la República de los cuales puedan ser tenedores, cuyo monto no excederá de £850,000 nominales, y no deberán ser menos de £825,000 nominales. Se entiende que todos estos bonos son de la clase que devengan 4% de interés anual, con excepción de £2,400 de bonos, 2¾% por 11 bonos de la clase de 4%. Los Estados Unidos acompañarán a su caso una nómina de los bonos.

6. Se conviene, como base de la sentencia que deben dar los Árbitros, que la suma especificada en el artículo primero de este instrumento deberá ser pagada por entregas mensuales, cuya cuantía y modo de cobro será determinado por el tribunal. En la sentencia se fijará que el interés principiará a contar desde la fecha de su promulgación al tipo de...

Habiendo propuesto el Gobierno Dominicano, en sus recientes negociaciones con las Compañías Americanas, pagar a cuenta de lo que les adeuda la suma mínima de $225,000 dollars por año, que deberá aumentarse en escala ascendente, queda convenido que el Gobierno Dominicano pagará al Gobierno de los Estados Unidos para uso de las Compañías Americanas, mientras esté pendiente el presente arbitraje, y a contar del 1º de enero de 1903 la suma de $225,000 por año, dividida en entregas mensuales iguales, cuyo monto agregado, pagado en esta forma, se tomará por los Árbitros, en la fecha de la sentencia.

7. La sentencia del Tribunal deberá ser pronunciada dentro de un año, a contar de la fecha en que se firme el presente Protocolo. Esta será por escrito y será final y concluyente.

8. Los Gobiernos pagarán en partes iguales una compensación razonable a los Árbitros por sus servicios, y todos los gastos incidentales de arbitraje, incluyendo el costo de empleados de oficina que puedan necesitarse.

Hecho por cuádruple en español y en inglés, en la Ciudad de Santo Domingo, el día 31 de enero de 1903.

(fdo.) *J. F. Sánchez*, Ministro de Relaciones Exteriores.
(fdo.) *W. F. Powell*, Chargé D'Affairs.

Reconstrucción Financiera I, págs. 4-7.
Colección Trujillo. Tomo 15.

DOCUMENTO Nº 32

INFORME presentado al Congreso en su sesión del 29 de Abril de 1907, por la Comisión de Hacienda sobre el empréstito de $20,000,000.

Ciudadanos Diputados:

La Comisión que suscribe, ha estudiado los dos contratos sometidos a la consideración del Congreso por el Ciudadano Presidente de la República, en su Mensaje especial del cinco de este mes, relativos a la emisión y venta de bonos de la República, por valor de $20,000,000 (veinte millones de pesos oro americano); pero, por falta de tiempo y por no demorar más este informe, no ha podido acopiar todos los datos que juzgaba necesarios para el

análisis concienzudo de la cuestión, bajo todos sus aspectos. Ha hecho, sin embargo, todo lo posible porque en este informe se hallen sólidas bases para la edificación del criterio de esta Cámara; y se apresura a presentároslo, tal vez en forma poco atildada y luego también difusa, porque, hasta para ser lacónico, se necesitaba tiempo... Las sesiones diarias y los muchos trabajos que pasan a la Comisión de Hacienda, han contribuido mucho a restarle el tiempo que necesitaba para la preparación de este informe.

CONDICIÓN PRIMORDIAL DE LOS CONTRATOS.

Toda la operación tiene por base y como *condición sine qua non* un Convenio que el gobierno dominicano ha de celebrar con el gobierno americano, en el cual Convenio se deberá estipular que, mientras la República no haya cancelado sus bonos, *todos los derechos de importación y exportación que se causen por las aduanas de la República habrán de ser colectados y administrados por el gobierno de los Estados Unidos*, de modo que si tal Convención no se llegara a celebrar, o si, de celebrarse, no resultara a satisfacción de los Banqueros que deben hacer la compra de los bonos, quedaría nulo y sin ningún valor todo lo estipulado en los dos contratos de referencia.

Mucho tiempo hace que viene la República sometiéndose por contratos a esa humillante condición para darles garantía, y demostrar su buena fe, a los mismos que hasta ahora sólo han demostrado que al tratar con la República, ¡traían el plan preconcebido de engañarla!...

Otra condición que se ha de estipular en el Convenio mencionado es la de que *no se podrán alterar las tarifas de derechos de importación y exportación*, sino mediante ciertas restricciones. Esa condición es también algo humillante; pero es justa y natural, dada la índole de la transacción. Esa es la garantía que se le da a los acreedores, y si nos reservamos el derecho de modificarla a nuestro antojo, quedan dichos acreedores entregados a nuestra buena fe solamente, y los prestamistas quieren siempre garantías más sólidas para desembolsar su dinero. Por eso, sin duda, figura esa cláusula, lo mismo que la anterior, en todos los contratos de empréstitos que se han efectuado por la República. Hasta en concesiones, tales como la otorgada a los Señores Clyde & Co. por su línea de vapores, se somete el gobierno a semejantes restricciones. Según una de las cláusulas de la concesión mencionada, *no puede el gobierno dar ninguna ley que tenga por objeto rebajar los derechos de puerto*, mientras dure en vigor esa concesión.

En prueba de nuestras aseveraciones, extractamos de los diferentes contratos de empréstito celebrados por la República, las cláusulas que al caso se refieren.

Del primer contrato de empréstito extranjero, o sea el celebrado con los señores Hartmont & Co. de Londres, el año 1869, se copian las siguientes: (página 182, tomo 5 de la Colección de Leyes).

"Artículo 11.— Con el fin de asegurar la pronta entrega de sus fondos a los acreedores, el gobierno dominicano autoriza, por este contrato, a los señores Hartmont & Co., o a la casa que éstos encargaren de la emisión del empréstito, para que nombre un empleado en cada una de las Aduanas de Santo Domingo y Puerto Plata. Estos empleados deberán contrafirmar los recibos expedidos por los receptores de Aduanas, *colectar los derechos hasta concurrencia de la suma necesaria para el pago de los intereses y de la amortización del empréstito*, y enviarlos al Consulado Británico, en la Ciudad de Santo Domingo, quien los remitirá mensualmente a Londres".— "Artículo 13.— El gobierno dominicano se obliga a no disminuir los derechos de importación y exportación antes del reembolso total del empréstito, a menos que una Comisión nombrada por los prestamistas consienta en ello".

Del contrato de empréstito por £770,000, el año 1888, con los señores Westendorp & Co., son los artículos siguientes: "Artículo 4.— Las anualidades, lo mismo que el presente empréstito, quedan garantizadas por una hipoteca general sobre todas las rentas, y por un primer privilegio sobre los ingresos de todas las aduanas de la República Dominicana (derechos de importación y derechos de exportación) de acuerdo con dicha ley del 27 de marzo de 1888. Los señores Westendorp & Co. tendrán *el derecho de ingresar directamente esas rentas*, bajo los cuidados, o por medio, de sus agentes, o de sus delegados, o de una sociedad, o de una casa de banca indicada por ellos. Dichos agentes o delegados percibirán, sobre las rentas ingresadas, en primer lugar, el montante de la anualidad antes indicado, y el excedente que será entregado al gobierno, con las condiciones mencionadas en los siguientes artículos.

"Si por cualquier motivo, los señores Westendorp & Co. no quisiesen, o no pudiesen, ni encargarse por sí mismos, ni sustituir en su lugar a una sociedad, o a una banca, para efectuar los ingresos, la Comisión de control, de que luego se hablará, tendrá el derecho de encargarse de esta operación en nombre de los portadores de las obligaciones".

"Artículo 5.— Se creará en Santo Domingo el primero de noviembre de 1888 una Caja General de Recaudación de Aduanas, *que será encargada de efectuar el ingreso de los derechos de importación y exportación percibidos en todos los puertos de la República* actualmente abiertos al comercio exterior, o que puedan serlo en lo adelante.

Esta Caja General de Recaudación será administrada por delegados nombrados por los señores Westendorp & Co., o los que representen sus

derechos, durante toda la duración de este Contrato y hasta la extinción del empréstito".

"Artículo 6.— Los derechos de importación y de exportación serán percibidos conforme a las tarifas de derechos existentes. (Ley sobre Aranceles de importación y exportación 1883). Podrán, sin embargo, ser modificados ulteriormente, sea a proposición del Gobierno, o gestión de los señores Westendorp & Co., y aun de la banca o de la sociedad que se sustituyan en la ejecución de esta parte del presente contrato. Pero en uno u otro de estos diversos casos, *las modificaciones no podrán ser introducidas sino en virtud de un acuerdo intervenido entre las partes contratantes*.

El gobierno *renuncia formalmente de la facultad de acordar*, a quienquiera que sea, y por cualquiera causa que sea, ninguna *concesión concerniente a exención o disminución de los derechos de aduana;* en una palabra, ningún privilegio de cualquier naturaleza que sea, *sin el consentimiento de los señores Westendorp & Co"*.

"Artículo 12.— Queda entendido: 1° Que cuando haya lugar de proveer al reemplazo de un empleado de aduana, el Director General de Recaudación *deberá ser consultado* sobre la elección que deba hacerse. *El Gobierno no podrá rehusar el retiro*, a proposición de dicho Director, de los empleados cuya infidelidad o incapacidad le fueren señaladas.— 2° *Sólo el servicio de la Caja General de Recaudación podrá dar recibo* por el pago de los derechos de aduana".

Artículo 17.— Para asegurar la validez del desprendimiento de los derechos de aduana en manos de los señores Westendorp & Co., o quienes sus derechos representen, y para dar a los portadores de obligaciones la seguridad más absoluta, el gobierno dominicano *consiente en caso de contestaciones aceptar como árbitro sin apelación al gobierno holandés*".

Al entrar la San Domingo Improvement Co. en sustitución de los señores Westendorp & Co. el año 1893, se encargó de hacer la conversión de toda la deuda anterior emitiendo, al efecto, una cantidad en bonos de la República por valor de £2,035,000 y en el contrato celebrado al efecto se expresó que "*todas las estipulaciones de los contratos* de 1888 y 1890 celebrados entre el gobierno dominicano y los señores Westendorp & Co. para la garantía y validez de los tenedores de bonos de los empréstitos mencionados *quedan en toda su fuerza y vigor*". Se agregó, además, y se repitió después en el artículo 8 de la ley del 9 de agosto de 1897, sobre consolidación y unificación de todas las deudas anteriores, lo siguiente:

"Con el objeto de consolidar el crédito de los bonos de la República Dominicana y de facilitar la conversión que se ha de hacer para pagar la deuda interior y asegurar el pago del presupuesto, y también para la garantía de las dos partes contratantes, queda convenido que la San Domingo Improvement

Co. of New York estará obligada en caso de falta de pago de capital e intereses por parte del Gobierno dominicano, o por otra necesidad manifiesta, a pedir a los gobiernos de Holanda, Bélgica, Inglaterra, Francia y de los Estados Unidos de América (en cuyos países los bonos de los empréstitos 1888 y 1890 están colocados) *de nombrar cada uno de ellos uno de sus ciudadanos, tenedores de bonos, miembros de la Comisión Financiera* de que se habla en los artículos 4 y 15 del contrato de 1888, sancionado por el Congreso de la República Dominicana, y las personas así nombradas constituirán la Comisión Financiera arriba mencionada, la cual tendrá todos los poderes para la recaudación y desembolso de las rentas de aduana, que actualmente tiene la Caja de Recaudación". (Tomo 14, pág. 441 de la C. de L.)

Durante un corto período de relativa paz que disfrutó la República al morir el general Heureaux, se llegó a obtener que desaparecieran esas humillantes ligaduras; pero en virtud de una sentencia pronunciada por los árbitros nombrados de acuerdo con el protocolo firmado el 31 de enero de 1903, y en cuyo origen no ha tenido ninguna intervención el Poder Legislativo, aparece la República sometida nuevamente a iguales o peores vejaciones que las anteriores. Por el artículo 4 de ese Laudo Arbitral se establece lo siguiente: "Los proventos aduaneros y los derechos de puerto de los puertos y aduanas de Puerto Plata, Sánchez, Samaná, y Monte Cristy, y de todos los demás puertos y aduanas que ahora existan o se establezcan en las costas, o en el interior, al norte de los 18 grados 45 minutos de latitud norte, y al este de la línea fronteriza de Haity, quedan por el presente Laudo, afectados y destinados como garantía del pago de dicha deuda y sus intereses".

"*Los derechos de aduana y de puertos existentes no podrán ser reducidos en ningún caso, ni en favor de ninguna persona, en más de un 20%, sin el consentimiento del gobierno de los Estados Unidos mientras no estén completamente pagados* la dicha deuda y sus intereses. *Los Estados Unidos nombrarán un Agente Financiero, el cual establecerá una oficina en la República Dominicana.* En caso de que en cualquier mes dejare de recibir la entrega correspondiente, dicho Agente Financiero tendrá pleno poder y completa autoridad por sí mismo o por medio de las personas que nombrare a este efecto, *para tomar inmediatamente posesión de la aduana de Puerto Plata, en primer lugar, encargarse de la recaudación de los derechos aduaneros y de puerto en dicho puerto*, y a ese efecto, *fijará y determinara esos derechos aduaneros y de puerto y perseguirá su cobro, pues poseerá y ejercerá todos los poderes que son inmanentes en el interventor de aduana, en el administrador de Hacienda y en todos los demás empleados autorizados por la ley para participar en las funciones de determinar los derechos, recaudarlos* y perseguir su pago. Dicho Agente Financiero tendrá el *poder de nombrar, de tiempo en tiempo, empleados subalternos. Los derechos de aduanas y de puertos serán*

pagados directamente a él, o a las personas que él nombre, por los importadores, exportadores y demás personas obligadas a dichos derechos, debiendo éstas hacerlo en efectivo o en pagarés a la orden de dicho Agente Financiero, o a la de sus representantes; "y ese pago y sólo dicho pago", liberará los efectos y descargará a los importadores, exportadores y demás personas obligadas de la obligación de pago de los referidos derechos de aduana y puerto".

Y no es a mala fe de nuestro gobierno, a lo que se debe atribuir el que se nos exijan actualmente esas cláusulas de garantía tan apremiantes, porque no ha sido sino el estado de revuelta en que siempre hemos vividos lo que nos ha hecho faltar a los compromisos contraídos hasta ahora; ese estado de convulsión provocado y preparado tal vez expresamente por esos mismos acreedores, para hacernos reconocer en los momentos más críticos, la legitimidad de supuestas o inicuas acreencias que gravitan hoy sobre nuestro tesoro con peso agobiador.

OBJETO DE LOS CONTRATOS

Como sabéis, el objeto principal de la negociación propuesta, es cancelar todas las deudas que actualmente pesan sobre la República, y liberar al mismo tiempo la parte de rentas fiscales afectadas en virtud de varios contratos y concesiones. Al efecto se ha de llevar a cabo un ajuste de todas esas deudas con nuestros acreedores, y además un arreglo por el cual los dueños de concesiones renuncian a la parte de rentas fiscales que les corresponden. Es entendido que el montante de la deuda y el valor de las indemnizaciones requeridas por los dueños de concesiones, no ha de ascender a una suma tan alta que no pueda ser cubierta con el neto producido de la emisión de $20,000,000 en bonos. Es esa una condición esencialísima de los contratos, al extremo de que si tales arreglos no se hacen previamente, o si, después de hechos, no son satisfactorios para los banqueros, en razón de que su montante no quede asegurado con el producto del empréstito, ellos pueden anular la operación, o sea, negarse a la compra convenida de los bonos.

Como anexo a este informe os presenta la Comisión el cuadro detallado de todas las deudas que real o ficticiamente se le atribuyen a la República, y de las reducciones que se intenta hacer para llegar al ajuste de que se trata. Las cuentas que ganan interés asciende a $25,067,962.28. El tipo de interés fluctúa entre 2¾% y 24% anual, pero entre todas reditúan anualmente $762,860.62. Las cuentas que no ganan intereses ascienden a $5,386,878.29, lo que hace elevar la deuda en general a $30,454,840.57, siendo por tanto el promedio de interés sobre toda la deuda: 2½% anual próximamente.

En los cálculos de la Comisión no han entrado unos reconocimientos librados por la Contaduría General de Hacienda en favor del General

Heureaux, porque el valor de esos reconocimientos figura en la cuenta que la Contaduría General de Hacienda llevaba al General Heureaux, y no obstante habérsele abonado en cuenta esos reconocimientos, arroja su cuenta un balance en contra de él, de más de *dos millones de pesos*. Era una operación curiosa la que se efectuaba por ese concepto en los libros de la Contaduría: cuando el General Heureaux presentaba alguna cuenta de gastos que decía haber hecho por cuenta del gobierno, se le libraba un reconocimiento con interés de 2% mensual, pero no se le cargaba interés ninguno por los valores que recibía para hacer y para cubrir esos gastos, ni por los balances que resultaban en contra de él. Eso le cuesta millones de pesos a la nación, pues eran grandes las sumas que se abonaban de tiempo en tiempo al General Heureaux, por concepto de intereses, sobre valores que no había desembolsado o que estaban ya cubiertos. Por la misma razón, sin duda, no figuran tampoco esos reconocimientos en la lista A, o sea en la relación de cuentas a que hacen referencia los contratos.

El cuadro que se anexa está formulado de conformidad con el plan de ajuste que el Ministro de Hacienda se propone llevar a cabo y según el cual se harán las reducciones siguientes:

$ 4,493,500.72	(De la Improvement Co).....	a	90%	de	capital	$ 4,044,150.65
$ 15,974,832.85	(Deuda Belga).....	"	50%	"	"	$ 7,987,416 42
$ 4,781,028.94	(Contratos, deuda flotante).....	"	50%	"	"	$ 2,390,514.42
$ 817,162.68	(Vales Contaduría y reclamación Vicini)	"	40%	"	"	$ 526,865.07
$ 122,441.55	(Reclamación West. Yndia P. W.).....	"	30%	"	"	$ 36,732.46
$ 4,066,069.23	(Deuda Dif. & &).....	"	10%	"	"	$ 406,606.92
$ 199,804.60	(Billetes Banco 5x1).....		Neto	"	"	$ 199,804.60
$ 30,454,840.57	que se reducen a.....					$ 15,392,090.54

Ese ajuste de cuentas no se puede considerar como definitivo todavía, pues, como lo expresa el Ciudadano Ministro de Hacienda, ese es el plan propuesto, pero no está aceptado en su totalidad por los acreedores. Aun cuando todos los acreedores lo aceptaran, opina la Comisión que el Congreso no debe aceptarlo sin observaciones. Figuran algunas cuentas en la lista, que no se deben pagar en ninguna forma, ni bajo ningún concepto, mientras no hayan sido examinadas cuidadosamente y aprobadas expresamente por el Congreso.

Principiando por la de la Improvement Co.: ya el Congreso tiene expresado el concepto que le merece esa partida, esto es: "Que la nación no puede comprometerse a pagar lo que acaso no deba, sin un ajuste previo de cuentas". Lo mismo resulta con el protocolo italiano y con todos los contratos que no se hayan sometido a la aprobación del Poder Legislativo, único capacitado para resolver todo lo concerniente a la deuda nacional.

Entre los $4,066,069.23 para cuya cancelación se destina un 10% de su valor nominal, sin interés, debe haber muchas partidas que aún el 10% es

demasiado concederles, dado el origen de tales reclamaciones; pero también debe haber, o mejor dicho, hay muchas que por la legalidad y la moralidad de su origen, deben ser tratadas como de las más favorecidas. Se impone, pues, la clasificación de esas deudas mediante un examen concienzudo, para saber fijamente a cuánto ascienden en realidad.

Todavía no se ha efectuado el ajuste de las concesiones y por tanto, se ignora cuál será el montante de las indemnizaciones que deberá pagar la República por este concepto. Cumple a la Comisión hacer notar a esta Cámara la importancia que se atribuye en el Contrato de los Banqueros a esa condición que puede determinar la resolución de dicho contrato sin ninguna responsabilidad, así como a lo eventual de los cálculos que se pudiesen hacer sobre la suma que importará a la República el ajuste de esas concesiones.

SÍNTESIS DE LOS CONTRATOS

El contrato celebrado con los Banqueros Kuhn, Loeb & Co., tiene por objeto venderles a dichos banqueros todos los bonos que la República se propone emitir, montantes a $20,000,000 oro americano.

El contrato celebrado con la Morton Trust Co. tiene por objeto nombrar a esa compañía Agente del Gobierno para todo lo concerniente al empréstito; y como tal, habrá de recibir de los Banqueros el neto producido de la venta de los bonos, reteniendo ese dinero en su poder hasta que sea aplicado al objeto que el gobierno se propone. Mientras permanezcan esos fondos en su poder la Trust pagará a la República 2% de interés anual. Los bonos devengarán un interés de 5% anual desde el día primero de abril de este año. Ese interés será pagado por la República semestralmente. El primer semestre se pagará el día primero de octubre y el segundo semestre el día primero de abril de cada año.

Aunque los bonos ascienden a $20,000,000 se debe tener en cuenta que es de $20,500,000 el compromiso que la República contrae, pues ella se obliga a pagar una prima de dos y medio % sobre sus bonos, o sea a pagar $102,50 oro por cada $100.00 en bonos.

En cambio, la República recibirá de los Banqueros solamente $19,200,000, porque el precio convenido es de $96.00 oro por cada $100.00 en bonos. Se puede calcular que solamente recibirá la República $93.50 por cada $100.00 en bonos, y pagará por ellos $102.50, pues los Banqueros tienen un plazo de seis meses para efectuar la compra de los bonos, a partir del primero de abril, quedando a favor de ellos los intereses devengados en ese tiempo, o sea dos y medio %, lo que, en realidad, equivale a otro descuento, o sea una pérdida de $500,000 para la República.

Para atender al pago de los intereses y a la amortización paulatina de los bonos, la República depositará el día primero de cada mes la suma de cien mil pesos oro en poder de la Trust Co., a partir del día primero de abril de este año.

Durante los primeros diez años, no tiene la República derecho de amortizar sus bonos, (salvo que los poseedores de ellos los quieran vender) de modo que, como las entregas de cien mil pesos mensuales hacen *un millón doscientos mil pesos* al año, la Trust Co. dedicará *un millón de pesos* anualmente, o sea $500,000 al fin de cada semestre, al pago del interés convenido, y retendrá en su poder los otros $2,000,000, valor que entonces será invertido por la Trust Co. en la compra de bonos por cuenta de la República, para ser amortizados. Si los tenedores de Bonos no quisieren venderlos, se designarán por medio de la suerte los bonos que deben ser cancelados, y los dueños de tales bonos estarán obligados a vendérselos a la República, a razón de $102.50 oro por cada $100.00 en bonos.

Después de los primeros diez años, se invertirá anualmente en bonos todo el dinero que haya en el fondo de amortización, ya sea comprando los bonos en el mercado si hay vendedores al tipo máximo de $102.50 por $100.00 en bonos o por medio de sorteos que obliguen a los tenedores a vender a ese tipo los bonos que la suerte haya designado.

El interés que en lo sucesivo deba corresponder a los bonos comprados y cancelados por la República, lo retendrá la Trust Co. en su poder para agregarlo al fondo de amortización, el cual habrá de ser, por consiguiente, algo mayor todos los años, en la misma proporción que irá disminuyendo el montante de los bonos pendientes de amortización y el pago de los intereses correspondientes.

La República no podrá dedicar a ningún otro objeto los fondos destinados al pago de intereses y al fondo de amortización; pero podrá aumentar el fondo de amortización con cuantos valores quiera, pudiendo comprar y amortizar de una vez, si quiere todos los bonos que haya pendientes, después de los primeros diez años.

La República se obliga a cancelar todos sus bonos antes del día primero de abril de 1957, sea por medio de la amortización paulatina convenida, o haciendo uso de la facultad que tiene de comprarlos todos, después de los primeros diez años.

La República le pagará a la Morton Trust Co. por obrar como depositaria del dinero que produzca la venta de los bonos, hasta que esos fondos hayan sido aplicados al objeto que se destinan, una comisión de medio por ciento sobre cada pago que efectúe.

Por certificar la autenticidad de los bonos, $0.50 por cada uno como los bonos serán de $1,000, $500 y $100 cada uno, según lo exijan los Banqueros,

quienes tienen el derecho de hacer que se les cambien en cualquier tiempo, bonos de un tipo por otro, y la Trust Co. cobrará sus $0.50 tanto sobre los bonos originalmente emitidos como sobre los que después se emitan en cambio de otros, no es posible saber cuánto tendrá la República que pagar por ese concepto.

Además, como habrá bonos al portador y bonos nominativos, y al cambiar éstos de dueño, se necesita tomar nota del traspaso, la Trust Co. cobrará anualmente $250.00, que la República le pagará por registrar esos traspasos.

Serán también pagados por la República, además de los gastos que origine la impresión, transporte y emisión de los bonos, la comisión que cobren los agentes que la Trust Co. nombre en diferentes ciudades de Europa y el gasto que originen las remesas que la Trust Co. hará a dichos Agentes para pagar, en cada una de dichas plazas, el importe de los intereses y el valor de los bonos que se hayan de amortizar, y cuyos dueños residan, o exijan el pago, en dichas ciudades. La Trust Co. no es responsable de los actos o la negligencia de esos agentes que ella razonablemente nombre.

El gasto que originen los avisos de los sorteos y de los números sorteados, o del pago de cupones por interés vencido, y todo cablegrama y todo gasto originado por el servicio del empréstito, o con motivo del convenio celebrado con el Gobierno de los Estados Unidos, a que la República se compromete, o pueda comprometerse, o es o puede ser requerida a efectuar en conexión con el empréstito será pagado por la República; y, al efecto, la Trust Company solicitará de la República, o del Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a cuyo cargo esté la colectación de los derechos aduaneros, las sumas que ella estime necesarias para atender a esos gastos.

Para pagar los gastos relacionados con la emisión y venta de los bonos y con el ajuste de las deudas, podrá la República disponer de una parte del producto de la venta de los bonos.

La Trust Company estará autorizada a invertir y reinvertir a su discreción, en negocios de los que les están permitidos a las Cajas de Ahorro, todos los valores que haya en el fondo de amortización. Esas inversiones serán hechas por cuenta y riesgo de la República.

Mientras duren en su poder esos valores, la Trust Company le pagará a la República un interés de 2% anual, calculado desde la fecha en que dichos valores le sean entregados, hasta la fecha en que ella los haya desembolsado por cuenta de la República, debiéndose liquidar esos intereses anualmente. Tanto el producto de esos intereses, como cualquier otro beneficio que se obtenga en la inversión de los fondos destinados al servicio del empréstito, vendrán a aumentar el fondo de amortización.

El idioma que prevalecerá para la interpretación de los Contratos será el inglés; el domicilio será Nueva York, y por consiguiente serán los tribunales dominicanos los llamados a conocer de las litis que puedan surgir.

Como estos contratos debían estar sancionados el día primero de abril y no lo están aún, el Poder Ejecutivo ha pedido se fije para comienzo de su ejecución el 1° de mayo en vez del 1° de abril y las fechas enunciadas en el texto habrán de ser cambiadas en armonía con la de su ratificación, por más que la cuestión del tiempo está considerada como esencial en los contratos de referencia.

Se omiten otros detalles que se refieren al procedimiento en su mayor parte, para más brevedad, y por no creerlos necesarios.

Ciudadanos Diputados:

Hubiera sido más acuciosa la Comisión, hubiera hecho el trabajo de investigación que se proponía en el dédalo pavoroso de nuestras deudas, si no hubiesen llegado, como dejamos dicho, de un modo tan festinado, los contratos de empréstito, a esa Cámara. De ahí que presente muy a su pesar, este informe con las indispensables modificaciones a los contratos, las cuales, por lo menos, disminuirán en algo las eventuales interpretaciones a que puedan ellos dar lugar en lo porvenir, y no sin significar antes al Congreso, que para llegar a esta aceptación, ha tenido que sacrificar la Comisión muchos escrúpulos; que se ha impuesto la ardua labor de escudriñar celadas y de sortear peligros, tal vez ocultos todavía en la confusa redacción de los Contratos, por más que el ciudadano Ministro de Hacienda ha debido firmarlos después de un largo estudio, de una indispensable depuración analítica, tal como lo requiere la eficacia de un asunto del cual es él directamente responsable y en el cual debió decirse todo con suficiente claridad por lo que respecta, no únicamente a los intereses de los banqueros, sino también a los intereses de la República. Y aún así se limita la Comisión a esas modificaciones, doblegándose ante un cúmulo de circunstancias adversas y dolorosas, acentuadas o creadas tal vez con la descorazonadora frase del Ministro de Hacienda en su memoria cuando lanzaba en un medio vehemente e impresionable como el nuestro, fácil siempre a situarse en la grave pendiente del despotismo o de la anarquía: "*que era lo mejor que él había logrado conseguir*" , *que era imposible concertar nada mejor, ni más factible*"...

He aquí las modificaciones introducidas a los contratos:

Página primera, línea quinta: quitar las palabras "lo adelante" y poner en su lugar "*en las estipulaciones de este Convenio*".

Página primera, línea 10: intercalar la palabra *pretendida* antes de la palabra *deuda*, porque varias de las partidas que figuran en la lista A han sido

expresamente impugnadas por esta Cámara y algunas otras son aceptadas con reserva por la Comisión.

Página segunda, líneas 9 y 10, después de la palabra "América", con la cual termina la línea 9, agregar las palabras a *cuyos términos se subordina este Convenio*, porque el texto del tratado modifica visiblemente parte del Convenio.

Página segunda, línea 16: suprimir la palabra *Administración*, porque, según lo establecido en el Tratado, la atribución de los empleados nombrados por los Estados Unidos, es de simples colectadores, es decir, perceptores o receptores de fondos.

Página tercera, línea novena: después de la palabra *decidan* agregar las siguientes palabras: *ajustándose a los términos de este Convenio*, porque si bien es cierto que a los banqueros se les debe dejar en libertad para escoger la forma de redacción que a sus intereses convenga, no lo es menos que esa libre acción de ellos debe ser expresamente limitada por los mismos términos obligatorios establecidos y detallados en la larga, repetida y acuciosa redacción del Convenio.

Página cuarta, línea 22: después de la palabra *vencerán* quitamos las palabras *el primero de Abril* de 1957, para poner en su lugar: *en un plazo cuyo máximo no excederá de 50 años a contar del 1º de Abril de 1907*. Esto así, con el deseo de aclarar de un modo preciso, en favor de los intereses de la República y aun de los mismos banqueros o tenedores de bonos, la significación que se le concede a ese plazo de cincuenta años del modo que se hace en el último párrafo de la página 16, que dice: "En la inteligencia de este Convenio, la existencia de los bonos del cinco por ciento se considerará como el período que media entre el primero de marzo de 1907 y la fecha en que todos los bonos del cinco por ciento en cualquier tiempo emitidos hayan sido completamente pagados y todos los compromisos por parte de la República en dichos bonos y contenidos en este Convenio, hayan sido satisfechos".

Página cuarta, línea 28: quitar las palabras *que los Banqueros designaren* y poner en su lugar *de la Trust Company*. Ésta es el Agente fiscal de la República para todo lo relativo al empréstito y como tal tiene ya señalados sus honorarios, por tanto siendo ella la oficina pagadora y de cambios de la República, juzga la Comisión que es en su propia oficina donde deben hacerse los pagos a los banqueros, evitando nuevos gastos por comisiones, etc. y facilitando desde luego las operaciones. Si bien es cierto que la ciudad de Nueva York es grande, bueno es recordar que la abundancia de transportes rápidos destruye allí distancias y acerca toda clase de oficinas.

Página quinta, línea 24: intercalar antes de la palabra *incidentales*, la palabra *por* y cambiar la palabra *ese* por *este*; luego cambiar la redacción

que dice: "La expresión "servicio del empréstito" donde quiera que se la encuentre en este Convenio, significará el pago de todas las cantidades que bajo los bonos del cinco por ciento o este Convenio o bajo el Tratado entre la República y los Estados Unidos de América la República se compromete, o pueda comprometerse, o es o pueda ser requerida a efectuar en conexión con el empréstito, ya sea por intereses, fondo de amortización y gastos", de manera que se incluyan los gastos del servicio y los incidentales, y destruir todo género de interpretaciones más o menos complicadas a la palabra vaga incomprensible con la cual termina el párrafo, agregándole el calificativo *incidentales*. El párrafo quedaría redactado así: "Las expresiones servicio del empréstito e incidentales de este servicio, donde quiera que se las encuentre en este convenio, significarán el pago de todas las cantidades que bajo los bonos del cinco por ciento o este convenio, o bajo el tratado entre la República y los Estados Unidos de América la República se compromete a efectuar en conexión con el empréstito, ya sea por intereses, fondo de amortización o gastos incidentales".

Página 8 línea 4 en adelante: después de la palabra "Company", suprimir las palabras "estime necesarias" y poner en su lugar la palabra "necesite".

Página 8 línea 6, después de la palabra empréstito, intercalar la siguiente limitación: "cuyo total máximo no deberá exceder de la suma de diez mil pesos anualmente" y

Página 8 líneas 11 y 19 cambiar las palabras "pago" en las dos líneas por la palabra "entrega". Cree la Comisión que la República necesita indispensablemente, limitar los gastos incidentales con una suma máxima, a fin de evitar dilapidaciones y malversaciones en lo futuro, de parte de las compañías y de nuestros mismos gobiernos.

Página 9 línea 4 y siguientes: después de la palabra Company, suprimir las palabras: "e invertidos y de tiempo en tiempo reinvertidos, por la Trust Company, a su discreción, en valores en los cuales bajo las leyes en vigencia respecto a estos intereses en el Estado de Nueva York, las Cajas de Ahorro estén autorizadas a hacer inversiones" y poner en su lugar éstas: "y utilizadas por ella en operaciones, bajo su inmediata responsabilidad".

Página 9 línea 10 y siguientes: después de la palabra "montantes" agregar éstas: "y los intereses de 2% anual, que devengan dichos montantes en favor de la República según se explica más adelante".

Página 9 línea 13: Después de la palabra "suerte", suprimir todo el párrafo que sigue y el cual comienza con la palabra "Todos" y termina con la palabra "República". La Comisión se ha propuesto con esta modificación, descartar todo género de eventualidades adversas en las inversiones y reinversiones que haría la Morton a nombre de la República y cree que es más previsor para

ésta, dejar a la Morton en libertad de invertir esos fondos, mientras llegue la fecha en que deban emplearse en la compra de bonos, en provecho de ella, sin más obligaciones que el "dos por ciento anual a favor" de la República, y la responsabilidad inmediata por esos fondos, sea cual fuere la suerte de las operaciones o las contrariedades que encontrare luego la Morton en esas inversiones.

Página 10 línea 4: después de la palabra sorteados intercalar las siguientes palabra: "los cuales bonos habrán de tener los cupones por vencer, será enviada por la Morton Trust al Gobierno de la República en el plazo de 30 días después de efectuado cada sorteo" y,

Página 11 línea 1ª: después de la palabra "convenientemente", quitar la palabra: "estampía" y poner en su lugar: "inutilizado con taladro" por la Trust Company inmediatamente, pero los intereses que en lo sucesivo corresponden a esos bonos así cancelados, le pertenecen a la República, y serán colectados por la Trust Company a medida que se venzan; y los montantes así colectados y los intereses de cualesquiera bonos del cinco por ciento no presentado, pero que haya sido alguna vez señalado a la compra para el fondo de amortización y acumulados a contar del día en que deban ser comprados, así como los intereses de dos por ciento anual sobre todos estos valores, que paga la Trust Company a la República vendrán también a formar parte del fondo de amortización y los aplicará la Trust Company a la compra para el fondo de amortización de bonos del cinco por ciento pendientes, en la forma arriba dicha y bajo los mismos términos y condiciones".

Se han retirado las líneas 2, 3, 4, 5, que decían: "como no negociable ya y como perteneciente al fondo de amortización; pero tales bonos no serán cancelados y continuarán devengando intereses y la Trust Company colectará los intereses", para poner en su lugar éstas palabras: "inmediatamente pero los intereses que en lo sucesivo corresponden a esos bonos así cancelados le pertenecen a la República y serán colectados por la Trust Company".

Línea 7ª, después de la palabra "presentados", agregar "pero".

Línea 9ª, quitar la palabra "después" y poner en su lugar "a contar desde".

Línea 10, después de la palabra "intereses", agregar: "de dos por ciento anual sobre todos estos valores, que paga la Trust Company a la República", en lugar de las palabras: "acumulados sobre cualquiera inversiones existentes en el fondo de amortización".

Líneas 28 y 29: quitar las palabras "cualesquiera otros" y poner en su lugar "todos".

Última línea de la página, después de la palabra "serán", quitar las "cancelados por la Trust Company, y una".

Página 12 línea primera: quitar "vez que lo sean".

Línea tercera: cambiar la palabra "duplicado" por "triplicado".

Línea 6: quitar el punto y agregar "y otra al departamento de Estado de los Estados Unidos de América".

La Comisión ha preferido la redacción que propone porque cree que la República debe evitar a todo trance que un bono sorteado y comprado para el fondo de amortización, pueda ser objeto de una nueva operación cualquiera, como habrá de resultar si no se taladran, para de ese modo inutilizarlos. Con el mismo propósito de previsión especifica la Comisión que se envíen a la República las listas detalladas de los bonos sorteados y las listas de los bonos que se taladren, a fin de que la Contaduría General anote mensualmente los bonos retirados de la circulación y cargue a favor del fondo de amortización que es la República, pagando los intereses correspondientes a esos bonos y los intereses de dos por ciento que deba pagar la Trust a la República. Se agrega la frase: "los cuales bonos habrán de tener los cupones por vencer", porque en una redacción en la cual todo lo que interese a los Banqueros se repite y detalla exageradamente, también debe aclararse y repetirse lo que interese a la República y ha creído la Comisión necesario en este caso hacer constar expresamente lo que del texto mismo de los contratos parecía derivarse, esto es, que la República, después del año 1917, solamente pagará los cupones de intereses correspondientes a los bonos que vayan quedando, pero en cuanto a los bonos que se señalen en los sorteos para la compra, y aun los comprados en mercado abierto y por cualquier otro procedimiento, esos se retiran de la circulación con los cupones, cuyas fechas indicadas o correspondientes no hubieren pasado todavía, para ser cobrados dichos cupones por la Trust Company para agregarlo al fondo de amortización. Estas razones que invoca la Comisión para consignar esas repeticiones oportunas, son extensivas también a la conveniencia de incluir en el párrafo primero de la página 11 las palabras: "los intereses de dos por ciento anual sobre todos estos valores que paga la Trust Company a la República".

El cambio de las palabras "cualesquiera otros" por "todos los" que propone la Comisión, se hace en obsequio del buen sentido y de la lógica de traducción que aquí faltó.

Propone la Comisión que sean tres certificaciones y que esa tercera se remita al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, porque tal es el departamento encargado de entenderse en todo lo concerniente a ese empréstito, en el terreno de las garantías que por mediación del Gobierno americano acompaña a dicho empréstito.

Además, en el caso de un bono falsificado, de infundadas reclamaciones por concepto de bonos ya pagados, será esa oficina la encargada de vindicarnos ante

las injustas o fraudulentas reclamaciones. El artículo siguiente que propone la Comisión, evitará más explicaciones a este respecto, ya que en él se impide todo género de pillerías y de sorpresas contra la República.

"Queda entendido, que si en cualquier época, después del año 1917, la República lograse amortizar la suma de $20,000,000 que representa el empréstito y los intereses previstos, la República quedará redimida de todo género de compromiso y responsabilidad por concepto del capital y de los intereses de los bonos de este empréstito".

"Asimismo, la República no asume ninguna obligación ni responsabilidad en el caso de que aparezca en cualquier época, un bono o bonos, de numeración ya anotada como cancelado, según las listas remitidas por Trust Co. al Gobierno dominicano".

En cuanto a la primera parte del artículo propuesto debe significar la Comisión que lo redacta así, en vista de la necesidad que para ella existe, de aclarar, de conformidad con el tratado, que a partir del año 1917, el plazo de los cincuenta años es condicional y que ninguna otra obligación, además del pago del capital y de los intereses, implica para la República la redención del empréstito antes de los treinta y ocho o de los cincuenta años.

Página 13 líneas 12-13 después de la cifra, 1,000 suprimir "junto con el interés acumulado de dichos bonos"; porque la Comisión, en el curso de su trabajo, descarta los intereses que se pretende pague la República durante el tiempo que transcurra entre la aprobación por el Congreso y la aprobación de los Banqueros (de hasta seis meses) y en el tiempo que transcurra entre la aprobación y la terminación y entrega de los bonos.

Página 13 línea 18 agregar, después de la palabra *hará*, las frases: "en moneda de oro de los Estados Unidos de América", esto así para evitar descuentos de jiros o de documentos bancarios, etc.

Página 13 línea 28 redactar el párrafo, que comienza en la línea, después de *la oferta*, así: "ó á reservarse por la Trust Company, con la aprobación y el consentimiento de los Banqueros, los montantes correspondientes a las reclamaciones de los tenedores de dichas deudas, reclamaciones y concesiones que no acepten. Estos pagos ya se hagan en el sentido del primer término, ya de la reserva antedicha, serán hechas por la Trust Company contra la devolución para su cancelación, de cualesquiera bonos, obligaciones, comprobantes de deudas, de reclamaciones y concesiones, previamente reconocidas y aprobadas por el Congreso de la República y bajo orden escrita del Ministro de Hacienda y con certificado de la propiedad, validez y montante de tales deudas, reclamaciones y concesiones así ordenadas a ser pagadas y designando los bonos o comprobantes de deudas que deban ser devueltos en tales pagos, etc.

En la última línea de la página 13 se prefiere la palabra *para* en vez de por.

Página 14 línea lª se suprimen las palabras, *así pagada*, después de la palabra *deuda*, para agregar pluralizando la palabra *deuda*, estas palabras: "de reclamaciones y concesiones previamente reconocidas y aprobadas por el Congreso de la República".

Página 14. Se suprimen también las líneas 2, 3, 4, y la 5 hasta la palabra Company inclusive, se agrega una y para seguir conforme al texto hasta la línea 11, donde se suprimen después de la palabra *deuda*, las palabras: y *los documentos*.

Página 14 línea 12, después de la palabra *devueltos*, suprimir las palabras: *o entregados*.

Ha visto la República entera a qué caro precio ha tenido que pagar la complaciente y fraudulenta ligereza con la cual casi todos los Ejecutivos han sabido corresponder a las pretensiones o *tentaciones* de los mercaderes; hemos palpado nosotros principalmente en esta Cámara, por conducto de la misma Comisión de Hacienda que suscribe, cómo un grupo de traficantes más o menos habilidosos y más o menos hambrientos ha logrado siempre amontonar deudas y reclamaciones contra la pobre República, porque un Ministro osado o porque su Presidente engreído lo hayan querido así, pues, porque un jefesito cualquiera se hubiese levantado en armas contra el orden público y la única sanción de reprobación fuera el reconocimiento de los gastos hechos para atentar contra el orden interior; porque un comerciante quebrado no hubiese tenido otro recurso que empujar a la manigua a dos o tres infelices para después hacerse reconocer por la voluntad de este o de aquel Ministro una cuenta contra el Estado; porque un condotier cualquiera hubiese sobornado a un oficinista o a un archivista cualquiera o aun a ciertos diplomáticos educados en el abuso y en la rapiña para partir beneficios, es por lo que ha crecido y se ha hecho obligación perentoria para la República, esa cuenta de treintitantos millones que ahora nos constriñe, ¡con sabe Dios qué peligro! a tratar, en la Cámara Legislativa de una República independiente ¡de estos Contratos humillantes! Para evitar esta repetición en lo porvenir, para poner a salvo los intereses de la República, fuera del apetito devorador de empleados y traficantes sin escrúpulos, es por lo que la Comisión robustece la acción del Congreso según lo prevé nuestra Constitución, al establecer que es al Congreso a quien compete el reconocimiento y aprobación de las cuentas.

¡Bien sabéis vosotros, que siempre será más difícil corromper a veinticuatro hombres que se sienten independientes, que comprar o tentar a uno o dos Ministros...!

Por todas estas razones intercala la Comisión, que esas cuentas deben estar debidamente aprobadas por el Congreso, estableciendo, como veréis

luego en el contrato con la Morton, la responsabilidad para el caso en que se pagare una cuenta que no estuviere debidamente aprobada.

Página 16 línea 21: después de la palabra "empréstito" agregar estas palabras de limitación: "cuyo montante total no podrá exceder de la suma de diez mil pesos anualmente".

Página 17. El artículo 10 tal como lo trae el texto, es altamente peligroso para la República, es un compás inmensamente abierto para las distracciones, para los abusos, para los acomodos de un Ejecutivo llamado constantemente a encaminar su actitud y su preferente atención al sostenimiento del orden y a los vehementes enardecimientos de la política interior. Obligar a la República a pagar intereses sobre los $20,000,000, por el tiempo que dilate la impresión de los bonos, o mientras la República no entregue los bonos definitivos, reservándose los Banqueros la suma hasta tanto se le entreguen aquellos bonos definitivos, evita a los Banqueros que tengan una suma apartada en sus cajas, sin hacer operaciones, se dice; pero también expone a la República a pagar intereses sobre una suma de ¿$20,000,000...? Si durante *ese tiempo* los acreedores que contienen las listas A y B del ajuste, renunciasen los intereses de sus cuentas respectivas en favor de los Banqueros, menos mal... pero esto no consta en ninguna parte y la Comisión no se atreve a tomarlo en serio.

Más claro, más previsor y más equitativo parece, a juicio de la Comisión, la siguiente redacción del artículo 10.

"Una vez aprobado por la República y por los Banqueros este Convenio, los Banqueros participarán a la República, la distribución en series, que prefirieren, de los bonos del cinco por ciento, según se prevé en el artículo 1°, y luego, tan pronto como la República haga entrega de los bonos del 5% a los Banqueros, éstos harán entrega en efectivo, del montante correspondiente al valor de la compra de los bonos, vendidos por la República y comprados por los Banqueros, en virtud de este Convenio". "El interés del cinco por ciento anual, que devengan los bonos, comenzará a calcularse desde la fecha en que la República entregue los bonos del cinco por ciento a los Banqueros y los Banqueros entreguen a la Trust Co., quien lo avisará inmediatamente a la República, el montante en efectivo correspondiente al valor de la compra de los bonos".

"Esta entrega mutua de los bonos y del montante de su compra, deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de 6 meses, a contar de la fecha en que fuere aprobado".

Página 18 línea 8: después de la palabra *entregada*, se suprime el texto hasta la línea 15 después de la palabra cinco que también se quita, y se ponen en lugar de lo suprimido inmediatamente después de la palabra *entregada*, estas

palabras: "a éste en su oficina, por la Legación americana o por el Consulado de los Estados Unidos de América en Santo Domingo".

Artículo último: Las estipulaciones de este Convenio no serán obligatorias para la República, mientras dicho Convenio no sea firmado de nuevo, con las modificaciones introducidas, por los Banqueros y el Ministro de Hacienda de la República.

Las explicaciones que se refieren a las modificaciones introducidas en el convenio con los banqueros se hacen extensivas al contrato con la Morton Trust en los puntos análogamente modificados por la Comisión.

Página primera. Después de la frase "la República de Santo Domingo que" se suprimen las palabras "en lo sucesivo" para poner en lugar de ellas estas otras: "en las estipulaciones de este convenio".

En el artículo primero suprimir después de la palabra "depositaría" las siguientes palabras: "bajo la proposición que la República hará de acuerdo con el convenio de los Banqueros, etc.", hasta el final del artículo, para poner en su lugar éstas: "del producto de la venta de los bonos del cinco por ciento comprados por los banqueros a la República de acuerdo con el convenio de los banqueros, hasta las fechas en las cuales el Gobierno de la República disponga de dichas sumas de conformidad con el convenio de los banqueros".

"La Trust Company para actuar como Depositaria prestará fianza a satisfacción del Gobierno de la República en relación a la cuantía de los fondos que maneje. Artículo tercero, párrafo b) quitar después de la palabra "Banqueros", el siguiente párrafo: "Si las sumas calculadas para gastos incidentales del servicio del empréstito así recibidas por la Trust Company excediesen a dichos gastos, el sobrante será acreditado a favor de la República en sus cuentas con la Trust Company" poniendo en su lugar una vez quitado el punto después de la palabra Banqueros esta limitación: "y los cuales gastos incidentales no podrán exceder de la suma de ($10,000.00) diez mil pesos anuales".

"Una relación detallada de estos gastos será enviada con sus comprobantes justificativos a la República por la Trust Company a medida que se vayan causando".

"La Trust Company para actuar como Agente Fiscal prestará fianza a satisfacción del Gobierno de la República".

Artículo cuarto. Suprimir las frases siguientes: "y en estimular y promover como Depositaria el arreglo de las deudas y reclamaciones contra la República de acuerdo con dicha proposición. A la conclusión de este arreglo" comenzando el segundo párrafo con la palabra "Todos".

Entre las palabras "deudas" y "que" intercalar éstas: "reclamaciones y concesiones", y entre las palabras "Depositaria" y "serán", éstas: "según se expresa en este convenio" y agregar después de la palabra "cancelados" quitando el

punto las siguientes: "inmediatamente" y "enviados al Gobierno de la República como comprobantes". Después de la palabra "suma" suprimir las palabras "destinada a" y poner en su lugar éstas, "que entregarán los banqueros por". Entre las palabras "abonará" e "intereses" intercalar éstas: "a la República" entre las palabras "Depositaria" y "hasta" intercalar las siguientes: "desde las fechas en que fueren entregadas".

Sustituir la palabra "pagadas" con ésta: "entregadas".

Entre las palabras "del" y "Ministro", éstas: "Gobierno de la República trasmitidas por el…".

Artículo quinto, párrafo (a): suprimir las palabras "bajo la proposición de ajuste que la República hará apartado (1)" suprimir las palabras "tal proposición se efectuase y".

Apartado (2). Suprimir las palabras "hágase o no efectiva dicha proposición".

Párrafo (c). Suprimir el apartado (1) sustituyéndolo por el siguiente:

"La suma de cincuenta centavos por cada bono del cinco por ciento por la primera vez que se emita sobre los cuales bonos la Trust Company autorizará un certificado de autenticación según lo establecido en el convenio de los Banqueros y los pagos hechos, respecto a los bonos del cinco por ciento originalmente emitidos serán cubiertos directamente por la República, entendiéndose que no se cargará a la República ninguna otra clase de gastos con motivo de los intercambios o permutas de bonos de una serie en otra durante la existencia del empréstito".

Párrafo (2). Después de la palabra "será" suprimir éstas: "considerada como gastos incidentales del servicio del empréstito", poniendo en su lugar éstas: "pagada de la suma de diez mil pesos calculada para gastos incidentales del servicio del empréstito".

Artículo sexto. Después de la palabra "República", agregar el siguiente párrafo: "La República se reserva el derecho de examinar y fiscalizar en cualquier tiempo los libros y operaciones de contabilidad de la Trust Company en conexión con el empréstito de veinte millones y exigir aclaraciones y responsabilidades en el caso en que hubiere inexactitud, incorrección o falta de comprobación en dichas operaciones. Asimismo será responsable la Trust Company en el caso de pagar alguna cuenta o reclamación no aprobada debidamente por el Gobierno de la República".

Después de la palabra "Company" cambiar la palabra "concederá" por "pagará"; entre las palabras "anualmente" y "sobre", intercalar éstas: "desde las fechas en que le sean entregadas".

Suprimir todas las palabras que siguen a éstas: "notificaciones a la República", poniendo en su lugar las siguientes: "y no serán concluyentes para

la República si en cualquier tiempo se comprueba que ha habido error o incorrección en dichas cuentas".

Artículo séptimo: Suprimir la palabra "solo" entre "Company" y "será". Suprimir todas las palabras que siguen a "depositario general".

Cambiar las palabras "en su poder" entre "caudales" y "la Trust" por "entregados por la República a la Trust Company".

Artículo décimo: Suprimir todas las palabras comprendidas entre las siguientes: "entregada" y "Cualquiera" poniendo en su lugar ésta: "en la oficina de dicho Ministro de Hacienda".

Agregar al artículo Undécimo el siguiente párrafo: "Este convenio no será obligatorio para la República mientras no se firme de nuevo con las modificaciones introducidas".

Los artículos modificados quedan redactados así:

Artículo primero: La República designa a la Trust Company Depositaria del producto de la venta de los bonos del cinco por ciento comprados por los Banqueros a la República de acuerdo con el convenio de los Banqueros, hasta las fechas en las cuales el Gobierno de la República disponga de dichas sumas de conformidad con el convenio de los Banqueros.

La Trust Company para actuar como Depositaria prestará fianza a satisfacción del Gobierno de la República en relación a la cuantía de los fondos que maneje.

Artículo tercero. Párrafo (b). Las sumas que la Trust Company considerase necesarias para cubrir los gastos razonablemente incidentales del servicio del empréstito, sumas que serán pagadas a la Trust Company, a solicitud escrita de la Trust Company, dirigida a la República o al Secretario del Departamento de los Estados Unidos de América a cuyo cargo esté la colectación de los derechos de aduana de la República bajo el tratado que ésta hará con los Estados Unidos según el convenio de los Banqueros, y los cuales gastos incidentales no podrán exceder de la suma de $10,000 diez mil pesos anuales. Una relación detallada de estos gastos será enviada con sus comprobantes justificativos a la República por la Trust Company a medida que se vayan causando.

La Trust Company para actuar como Agente Fiscal prestará fianza a satisfacción del Gobierno de la República.

Artículo cuarto. La Trust Company actuará como depositaria, Agente y Registrador de Traspasos, y Agente Fiscal del Empréstito, como se ha dicho, y ejercerá sus mejores esfuerzos en apoyo y protección de los intereses de la República. Todos los Bonos, pagarés y comprobantes de deudas, reclamaciones y concesiones que hayan sido pagados por la Trust Company como

Depositaria, según se expresa en este convenio, serán cancelados inmediatamente y enviados al Gobierno de la República como comprobantes.

La Trust Company recibirá como Depositaria la suma que entregarán los Banqueros por la compra de los bonos del cinco por ciento, una vez pagada por los Banqueros de acuerdo con el convenio de los Banqueros.

Las cuentas de la Trust Company, como Depositaria, serán llevadas en la Ciudad de Nueva York en oro acuñado de los Estados Unidos de América, y la Trust Company abonará a la República intereses a la rata de dos por ciento (2%) anual, calculables anualmente sobre todos los caudales recibidos y retenidos por la Trust Company como Depositaria desde las fechas en que fueren entregados hasta las respectivas fechas en las cuales, por los términos del convenio de los Banqueros, tales caudales deban ser pagados para alguno o algunos de los propósitos especificados en el convenio de los Banqueros. La Trust Company, como Depositaria, no pagará otros intereses que los ya dichos.

Como Agente Fiscal recibirá cuantas sumas le sean entregadas de acuerdo con el convenio de los Banqueros, ya sea de las Rentas Asignadas o de cualquier otro modo por la República; y en tanto los dineros así recibidos sean suficientes, conducirá el servicio del empréstito de acuerdo con el convenio de los Banqueros. Efectuado el pago por la Trust Company, como Agente Fiscal del Empréstito, de cualesquiera bonos del cinco por ciento o cupones pertenecientes a ellos, los bonos y cupones serán cancelados y entregados luego a la República, bajo orden del Ministro de Hacienda de la República, sellada con el sello del Departamento de Hacienda.

La Trust Company actuará bajo este convenio en concordancia con el convenio de los Banqueros, y en virtud de órdenes escritas del Gobierno de la República trasmitidas por el Ministro de Hacienda de la República, selladas con el sello del Departamento de Hacienda, acordadas con el convenio de los Banqueros.

Artículo quinto: párrafo (a) por actuar como Depositaria.

Apartado (1). Si los bonos del cinco por ciento fuesen comprados por los Banqueros (y no de otro modo) el medio por ciento sobre todas las sumas de dinero pagadas bajo los términos de dicha proposición a los tenedores de deuda de la República, o de reclamaciones contra la República, o de concesiones otorgadas por la República, que acepten la proposición que se las hará, o reservadas de acuerdo con el convenio de los Banqueros para pagar las deudas, reclamaciones y concesiones de los tenedores que no acepten; y los pagos a la Trust Company se harán por la República en oro de los Estados Unidos, con anterioridad al pago de tales sumas o reservas a los tenedores de deudas, reclamaciones y concesiones a las cuales se hará la proposición; y por tales montantes la Trust Company tendrá un gravamen sobre el valor

de la compra de los bonos del cinco por ciento aplicable a tales fines según el convenio de los Banqueros.

Apartado (2). Todos los gastos propiamente hechos por la Trust Company al actuar como Depositaría según queda dicho Párrafo (C) Apartado (1), la suma de cincuenta centavos por cada bono del cinco por ciento por la primera vez que se emita, sobre los cuales Bonos la Trust Company autorizará un certificado de autentificación según lo establecido en el convenio de los Banqueros y los pagos hechos respecto a los bonos del cinco por ciento originalmente emitidos serán cubiertos directamente por la República, entendiéndose que no se cargará a la República ninguna otra clase de gastos con motivo de los intercambios o permutas de bonos de una serie en otra durante la existencia del empréstito.

Apartado (2). La comisión que razonablemente cobren los banqueros necesariamente empleados en Europa por la Trust Company en relación con el servicio del empréstito será pagada de la suma de diez mil pesos calculada para gastos incidentales del servicio de empréstito. La Trust Company tendrá a su cargo las remesas a Londres, París, Amsterdam y Alemania, de las sumas necesarias para el servicio del empréstito en dichos lugares, y podrá hacer tales remesas en sus propios giros a las ratas corrientes a la sazón.

Artículo sexto. Toda contabilidad relativa al servicio del empréstito será llevada por la Trust Company en la ciudad de New York, en oro acuñado de los Estados Unidos de América, y una relación mensual de cuentas será remitida por la Trust Company a la República. La República se reserva el derecho de examinar y fiscalizar en cualquier tiempo los libros y operaciones de contabilidad de la Trust Company en conexión con el empréstito de veinte millones y exigir aclaraciones y responsabilidades en el caso en que hubiere inexactitud, incorrección o falta de comprobación en dichas operaciones. Asimismo será responsable la Trust Company en el caso de pagar alguna cuenta o reclamación no aprobada debidamente por el Gobierno de la República.

La Trust Company pagará a la República intereses a rata de dos por ciento anual, que serán calculados anualmente desde la fecha en que le sean entregadas, sobre todos los caudales recibidos y retenidos por la Trust Company como Agente Fiscal del empréstito hasta las fechas respectivas en las cuales por los términos del convenio de los Banqueros o por este convenio, tales caudales deban ser pagados para alguno o algunos de los fines especificados en el convenio de los Banqueros. Contra la Trust Company, como Agente Fiscal del empréstito, no se cargarán ni serán cargables otros intereses que los ya dichos.

Las relaciones de cuentas de la Trust Company serán trasmitidas a la República en cualquiera de las formas establecidas por el artículo décimo de este convenio para notificaciones a la República y no serán concluyentes

para la República si en cualquier tiempo se comprueba que ha habido error o incorrección en dichas cuentas.

Artículo séptimo. La Trust Company será responsable por las sumas que la Trust Company reciba en dicha ciudad de New York, provenientes de los Estados Unidos de América o de la República. En cuanto a la custodia de los caudales entregados por la República o por cuenta de la República a la Trust Company, la Trust Company estará bajo la misma responsabilidad de todo depositario general.

Artículo décimo: Cualquiera notificación, bajo este convenio, de la Trust Company a la República, será dirigida por escrito a "El Ministro de Hacienda de la República Dominicana, Santo Domingo", y entregada en la oficina de dicho Ministro de Hacienda. Cualquiera notificación a la Trust Company será hecha por escrito, dirigida a la Trust Company y entregada en la ciudad de Nueva York.

Artículo undécimo. Este convenio será considerado como un contrato celebrado en New York, y legalizado en ambas lenguas española e inglesa, pero para su interpretación prevalecerá el original inglés. Este convenio no será obligatorio para la República mientras no se firme de nuevo por la Trust Company con las modificaciones introducidas.

Ciudadanos Diputados:

Mucho lamenta la Comisión de Hacienda que después de ocho meses de firmados los contratos de empréstito, y de retenidos por el Poder Ejecutivo, llegaran éstos a la Cámara con la ostensible festinación que la obliga a presentar este informe apresuradamente. Esa festinación es la causa que no le ha permitido disponer del tiempo necesario para detallar y perfeccionar el plan que se proponía presentar al Congreso, plan cuyos alcances podrán vislumbrarse estudiando el boceto de las bases que pensaba adoptar para desarrollarlo, y las cuales, indiscutiblemente, se encuentran más en armonía con el estado económico actual de la República.

Era este un plan de redención económica que se proponía destruir patrióticamente, no lo que en realidad se le deba a tal o cual acreedor, sino todo un cúmulo de reclamaciones falsas, de deudas inciertas y de concesiones anulables, según el criterio de la Comisión, robustecido varias veces por el Poder Ejecutivo en documentos públicos, y también por cierto documento confidencial de que dio cuenta el Herald de New York, escrito por quien examinó especialmente nuestras deudas.

Para llegar a ese fin de impugnación, hubiera utilizado la República la valiosa ayuda prestada por los Estados Unidos y que tan eficaz pudiera ser.

La Comisión deseaba darle cima a ese trabajo, que consistía, repite, no en un expediente que zanjara las dificultades del momento, a expensas de sabe

Dios qué contingencias para la República, sino en examinar cuidadosamente, desde su origen, todas las acreencias, reclamaciones y concesiones que figuran en la lista de acreedores. Ese examen la hubiera conducido, seguramente, a descubrir la nulidad de muchas de esas obligaciones contra la República, tales como la de la West Indian Public Works Co., que no constituye para la República el compromiso que se pretende, pues ha comprobado la Comisión que esa acreencia sólo figura en los libros de la Contaduría General porque, al contratarse la obra del puerto en quinientos mil pesos, se hizo una entrada en los libros poniendo ese valor al haber de la cuenta, para irle cargando luego las sumas que se fueran entregando por ese concepto; pero como la obra no se ha realizado, lejos de tener el Gobierno que pagar el balance que falta para completar su pago, debe reclamarle a los concesionarios o cesionarios todos los valores que recibieron a cuenta de dicha obra. La concesión Ros, de Macorís, que figura en la lista A de los contratos, y que —según mensaje del mismo Ejecutivo del año 1905, era anulable judicialmente— toda vez que, según certificación técnica hecha por un Almirante norteamericano, la pasa no se mantenía por el concesionario en las condiciones exigidas por la concesión, y muchas otras.

Esa circunstancia de perentoriedad, y la no menos adversa de que, además de las modificaciones señaladas en este trabajo, no se podía alterar el fondo de los contratos, porque eso, en concepto del ciudadano Ministro de Hacienda, era inaceptable para la otra parte y equivalía al rechazo de todo el plan; han contribuido a que la Comisión se conformase con modificar limitadamente los contratos, de la manera que habéis visto; pero ella cree de su deber mostraros el plan que —entre otros— hubiera preferido desarrollar. Helo aquí:

PLAN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

Se emitirán bonos en debida forma, es decir, con todos los requisitos que exigen las bolsas extranjeras para que sean cotizables, por un valor de DIEZ MILLONES ($10,000,000) de pesos oro y con un interés de 5% anual.

Si los tenedores de bonos Belgas y Franceses convienen en canjearlos, recibiendo como dinero, o sea a la par, los nuevos bonos, en cambio de los suyos, se les darían dichos bonos del 5%, tanto por el valor de los de ellos, calculados al 50% de su valor nominal, como por saldo de los intereses devengados. Si ellos no aceptan la proposición, se les podría hacer un descuento reducido, pudiéndose llegar, en último extremo, hasta dárseles los bonos al mismo tipo que los compran actualmente los señores Kühn, Loeb & Co.; o se les venderían a éstos, que es lo mismo, siempre que no se presentare otra proposición más ventajosa.

Débese tener en cuenta, que no son los señores Kühn, Loeb & Co. los que les dan crédito a los bonos, sino el tratado con los Estados Unidos, que es lo que garantiza la seguridad del pago del capital y de los intereses.

La cuenta de la Improvement Co. no se debe pagar, mientras no se arreglen las cuentas pendientes. En ese arreglo se ha de llegar a este resultado: 1° Que la República no puede ni debe pagar UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1,500,000) porque las Compañías Improvement y consortes renuncien a los derechos que tengan sobre el ferrocarril central. Le conviene más a la República que ellos sigan explotando el ferrocarril por el tiempo que les falta, y de conformidad con sus contratos. Eso le produciría a la República una renta quo no baja de CINCUENTA MIL PESOS anuales, y que puede subir mucho, si se nombra un inspector capaz de controlar las operaciones de la explotación. La República obtendría así un beneficio grande, cierto y seguro sin exponerse a pérdida de ningún género, y sin hacer ningún sacrificio, lo que es muy justo, ya que tantos sacrificios le cuesta la construcción del ferrocarril.

La República no tiene que indemnizar a las Compañías por las obras que se comprometieron a hacer, y que no han realizado: como cambiar la *cremaillere*, continuar la vía hasta Moca, Macorís, etc.; porque el compromiso único de la República es pagar la obra con bonos, y en proporción de los tramos que vayan construyendo y entregando; y como hasta ahora no han construido ningún tramo, nada se les debe por ese concepto. En cambio, la República tiene que reclamar de la compañía explotadora los beneficios que correspondían a la República hasta la fecha del *Protocolo*, y que la Compañía se ha apropiado indebidamente; así como los beneficios que han absorbido los gastos injustificables y enormes que ateniéndose a las prescripciones del *Laudo* le caigan en sus nuevas cuentas a la República.

2° Que la República no debe pagar $923,365 por la adquisición del derecho a un Banco quebrado, que nada representa, y que si algo representa es la responsabilidad que contrae la República de responder de los compromisos que ese Banco dejara pendientes.

3° Que lo único que representa algún valor para la República, son las £830,654 en bonos, que prometen devolver, y que calculan en un valor de $2,076,635 oro; pero ese valor debe el Poder Ejecutivo hacerlo embargar retentivamente, si no lo ha hecho ya en cumplimiento del acuerdo de esta Cámara notificádole en la contestación del Mensaje del año antepasado. Esa será la única garantía que tendremos para obligar a esas Compañías a responder de los grandes valores de que tienen que darle cuenta a la República, primero: por concepto de los bonos que se encargaron de emitir el año 1897, operación ruinosa de la que todavía no han dado cuenta, y por la cual

lanzaron a la República en un verdadero abismo; impunemente, hasta ahora; segundo: por las rentas del ferrocarril que han de devolver, y que montaban a $103,898.68, al firmarse el protocolo del 31 de enero de 1903; tercero: por el balance que había a favor de la República, de $1,029,478.97 en la Caja de Recaudación antes del contrato del 18 de abril de 1900; cuarto: por el 15% de las entradas fiscales que se apropiaron en virtud del contrato del 18 de abril citado, valor que no baja de $300,000; quinto: por los perjuicios morales y materiales que le ocasionara el Banco a la República con su emisión ilegal de papel moneda, violando el precepto constitucional a ese respecto, atentado que sólo se pudo realizar a causa de la punible cooperación que el Banco le prestara al General Heureaux; sexto: por la suma de $18,250 que recibió la Improvement Co. en virtud del protocolo y la de $249,645.16 que recibió en virtud del laudo arbitral; y en fin: por todos los daños y perjuicios que por faltas y culpas de esas compañías ha venido sufriendo la República.

Debemos calcular que del empréstito de	$	10,000,000
se dedicarán a la conversión de los Bonos		
Belgas y Franceses unos		8,000,000
y quedará un sobrante, de más o menos	"	2,000,000

Estos dos millones se dejarán depositados en el Banco que al efecto se designare, hasta que se haya arreglado la cuenta de la Improvement, a fin de darle de ahí lo que pudiere sobrarle, si algo le sobrare, de los $2,076,635 en que valúan las £830,654 en bonos, que se les han de embargar, las cuales no se deberían justipreciar tampoco a más del 4% de su valor nominal, que fue el tipo a que se contrataron con la Improvement los bonos *French American Reclamation Consols*.

El servicio del empréstito de $10,000,000 se efectuaría mediante un depósito de $100,000 mensuales que haría la República desde la fecha en que se emitieran los bonos, y en el Banco que al efecto se designara.

En los dos primeros años, se pagaría solamente el interés de los bonos, o sea $500,000 anuales. La amortización comenzaría al tercer año, con el sobrante de los $1,200,000 a que ascienden anualmente las entregas de ($100,000) cien mil pesos mensuales.

En los dos años transcurridos desde la fecha del *Modus Vivendi*, o sea hasta el 31 de marzo de este año, se han depositado en el Banco de New York $2,700,000, y como en los dos años próximos no se necesitaría disponer más que de $500,000 anuales, o sea un millón de pesos en los dos años para el servicio del empréstito, es decir, para el pago de los intereses, resultaría que si las 55 unidades que actualmente se destinan al servicio de la deuda pública producen en ese período otros $2,700,000, podría la República disponer de

un sobrante de $1,700,000 que unido a los $2,700,000 ya depositados, hacen $4,400,000, que se distribuirán entre los acreedores, para saldarles sus cuentas en la forma siguiente:

Para pagar las deudas ajustadas a 50%	$	2,390,514.42
Para pagar las deudas ajustadas a 40%	"	326,865.07
Para pagar las deudas ajustadas a 30%	"	36,732.46
Para pagar las deudas ajustadas a 10%	"	406,606.92
Para pagar los billetes de banco a 5x1	"	199,804.60
Total con que se cancelarían todas las Cuentas	$	3,360,523.47
Quedaría un sobrante disponible de	$	1,039,476.53
	$	4,400,000.00

Ese sobrante de $1,039,476.53 se podría aplicar en parte, al aumento que ocasionaría el establecer una distinción equitativa entre las cuentas ajustadas al 10% y las de sueldos u otro origen atendible por su moralidad y su legalidad.

Al distribuir el dinero entre los acreedores, será mucho mayor el sobrante que resulte, porque hay muchas cuentas que deben ser rechazadas por completo; varias reclamaciones que no tienen más base que la tentativa de abuso de parte de ciertos diplomáticos y la debilidad de parte de Ministros más o menos tímidos o más o menos cómplices; y varias concesiones que se pueden anular porque no han estado nunca, ni lo están ahora, dentro de los términos obligatorios de su creación.

Además de la mejora propuesta en el pago de sueldos atrasados y de algunas otras cuentas, se puede atender con el sobrante a la realización de algunas obras de fomento y como además de la renta creada para ferrocarriles se puede votar todos los años en el presupuesto una suma para fomento —según se viene haciendo— ese ramo quedará bien atendido; y si la falta del cebo de las aduasas para los políticos de oficio y el respeto a la Constitución y a las leyes por los funcionarios públicos logran hacer que la paz se acentúe, debemos esperar que el progreso del país se desarrollará como por encanto.

Las ventajas que se obtendrían con este plan, en comparación con el proyecto, se pueden notar cotejando los dos cuadros que acompañan a este informe, y en los cuales se demuestra:

1° Que según el proyecto, quedará la República liberada de sus compromisos a los 38 años, y pagará por concepto de interés $25,503,125, que unidos a los $20,000,000 del capital y a los $500,000 de la prima de dos y medio por ciento, forman un total de $46,503,125; y

2° Que conforme a este plan, sale la República de sus compromisos a los 13 años, y paga por intereses $4,255,248.91, que unidos a los $10,000,000 del capital forman un total de $4,255,248.91.

No sería extraño que se ahorrara también, en todo o en parte: el descuento de 4%, o sea $800,000; el interés devengado de los primeros 6 meses, que representa la suma de $500,000; la comisión de medio por ciento para atender a los pagos de las cuentas después de hecho el ajuste, lo que montará a cerca de $100,000; la comisión de 50 centavos oro por la certificación de cada bono, que si se limitara a la emisión original, aunque todos los bonos fueran de $100 cada uno, sabríamos que ascenderá a $100,000; pero con los *cambios e intercambios de bonos*, es imposible saber a cuánto ascenderá; y en fin, sabe Dios cuántas gabelas más que pueden tener su origen en la peligrosa frase de *gastos incidentales*.

Otra ventaja de este plan consiste en que no sería necesario que el convenio Dominico-Americano estuviera sujeto a la aprobación de los señores Kühn, Loeb & Co.; no sería necesario tampoco pagar interés sobre los bonos desde 6 meses antes, sino desde el día en que se efectuara la venta de ellos o la conversión por bonos Belgas y Franceses; se ahorraría, en todo o en parte, la prima de dos y medio por ciento sobre el capital, la que, sobre $20,000,000, asciende a $500,000, pero que en realidad representa para la República un valor de $1,036,423.60, a causa de los intereses; no sería necesario liberar previamente las rentas efectuadas por concesiones, lo que tiene el inconveniente de que puede dar lugar a que los concesionarios se extiendan demasiado en sus pretensiones, y obliguen a la República a comprarles sus derechos con mayores sacrificios de los que pudiera convenirle, una vez que, sin comprarles antes esos derechos, no se puede realizar la operación del empréstito. Con este plan, se puede hacer esa compra si se quiere, o si se puede realizar ventajosamente, y no con sacrificio, ni cediendo a exigencias desproporcionadas.

Tiene también este plan la inmensa ventaja de que nos conduce más pronto a la redención de nuestra autonomía económica, si no pérdida, deslustrada al menos, con la aceptación del concurso que nos vemos obligados a recibir de una potencia extranjera.

En sus cálculos ha adoptado la Comisión el mismo plan de ajuste de cuentas en que se basan los contratos; pero ella propende a que se mejore la situación en que están colocadas muchas acreencias de las que se pretende cancelar con sólo un diez por ciento de su valor nominal.

En todo el plan que acabáis de conocer, procura la Comisión sacar el mejor partido de la solidez que obtiene el crédito de la República con la ayuda que, en bien de nuestros acreedores principalmente, le concede el Gobierno Americano.

CONCLUSIÓN

Ciudadanos Diputados:

La Comisión debe recordaros también, que antes de darle o negarle vuestra aprobación a los contratos proyectados, se necesita que el Congreso llene el precepto constitucional que dice: "Ninguna contratación de empréstito sobre el crédito de la Nación será votada sin la previa declaratoria de ser de utilidad pública".

Santo Domingo, abril 29 de 1907.

La Comisión de Hacienda,

M. de J. AYBAR

A. ACEVEDO

J. D. ALFONSECA H.

RAF. ALBURQUERQUE.

Gaceta Oficial, N° 1784. Año XXIV. 1° de mayo de 1907.

DOCUMENTO N° 33

CONVENIO celebrado hoy 13 de febrero de 1908 entre la República Dominicana, en lo adelante llamada la República, por una parte, y la San Domingo Improvement Company of New York, San Domingo Finance Company of New York, the Company of the Central Dominican Railway and the National Bank of San Domingo, en lo adelante llamadas las Compañías, por otra parte:

POR CUANTO, la República en fecha 27 de enero de 1908 promulgó una Oferta de Arreglo de las deudas de la República y reclamaciones contra la República, la cual ha sido aceptada por las Compañías como tenedoras y representantes de ciertas deudas y reclamaciones:

POR TANTO, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO:— La suma pagadera el 1° de febrero de 1908 por la República a las Compañías de acuerdo con dicha Oferta de Arreglo en pago completo por el traspaso de todos los derechos e intereses poseídos o representados por las Compañías en el Banco Nacional de Santo Domingo (incluyendo 6,338 acciones del capital del referido Banco) y por el traspaso del Ferrocarril Central Dominicano y de todas sus extensiones y de todos los derechos e intereses poseídos o representados por las Compañías en dicho Ferrocarril (incluyendo 15,000 acciones del capital de dicho Ferrocarril y por la entrega de los antiguos bonos de la República hasta el montante total

de £830,654 referidos en dicho laudo arbitral de julio 14 de 1904 y cuyos números se encuentran en la impresa lista anexa) y en completo arreglo de todas las deudas y reclamaciones contra la República de cualquiera clase y denominación poseídas o representadas por las Compañías, o cualquiera de ellas, referidas en dicho laudo arbitral o de otro modo, es fijada por esto en $4,312,242.76.

Las Compañías sostienen que de dicho montante la suma de $2,149,197.81 es pagadera por concepto de dicho antiguos bonos de la República, y el balance por concepto del Banco, del Ferrocarril y de otras deudas y reclamaciones poseídas y representadas por las Compañías;

SEGUNDO: Las Compañías han traspasado ya a la República 6,338 acciones del capital de dicho Banco y cualquiera y todo interés poseído por las Compañías en él y £351,400 de Unified Scrips referidos en dicho laudo arbitral, y las Compañías:

(a) Ejecutarán inmediatamente y harán a la República, traspasos de todos sus derechos, títulos e intereses en y para con dicho Ferrocarril, poseídos por las Compañías o cualquiera de ellas en una forma satisfactoria a la República.

(b) A opción de la República, inmediatamente traspasarán y entregarán a la República el capital total de acciones de la Compañía del Ferrocarril Central Dominicano (el cual consiste de 15,000 acciones) y los certificados consiguientes, o harán que dicha Compañía sea disuelta.

(c) Pondrán inmediatamente a la República en posesión de dicho Ferrocarril, el cual estará libre de todas deudas fijas o flotantes.

(d) Entregarán inmediatamente a la República todos los bonos antiguos cancelados que se encuentran actualmente en posesión de ellas.

(e) Ejecutarán inmediatamente y entregarán al Depositario conforme a la Oferta de Arreglo por cuenta de la República, escritura de cesiones de todas las deudas y reclamaciones de toda clase y descripción, poseídas por las Compañías o cualquiera de ellas, contra la República, ya estén referidas en dicho fallo arbitral o de otro modo, exceptuando los billetes de banco nacional en poder de las Compañías adquiridos desde la fecha del laudo, y descargo de todas y cada una de tales deudas y reclamaciones en forma satisfactoria a la República.

(f) Entregarán o harán entregar a dicho Depositario por cuenta de la República tan pronto como sea posible dichos antiguos bonos referidos en el laudo arbitral e indicados en la lista anexa.

TERCERO: Las Compañías sostienen que la parte de la suma pagadera conforme al artículo primero aplicable a todas las deudas, reclamaciones y propiedad que deben ser renunciadas y traspasadas por las Compañías, fuera de dichos antiguos bonos, montan en todo a $2,163,044.95 de los cuales la suma de $432,608.99, es pagadera en dinero efectivo, y $1,730,435.96 en los nuevos bonos de la República que serán emitidos de acuerdo con la Oferta de Arreglo para ser tomados a 98½% de su valor nominal de acuerdo con dicha Oferta, y que la parte de dicha suma aplicable a dichos antiguos bonos referidos en el laudo arbitral monta a $2,149,197.81 de los cuales la suma de $429,839.56 es pagadera en dinero efectivo y $1,719,358.25 en dichos nuevos bonos que serán tomados a 98½% de acuerdo con la Oferta de Arreglo.

Inmediatamente después de completada la entrega de los documentos de propiedad requeridos por la subdivisión (a), (b), (c), (d) y (e) del artículo 2, la República pagará o hará que se pague por medio del Depositario a la San Domingo Finance Company of New York (la cual queda por la presente autorizada para recibir por las Compañías y en nombre de ellas todas las cantidades debidas de acuerdo con este arreglo) la suma de $432,608.99 en dinero efectivo con interés de 5% anual desde febrero 1° de 1908 a la fecha del pago $865,217.98 en certificados provisionales negociables canjeables por los definitivos bonos del 5%, para ser tomados a 98½% de acuerdo con dicha Oferta de Arreglo tan pronto como dichos bonos puedan ser grabados y ejecutados.

$865,217.98 de esos nuevos bonos a 98½% de su valor nominal, o de los certificados provisionales negociables canjeables por ellos aplicables conforme a lo aseverado por las Compañías a tales deudas y reclamaciones, fuera de dichos antiguos bonos, no serán entregados o entregables en la actualidad, sino que serán reservados por el Depositario y retenidos por él por cuenta y como propiedad de la República, como garantía por el absoluto cumplimiento por las Compañías de este convenio y de los requerimientos de dicho fallo arbitral y serán entregados a dicha Finance Company sucesivamente a prorrata conforme dichos antiguos bonos sean entregados y rendidos al Depositario.

CUARTO: A la entrega a dicho Depositario o a sus agentes en cualquier tiempo de cualquiera de dichos antiguos bonos de la República o Unified Scrip referidos en dicho fallo arbitral e indicados en la lista anexa y pendientes actualmente, la República pagará por medio del Depositario a dicha Finance Company, o a su orden, por cada £100 de dichos bonos o Unified Scrip así entregados $51.75 en dinero efectivo, con intereses sobre ellos al cinco por ciento anual desde febrero 1° de 1908 a la fecha de tal entrega,

si es antes del 1° de abril de 1908, y $207 en dichos nuevos bonos para ser tomados 98½% de su valor nominal o certificados provisionales negociables canjeables por ellos.

Las Compañías aseveran que algunos de dichos antiguos bonos que figuran en la lista anexa ya no están pendientes y queda entendido que los pagos y las entregas anteriormente indicados no se deben hacer sino con respecto a los antiguos bonos que aun estén pendientes.

QUINTO: A la entrega de cualquiera de dichos antiguos bonos conforme con el artículo cuarto, la República, en adición a las entregas de los nuevos bonos requeridos por aquel artículo, asimismo entregará por cada £100 de dichos antiguos bonos así cedidos $104.16 en dichos nuevos bonos para ser tomados a 98½% o certificados provisionales negociables canjeables por ellos (de los nuevos bonos a tales certificados reservados o retenidos como garantía de acuerdo con el artículo tercero de este Convenio) hasta que £730,654 de dichos antiguos bonos hayan sido así cedidos, pero no después.

Cuando £730,654 de los antiguos bonos de la República referidos en dicho fallo arbitral, y los cuales están ahora pendientes, hayan sido entregados y las prescripciones de este convenio y de dicho fallo arbitral, hayan sido en todos otros respectos cumplidos por las Compañías, la República entregará a dicha Finance Company $104,050 en dichos nuevos bonos al 98½% de su valor nominal que son el remanente de los bonos reservados referidos en el artículo tercero de este Convenio, o los certificados provisionales canjeables por ellos.

SEXTO: Por los servicios y gastos de las Compañías, Improvement y Finance, y cualesquiera Comités, representados por o aliados con ellas, en relación con el precedente ajuste o con la entrega al Depositario de dichos antiguos bonos, la República concederá en seguida a las Compañías y pagará una comisión de uno por ciento de los nuevos bonos entregables a las Compañías y $25,000 pagaderos 20% en efectivo y 80% en los nuevos bonos a 98½% o en certificados provisionales, negociables canjeables por ellos, montante dicha Comisión en conjunto a $11,900 en efectivo y $48,322.84 en dichos nuevos bonos.

SÉPTIMO: Al efectuar pagos y entregas de acuerdo con este Convenio no se emitirán certificados que representen intereses fraccionarios de bonos, pero los tenedores de deudas y reclamaciones referidas en este Convenio serán requeridos a tomar intereses fraccionarios adicionales en un bono forzoso de $50 para facilitar el ajuste que se va a hacer y el costo a 98½% e intereses devengados serán deducidos de los pagos en efectivo que se harán de acuerdo con este Convenio.

En fe de lo cual, la República ha suscrito este convenio en representación de la República por el Señor Don Federico Velázquez, Ministro de Hacienda de la República, y las Compañías, lo han hecho suscribir en su nombre por sus respectivos Presidentes, y el sello de la Corporación ha sido fijado y testificado por sus respectivos Secretarios el día y el año arriba expresados.

Firmado por triplicado,

Fedco. VELÁZQUEZ H.,
Ministro de Hacienda y Comercio
de la República Dominicana.

In precence of
W. M. BRUDER,

Por la San Domingo Improvement
Company of New York,
Smith M. WEED,
Presidente.

Testigo:
E. E. YORK— Secretario.

Por la San Domingo Finance Company
of New York,
Smith M. WEED,
Presidente.

Testigo:
E. D. YORK— Secretario.

Por la Compañía del Ferrocarril
Central Dominicano,
Smith M. WEED,
Presidente.

Testigo:
E. E. YORK— Secretario.

Por la Compañía del Banco Nacional
de Santo Domingo,
C. W. WELLS.

Testigo:
E. E. YORK— Secretario.

Gaceta Oficial Nº 1880, abril 4 de 1908, Año XXV.

Índice onomástico

A

Abbott, John T. 106, 108, 114, 126-128, 134-136, 138, 346
Abreu Licairac, Rafael 108, 113
Abreu, Eugenio 89, 327-328, 349
Acevedo, A. 399
Acheson, Dean 235-236
Adee, Alvey A. 169
Aguaviva, Duque de 30-31
Alardo, Federico 349
Alburquerque, Rafael 399
Alfonseca, J. D. 399
Álvarez, José de Jesús 97, 341-342
Álvarez, L. Israel 352
Amiama, Francisco X. 106, 123, 135
Angulo Guridi, Javier 43, 252-253
Arias, Desiderio 140, 143, 190-191, 212
Ariza, José del Carmen 204, 206
Astwood, H. C. 52, 60
Aybar, Francisco 117
Aybar, Manuel de Jesús 135, 399

B

Babcock, Orville E. 34, 41
Bacon, Robert L. 149
Báez, Ramón 181, 239
Báez, Buenaventura 29-30, 32-34, 36-38, 41-46, 74, 219, 251-252
Baird, Alexander A. 93-94
Bamberg, H. 247
Bancalari, B. 151, 349
Basset Moore, John 133
Batlle, Cosme 72, 86, 89, 153, 321, 327-328
Baxter 192
Benock, Francés 55, 282-284, 286
Berlé, Emilio 30
Bernal, José del Rosario 252
Betances, Ramón Emeterio 56, 265, 267
Bidó, Augusto Franco 85, 317-318
Billini, Francisco Gregorio 53-54
Billini, Hipólito 101, 123
Bixby, Geo S. 81, 302, 305, 309
Blondot, Paul 57, 264
Bobadilla, Gerardo 252
Bobadilla, Tomás 31
Bolonay, Georges de 30
Bonetti Burgos, José María 221
Boots, J. 194
Bordas Valdez, José 174-177, 179, 181, 185, 240

Boscowitz, R. R. 60, 266
Boswine, E. P. 69
Brache hijo, Elías, 117, 119-120, 125-126, 367
Bruder, W. M. 403
Bryan, W. J. 175-176, 178-180, 182-184

C
Cabral, José María 30-32, 34-36, 45, 193
Cabral, Mario Fermín 184
Cáceres, Ramón 141, 147, 149, 154, 157-158, 167-168, 180, 240
Castillo, Pelegrín 110-111
Castle Jr., William R. 203
Clark, J. Reuben 217
Clyde & Co. 371
Cogswell Smith, Charles 181
Coiscou, Pedro B. 352
Collect 183
Collin, G. 359
Colton, George R. 146-148, 229,
Coradín, Ignacio 367
Cordero y Bidó, Teófilo 82, 91, 300
Cosme Batlle, Sucesores de 349, 366
Curiel, George 332
Curiel, Ricardo 39, 248, 251-252

D
Davies, Joseph E. 215
Dawson, Thomas C. 134-142, 145-146, 155
De Almeda, Emmanuel 56, 62-63, 78
De Castro, Enrique J. 352
De Farensbach, Barón 70
De la Concha, Jacinto 252
De la Rosa, Antonio 33-34
De Lemos, Jacobo 86, 89
De Marchena, Eugenio 54-59, 61-63, 65, 68-70, 99, 267, 344
De Meriño, Fernando Arturo 260, 262-263
De Moya, M. Martín 204, 207
De Moya, Samuel 106-107
De Okzsa, Conde Tadeo 66, 68, 287
Debat, León 63
Del Monte, Félix María 36, 251
Delcassé, Téophile 113
Delgado, Bernardo 248
Den Tex Bondt, Cornelio Juan 73-74, 77,79-80, 82, 85, 88, 91, 300-303, 307-311, 315-317
Despradel, Arturo 221
Despradel, Fidelio 52-53
Dierckxsens-Wellens, P. 359, 365
Dillingham, Albert C. 142
Dinsart, Henri Joseph Celestin 54, 260-263
Doyle, William T.S. 170
Dunn, W. E. 215
Dupont, Augusto 359, 365
Duquela, H. 319
Durocher, Luis 32

E
Edwards, J. H. 194
Emilio Erlanger y Cª 245-247
Erlanger, Emilio 31
Estay, José 319
Estimé, Dumersais 23, 24
Estrella, Juan 85, 318-319
Eugeno Abreu y Co. 349

F
Fabens, Joseph W. 36, 42, 45-46, 253
Favereau 112-113

Federico Holth y varios 349
Ferrand, Louis 28
Figuereo, Wenceslao 106
Franco, Isaías 103

G
Galván, Manuel de Jesús 85, 130-131, 133, 317-318
García Godoy, F. 323, 326
García Martínez, R. 323, 326, 332
García, José Gabriel 30-31, 35, 103
Garrido, Pedro Tomás 48, 50-51, 85, 252-253, 317-318
Gautier, Manuel María 38-39, 42, 59, 62, 74, 78, 251-252, 280
Gettysburg (vapor) 35
Gibbs, Lucas T. 127
Glass, José Manuel 47-48, 255-256, 258-259
Glavis, George O. 50
González, Francisco. Augusto 107, 239, 352
González, Ignacio María 46-50, 307
Grant, Ulises S. 34, 41, 43
Greene, Jerome D. 204
Grieser, H.R.A. 93-94
Grullón, Eliseo 125, 176
Guzmán, Juan Francisco 111

H
Hartmont, Edward H. 24, 33-34, 37-39, 41-46, 51, 58, 69, 74, 125, 219, 228, 239, 248, 251-252, 272-273, 286, 298-299
Hay 118, 128, 137
Henríquez Ureña, Max 106
Henríquez y Carvajal, Federico 110
Henríquez y Carvajal, Francisco 115, 117-118, 121, 124-127, 150, 184, 191-193, 240, 352-353, 359, 365
Herrera Cabral, César A. 21-22, 24
Heureaux, Ulises 52, 55, 63, 65-66, 69-73, 81, 84-86, 89, 92-96, 98-103, 105-106, 108, 123, 126-127, 141, 154, 160, 167, 219, 323, 326, 332-334, 336, 340, 342, 374, 376, 396 (cf. Lilís)
Hinshaw, Joseph 235
Hollander, Jacobo H. 147-148, 149-150, 153
Hughes, Charles Evans 199-200, 202
Hull, Cordell 216, 222, 223, 227
Hungría, José 251

I
Ingalls, Rufus 34, 41

J
J. Sala y Co. 349
James, Henry Sir 51
Jarvis, Samuel 173
Jay Cooke and Co. 253
Jesurum, Abraham 32-33, 38
Jimenes, Juan Isidro 105, 109, 115, 117-118, 125, 128-129, 181-184, 186-191, 240, 352, 367
Jiménez, Enrique 183-184
Jiménez, J. M. 192
Johnson 35, 37
Johnston, Charles M. 176-179, 182, 186-187
Joubert, Emilio C. 149, 154, 157, 194
Julia Julia, Julio 61-62, 71

K
Kellogg, Frank B. 206-208
Kent, Roscoe 183

Knapp, H. S. 193-194, 202
Knight, Melvin M. 134
Knox 172-173
Kuhn, Loeb & Co. (Banqueros) 153, 157, 159-160, 162-163, 377, 394

L
Lavandier, Julio A. 336, 340
Leiper 143
Leonte Vásquez, Francisco 108, 124, 141
Levyt, Lob 62
Leyba, José Martín 103, 117
Libessart, Liger de 30
Licairac, Alexis 117
Lilís (cf. Heureaux, Ulises) 94
Lluberes, Félix María 252
Lluberes, Pedro A. 86-87, 90, 92-93, 323, 326
Logroño, Álvaro 108, 113-114
Luperón, Gregorio 32, 45

M
Machado, J. C. 50
Machado, Manuel A. 135
Machias (barco de guerra) 181
Marques, Epifanio 31
Maxwell, C. L. 118
Mayo, Arthur H. 197-198
Mc Intyre, Frank 170
Mella, Mariano 20
Mella, Ramón 31
Mendel, Isidoro 63, 75, 78-80, 82, 94-95, 99-100, 342, 344
Mendes, Adolphe 33, 38-39, 41, 44
Meriño, Fernando Arturo de 53-54, 262-263
Michelena, Santiago 141, 172-173, 349
Michiels-Beels 359, 365
Mitchell, Frank J.R. 173
Montauban, Thirion 255, 258-259
Morales Languasco, Carlos F. 130, 133, 135, 137-139, 142-143, 145, 176, 240, 367
Morales, Ángel 207-208
Morales, Gavino Alfredo 146
Morris, F. H. 102-103
Morton Trust Co. 377-385, 387-393
Mota, Carlos A. 110
Munro, Dana G. 229

N
Newman, Oliver P. 215, 234
Noboa hijo, C. 323, 326, 332
Nouel, Monseñor Adolfo Alejandro 171-174, 240
Nouel, Carlos 31
Núñez de Cáceres, José de 27, 238

O
O'Leary, Charles 59
Objío, Telésforo 31

P
Pearson, Thomas 229
Peña Batlle 153
Pereira, Jacobo, 31-32, 245-247
Pérez Licairac, Horacio 229
Pérez, Genaro 85, 317-318
Perry, Raymond H. 41, 42
Peynado, Francisco J. 156, 170, 202-203
Peynado, Jacinto B. 184, 220
Pichardo, Bernardo 184, 189
Pierret, H. 319
Piet, Carlos 31

Polk, Frank L. 187
Porter, David D. 35
Powell, William F. 128-130, 133, 368, 370
Prud'homme, Emilio 367
Puente, José H. 349
Pujol, Pablo 36
Pulliam, William E. 158

Q
Quiterio Berroa, Canelo 336, 340

R
Raschowitz, Mauricio 61, 72
Read, Juan Antonio 117
Recio, José María 52-53
Regidor y Jurado, Antonio María 55, 58, 266, 268, 270, 274-275, 280, 283, 284, 286, 297
Reille, Barón Xavier 359
Rivas, Modesto 89, 93, 328, 332
Robinson, Samuel S. 199, 201-202
Rodríguez, Demetrio 140
Roosevelt, Franklin Delano 216, 221, 229, 240
Roosevelt, Teodoro 133, 135, 143, 145, 147, 149, 157, 176, 217
Root, Elihu 148-150, 154-155, 157
Roques, José R. 349
Rotschild, Segismundo 31
Russell, William W. 168-170, 172, 187-193

S
Sackets 34
Sackett, Delos B. 41
Saginavo (vapor) 307
Salnave, Silvain 32, 37
Sánchez 334, 342
Sánchez Ramírez, Juan 28
Sánchez, Juan Francisco 74, 79-80, 82, 84, 100, 128, 135-136, 138-139, 142, 300, 303, 334, 336, 340, 342, 368, 370
Santana, Pedro 30, 238-239
Santelices, José Eugenio 52-53
Schuyler Hailley and Graham 255
Seward, Frederick W. 35-36
Seward, William H. 34-35, 37
Smith, J. Somners 34-37
Snowden, Almirante Thomas 196-199
Spragné, W. F. 60
St. Elmo, Walter 174
Sullivan 174-175, 181-183

T
Taft, William H. 170
Tejera, Apolinar 110
Tejera, Emiliano 32, 103, 106, 110, 117, 128, 135, 154-155, 240
Thomen, Luis F. 235-236
Thorman, W. 112
Toribio, Daniel 17
Travieso hijo, Martín 194
Triffin, Robert 23
Troncoso de la Concha, Manuel de Jesús 194, 220, 229
Troncoso Sánchez, Jesús María 222
Trujillo Molina, Rafael Leonidas 22, 24, 65, 81, 91, 104, 211-212, 214-218, 220-223, 227-229, 231-234, 236-237, 241

V
Valverde, Sebastián E. 100
Vásquez, Francisco Leonte 108, 124, 141, 336, 340

Vásquez, Horacio 22, 105, 107, 109, 128, 130, 190, 203, 205-207, 211-212, 215, 217, 220, 240-241
Vedder, Frank H. 217
Vega, Nicolás 349
Velázquez y Hernández, Federico 138-139, 141-142, 144, 149-150, 153-155, 158-160, 162, 182, 184, 240, 403
Ventura, Miguel 349
Vicini, Juan Bautista 86, 89, 93, 203, 327-328, 349, 376
Victoria, Alejandro 171
Victoria, Alfredo María 168, 170-171
Victoria, Eladio 168, 170
Vidal, Luis Felipe 190
Ville de Bordeaux (vapor) 77

W
Wallich, Henry 23
Weed, Smith M. 81, 88, 90, 101-102, 126, 327-329, 352-353, 358, 403
Wells, Charles W. 94, 97-98, 101-102, 124, 319, 341-342, 352-353, 403
Werderman & Malhado 38-39
West Indian Public Works Co. 394
Westendorp and Co., Señores 66, 68,70, 75, 77, 80, 82-84, 287-298,300-303, 305, 307-319, 324-325, 339, 372-373
White, Francis 182, 229
Willems, Willem 128
Wilson, Arthur P. 60-61
Wilson, Hugh R. 221
Wilson, Woodrow 176, 178-179, 181, 184, 187
Woss y Gil, Alejandro 91, 130-131, 133

Y
York, E. D. 403
York, E. E. 403
Young 207-208

Z
Zafra, Juan Bautista 31

Este libro
De Hartmont a Trujillo
de César A. Herrera
terminó de imprimirse en el mes de mayo de 2009
en los talleres de la Editora Alfa & Omega,
Santo Domingo, Ciudad Primada de América,
República Dominicana.



César A. Herrera

Nació en Baní en enero de 1910. Desde muy joven evidenció su pasión y rigor por el estudio de la historia y el periodismo.

Graduado en Filosofía y Letras en la Universidad de Santo Domingo, fue periodista, funcionario público y, fundamentalmente, historiador. Fue gobernador de la provincia de Azua y diputado por la provincia de Samaná. Subdirector y director del Archivo General de la Nación, Cónsul General en Sevilla, España, y Encargado de la Misión de Investigación Histórica en el Archivo de Indias de esa ciudad. Además de director de la Biblioteca Nacional, dirigió el diario El Caribe y fue editorialista del Listín Diario. Fue Miembro de la Academia Dominicana de la Historia, Miembro Activo del Instituto Duartiano, y de la Sociedad Dominicana de Geografía.

Además fue Miembro del Comité Permanente del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, de la Comisión Organizadora Permanente de la Feria Nacional del Libro y Miembro de la Fundación Rodríguez Demorizi.

César Herrera publicó, entre otros libros, *La Batalla de Las Carreras, sus antecedentes históricos y consecuencias trascendentales* (primera edición, 1949), *Las finanzas de la República Dominicana* (primera edición, 1955), *Salomé Ureña, La reinstalación de la Universidad Santo Tomás de Aquino*. Después de su muerte, se publicó *Divulgaciones históricas*, selección de artículos periodísticos que él mismo escogió, y *Cuadros históricos dominicanos*, recientemente editada por el Archivo General de la Nación.

Su trabajo en los archivos de Sevilla y Simancas resultó en la más extraordinaria recopilación de documentos referidos a la isla de Santo Domingo en su época colonial. Su biblioteca especializada en historia dominicana fue entregada al Museo de las Casas Reales.

Fue historiador fecundo, escritor de claro estilo y hombre lógico en sus conclusiones. Murió en Santo Domingo, en la víspera de sus 78 años.